

Ciencias Jurídicas y Sociales

Antonio Bádenas Zamora

LAS TENTATIVAS PARA ABOLIR LA PENA DE MUERTE EN LA ESPAÑA DE ISABEL II (1833-1868)

Universidad Rey Juan Carlos
Servicio de Publicaciones

Las tentativas para abolir la pena de muerte en la España de Isabel II (1833-1868)

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web *www.conlicencia.com* o por teléfono en el 917021970 / 932720407

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial.
Para mayor información, véase *www.dykinson.com/quienes_somos*.

La elaboración del presente estudio se ha llevado a cabo
en el marco del Proyecto de Investigación titulado
«Tradición e influencias extranjeras en el Codificación penal española:
contribución de la jurisprudencia en la evolución de la Parte General (1870-1995)»,
Referencia PID2023-148177NB-I00,
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

© Antonio Bádenas Zamora

Ilustración de cubierta. Reproducción del autor de la cromolitografía "La Mano Negra" del artista gráfico, Xavier Gosé (1876-1915), publicada en 1903 en la revista satírica *L'Assiette au Beurre*. Museo Nacional del Prado (Madrid).

Editorial DYKINSON, S.L.
Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91544 28 46 – (+34) 91544 28 69
e-mail: *info@dykinson.com*
http://www.dykison.es / *http://*
www.dykinson.com

ISBN: 979-13-7006-119-7
Depósito Legal: M-6504-2025
DOI: https://doi.org/10.14679/3936

ISBN electrónico: 979-13-7006-184-5

Maquetación:
Besing Servicios Gráficos S.L.
besingsg@gmail.com

Las tentativas para abolir la pena de muerte en la España de Isabel II (1833-1868)

Antonio Bádenas Zamora

Ciencias Jurídicas y Sociales

Ciencias de la Salud

Ciencias Experimentales y Tecnología

Ingeniería y Arquitectura

Arte y Humanidades

A Juanma, in memoriam

«*Creo que se debe […] economizar la pena de muerte siempre que se pueda, y esto lo ha hecho el Código; pero quitarla […] seria hacer un experimento muy aventurado que podría traernos grandes perjuicios […]*».

(Pedro José Pidal, presidente de la Comisión encargada del dictamen sobre autorización al Gobierno para plantear el Código penal, *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 82, de 14 de marzo de 1848, p. 1776).

«*Día feliz será para las Córtes Constituyentes aquel en que puedan hacer á la Nacion y á la humanidad el beneficio de abolir la pena de muerte para delitos políticos […] nuestros partidos en sus luchas habían colocado entre sí un abismo de sangre, y es preciso cegarle si queremos que se levante un edificio que haga la prosperidad y ventura de la Patria*»

(Juan Antonio Seoane, *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 33, de 13 de diciembre de 1854, pp. 592-593).

«*[…] sentado que no hay inclinaciones innatas al mal, es preciso convenir en que no concediéndoles como no se les concede la sociedad á todos los asociados los medios de atender á sus necesidades; que no poniéndoles como no les pone á cubierto de la miseria; que no facilitándoles como no les facilita educación bastante á lo ménos á distinguir el bien del mal, comete una injusticia que está clamando á Dios y á los hombres cuando condena á un delincuente á la última pena*».

(Estanislao Figueras, *Diario de las Sesiones de las Cortes. Constituyentes,* núm. 153, de 14 de mayo de 1855, p. 4747).

«*Pero hallándose la sociedad en un estado en el cual hay delitos atroces, hay monstruos extraordinarios que no pueden vivir, que no deben vivir en la sociedad, cuando la pena de muerte ha de traer consecuencias ventajosas á esa misma sociedad, no puede ni debe abolirse la pena capital […]*».

(Joaquín Aguirre, ministro de Gracia y Justicia, *Diario de las Sesiones de las Cortes. Constituyentes,* núm. 153, de 14 de mayo de 1855, p. 4753).

«*[…] con esta base, el sargento, el alférez, el teniente, etc., […] que se subleve […], aunque se valga de una bandera política, será juzgado por la ordenanza y se le aplicará la pena de muerte. Lo declaro desde ahora, y así lo entiende el Gobierno de S. M.: están comprendidos en la ordenanza desde el tambor al general*».

(Leopoldo O'Donnell, ministro de la Guerra *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, p. 4788).

Índice

1. Cuestión preliminar 11

2. Etapa inicial de tránsito entre el Antiguo y el Nuevo Régimen (1833-1843) 17
2.1. Persistencia de los vestigios de la Justicia absolutista 22
2.1.1. En la Administración de Justicia en general 22
2.1.2. En la Justicia penal en particular 25
2.2. Pleno auge de las ejecuciones capitales 30

3. Etapa intermedia de predominio moderado (1844-1854) 35
3.1. Las propuestas abolicionistas en el proceso de elaboración del Código criminal de 1848 37
3.1.1. Las iniciativas surgidas en la Comisión General de Codificación 37
3.1.2. Las mociones planteadas en las Cortes 41
a) En el Senado 41
b) En el Congreso 45
3.2. La pena de muerte durante la vigencia de los Códigos penales de 1848 y 1850 53
3.3. La opinión de la doctrina científica 58

4. Etapa final entre dos revoluciones (1854-1868) 63
4.1. Las tentativas abolicionistas registradas en las Cortes del Bienio Progresista (1854-1856) 66
4.1.1. El proyecto de ley del diputado Seoane 67
4.1.2. Las presentadas durante la formación del proyecto de Constitución 69
a) Por la Comisión constitucional 70
b) Por la minoría demócrata, instando la plena abolición de la pena de muerte 71
c) Por un grupo de diputados liderado por el progresista Moncasi 78
4.1.3. La discusión parlamentaria de la base 6.ª del proyecto constitucional 80
a) Durante la sesión del 14 de mayo de 1855 80
b) Durante la sesión del 15 de mayo de 1855 82
4.1.4. La última iniciativa defendida por el diputado Orense en el marco de la reforma constitucional 91
4.1.5. El mandato abolicionista prevenido en la Constitución no promulgada de 1856 93

4.2. Las proposiciones formuladas en las legislaturas de 1858-1860 y 1866-1867 96
4.2.1. Legislatura de 1858-1860 96
a) Contexto político 96
b) La proposición abolicionista del diputado De la Torre 97
4.2.2. Legislatura de 1866-1867 101
a) Contexto político 101
b) La proposición de ley del diputado Nougués 103
4.3. El arraigo de la última pena en la etapa final del régimen isabelino 109

5. Valoración general 115

Apéndice documental 121
1° Voto particular [fragmento] del vocal de la Comisión General de Codificación, Domingo María Vila y Feliú, al proyecto de Código penal de 1845 121
2° Debate [fragmento] celebrado en las Cortes del Bienio Progresista, relativo a la enmienda, presentada a la base 6.ª del proyecto constitucional por la minoría demócrata, proponiendo la abolición de la pena de muerte, que fue defendida por el diputado Sr. Figueras 127
3° Debate [fragmento] celebrado en las Cortes de la legislatura de 1859, relativo a la proposición de ley sobre abolición de la pena de muerte por delitos políticos, presentada por la minoría progresista, que fue defendida por el diputado Sr. De la Torre 133

Fuentes 137

Bibliografía 145

I.
Cuestión preliminar

La respuesta punitiva consistente en la privación legal de la vida del condenado, que conocemos bajo el nombre indistinto de pena de muerte o mortal, sanción máxima, pena capital, última pena, castigo supremo, etc., así como la historia de su aplicación, ha sido objeto de abundantes estudios concebidos desde distintas ópticas científicas[1]. Fruto de ello, sabemos que tradicionalmente en la mayoría de las sociedades este castigo letal gozó del máximo predicamento, al ser considerado el remedio represivo más justo y eficaz para el mantenimiento de la autoridad del Estado y del orden social[2].

---

1 *Cfr.*, MITTERMAIER, C. J., *Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung, und der Erfahrungen,* J.C.B. Mohr, Heidelberg, 1862; THONISSEN, J. J., *Études sur l´histoire du droit criminel des peuples anciens*, Bruylant-Christophe & Cie, Bruxelles-A. Durand & Pedone Laurel, Paris, 1869; THOT, L., *Historia de las antiguas instituciones de derecho penal: arqueología criminal*, Editorial America Unida, Buenos Aires, 1927; ANCEL, M., «Le problème de la peine de mort», *Revue de droit pénal et de criminologie*, (1963-1964), pp. 373-393; IMBERT, J., «La peine de mort et l'opinion au XVIII siècle», *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1964, pp. 509-525; FEUCHT, D., *Grube und Pfahl*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1967; ROSSA, K., *La pena de muerte*, Editorial Nova Terra, Barcelona, 1970; SELÇUK, S., «La peine de mort chez les anciens turcs», *Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal,* 1981, pp. 97 y ss.; NEUMAN, E., *Pena de Muerte. La crueldad legislada*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004; CAMUS, A. y KOESTLER, A., *Reflexiones sobre la pena de muerte*, (traducción de Peyrou, M.), Capitán Swing Libros, Madrid, 2011.

2 CUELLO CALÓN, E., «Vicisitudes y panorama legislativo de la pena de muerte», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 6, (fasc./mes 3, 1953), p. 493, refiere que "Durante muchos siglos

Gracias a este generalizado estado de aceptación, los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en la Europa moderna incluyeron la pena de muerte como parte esencial de su severo sistema penal, lo que en la práctica favoreció su proliferación[3] y la de los espeluznantes suplicios que normalmente acompañaban al ceremonial de su ejecución[4]. Esta insufrible situación perduró sin variaciones, hasta que a mediados del siglo XVIII, los ideólogos más representativos de la Ilustración como, entre otros, son Montesquieu[5], Voltaire[6] y Beccaria[7], sientan las bases doctrinales

---

nunca fue puesta en duda la justicia, la legitimidad y la necesidad de la pena capital. En todas partes constituía un medio represivo pródigamente utilizado y estimado como instrumento insustituible para el mantenimiento de la tranquila convivencia social".

3 "Cientos de miles de personas, tal vez más de un millón, fueron ejecutadas en Europa por brujería, herejía, disidencia política o religiosa y delitos comunes en los siglos XVI y XVII"; *vid*., CORRAL, J. L., *Historia de la pena de muerte*, Aguilar, Madrid, 2005, p. 78.

4 BARBERO SANTOS, M., *Pena de muerte (el ocaso de un mito*), Depalma, Buenos Aires, 1985, pp. 149-150, explica que "El derecho penal de la primera mitad del siglo XVIII se caracteriza […] por […] emplear pródigamente la pena de muerte y el ejecutarla eligiendo modalidades a cual más crueles".

5 El enciclopedista Montesquieu, en su afamada obra *L'esprit des lois* (1748), entre otras cuestiones, al tiempo que expresaba su crítica contra las formas inquisitivas, abogaba por la moderación en el uso de la pena de muerte, se declaraba contrario al empleo de la tortura y defensor del jurado inglés; *vid*.**,** VÉLEZ MARICONDE, A., *Derecho procesal penal*, t. I, Marcos Lerner ed., Córdoba, 1986, pp. 133-134.

6 Voltaire, por su parte, se sirve de su obra *Commentaire sur le Traité des délits et des peines* (de Beccaria), para censurar abiertamente el procedimiento inquisitivo vigente en Francia a través de la Ordonnance Criminelle de Louis XIV (1670); *vid.,* ESMEIN, A., *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle juasqu'à nous tours*, L. Larose et Forcel, Paris, 1882, p. 365. Igualmente, también manifiesta su oposición a la pena de muerte, no por ser una solución injusta, sino por su falta de utilidad, *vid*., VOLTAIRE, *Diccionario Filosófico*, (traducción de Lanuza, C.), t. VII, Imprenta de C. S. Van Winkle, Nueva York, 1828, p. 208.

7 Tomás y Valiente comenta que con la publicación de la obra *Dei delitti e delle pene* (1764), el milanés Beccaria "Con un espíritu humanista y una notable capacidad de síntesis […] sometió a un enfoque unitario los horrores y los defectos de la legislación y la práctica penal y procesal"; destacando que, para este reputado humanista, "La pena de muerte es injusta, innecesaria y menos eficaz que otras menos crueles, más benignas", por lo que habría que "suprimirla casi por entero"; añadiendo, por último, que "Pocos libros han alcanzado un éxito tan rápido, tan difundido y tan duradero como este; no solo fue muy leído, sino que influyó poderosamente en la reforma de muchos Códigos penales de su tiempo"; *vid*. BECCARIA, C., *De los delitos y de las penas*, (Introducción, notas y traducción de TOMÁS Y VALIENTE, F.), Aguilar, Madrid, 1974, pp. 15-16, 21 y 33. Asimismo, LISZT, F. VON, *Tratado de derecho penal*, (traducido de la 18ª edición alemana y adicionado con la Historia del derecho penal español por SALDAÑA, Q.), Ed. Reus, t. I, Madrid, 1926, pp. 398-399, ratifica el efectivo acogimiento que tuvo esta obra entre los juristas de la época, afirmando que las palabras de Beccaria "fueron repetidas como eco políglota en Francia, por Birissot de Warbille, Pastoret, Marat, Lacretelle, Servan, Bexón, Philphin de Piépape; en América, por Liwingston; en Italia, por Filiangieri; en Alemania, por Feuerbach; en España, por Lardizábal".

para humanizar el Derecho penal[8]. La firmeza de estos nuevos principios dará lugar al nacimiento de una corriente reformista que paulatinamente, a través del sistema codificador, se irá proyectando en las principales legislaciones criminales del orbe occidental[9].

Al abrigo de dicho movimiento reformador, el desmedido incremento de las ejecuciones capitales y de sus siniestras liturgias también fue objeto de constantes censuras[10]. Si bien, en un principio los avances de esta incipiente corriente crítica fueron muy limitados, pues sólo sirvieron para reducir el ámbito de la aplicación de las penas de muerte y restringir el uso de alguno de sus espantosos rituales[11], con el paso del tiempo, merced a la eficaz labor de los defensores de las tesis abolicionistas, la tendencia comienza a inclinarse a favor de su supresión[12]. En concreto, en el continente europeo este cambio, bajo el impulso de los agudos debates doctrinales generados por los partidarios y detractores de la máxima pena[13], empieza a notarse

8 CUELLO CALÓN, E., *Derecho Penal*, t. I, Bosch, 7ª ed., Barcelona, 1945, p. 56.

9 "Muy pronto hallaron consecuente aplicación en la LEGISLACIÓN PENAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES las ideas fundamentales de la época de las luces (protección de la libertad individual, contra el arbitrio judicial, abolición de la tortura, supresión o al menos limitación de la pena de muerte, predominio del fin político de la pena, rechazando toda exigencia religiosa o simplemente moral)"; *vid*., LISZT, *Tratado*…, cit., t. I, pp. 390-391.

10 *Cfr*. ANTÓN ONECA, J., «Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración», *Revista de Estudios Penitenciarios*, año XX (julio-septiembre 1964), 166, p. 415.

11 LISTZ, *Tratado*…, cit., t. III, pp. 237-238, reconoce que "La campaña emprendida por los escritores de la época de las luces […] no tuvo, al principio, grandes resultados […] Pero esa campaña […] produjo […] como efectos posteriores la abolición gradual de las agravaciones de la pena de muerte y la limitación gradual de este castigo a un número insignificantes de casos punibles". Por su parte, IMBERT, J., *La pena de muerte*, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. en español, México, D. F., 1993, p. 75, apostilla que al finalizar el siglo XVIII en la mayoría de los países occidentales la difusión de las nuevas ideas humanitarias habían servido, al menos *de facto*, para reducir sensiblemente las penas de muerte.

12 Según CORRAL, *Historia*…, cit., p. 83, este cambio se va consolidando poco a poco mediante "la consecución de nuevos derechos, plasmados muchos de ellos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se impulsara en la Revolución Francesa o en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos". Agregando, NEUMAN, *Pena de Muerte*…, cit., p. 32, que dicha tendencia en la práctica se manifestó a través del incremento de la nómina de los países abolicionistas, reservando en los nuevos códigos penales los castigos capitales a los delitos más graves o eliminado los ritos inhumanos que acompañaban a las ejecuciones.

13 "Los argumentos utilizados en uno y otro sentido son de muy diversa naturaleza: filosóficos, políticos, religiosos, jurídicos o simplemente sentimentales. En ocasiones, la adopción de una u otra postura responde fundamentalmente a una actitud *visceral* ante pena tan radical. Por ello, ha podido afirmarse que no es ésta una divergencia de escuelas; miembros de la escuela clásica o de la positiva han reaccionado al respecto de forma bien distinta entre sí. La controversia –ya secular– permanece abierta"; *vid*., LANDROVE DÍAZ, G., «La abolición de la pena de muerte en España», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 34, (fasc. I/mes enero-abril, 1981), p. 18.

a partir de la segunda mitad del siglo XIX[14] y, de forma lenta pero constante, prácticamente culmina en el siglo XX[15].

La duración del proceso de asimilación de dichos postulados abolicionistas varió en función de las circunstancias histórico-políticas de cada país. Así, por lo que respecta a nuestra experiencia, sabemos que España recibió pronto los nuevos principios humanitarios que, contra la crueldad de las ejecuciones capitales, se estaban propagando por Europa desde el siglo XVIII; sin embargo, en la práctica los asimiló de forma muy conservadora como lo demuestra, por un lado, el dilatado tiempo que tardaron en ser incorporados a la legislación penal[16], y por otro, el hecho de ser uno de los últimos países europeos en derogar definitivamente la pena de muerte, ya que, salvo un breve paréntesis durante la Segunda República, que no superó los dos años[17], su vigencia legal se prolongó hasta el año 1995[18].

Precisamente este amplio retraso, nos hizo pensar en las tentativas legislativas que, a lo largo de nuestra historia contemporánea, los defensores de la abolición

---

14 ANTÓN ONECA, J., *Derecho Penal*, 2ª ed., (anotada y puesta al día por Hernández Guijarro, J. L. y Beneytez Merino, L.), Madrid, 1986, p. 520, precisa que "Durante el siglo XIX se reduce su esfera de aplicación: queda reservada para unos pocos crímenes graves; por regla general, no se conmina en la ley como pena única para ningún delito, sino en concepto de grado máximo de una penalidad compuesta; y en algunos países se prohíbe para los delitos políticos".

15 En Europa, todavía Bielorrusia mantiene la pena capital para determinados delitos; *vid*., Amnistía Internacional España, Página Oficial (abril 2024). Disponible en *https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/bielorrusia/*

16 *Cfr*., BÁDENAS ZAMORA, A., «Referentes para la regulación de la pena capital en la Codificación española del siglo XIX», Masferrer, A. (coord.), *La Codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (Parte General)*, ARANZADI Thomson Reuters, Pamplona, 2017, pp. 594-597.

17 El Código penal de 1932 derogó la pena de muerte para toda clase de delitos (*cfr*., Ley de 27 de octubre de 1932, autorizando al Ministro de este Departamento para publicar como Ley el Código penal reformado, con arreglo a las bases establecidas en la Ley de 8 de septiembre del corriente año; «Gaceta de Madrid», núm. 310, de 5 de noviembre de 1932, pp. 818-856), hasta que la Ley de 11 de octubre de 1934 la restablece para los delitos de terrorismo y bandolerismo (*cfr*., «Gaceta de Madrid», núm. 290, de 17 de octubre de 1934, p. 379).

18 El artículo 15 de la Constitución española de 1978 suprimió la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria, dejando insatisfechos a quienes reclamaban su eliminación para cualquier supuesto. Asimismo, la promulgación del Código Penal Militar de 1985, de hecho restauró la pena de muerte en nuestro país. Todo lo cual, dio lugar a que se incrementaran las campañas a favor de su total abolición. Finalmente, tras la intervención de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, las Cortes españolas aprobaban por unanimidad la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, *de abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra* (*cfr*. «B.O.E.», núm. 284, de 28 de noviembre). Para más detalle, puede consultarse, LANDROVE, «La abolición de la pena de muerte en España», pp. 17-32; GARCÍA RIVAS, N., «El largo camino hacia la abolición total de la pena de muerte en España», en GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, Ciudad Real, 2013, pp. 391-399; VALIENTE CASTELLANOS, L., «La pena de muerte en España», *Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha*, 23, 2020, pp. 180-228.

de la pena capital debieron haber impulsado hasta lograr su definitiva erradicación del sistema jurídico. Si bien la historia de la pena de muerte en España cuenta con enjundiosos estudios elaborados esencialmente desde las ciencias históricas y jurídicas[19], tras un detenido acercamiento a dichas obras, hemos podido constatar que la parcela correspondiente a la evolución específica que dibujó el proceso abolicionista español, no ha merecido la suficiente atención, por lo que aún está pendiente de ser historiada.

Por dicha razón, a fin de contribuir a su conocimiento, el presente trabajo tiene por objeto dotar de contenido histórico a las diferentes iniciativas legales que, durante el transcurso de la España isabelina (1833 y 1868), se activaron para suprimir, de forma total o parcial, la pena capital. Con tal propósito, nos aproximaremos al contexto político en el que se produjeron; conoceremos quiénes fueron sus promotores, cuál era la ideología que profesaban; qué argumentación emplearon en su defensa; cómo y por quien fueron contestadas; y qué significaron para el movimiento abolicionista.

Como es sabido, durante los treinta y cinco años que comprende el indicado complejo histórico-político se suceden dos regencias (1833-1843) y el reinado personal de Isabel II (1843-1868), y, para la conformación del orden legal de la España contemporánea, fue una período esencial, en tanto en su decurso las viejas estructuras del Antiguo Régimen son sustituidas por las formas definitorias del nuevo Estado liberal. De ahí que hayamos centrado nuestra investigación en el referido marco histórico, pues al tratarse de un tiempo de profundas transformaciones, era previsible que la vigencia de la pena de muerte no quedaría al margen de dicho proceso reformista.

Asimismo, examinada la curva evolutiva que trazó el conjunto de iniciativas legislativas que se arbitraron en este período para reducir o anular la aplicación de la máxima pena, para su mejor análisis hemos optado por dividir nuestro trabajo en tres grandes etapas. La primera o inicial, que hemos denominado de tránsito entre el Antiguo y Nuevo Régimen (1833-1843), es coincidente con la minoría de edad de la futura reina Isabel II y, aunque en este tiempo de Regencias no se registraron propuestas de interés, nos sirve para desvelar el estado general de la Justicia penal y de las ejecuciones capitales, que había legado el régimen fernandino, así como el de los avances habidos antes de dar comienzo el reinado efectivo de Isabel II. En la segunda etapa o intermedia, de claro predominio moderado (1844-1854), nos acercaremos a las proposiciones de signo abolicionista que se formularon con ocasión de la elaboración y aprobación del Código penal de 1848. Y en la tercera o final, que

19 Sirvan de ejemplo las imprescindibles aportaciones de los historiadores, Pedro Oliver Olmo y José Luis Corral Lafuente; de los penalistas, Eugenio Cuello Calón y Marino Barbero Santos; y de los historiadores del derecho, José María Puyol Montero y Pedro Ortego Gil.

se desenvolvió entre dos significados procesos revolucionarios (1854-1868), conoceremos las distintas propuestas legislativas que, para abolir total o parcialmente la pena de muerte, se plantearon en las Cortes Constituyentes del Bienio progresista y las que después se promovieron hasta la finalización del régimen isabelino. Y, por último, concluiremos el estudio exponiendo la valoración general que hemos formado a consecuencia de los resultados que arroja nuestra investigación.

Finalmente, reseñar que para el desarrollo de este trabajo, además de la información que nos suministran las aportaciones actuales de contenido histórico o histórico-jurídico que versan sobre la evolución de la pena de muerte en España, nos hemos asistido de los datos disponibles que, en relación con los objetivos que nos hemos marcado, obran en las distintas fuentes prelegislativas, normativas y doctrinales de la época en estudio[20]; y todo ello, a fin de recuperar para la historia las distintas iniciativas legislativas que, orientadas a lograr la limitación o, en su caso, supresión de la pena capital, se formularon a lo largo de la España isabelina; cuya motivación común puede quedar sintetizada en el lema que figuraba en una medalla fechada en 1835-1836, dada en reconocimiento al célebre jurista italiano Giovanni Carmignani (1768-1847), que rezaba así: *QUE PEREZCA EL DELITO Y EL DELINCUENTE VIVA*[21].

20 Como complemento, al final de este trabajo se ha unido un apéndice documental donde se transcriben los argumentos más significativos empleados, en sus respectivas demandas abolicionistas, por el vocal de la Comisión General de Codificación, Domingo María Vila y Feliú; el diputado demócrata, Estanislao Figueras y Moraga; y el diputado progresista, Carlos María de la Torre y Navacerrada.

21 GABBA, C. F., *El pro y el contra en la cuestión de la pena de muerte*, (traducido por Federico Melchor y Emilio Cano), Imprenta de E. de la Riva, Madrid, 1870, p. 205.

2.
Etapa inicial de tránsito entre el Antiguo y el Nuevo Régimen (1833-1843)

El fallecimiento de Fernando VII, acontecido el 29 de septiembre de 1833, abre cronológicamente la primera etapa de nuestro trabajo, que culmina el día 10 de noviembre de 1843, fecha en la que su primogénita, María Isabel Luisa, previo juramento como reina constitucional, da comienzo a su reinado personal bajo el nombre de Isabel II. Este largo período de diez años estuvo marcado por el pleito sucesorio, que dio lugar a la guerra civil carlista, y por la entrada de España en el Nuevo Régimen, en forma de liberalismo histórico[22].

Ante la minoría de edad de la princesa heredera a la Corona, la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón, ejerció la Regencia con el título de *Reina Gobernadora* y, en los siete años que duró su mandato, el liberalismo español pudo fijar las bases de su ideario de transformación socioeconómica y política[23]. Programa de cambios que pasaba por la desarticulación de las estructuras del *Acien*

22 COMELLAS, J. L., *Historia de España Contemporánea*, Rialp, 5ª ed., Madrid, 1996, p. 125, explica que ambos hechos están íntimamente relacionados, disputándose, en el fondo, una cuestión ideológica.

23 Para ARÓSTEGUI, J., «De la transición a la revolución», en "La regencia de Mª Cristina", *Cuadernos historia 16*, nº 64, 1985, p. 4, este período "constituye una encrucijada decisiva para el curso futuro de la modernización de los parámetros esencias de la sociedad española tal y como se presentaban en la etapa final de lo que llamamos Antiguo Régimen".

Régime unido a la racionalización y unificación administrativa que ya había sido elaborado por los liberales gaditanos, y que ahora se pone definitivamente en práctica con el propósito de modernizar y reformar el Estado[24].

En realidad, el cambio de modelo de sociedad ya se había iniciado en los últimos meses del reinado de Fernando VII, por obra de un hombre del Antiguo Régimen, el primer ministro Francisco Cea Bermúdez[25], a quien, una vez muerto el Rey, la Reina Gobernadora confirma en la Jefatura del Gobierno[26]. Desde esta magistratura, Cea Bermúdez, en fecha 4 de octubre de 1833, hace público un manifiesto donde mostraba su interés por mantener la política anterior, pero mejorando la gestión gubernamental a través de las correspondientes reformas administrativas[27], que se habían emprendido desde el nuevo ministerio de Fomento, que encabezaba Francisco Javier de Burgos[28].

Sin embargo, estas mejoras administrativas no complacieron ni a absolutistas ni a liberales, que, más bien, aspiraban a un profundo cambio político. Con este propósito el bando liberal se declara explícitamente favorable a la reunión de Cortes y, logrando que la Corona renunciara al mantenimiento del absolutismo, fuerza la caída de Cea y la formación, en enero de 1834, de un nuevo gabinete presidido por Francisco Martínez de la Rosa[29]. Este veterano liberal doceañista, ahora de talante moderado, centró sus preocupaciones, además de hacer frente a la guerra, en dar forma a la convocatoria de Cortes[30]. Valiéndose para ello de la colaboración de

24 Dicho proceso de transformación, inicialmente abordado por las Cortes de Cádiz y más tarde frustrado tras el Trienio constitucional, conforme relata NIETO GARCÍA, A., *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 66-68, ahora es completado "con relativa facilidad […] en un contexto de guerra civil, levantamientos populares, conspiraciones palatinas, predominio militar, desolación económica, bancarrota pública y degradación social, que contrastaba escandalosamente con el fortalecimiento de unos pequeños grupos enriquecidos bajo la protección oficial".

25 TUÑÓN DE LARA, M., *La España del siglo XIX*, vol. I, Akal, Madrid, 2000, p. 103, refiere que esta situación transitoria se ha llamado de «despotismo ilustrado».

26 FONTANA, J., «La época del liberalismo», en Fontana J. y Villares, R. (dtores.), *Historia de España*, v. 6, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 139.

27 RUEDA HERNANZ, G., «El reinado de Isabel II. La España liberal», *Historia de España*, nº 22, Temas de Hoy, Madrid, 1996, p. 9.

28 Según, SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del constitucionalismo español*, Centro de Estudios Constitucionales, 3.ª ed., 1.ª reimpresión, Madrid, 1978, pp. 244-245, Javier de Burgos, que en los tiempos de José Bonaparte ya ocupó un puesto subalterno de la administración provincial, fue el verdadero cerebro de la reforma administrativa llevada a cabo y, aunque destacó por su capacidad y preparación como administrador, falló en todos los problemas políticos.

29 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., *La España Contemporánea. De 1808 a 1874*, Ed. Istmo, t. I, Madrid, 1991, pp. 254 y 280-281.

30 COMELLAS, *Historia…*, cit., p. 142, comenta que el nombramiento de Martínez de la Rosa, como hombre indicado para iniciar la transición política, fue aconsejado por los embajadores francés y británico, cuyos Gobiernos pretendían instituir una España liberal, pero al mismo tiempo débil.

Javier de Burgos, su política cristaliza con la redacción de un nuevo texto constitucional, el Estatuto Real, que es sancionado por la Regente el 10 de abril de 1834[31]. Esta convocatoria de Cortes, plasmada en el Estatuto, se fundamentaba en las leyes tradicionales de la monarquía y, aunque supuso el punto de partida para una evolución reformadora[32], no aquietó a los carlistas y, además, defraudó a la familia liberal que, a partir de entonces, quedó dividida entre la facción moderada y la progresista, cuya lucha por el poder caracterizaría los siguientes años de una España que se hallaba inmersa en una cruenta guerra fratricida[33].

En julio de 1834 una epidemia de cólera se propagó por España, circunstancia que propicio un ambiente de extraordinaria violencia que desembocó en el asalto de distintos conventos y la matanza de más de ochenta religiosos. Ante la impotencia por sofocar tal desorden, Martínez de la Rosa, dimite a mediados de 1835[34]. Le sustituye su ex-ministro, José Mª Quiepo de Llano, conde de Toreno, cuyas medidas anticlericales no fueron suficientes para tranquilizar el ánimo del ala progresista, que se lanza a la acción revolucionaria, logrando la destitución de Toreno a los pocos meses de su nombramiento[35]. Dado el clima de revuelta general provocado por el levantamiento de Juntas por buena parte del país, la Reina decide llamar para que forme Gobierno al liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal, que comienza a gobernar en septiembre de 1835, con la triple promesa de terminar la guerra civil, arreglar la precaria situación de la Hacienda y consolidar las instituciones liberales[36].

A pesar de la patente voluntad reformadora de Mendizábal, las medidas que llevó a cabo, por una parte, no lograron los pretendidos efectos inmediatos para mejorar la situación económica y terminar la guerra, y por otra, tampoco satisficieron a los movimientos liberales que venían reclamando la restauración de la Constitución de Cádiz y la convocatoria de Cortes constituyentes[37]. En este estado,

---

31 El Estatuto Real articuló la formación de unas Cortes constituidas por dos cámaras, a saber: el Estamento de Próceres, integrado por grandes de España y miembros de las más altas jerarquías sociales y económicas nombrados por la Corona, y el Estamento de Procuradores, de carácter representativo mediante un sistema electoral indirecto y censitario; cuya naturaleza, en opinión de SOLÉ TURA, J. y AJA, E., *Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936)*, Siglo veintiuno editores, 15.ª ed., Madrid, 1990, pp. 29-31, estaba "a medio camino entre las cámaras consultivas y las legislativas".

32 SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo…*, cit., pp. 250-251.

33 SÁNCHEZ-MARÍN, A., *Constitucionalismo español (1808-1978)*, Ed. Zaquizami, Madrid, 1994, p. 37.

34 DÍEZ TORRES, A. R., «Las Regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843)», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 155-156.

35 RUEDA, «El reinado de Isabel II. La España liberal», p. 102.

36 COMELLAS, *Historia…*, cit., p. 146, destaca que con este nombramiento España, después de dos años de evolución política, desemboca plenamente en el liberalismo.

37 SOLÉ y AJA, *Constituciones…*, cit., p. 32.

en el mes de mayo de 1836, el Estamento de Próceres solicitó la suspensión de la Desamortización[38], al tiempo que la Corona se negaba a suscribir un cambio en la cúpula militar, ante lo cual Mendizábal se ve obligado a dimitir[39]. La Regente, María Cristina, con el ánimo de apaciguar el proceso de radicalización política, el día 15 de mayo, nombra presidente al ahora moderado Francisco Javier Istúriz, cuyo Gabinete es recibido con la hostilidad de las masas y del Estamento de Procuradores. Tras sucesivos pronunciamientos en distintas provincias, una revuelta militar encabezada por un grupo de suboficiales de la guarnición del Palacio de la Granja derroca al Gobierno el 12 de agosto y obliga a la Regente a reinstaurar la Constitución de 1812[40]. Tres días más tarde es designado como jefe de Gobierno el progresista José María Calatrava, que de inmediato convoca elecciones a Cortes constituyentes para adecuar la Constitución gaditana a las necesidades políticas del momento, y cuyo resultado no será una reforma constitucional, sino la aprobación de un nuevo texto que definitivamente consolidará el régimen constitucional en España: la Constitución de 18 de junio de 1837[41].

Apenas transcurridos dos meses desde la promulgación de la ley fundamental de 1837, unidades del ejército destinadas a hacer frente a la ofensiva carlista provocaron la caída del Gobierno Calatrava. Inaugurándose a partir de ese momento, bajo la estrella ascendente del general Baldomero Espartero, una secuencia de débiles Gobiernos que se sucedieron entre agosto de 1837 y julio de 1840[42].

En agosto de 1839 el Convenio de Vergara pone fin a la guerra civil con el consiguiente aumento del prestigio de Espartero que, a partir de diciembre del mis-

38 La llamada Desamortización fue un complejo proceso económico, "del que se valieron monarcas como Felipe II o Carlos IV", a fin de sanear la Hacienda real; y del que también se sirvieron los liberales del Trienio. Más tarde, coincidiendo con la llegada al poder de Mendizábal, "entró en su fase decisiva"; *vid*., ARTOLA GALLEGO, M., *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Alianza editorial, Madrid, 1990, pp. 112-119.

39 BAHAMONDE, Á. y MARTÍNEZ, J. A., *Historia de España siglo XIX*, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 205-206.

40 SÁNCHEZ-MARÍN, *Constitucionalismo…*, cit., p. 37.

41 *Cfr*., FERNÁNDEZ SEGADO, F., *Las Constituciones Históricas españolas (Un análisis histórico-jurídico)*, Civitas, 4ª. ed., Madrid, 1986, pp. 186-215.

42 Después de que Espartero rechazara el ofrecimiento de la Regente para que sustituyera a Calatrava, llega al gobierno el veterano doceañista Eusebio Bardají. No obstante, la nueva composición de signo moderado de las Cortes, tras las elecciones celebradas en septiembre de 1837, justificó que tres meses más tarde Bardají fuera sustituido por Narciso de Heredia, Conde de Ofalia, con quién se inicia un período de casi tres años de gobiernos moderados. Asimismo, a principios de septiembre de 1838, Ofalia es relevado por un Gabinete presidido por Bernardino Velasco, Duque de Frías, que sin apenas respaldo parlamentario se mantiene hasta diciembre del mismo año. Cierra la expuesta sucesión de gobiernos de corte moderado, el presidido por el diplomático Evaristo Pérez de Castro entre el 9 de diciembre de 1838 y el 27 de julio de 1840; *vid*., BAHAMONDE y MARTÍNEZ, *Historia…*, cit., pp. 212-214.

mo año, emprende una campaña dirigida a socavar la política conservadora del Gobierno de Pérez de Castro[43]. Al mismo tiempo los progresistas se hallaban enfrentados al gobierno y a la Regente por una proyectada Ley de Ayuntamientos que restringía el cuerpo electoral dando el control del gobierno local a la Corona[44]. Su aprobación, en julio de 1840, provocó graves incidentes en distintas ciudades, por lo que la Reina, interesada en el mencionado proyecto gubernamental, solicitó sin éxito la ayuda del general Espartero. A partir de septiembre la insurrección se extendió por toda España radicalizándose las propuestas con la petición de una corregencia[45]. La extremada dimensión de las protestas derivó hacía un protagonismo de Espartero cuya renta política, lograda a causa de la victoria militar, se impondrá a los apoyos de María Cristina, que en octubre de 1840 renuncia a su cargo de Regente[46].

Teniendo como herencia el establecimiento de las instituciones liberales, que entre 1834 y 1840 habían propiciado los Gobiernos y Cortes de María Cristina[47], llega al poder, en nombre del progresismo, como caudillo victorioso de la guerra civil, el general Joaquín Baldomero Fernández Álvarez Espartero, que durante el período que media entre 1840 y 1843 ejercerá a un tiempo la Regencia y el Gobierno de España[48].

Durante la Regencia de Espartero continuó el proceso de desactivación del Antiguo Régimen, acompañado de toda suerte de tensiones y oposiciones, de las que no se libraron ni la Iglesia ni la clase militar[49]. Asimismo, en el campo económico, su posición librecambista incitó la protesta de los industriales catalanes, que resultó violentamente reprimida con el bombardeo de la ciudad de Barcelona[50]. Y en el ámbito político, su forma de gobernar contribuyó a la división de los progresistas que le sustentaban**,** cuya escisión provocaría la definitiva caída de la Regencia[51]; y,

---

43 DÍEZ TORRES, «Las Regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843)», p. 169.

44 RUEDA, «El reinado de Isabel II. La España liberal», p. 108.

45 ESPADAS BURGOS, M. y URQUIJO GOITIA, J. R. de, *Guerra de la Independencia y época constitucional (1808-1898)*, en Historia de España, t. 11, Gredos, Madrid, 1990, pp. 70-71.

46 ARÓSTEGUI, «De la transición a la revolución», p. 13.

47 GALLEGO, J. A., «De la gloria a la impopularidad. Los problemas políticos de la regencia de Espartero (1840-1843)», en "La España de Espartero", *Cuadernos historia 16*, nº 118,1985, pp. 6 y 10.

48 "La tendencia más radical del liberalismo de los años treinta constituyó un Partido Progresista, encarnado en 1840 en la figura de Espartero. Herederos directos de los principios de Cádiz y del magma ideológico del Trienio"; *vid.*, ESCUDERO, J. A., *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas*, 4.ª ed., Madrid, 1988, pp. 836 y 892.

49 MARTÍ, C., «Afianzamiento y despliegue del sistema liberal», en Manuel Tuñón de Lara (Dir.), *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, en t. VIII de la *Historia de España*, Labor, Barcelona, 1981, pp. 233-237.

50 DÍEZ TORRES, «Las Regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843)», pp. 185-186.

51 ESPADAS y URQUIJO, *Guerra…*, cit., p. 71.

con ello, la conclusión de la primera etapa de las tres en las que hemos dividido la España isabelina. Período que, por lo demás, no aportó avances significativos en lo tocante a nuestro tema, al no registrarse ninguna iniciativa legislativa de interés tendente a alterar la vigencia de la pena de muerte. No obstante, hemos creído necesario reservarle un espacio en nuestro trabajo, pues su estudio nos resulta útil para aproximarnos a la situación en la que se encontraba la Justicia criminal y la aplicación de la pena capital antes de dar comienzo el reinado personal de Isabel II.

2.1. PERSISTENCIA DE LOS VESTIGIOS DE LA JUSTICIA ABSOLUTISTA

2.1.1. En la Administración de Justicia en general

El establecimiento del nuevo Estado liberal exigió sustituir las estructuras administrativas legadas por el régimen fernandino, al estar en su mayor parte erigidas conforme al rancio sistema absolutista. Entre las áreas más necesitadas de cambios estaba, sin duda, la correspondiente a la Administración de Justicia[52], al seguir manteniendo un perfil muy ligado a los fundamentos configurados durante el Antiguo Régimen[53], en donde la actividad judicial, entre otros rasgos, se distinguía por su falta de independencia y sumisión respecto a la política de la monarquía y el uso excesivo del arbitrio[54].

Dicha realidad es puesta de manifiesto por el insigne jurista Ortiz de Zúñiga, cuando, con ocasión de describir el desastroso *"estado de la administración de justicia á la muerte del último Monarca y al advenimiento de su excelsa Hija"*, comenta, en términos muy elocuentes, lo siguiente:

> *«La organizacion de los tribunales superiores y supremos viciosa y llena de defectos; la institución de los corregidores y alcaldes mayores desacreditada; la division judicial monstruosa; la jurisdiccion Real confundida con la autoridad*

52 APARICIO, M. A., *El status del Poder judicial en el constitucionalismo español ((1808-1936)*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995, p. 45.

53 El orden judicial que configuró el Antiguo Régimen se asentaba en la autoridad soberana del monarca y se desenvolvía, en una sociedad dividida por estamentos y privilegios, mediante un complejo mosaico de jurisdicciones que, con frecuentes conflictos de competencia, coexistía con la justicia real ordinaria; *vid*., CLAVERO SALVADOR, B., «La Monarquía, el Derecho y la Justicia», en Enrique Martínez Ruíz y Magdalena de Pazzis Pi (Coords.), *Instituciones de la España Moderna*, t. I, *Las Jurisdicciones*, Actas Editorial, Madrid, 1996, pp. 15-38.

54 GONZÁLEZ ALONSO, B., «La Justicia», en Miguel Artola (Dir.) *Enciclopedia de Historia de España*, t. II, Instituciones Políticas. Imperio, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 399.

administrativa y el mal gobierno de los pueblos; los fueros privilegiados, tan extendidos por todo el ámbito de la Monarquia y por todas las clases, que ellos formaban como regla general y la jurisdiccion comun la excepcion, […] Las penas que aplicaban los tribunales no tenían mas sanción que el arbitrio judicial […] El procedimiento civil […] lleno de abusos; y el criminal yacía en tal abandono, que ni había reglas fijas y uniformes para el curso de los juicios, ni se estimaba en nada la libertad civil y la seguridad individual […] De este desorden y abandono seguíase, como es natural, la lentitud y los enormes gastos de los procedimientos, las vejaciones innecesarias é injustas de los que se hallaban sujetos á un juicio criminal; y si á esto se agrega […] el abandono de los establecimientos penales, no se extrañará ahora recordar, aunque con indignación y pena, que los procesos durasen muchos años sin concluirse […] que hubiese acusados detenidos en oscuras y hediondas prisiones por espacio de diez y doce años, de donde salían, ó para el patíbulo, en que se presenciaban terribles ejecuciones, muchas veces en un número que horrorizaba, ó para poblar los mal organizados presidios»[55].

Para combatir esta lamentable situación, incompatible con la implantación del nuevo régimen monárquico-liberal, en 1835, como complemento a otras disposiciones previamente promulgadas[56], se dictaron tres importantes normas de procedencia gubernamental, a saber: el Reglamento provisional para la Administración de Justicia en lo respectivo a la jurisdicción ordinaria, las Ordenanzas para las

55 ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Práctica general forense. Tratado que comprende la constitucion y atribuciones de todos los Tribunales y Juzgados y los procedimientos judiciales,* t. I, Imprenta de José Rodríguez, Madrid, 1856, pp. XIII-XIV, de su Preámbulo.

56 A fin de adecuar las demarcaciones judiciales al nuevo mapa provincial liberal, aprobado por R. D. de 30 de noviembre de 1833, el Gobierno publica el *Real Decreto de 26 de enero de 1834*, uniformando los Tribunales Superiores y mandando observar la nueva distribución del territorio de los mismos con la creación de las Audiencias de Burgos y Albacete (*cfr*., *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XIX, pp. 32-35), disponiendo que todos los tribunales superiores pasasen a denominarse Reales Audiencias, salvo el Consejo Real de Navarra y las Audiencias de Canarias y Mallorca; y, en su suplemento, el *Real Decreto de 21 de abril de 1834*, subdividiendo las provincias en partidos judiciales (*cfr*., *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XIX, pp. 207-209), mandando aprobar la subdivisión de las provincias en partidos judiciales. Al tiempo que los liberales creaban la citada estructura judicial, en fecha 24 de marzo de 1834, dictan seis decretos ordenando la supresión de los Consejos que hasta entonces habían regido las supremas jurisdicciones de la Monarquía (Consejo de Castilla, Consejo de Indias, Consejo de Guerra y Consejo de Hacienda), acordando, a su vez, sus respectivas sustituciones por el Tribunal Supremo de España e Indias, el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extranjería y el Tribunal Supremo de Hacienda; *vid*., SÁINZ GUERRA, J., *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Eudema, Madrid, 1992, pp. 187-220.

Audiencias de la Península e Islas adyacentes y el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias[57].

Sin embargo, los proyectados cambios contenidos en las predichas reformas se apartaban del esquema judicial original diseñado por los constituyentes gaditanos[58] que, posteriormente, consagró la Constitución de Cádiz[59]; y que, en resumen, abogaba por lograr para el Estado la exclusividad de la función jurisdiccional y la completa subordinación de la actividad juzgadora al imperio de la ley[60]. En efecto, lejos de aquel propósito inicial, las medidas que ahora se articulan buscaban afianzar un modelo judicial afín a las concepciones propias del liberalismo doctrinario y, por ende, muy dependiente del poder ejecutivo[61]. Por ello, el resultado final se tradujo en la configuración de un orden judicial marcado por la coexistencia de las nacien-

57 APARICIO, *El status…*cit., pp. 46 y 51, explica que la gran diferencia entre las propuestas gaditanas, para la reforma de la justicia, y la emprendida en este período radica en el tipo normativo con que se introduce la reforma; recurriendo, en el primer caso, al mecanismo constitucional y, en el segundo, a la vía gubernamental del Real Decreto; constituyendo estas tres disposiciones gubernativas la puesta en práctica del esquema de uniformización de la Justicia, cuya estructura quedó integrada en el Estado, coordinada con la Administración y dependiente del poder del Monarca.

58 La tarea reformadora emprendida por el liberalismo español comienza su andadura en las Cortes de Cádiz, con el claro afán de erradicar la preexistente justicia de corte absolutista, tal y como quedó confirmado con dos de las primeras disposiciones que aquella Asamblea promulgó, esto es, el *Decreto de 24 de septiembre de 1810*, Declaración de la legítima constitución de las Córtes y de su soberanía; nuevo reconocimiento del Rey Don Fernando VII, y la anulación de su renuncia a la corona: división de Poderes, reservándose las Córtes el legislativo: responsabilidad del ejecutivo, y habilitacion de la Regencia actual, con la obligación de prestar juramento á las Córtes: fórmula de este: confirmación interina de los tribunales y demás autoridades: inviolabilidad de los diputados (*cfr*., *Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811*, pp. 1-3), mediante el cual se declara formalmente la división de poderes y se ratifican en su empleo momentáneamente a todos los tribunales y justicias existentes; y el *Decreto de 6 de agosto de 1811*, Incorporacion de los señoríos jurisdiccionales á la Nacion: los territoriales quedarán como propiedades particulares: abolicion de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos: modo de reintegrar á los que obtengan estas prerrogativas por título oneroso, ó por recompensa de grandes servicios: nadie puede llamarse Señor de vasallos, ni ejercer jurisdicción (*cfr*., *Colección de los Decretos y Ordenes…, cit.*, pp. 193-196), en cuya virtud quedó suprimido el régimen señorial y, por tanto, cesados en sus cargos todos los jueces señoriales. Posteriormente, dicha supresión, fue ratificada por Fernando VII por dos resoluciones suscritas en 1814 y 1819.

59 "A pesar de que la Constitución de 1812 apenas rigió, la concepción de la justicia forjada por los primeros liberales devino el eje al que en último término hay que referir […] las reformas judiciales que se sucedieron en el curso del siglo XIX"; *vid*., GONZÁLEZ ALONSO, «La Justicia», p. 401.

60 En realidad, los expresados fines, tras un recorrido muy accidentado, fundamentalmente a causa de la inestabilidad política que caracterizó buena parte de la España del siglo XIX, no empiezan a cristalizar hasta la aprobación de la Ley provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870 y demás revisiones normativas promovidas durante la Restauración; véase, MARTÍNEZ PÉREZ, F., «Administración de Justicia», en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (Dirs.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 67-74.

61 Para más detalle, APARICIO, *El status…*cit., pp. 135-161.

tes instituciones liberales con los persistentes vestigios de la antigua Administración de justicia absolutista[62].

2.1.2. En la Justicia penal en particular

Durante los siglos XVI al XVIII y, en algunos casos, hasta bien entrado el siglo XIX, en Europa occidental rigió una justicia criminal que descansaba en principios teológicos[63]; y que, en síntesis, se caracterizaba por su extremada severidad[64]; la falta de proporcionalidad entre conductas punibles y penas; la desigualdad; la ejemplaridad de las condenas; la inobservancia del principio de legalidad y, sobre todo, por el abuso del arbitrio judicial[65]. Aunque, a decir verdad, este último rasgo definitorio, que fue esencial en el derecho penal europeo previo a la Codificación[66], a la postre tuvo efectos beneficiosos; ya que, en no pocos casos, en la praxis sirvió para mitigar el excesivo rigor de la legislación punitiva vigente[67].

Por su parte, en España fiel a su tradición histórica la justicia criminal, vigente a finales del Antiguo Régimen, era tan inclemente y atroz[68] como la del resto de los países

62 SÁINZ GUERRA, *La Administración…*, cit., pp. 364-366.

63 TORIO LÓPEZ, A., «La pena de muerte. Problemática histórica y contemporánea», en Adela Asúa Batarrita (Coord.), *El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1990, p. 100, siguiendo a Eberhard Schmidt, precisa que "el derecho penal del Antiguo Régimen […] se despliega desde el derecho romano, atravesando la Edad Media hasta los albores de la Ilustración […] Es un orden preceptivo, descendente desde los cielos, determinante de una concepción teocrática del Estado, del poder político, del Derecho, de las instituciones particulares y de la pena capital".

64 JIMÉNEZ DE ASÚA, L., *Tratado de Derecho Penal*, t. I, 2ª ed., Buenos Aires, 1950, p. 306, afirma que en esta etapa "la vida penal […] no podía ser peor ni más cruel", aunque reconoce que "paulatinamente van atenuándose las penas contra la vida y el cuerpo".

65 *Cfr.* RAMOS VAZQUEZ, I., «Usos y costumbres en el castigo del delincuente en la Europa del Antiguo Régimen (Inglaterra, Francia, España)», en Miguel Ángel Chamorro Cantudo (Dir.), *Droit et moeurs: implicaction et influence des moeurs dans la configuration du droit.* Société d´Histoire de Droit, actes des Journées internationales, Jaén, 2011, pp. 367-386.

66 MASFERRER DOMINGO, A., *Tradición y reformismo en la codificación penal española. Hacia el ocaso de un mito: materiales, apuntes y reflexiones para un nuevo enfoque metodológico e historiográfico del movimiento codificador penal europeo*, Universidad de Jaén, 2003, p. 59.

67 "La dureza de normas de esta naturaleza quedaba […] atenuada por la nueva mentalidad social y política, dignamente representadas por el arbitrio judicial, que equilibraba el desajuste entre la ley y el pensamiento dominante"; *vid*. GACTO FERNÁNDEZ, E., *Temas de Historia del Derecho: El Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación. II*, Sevilla, 1979, p. 49.

68 JIMÉNEZ DE ASÚA, *Tratado…*, cit., t. I, p. 702, confirma este extremo, manifestando que a principios del siglo XIX "la legislación penal española estaba constituida por la Novísima Recopilación y como derecho supletorio regían las Partidas. Mas como estos Cuerpos legales estaban casi por completo integrados por preceptos de la Edad Media o por leyes que cronológicamente eran más moder-

del contorno europeo[69]. No obstante, la necesidad e inquietud por afrontar su reforma se venía dejando notar desde el siglo XVIII[70]; si bien, dicho pretendido cambio, alimentado por la cultura de la Ilustración[71], no tuvo efectos legislativos significativos en España hasta la implantación, en la centuria siguiente, del Estado liberal[72]. Sin embargo, este proceso de transformación no resultó fácil, pues tras los intentos frustrados de las Cortes de Cádiz y, especialmente, de las del Trienio con la aprobación del Código penal de 1822, todavía, bien avanzado el siglo XIX[73], el sistema jurídico penal español se desenvolvía conforme a las concepciones punitivas de la antigua legislación[74]. Situación que, en concreto, comienza a enmendarse, después de un dilatado desarrollo legislativo, con la aprobación del Código penal de 1848[75].

---

nas, pero cuyo espíritu seguía siendo totalmente medieval, resultaba que en España se seguían aplicando disposiciones inhumanas y crueles".

69 CORRAL, *Historia…*, cit., p. 92.

70 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B., *Examen Histórico del Derecho Penal*, librería de Sánchez, Madrid, 1866, p. 243, señala que "España ha hecho felices ensayos en legislacion. Nuestras reformas datan de época bastante antigua, correspondiendo á la magistratura la gloria de haberlas iniciado. Macanaz en tiempo de Felipe V; Campomanes y Florida Blanca, en el de Cárlos III; y Jovellanos, en el de Cárlos IV: obtuvieron algunas mejoras, y dejaron preparado el camino para otras de mas trascendencia".

71 El espíritu crítico frente a la justicia criminal del *Ancien Régime*, que se forja en el seno de la Ilustración europea, penetra en España a través de los trabajos que elaboran autores patrios tan relevantes como Lardizábal, Forner, Cabarrús, Jovellanos, Meléndez Valdés, Foronda o Sempere y Guarinos; *cfr.*, TOMÁS Y VALIENTE, F., *El Derecho penal en la Monarquía absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII)*, Ed. Tecnos, Madrid, 1969, pp. 93 y siguientes; ANTÓN ONECA, J., «El Derecho penal de la Ilustración y don Manuel de Lardizábal», *Revista de Estudios Penitenciarios*, 174, 1966, pp. 587-626; BERMEJO CABRERO, J. L., «Tormentos, apremios, cárceles y patíbulos a finales del Antiguo Régimen», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 56, 1986, pp. 683-728.

72 TOMÁS Y VALIENTE, *El Derecho…*, cit., pp. 407-409.

73 Respecto a los intentos legislativos habidos para lograr la reforma de la Ley penal, AURIOLES MONTERO, I., *Instituciones del Derecho penal de España, escritas con arreglo al nuevo Código*, Establecimiento tipográfico de Ramón Rodríguez de Rivera, Madrid, 1849, pp. XVI-XVII, explica que "las Córtes de Cádiz quisieron realizarla, pero no les alcanzó el tiempo para ello. Las de 1822 lograron al fin publicar un código nuevo, digno sin duda de alabanza, si bien en ciertos casos parece un tanto duro, y es con frecuencia difuso y no muy claro; mas este código tuvo muy corta vida, porque luego vino la reaccion de 1823, y entonces quedó proscrito IN ODIUM AUTORIS. El rey Fernando VII nombró poco despues una comision para que formase un proyecto de ley penal; obra incompleta y defectuosa que ya estaba concluida cuando ocurrió la muerte del monarca; pero que nunca llegó á merecer la aprobacion del gobierno. En 1839 y 1840 se nombraron tambien comisiones con el mismo objeto, pero ninguna consiguió llenarlo".

74 En cuanto al estado de la legislación penal española, previo a la publicación del Código penal de 1848, GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, *Examen…*, cit., pp. 240-241, refiere que ésta se encerraba en las prescripciones de la Novísima Recopilación y, en consecuencia –haciendo suyas las palabras de Pacheco– "todos los absurdos […] todas las crueldades que distinguían nuestra legislacion criminal de hace seis siglos, todos han llegado en su completa crudeza, hasta el presente".

75 TOMÁS Y VALIENTE, F., *Manual de Historia del Derecho español*, Tecnos, 4.ª ed., 3ª reimpresión, Madrid, 1988, p. 498, señala que "esta anacrónica situación fue corregida de modo definitivo por el Código penal de 1848".

Así, pues, en el decurso de este período de tránsito al no haberse abordado en profundidad la adecuación de la Justicia penal a los nuevos principios liberales, las conductas consideradas punibles básicamente se enjuiciaban y penaban de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en la España absolutista[76], tal y como queda acreditado con el ilustrativo testimonio que rubrican los destacados jurisconsultos, Florencio Goyena y Joaquín Aguirre, al recordarnos que:

> *«[…] en el mismo año de 1835 se aplicaban en una capital de provincia, cuyo nombre omitimos por delicadeza, procedimientos horribles y hasta ahora inauditos. Un solo magistrado dictaba penas capitales, y estas se ejecutaban sin que el reo ni su defensor llegasen á saber los nombres de los testigos, ni se procediese á su satisfaccion en plenario. El sumario se entregaba á los defensores por copia, suprimiendo los nombres de los testigos, y suprimiéndolos con números. La causa se recibia á prueba por tres ó cuatro días, sin espresarse que fuese con calidad de todos los cargos; y sin embargo se procedia á dictar sentencia sin citacion. El magistrado no recibia por sí á los reos sus declaraciones y confesiones, sino su secretario, que ni aun escribano era. A reclamaciones de los defensores sobre no manifestarse los nombres de los testigos, ni procederse á su ratificacion, se respondia que estas eran puras ritualidades, de las que debia prescindirse por estar declarada la provincia en estado de sitio. Otras monstruosidades aun mas chocantes se cometieron, y el magistrado recibió las gracias y recompensas»*[77].

El referido marco legal, heredado del Antiguo Régimen para regular la Justicia criminal tanto en su vertiente material como ritual, en lo concerniente a la jurisdicción ordinaria, fundamentalmente se hallaba recogido en las prescripciones penales comprendidas en el código de las Siete Partidas y en la legislación recopilada con anterioridad a 1808[78], a lo que se sumó las reformas que se incorporaron en

---

76 BARÓ PAZOS, J., «El derecho penal español en el vacío entre dos códigos (1822-1848)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 83, 2013, p. 106, corrobora este panorama jurídico cuando afirma que "Tras la muerte del monarca (1833), cambió la titularidad del poder legislativo, pero se mantuvo la vigencia del derecho penal del Antiguo Régimen, hasta la promulgación del nuevo Código penal de 1848".

77 GARCÍA GOYENA, F. y AGUIRRE, J., *Febrero ó librería de jueces, abogados y escribanos*, Imprenta y librería de Gaspar y Roig, editores, 4.ª ed., t. III, Madrid, 1852, p. 435.

78 *Cfr., Novísima Recopilación de las Leyes de España, dividida en XII libros, en que se reforma la Recopilación publicada por el Rey Felipe II en 1567, reimpreso en 1575, y se incorporan las Pragmáticas, Cédulas, Decretos, Ordenes y resoluciones reales y otras providencias*, 5 vol., Madrid 1805. Actualizada en 1808 a través de un "Suplemento de la Novísima Recopilación […]". Asimismo, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D. M., *La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 21-22, precisa que "El Derecho penal existente hasta la publicación del Código de 1848 […] estaba condensado en Las Partidas de Alfonso X el Sabio, cuyas

esta época, a través del Reglamento provisional para la administración de justicia de 1835[79], para intentar ajustar el orden judicial al nuevo Estado liberal[80]. Sin embargo, esas medidas, aunque sirvieron para mejorar algunas garantías procesales de los encausados[81], fueron insuficientes para renovar el proceso penal, pues en su conjunto el sistema que diseñó el Reglamento provisional mantuvo su fidelidad a los esquemas inquisitivos que regían en la Justicia penal absolutista[82].

---

disposiciones penales se hallaban contenidas en la Partida séptima, la Nueva Recopilación de 1567 […] y la Novísima Recopilación de 1805, cuyo libro XII se ocupaba «de los delitos y sus penas, y de los juicios criminales», aunque permitía el acceso a la anterior Recopilación, al no incluir disposición derogatoria alguna".

79 *Real Decreto de 26 de septiembre de 1835*, que contiene el Reglamento para la administracion de justicia en lo respectivo á la jurisdicción ordinaria; *cfr*., *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XX, pp. 396-437.

80 Para, LORENTE SARIÑERA, M. M., «Reglamento provisional y administración de justicia (1833-1838). Reflexiones para una historia de la justicia decimonónica», en Johannes-Michel Scholz, (Coord.), *El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Klostermann, V., Frankfurt am Main, 1992, p. 251, "El Reglamento provisional de 1835 fue deudor directo de la normativa doceañista sobre administración de justicia". Por su parte, APARICIO, *El status*…cit., p. 51, comenta que el Reglamento provisional representó "la pieza clave" en donde se concretó las "pautas centrales" de toda la reforma judicial habida en este período.

81 GÓMEZ Y NEGRO, L., *Elementos de práctica forense,* Imprenta de Don Julián Pastor, 4ª ed., Valladolid, 1838, pp. 332-334, resume las referidas modificaciones en los términos que siguen: "Español ninguno podrá ser preso, arrestado ni detenido por juez ni tribunal sin motivo racional bastante en que no haya arbitrariedad. La persona que fuere presa arrestada ó detenida, deberá saber á las veinte y cuatro horas la causa de su detencion, el nombre del acusador, si le hubiere, y si no se pudiere por atender á otros asuntos preferentes del servicio publico, se espresará en el proceso el motivo, recibiendole la declaracion tan pronto como se pueda. No será molestado con hierros ni ataduras ningun detenido, sino en caso que sea necesario para su seguridad. Solo el juez que entienda en la causa podrá incomunicar al detenido por el tiempo rigurosamente necesario. Los procesados y testigos serán precisamente juramentados y examinados por el juez de la causa ante escribano que entienda de ella, ó por persona á quien el juez delegue para este objeto, tambien ante escribano en el caso que el reo y testigos esten fuera del pueblo de la residencia del juez. Para el examen de los hechos usarán los jueces de preguntas sin emplear ninguna clase de coaccion, ni promesa ú otro medio alguno, bajo su responsabilidad. Los cargos que se hagan al tratado como reo en su confesion será por lo que resulte de la sumaria, dandole las señas que basten para que se imponga en quienes son los testigos, caso que por sus nombres y apellidos propios no venga en conocimiento de quienes son. Elevado á plenario el juicio desde la confesion del reo será publico y no se reservará á las partes nada de cuanto se aduzca en él, haciendose la vista en publico á escepcion de aquellas causas que la decencia recomiende se oigan á puerta cerrada; pero podrán asistir los interesados y sus defensores. Si de las diligencias practicadas en cualquiera estado de la causa, se viere que el detenido es inocente se le pondrá en libertad sin demora y sin costas; pero si resultase reo de pena corporal se le pondrá en libertad con costas, dando fianza suficiente".

82 TOMÁS Y VALIENTE, *Manual…*, cit., p. 532, aun reconociendo que el Reglamento "mejoró el proceso penal mucho más que cualquiera otra ley promulgada durante las primeras décadas del Estado liberal", sostiene que "el proceso penal continúa después de 1835 fiel a orientaciones inquisitivas".

Asimismo, en esta época, junto a la precitada normativa, aplicable al ámbito competencial de la Justicia criminal ordinaria, también coexistió la antigua legislación que regía en la jurisdicción penal militar; y que, a diferencia de aquella, extendió su vigencia más allá del período que abarca la España isabelina[83]. En concreto, los tribunales castrenses tenían potestad para juzgar y sancionar todos los actos punibles contemplados en las ordenanzas militares, entre las que destacan las Reales Ordenanzas Militares de Carlos III de 1768[84], por sintetizar con reconocido rigor toda la legislación penal militar aprobada desde el siglo XVI[85]. Además, la Justicia militar, al amparo de lo previsto en la Ley de 17 de abril de 1821, promulgada durante el Trienio liberal[86] y, ahora, rehabilitada por Real Decreto de 30 de agosto de 1836[87], en esta etapa amplió sustancialmente sus competencias de orden público[88], al serle asignada la facultad

83 La codificación del derecho penal militar en España se inicia con la aprobación del Código penal militar de 17 de noviembre de 1884; *cfr*., MUGA LÓPEZ, F., «Antecedentes del Código penal militar de 1884. (Notas para la Historia de la Codificación del Derecho Penal Militar», *Revista española de derecho militar*, 2 (julio-diciembre) 1956, pp. 21-58; ALVARADO PLANAS, J., «La codificación del derecho militar en el siglo XIX», en Javier Alvarado Planas y Regina Mª Pérez Marcos (Coords.), *Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX)*, Ediciones Polifemo, Madrid 1996, pp. 277-300.

84 Entre las disposiciones que se aprobaron partir del siglo XVIII, además de las citadas Ordenanzas de Carlos III, sancionadas para el ámbito del Ejército, también son reseñables las Ordenanzas de S. M. para su Real Armada de 1748, así como las que se dictaron en 1793; *cfr.*, MUGA LÓPEZ, F., «Antecedentes del Código penal militar de 1884. (Notas para la Historia de la Codificación del Derecho Penal Militar», *Revista española de derecho militar*, 1 (enero-junio) 1956, pp. 27-56; GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ, N., «La evolución histórica de la jurisdicción penal militar en España», *Revista española de derecho militar*, 38, 1979, pp. 9-66; FERNÁNDEZ SEGADO, F., «La jurisdicción militar en la perspectiva histórica», *Revista española de derecho militar,* 56-57, 1990-1991, pp. 13-62; DOMÍNGUEZ NAFRIA, J. C., «La jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (Coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 207-232.

85 *Cfr.*, *Ordenanzas de S. M. para el regimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos de 1768*, Subdividida en dos Tratados de Orden de S. M., Oficina de Antonio Marín, Impresor de la Secretaria de Despacho Universal de la Guerra, Madrid, 1768.

86 La citada Ley de 17 de abril de 1821 estaba integrada por dos Decretos de Cortes que llevaban la misma fecha, a saber: *Decreto VI, de 17 de abril de 1821*, Se establecen las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la Constitución é infractores de ella, y *Decreto VII, de 17 de abril de 1821*, Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración; *cfr*., *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año*, *impresa de orden de las mismas*, tomo VII, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, pp. 37-52.

87 *Real Decreto de 30 de agosto de 1836*, restableciendo los que se citan acerca del modo de proceder en las causas de conspiración; *cfr*., *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XXI, pp. 362-363.

88 BASCUÑÁN AÑOVER, O., «Historia del delito político en la España contemporánea», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (Coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, p. 303, comenta que con el restablecimiento de esta ley "la justicia militar fue incrementando sus atribuciones contra los delitos políticos y consolidando un sistema de orden público militarista y autoritario".

de enjuiciar las causas formadas contra los conspiradores de la Constitución y la Corona, así como contra los salteadores de caminos, ladrones en despoblado y aun en poblado siendo en cuadrilla[89].

2.2. PLENO AUGE DE LAS EJECUCIONES CAPITALES

Como hemos visto, durante los diez años que comprende la etapa inicial de nuestro trabajo, a pesar de tratarse de un período de constantes cambios, la legislación criminal española apenas experimentó modificaciones valorables respecto a las concepciones punitivas heredadas del Antiguo Régimen. Por eso, las conductas consideradas punibles y sus castigos continuaron regulándose de conformidad con lo prevenido en las antiguas leyes penales. Así, dicho continuismo legislativo supuso que en la jurisdicción ordinaria se siguieran aplicando las desfasadas disposiciones penales insertas en la Novísima Recopilación[90], y en la justicia penal castrense las contenidas en las añejas Ordenanzas militares[91]; o, lo que es lo mismo, que en ambos órdenes judiciales la respuesta sancionadora continuara siendo desproporcionada, desigual y extremadamente cruel[92].

89 LASSO GAITE, J. F., *Crónica de la Codificación española*, "3. Procedimiento Penal", Ministerio de Justicia, Madrid, 1970, pp., 80-81, respecto a esta disposición legal, "que alcanzó larga vigencia", refiere "que trata del procedimiento en las causas de rebelión y sedición y de robo en cuadrilla, conocida con el nombre de Ley marcial por el aparato con que era proclamada en las declaraciones de sitio". Asimismo, para más detalle sobre este tema, véase, CRUZ VILLALON, P., *El Estado de sitio y la Constitución. La constitucionalización de la protección extraordinaria del Estado (1789-1878)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pp. 319-365.

90 ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., «La pena de muerte en el primer tercio del siglo XIX español», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 84, nº 1, 1982**,** p. 81, comenta que "hasta la aprobación del Código Penal de 1848, seguirán vigentes las leyes de la Novísima Recopilación. Todo esto llevaba consigo la consagración del arbitrio judicial y, por supuesto, el no respeto al principio de la legalidad". Por su parte, RUÍZ FUNES, M., «Progresión histórica de la pena de muerte en España», GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (Edit.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, p. 69, afirma que "es innecesario al hacer la historia de la pena de muerte en España, traer a examen los preceptos de la *Nueva Recopilación;* todos ellos están incluidos en la *Novísima*".

91 "A lo largo de casi todo el siglo XIX las Reales Ordenanzas de Carlos III tuvieron fuerza de ley y por eso siguieron siendo fuente de atribución de funciones de orden público al Capitán General del ejército en la región correspondiente"; *vid*., OLIVER OLMO, P., «La pena de muerte en España; cambios y pervivencias desde el Antiguo Régimen», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (Coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, p. 283.

92 MUGA, «Antecedentes del Código penal militar de 1884. (Notas para la Historia de la Codificación del Derecho Penal Militar», 1, pp. 39-40, opina que "la legislación penal militar no fue ni más dura ni más exigente que la penal civil"; y para justificarlo recurre a los ejemplos comparativos

Por eso, ante dicha falta de renovación jurídica no es de extrañar que, durante este interregno, la inclemente normativa relativa a la pena capital se mantuviera apegada a sus notas definitorias tradicionales[93]. Todo lo cual, además, se vio favorecido por el expreso apoyo que recibió de la mayoría de los tratadistas y ensayistas, al seguir considerándola la solución punitiva más adecuada y eficaz para combatir los delitos y asegurar el orden público; por lo que, a su juicio, debía continuar aplicándose, procurando su mayor difusión a fin de disuadir a otros potenciales criminales[94]. No obstante, es preciso puntualizar que en la práctica forense la extrema severidad que caracterizaba la vigente legislación criminal fue, en cierta medida, aminorada por los órganos judiciales al amparo de la amplia discrecionalidad que gozaban[95].

---

siguientes: "Así, el art. 1.º título X, tratado VIII de las Ordenanzas que imponía al reincidente en la blasfemia la pena de horadarle la lengua con hierro candente es más suave que la de la Ley 2.ª Título V, Libro 12 de la Novísima Recopilación, que además de cortarle la lengua le imponía cien azotes. El art. 70 del mismo tratado de las Ordenanzas imponía la pena de muerte al que roba en casa de Oficial o dependiente del Ejército, y con la misma pena se castiga el robo y aun el hurto en la Corte y a cinco leguas de ella por la Ley 3.ª, título XIV, del libro 12 de la Novísima. El crimen nefando se pena en las Ordenanzas con la horca y quema del cuerpo, y la Novísima le quemaba vivo".

93 TOMÁS Y VALIENTE, *El Derecho…*, cit., p. 359, recuerda que "La legislación penal no se preocupó de mantener la proporcionalidad de la pena […] castigaba generalmente con pena de muerte a los autores, cómplices o encubridores […] Una misma pena para el que comete hurto doméstico, por pequeño que sea, en Madrid y para quien roba con violencia en despoblado; una misma pena para el padrino de un desafío entre nobles y para el monedero falso; una misma pena para el sodomita y para el que comete delito de traición contra el rey; una misma pena para el bandido que tiene aterrorizada a una comarca y para el hombre que tiene trato carnal con un animal. Y esa pena es siempre la muerte".

94 *Cfr*., GUTIÉRREZ, J. M., *Práctica criminal de España*, 5ª ed., Imprenta de Fermín Villalpando, t. III, Madrid, 1828, pp. 87-113; SILVELA, F. A., *Consideraciones sobre la necesidad de conservar en los códigos y de aplicar en su caso la pena capita*l, Imprenta de Tomas Jordán, Madrid, 1835; *Memorias premiadas por la Junta de Gobierno de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislacion, y leídas por los Sres. D. Pedro López Clarós y D. Joaquín Escario, académicos profesores de la misma, en las sesiones de 7 y 14 de diciembre de 1841, sobre el siguiente tema: La pena capital ¿es legítima, justa y conveniente? En caso de admitirse, ¿á qué delitos deberá aplicarse?*, Imprenta de Eusebio Aguado, Madrid, 1842, pp. 10-117; GÓMEZ DE LA SERNA, P. y MONTALBAN, J. M., *Elementos del Derecho Civil y Penal de España*, Imprenta de Vicenta de Lalama, t. III, Madrid, 1842, pp. 30-32; PACHECO, J. F., *Estudios de Derecho Penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid*, Boix, editor, t. I, Madrid, 1842, pp. 123-157.

95 TAPIA, E. DE, *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos. Refundida, ordenada bajo nuevo método, y adicionada un Tratado del juicio criminal, y algunos otros*, Imprenta de Ildefonso Mompié de Monteagudo, t. VII, 3ª ed., Valencia, 1837, pp. 32-33, en relación con este extremo, argumenta que "si no hay leyes fijas, ó las que hay son oscuras, ó están enteramente sin uso, es preciso caer en el inconveniente del arbitrio judicial […] esto es justamente lo que ha sucedido por haber muchas de esta clase, que ó por demasiado severas ó no conforme á las actuales costumbres dejaron de usarse, habiéndose introducido por equidad otras mas modernas […] los jueces no pudiendo aplicar una pena que estaba sin uso por escesivo rigor ú otro motivo, se vieron á veces en la necesidad de conmutarla por otra también legal y mas proporcionada al delito".

Asimismo, la política criminal continuista que primó en esta primera etapa en estudio, propició que para el cumplimiento de las ejecuciones capitales se siguiera recurriendo, bien al mecanismo letal del garrote, cuando las sentencias condenatorias eran pronunciadas por los tribunales ordinarios, tal y como venía ordenado en la vigente Real Cédula de 28 de abril de 1832[96] que, al final de su reinado, había promulgado Fernando VII[97]; o bien a la tradicional fórmula del fusilamiento cuando el fallo mortal se dictaba en el ámbito de la jurisdicción penal castrense[98].

A mayor abundamiento, la expresada complacencia que gozaba la máxima pena en este período quedó reconfirmada al haber sido incluida explícitamente por el legislador liberal dentro de la relación de penas corporales que se consideraban vigentes en el Reglamento para la administración de justicia de 1835[99]; y, además, reforzada al haber ampliado su aplicación a nuevos supuestos punibles comprendidos en la restablecida Ley de 17 de abril de 1821[100]; lo cual, sin duda, debió de resultar

96 *Real Cédula de 28 de abril de 1832*, por el que el Rey nuestro Señor se sirve abolir para siempre el suplicio de horca, mandando que en adelante se ejecute en el de garrote la pena de muerte que se imponga; (*cfr. Decretos del Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su augusta Esposa*, t. 17, Imprenta Real, Madrid, 1833, pp. 57-58).

97 Tras varios infructuosos intentos promovidos por José I en 1808 y, más tarde, por las Cortes de Cádiz en 1812; que, bajo el influjo de los nuevos principios humanitarios que venían siendo difundidos por Europa desde finales del siglo XVII, pretendían eliminar la ignominiosa pena de horca, a fin de abreviar el sufrimiento de los reos condenados a muerte, se dicta la mentada real resolución de 1832 que, acorde con la mentalidad reaccionaria de su promotor, conservaba en la liturgia ejecutiva distintas variaciones escénicas dependiendo del delito y del origen social del ajusticiado; *cfr.*, OLIVER OLMO, P., *La pena de muerte en España*, Ed. Síntesis, Madrid, 2008, pp. 25-33; PUYOL MONTERO, J. M., «La abolición de la pena de horca en España», *Cuadernos de Historia del Derecho*, 4, 1997, pp. 124-130.

98 "La sentencia de muerte nunca puede ejecutarse cuando ha sido impuesta por la justicia ordinaria, por medio de fusilamiento […] sino en el conocido con el nombre de garrote […] Entre los militares el último suplicio es mas comúnmente el fusilamiento"; *vid*., ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Elementos de práctica forense*, 2ª ed., Imprenta de la viuda de Jordán e hijos, t. I, Madrid, 1843, p. 202.

99 Reglamento de 1835: "*Artículo […] 11. […] Deberán considerarse como penas corporales, además de la capital, la de azotes, vergüenza, bombas, galeras, minas, arsenales, presidio, obras públicas, destierro del Reino, prision ó reclusion por mas de seis meses*"; *cfr*., *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XX, p. 399.

100 El Decreto VI, de 17 de abril de 1821, por el que se establecen las penas que habrán de imponerse a los conspiradores contra la Constitución e infractores de ella, disponía que serán tratados como traidores y condenados a muerte los que conspirasen contra la Constitución, el Gobierno (art. 1) o la religión católica (art. 2); los que impidiesen la celebración de las Cortes o intentaran disolverlas o embarazar sus sesiones (art. 17); y los que intentaran disolver la Diputación permanente de las Cortes o impidieran sus funciones (art. 18); *cfr*., *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año*, *impresa de orden de las mismas*, tomo VII, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, pp. 37-45.

determinante para que las ejecuciones capitales, lejos de disminuir, continuaran incrementándose, tal y como reconoce la historiografía moderna[101].

No obstante, en rigor carecemos de fuentes fidedignas para establecer el número exacto de penas de muerte que se llegaron a aplicar a nivel nacional. Aunque, en su defecto, podemos aproximarnos a esos datos recurriendo a otras fuentes menores, pero también fiables. Nos referimos a ciertas estadísticas parciales muy significadas que, por vía inferencial, nos ayudan a corroborar la realidad del señalado auge de la máxima pena durante la época analizada. En concreto, dicha información se centra en Madrid y nos la suministra la Hermandad de la Paz y Caridad, ilustrándonos sobre el número de reos condenados a muerte en la Corte entre los años 1687 y 1868; ofreciendo, a tal fin, las cifras correspondientes a los distintos reinados que comprende el indicado marco temporal de nuestra historia; y cuyo resultado, entre otros que facilita, atribuye a la etapa de Isabel II un total de 221 ejecuciones[102]. Lo más relevante de esta última cifra es que concuerda con los datos estadísticos que figuran en la acreditada obra de Francisco Morales, sobre la historia de la cárcel madrileña del Saladero, donde se incluyen detalladas por años las condenas, ejecuciones e indultos que se computaron entre 1801 y 1869 en las cárceles de la Corte, de la Villa y de varios establecimientos militares de Madrid, con exclusión de *"todos los fusilamientos extraordinarios que […] llevaron á cabo los Gobiernos que desde entonces han venido sucediéndose por ser imposible consignar los nombres de las víctimas y fijar las fechas de ejecución, merced al poco esmero con que en dichas épocas se hacían registros"*[103]. De ahí que, a la vista de dicha valiosa información, podamos conocer el número concreto de las ejecuciones capitales que se verificaron en los diez años que componen la primera etapa de nuestro trabajo; y ello, a fin de acometer su oportuna comparación con el total de las que se efectuaron durante los treinta y cinco años que abarca la España isabelina. Así, fruto de dicho cotejo podemos saber que en su transcurso se practicaron en Madrid 221 ejecuciones capitales; de las cuales, entre 1833 y 1843, se cumplimentaron 114 y, desde 1844 a 1868, un total 107. Por todo

101 "Lo que muestran los datos que los historiadores hemos dado a conocer sobre ciudades tan diferentes como Pamplona, Valladolid, Zaragoza, Cáceres, Cádiz, Granada o Madrid, es que las ejecuciones fueron aumentando conforme se desmoronaba el Antiguo Régimen y se implantaba el Estado liberal"; *vid*., OLIVER, «La pena de muerte en España; cambios y pervivencias desde el Antiguo Régimen», p. 282.

102 "Según los datos de la Hermandad de la Paz y Caridad, fundada bajo D. Juan II en 1421, el número de reos de muerte habidos en la córte de 1687 á 1868, en que empezó á economizarse la pena, sin contar los de la Inquisicion ni otros en que la Hermandad no intervino, asciende á 1.034. De ellos sólo aparecen indultados 66. Corresponden 29 al reinado de Cárlos II, 112 al de Felipe V, 60 al de Fernando VI, 121 al de Carlos III, 61 al de Cárlos IV, 183 á la dominación francesa, 259 á Fernando VII y 221 á Isabel II"; *vid*., TORRES CAMPOS, M., *La pena de muerte y su abolición en España*, Góngora y Cía. Editores, Madrid, 1879, pp. 35-36.

103 MORALES SÁNCHEZ, F. M., *Páginas de sangre. Historia del Saladero*, Imprenta de Tomás Rey, t. I, Madrid, 1870, p. 4.

lo cual, inferimos que la etapa de transición, que hemos denominado inicial, fue especialmente cruenta, pues en la misma se registraron más de la mitad del total de penas de muerte que se contabilizaron en las cárceles madrileñas durante todo el período histórico en estudio[104].

Para finalizar, hay que señalar que, a diferencia de lo ocurrido en las Cortes del Trienio, donde, con ocasión de discutirse la aprobación del Código penal de 1822, algunos diputados cuestionaron la utilidad de la máxima pena[105], durante el período examinado, a pesar de tratarse también de una época de claro predominio liberal, no nos consta que se activara ninguna propuesta de interés de contenido abolicionista. Esta notoria inacción legislativa, viene de nuevo a reafirmar el generalizado estado de complacencia y conformidad que, antes de dar comienzo el reinado personal de Isabel II, había en torno a la aplicación de la pena de muerte.

104 *Ibíd.*, pp. 7-10.

105 En la sesión del día 17 de diciembre de 1821, las Cortes entraron a discutir las penas a incluir en el Código penal. Al llegar a la pena capital, en prueba de que los principios abolicionistas empezaban a calar en la sociedad española, se abrió un breve pero intenso debate sobre su conveniencia. No obstante, como es sabido, la Asamblea voto a favor de su mantenimiento; si bien, el portavoz de la Comisión redactora del proyecto de Código penal, el diputado Calatrava, ante la propuesta de eliminarla que había formulado la Universidad alcalaína, expresó las alentadoras palabras que siguen: «*[…] pero acerca de lo que dice la Universidad de Alcalá, para que se suprima esta pena, la comisión, con harto sentimiento suyo, ve que no estamos en circunstancias que lo permitan, ni nos dejen la esperanza de verla suprimida tan pronto como quisiera […]*»; *cfr*., *Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura extraordinaria*, núm. 84, de 17 de diciembre de 1821, pp. 1331-1335.

3.
Etapa intermedia de predominio moderado (1844-1854)

En julio de 1843 una alianza formada por moderados y progresistas pone fin a la Regencia de Espartero, quién, al mes siguiente, abandona España camino del exilio londinense[106]. La coalición triunfante, ante el vacío creado en la jefatura del Estado y la falta en el panorama político de un sustituto idóneo, decide adelantar la mayoría de edad de Isabel II. A tal fin, las Cortes, en sesión conjunta de ambas Cámaras, celebrada el 8 de noviembre, acuerdan declarar mayor de edad a Isabel II, quién, dos días después, presenta juramento como Reina constitucional[107].

Los diez meses de Gobierno que siguen a la caída de Espartero constituyeron un tránsito, entre los gabinetes inicialmente progresistas de Joaquín María López y Salustiano Olózaga y el presidido por Luis González Bravo, que, a su vez, sirvió de puente para que el dividido partido moderado se asentara en el poder[108]; abriéndose a partir de ese mo-

106 CEPEDA GÓMEZ, J., «La caída de Espartero», *Los 9 entierros de la democracia. España (1814-1975)*, en *Historia 16*, extra III, Madrid, 1977, pp. 32-33.

107 TOMÁS VILLARROYA, J., «El Gobierno durante el reinado de Isabel II», en *1812-1992. El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno*, Tecnos, edición preparada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Madrid, 1992, pp. 82-83.

108 BAHAMONDE y MARTÍNEZ, *Historia…*, cit., p. 248, sostienen que "esta transición […] no se entiende si se contempla desde la perspectiva de un entramado institucional sólido y de partidos estructurados […] En realidad consistía en una tupida red de relaciones clientelares y de actitudes

mento, bajo la presencia del hombre fuerte de la época, el general Ramón María Narváez Campos, la comúnmente denominada década moderada[109]. Este bien definido período de la España contemporánea, amén de la nueva Constitución de cariz moderado promulgada en 1845[110], trajo consigo el definitivo anclaje del Nuevo Régimen[111] acabado de modelar conforme a la versión moderada del liberalismo[112].

Desde el plano legislativo la aportación más destacable de esta etapa histórica, en lo que a nuestra investigación concierne, la hallamos en el ámbito del orden jurídico penal; pues, como comentamos con anterioridad, hasta bien avanzado el siglo XIX el sistema punitivo español, tanto en su vertiente material como procedimental, fue bastante fiel a las concepciones punitivas heredadas de la antigua legislación. Sin embargo, este preocupante panorama comienza a corregirse de forma definitiva en este período con la aprobación del Código penal de 1848[113], ocupando la cartera de Justicia el ministro Arrazola[114] del denominado "gran Gobierno Narváez"[115].

---

personales, no inmutables y en continua redefinición y enriquecimiento a medida que se sucedían los acontecimientos".

109 RUEDA, «El reinado de Isabel II. La España liberal», p. 110, comenta que "el 3 de mayo de 1844 se abre la década moderada. Se hace cargo del poder Narváez, que dominó la política en la mayor parte de la década. Personaje contradictorio, con un carácter desigual y muy impresionable […] Era enérgico y arbitrario, con pocos escrúpulos para sujetarse a las leyes y con mucho sentido de la autoridad, gozaba de talento para acometer las situaciones. Fluctuaba entre tendencias porque carecía de pensamiento político, aunque con los años se hizo más liberal".

110 Según SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo…*, cit., pp. 287-291, "la Constitución de 1845 es una verdadera reforma del texto de 1837" y, aunque conserva su misma estructura externa, "las rectificaciones con alcance político" que presenta la nueva Constitución marcan las diferencias de principios que separan ideológicamente a los dos partidos del naciente régimen constitucional que respectivamente las patrocinaron.

111 Para COMELLAS, *Historia…*, cit., pp. 184-185**,** dicho afianciamiento se vio favorecido por una nueva mentalidad que, ante el "cansancio revolucionario", apostó por la "conservación de la revolución".

112 BAHAMONDE y MARTÍNEZ, *Historia…*, cit., pp. 241-242, refieren que el moderantismo español, como expresión del liberalismo doctrinario, tuvo su época de esplendor en estos diez años, pasando su ideario por "la centralización del funcionamiento político, jurídico e institucional a todos los niveles", y consagrando con ello "unos moldes técnicos que acabaron por configurar el modelo liberal en España".

113 GARCÍA VALDÉS, C., «La Codificación penal y las primeras recopilaciones legislativas complementarias», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 82, 2012, p. 51, afirma que este Código "viene a representar […] la ruptura con el pasado y no solo eso. Todos los ilustres glosadores y los propios Códigos posteriores le han tomado por incuestionable y referente fuente, sentimiento extendido entre nuestros mejores penalistas tanto pasados como presentes".

114 El político y jurista, Lorenzo Arrazola García (1795-1873), desde muy joven militó en el partido moderado, llegando a acumular gran experiencia en la gestión del ministerio de Gracia y Justica durante el reinado de Isabel II, pues entre 1838 y 1867 fue titular de dicha cartera en seis ocasiones; *vid*., LASSO GAITE, J. F., *El Ministerio de Justicia su imagen histórica (1714-1981)*, Imprenta Sáez, Madrid, 1984, pp. 77-81.

115 "El gran Gobierno Narváez sería llamado así tanto por su duración –más de tres años– como por la calidad de sus miembros; pero, sobre todo, por el hecho de que durante esta etapa se acreditaría

3.1. LAS PROPUESTAS ABOLICIONISTAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CÓDIGO CRIMINAL DE 1848

3.1.1. Las iniciativas surgidas en la Comisión General de Codificación

Hacia mediados del siglo XIX el movimiento abolicionista ya había dado muestras de fortaleza, al propiciar que diversos países occidentales, *de facto* o *de iure*, hubieran dispuesto en sus respectivas leyes criminales la abrogación total o parcial de la máxima pena. Así, entre las naciones que, sin modificar su legislación, en la práctica eludían la aplicación de las sentencias de muerte, estaban Portugal y Mónaco, donde no se ejecutaba desde 1847. Por su parte, habían legalizado la supresión total de la pena capital, el gran ducado de Finlandia que lo logró en el año 1826; en el Estado de Luisiana se consiguió en 1830; en la Isla de Taití fue suprimida al año siguiente; en el ducado de Toscana y el Estado de Michigan, se anuló en 1847; igualmente, al año siguiente también es decretada por el cantón helvético de Friburgo y la República de San Marino; y en 1849 secundan la medida Basilea-Ciudad (donde se había verificado la última ejecución en 1819), los ducados de Nassau y Coburgo, así como los grandes ducados de Oldemburgo y de Brunswick. Y, entre las naciones que habían optado por la derogación parcial, cabe citar a Francia y Suiza que, en sus respectivas Constituciones promulgadas en 1848, declararon eliminada la pena de muerte para los crímenes políticos[116].

Mientras que, en los citados países, bajo la influencia doctrinal, entre otros, de Guizot[117], Ducpetiaux[118] o Lucas[119], los postulados de dicha corriente humanitarista

---

Narváez, ante la Europa agitada por las turbulencias de 1848, como el único estadista capaz de sobreponerse a la marea revolucionaria"; véase, SECO SERRANO, C., *Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX*, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 108.

116 Este listado sólo tiene valor ilustrativo, y se ha elaborado a la vista de la información obrante en TORRES, *La pena de muerte…*, cit., p. 17; PULIDO FERNÁNDEZ, A., *La pena capital en España*, Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro, Madrid, 1897, p. 205; CANALEJAS MÉNDEZ, J., «Sobre la pena de muerte», en GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (Edit.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, pp. 16-17; COSSÍO Y GÓMEZ-ACEBO, M. DE, *Sustitutivo legal de la pena de muerte y régimen penitenciario*, Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid, 1914, p. 45; CUELLO CALÓN, «Vicisitudes y panorama legislativo de la pena de muerte», p. 500; BARBERO, *Pena de muerte…*, cit., p. 154; ORTEGO GIL, P., «Apuntes sobre la repercusión en España de la abolición de la pena de muerte en Portugal», *Boletim da Faculdade de Direito. Universidad de Coimbra*, v. 95 (1), 2019, pp. 615-667; y VALIENTE CASTELLANOS, L., «La pena de muerte: situación actual desde una perspectiva internacional», *Inciso*, v. 21, nº 1, 2019, pp. 84-102.

117 *Cfr*. GUIZOT, F., *De la peine de mort en matière politique*, París, 1822.

118 *Cfr*. DUCPETIAUX, E., *De la peine de mort*, Bruselas, 1827.

119 *Cfr*. LUCAS, CH., *Du système pénal et du système répressif en génèral, de la peine de mort en particulier*, Paris, 1827.

avanzaban con firmeza[120], en España concluía el largo proceso de formación de su segundo Código penal. Dicho progreso legislativo se promueve desde el liberalismo de corte moderado y se articula en el seno de la recién constituida Comisión General de Codificación[121], compuesta por destacados juristas, nombrados por el Gobierno con el expreso encargo de redactar las bases generales de la codificación[122]. Así, desde esta nueva institución técnica[123], el presidente de la Sección de Código penal, Manuel Seijas[124], el 29 de septiembre de 1843 presenta un pliego de dieciocho cuestiones elaboradas en forma de pregunta para examen de la Comisión General[125].

120 En este periodo la base doctrinal del movimiento abolicionista, fundamentalmente, se hallaba en tres obras decisivas publicadas en la segunda década del siglo XIX por los citados autores. Así, siguiendo un orden cronológico, la primera fue suscrita en 1822 por el político e historiador francés Guizot, defendiendo la supresión de la pena de muerte en las causas por delitos políticos; y las otras dos, fueron publicadas ambas en 1827, una por el penitenciarista belga Ducpetiaux, centrada en demostrar la poca eficacia de las penas letales para prevenir los crímenes, y la otra por el letrado de la Corte Real de Paris, Lucas, en demanda de la desaparición gradual de las condenas capitales para los delitos comunes y su progresiva sustitución por las penas de prisión. Asimismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los argumentos expuestos en dichos trabajos llegaron a alcanzar una gran difusión, al ser secundados y ampliados, por un cualificado sector de la doctrina penal europea, entre los que "detacan Pietro Ellero, Mittermeier, Carrera, D'Olivecrona, Berner, Pessina, Haus, Thonissen, Geyer, Holtzendorff"; *vid.*, CUELLO CALÓN, «Vicisitudes y panorama legislativo de la pena de muerte», p. 500.

121 Hasta la creación de la Comisión General de Codificación, en fecha 19 de agosto de 1843, la labor codificadora era asumida prioritariamente por comisiones parlamentarias nombradas por las Cortes. En cambio, a partir de ahora dicha tarea será desempeñada por un órgano de naturaleza técnica dependiente del Gobierno. Emprendiéndose, con ello, una nueva etapa marcada por la oficialidad y la unidad de dirección; véase, TOMÁS Y VALIENTE, F., *Códigos y Constituciones (1808-1978)*, Alianza, Madrid, 1989, pp. 20-22.

122 CARRETERO PÉREZ, A., «La administración de justicia desde 1833 a 1868», *Revista de Derecho Judicial*, nº 22, 1965, pp. 123 y 126, explica que con la Codificación surgió el fenómeno del tecnicismo, propiciado por un grupo de juristas "moderados y relativamente apolíticos", que trazaron "la organización fundamental de la Administración y las funciones del Estado, desarrollando de modo puramente técnico los principios de la Constitución de 1812, sobre todo a través de leyes orgánicas y de la tarea de la recientemente creada Comisión de Codificación".

123 La constituida Comisión General de Codificación, fue dividida en cuatro secciones. En concreto la segunda, que estaba integrada por Manuel Seijas Lozano, como presidente, y los vocales Manuel Urbina Daoiz, Cirilo Álvarez Martínez, Felipe Gómez Acebo, José María Claros, José de Castro y Orozco y Joaquín Francisco Pacheco, recibió el encargo de elaborar el Código penal; véase, LASSO GAITE, J. F., *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, Madrid, 1970, pp. 255-257.

124 "Tenía Seijas larga experiencia como abogado y funcionario judicial, durante la legislatura de 1837 a 1838, en colaboración con el ministro Castro Orozco y otros diputados, se ocupó de la reforma de la legislación de procedimientos, y, al sobrevenir la revolución progresista de 1840, se alejó de la política y, como particular, prosiguió la tarea emprendida". De ahí que resultase lógico "encargar la redacción del proyecto de Código penal a quien había mostrado cumplidamente su vocación por esta clase de trabajos"; véase, ANTÓN ONECA, J., «El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 18, (fasc./mes 3, 1965), p. 483.

125 El cuestionario completo formado para la Comisión, en el *Archivo de la Comisión General de Codificación*, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 1º, pp. 3-6.

Del contenido de dicho cuestionario, y más en concreto de los puntos 3.º y 5.º, inferimos que la Comisión de Códigos en un principio albergó la idea de incluir en el catálogo punitivo del proyecto del nuevo Texto penal la sanción capital, pero introduciendo la posibilidad de eliminarla para los delitos políticos:

> «*Cuestiones que la Sección de Codigo penal propuso á la Comisión general para su resolución y la que habra de servirla de regla para la formación del proyecto de aquel […] 3.ª Las penas adoptables podrían ser las de Muerte; […] 5.ª ¿Se aplicará la pena de muerte á los crímenes políticos? […]*»[126].

Tras concluir el estudio y discusión del cuestionario, el 7 de marzo de 1844, la Comisión General eleva al Gobierno las diecisiete bases definitivas, firmadas por el entonces presidente, Bravo Murillo[127], que servirían de marco para la formación del proyecto del Código criminal[128]. Cuyo resultado, en lo que a nuestro tema concierne, quedó plasmado en las bases 2.ª y 7.ª, ratificando plenamente la vigencia de la pena de muerte, sin excluir de dicho castigo letal a los delitos políticos:

> «*Bases del Codigo penal aprobadas por la Comision general […] 2.ª …Que las penas que se establezcan en el Codigo sean las siguientes. La Muerte. […] 7.ª … No se escluirá absolutamente la pena de muerte en los crímenes políticos. […]*»[129].

Sobre las acordadas bases, Seijas se encarga de elaborar un anteproyecto de Código criminal, cuyo texto es revisado por una sección especial nombrada para su redacción definitiva[130]. Finalizada esta tarea, la Comisión General aprueba el proyecto, incluyendo en el texto la sanción máxima también para los delitos políticos[131], y lo remite al Gobierno el 24 de diciembre de 1845[132].

Sin embargo, este claro revés legislativo para la causa abolicionista no fue suficiente para acallarla. Prueba de ello lo hallamos en el voto particular que, suscrito

---

126 *Cfr*., *Archivo de la Comisión General de Codificación*, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 1º, pp. 3-4.

127 LASSO, *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, p. 261.

128 Las diecisiete bases del proyecto de Código Penal, en el *Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación*, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 2º, pp. 2-4.

129 *Cfr*., *Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación*, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 2º, pp. 2-3.

130 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La codificación penal…*, cit., pp. 45-47.

131 ANTÓN, «El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco», p. 484, refiere que la base sétima resolvía "una debatidísima cuestión", añadiendo que "luego el Código sancionó con el castigo capital más delitos políticos –y con pena única–, de lo que hacía esperar el uso del adverbio «absolutamente»".

132 LASSO, *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, pp. 302-309.

por el vocal de la Comisión General, Domingo Vila[133], acompañaba al proyecto de Código penal[134]. En cuyo tenor, entre otras consideraciones, dicho vocal defendía de forma razonada la supresión de la pena capital, cuanto menos para los delitos políticos, proponiendo en este caso, en sustitución de la irreparable sanción mortal, el confinamiento de sus autores, por tiempo determinado, en alguna de las islas remotas o territorios ultramarinos que por aquél entonces poseía España:

> «*Durante la discusión del Código penal […] no siempre han sido unánimes las opiniones legales de los individuos que la componen […] en medio de esos puntos de discordancia […] se ha atravesado alguno de aquellos […] que afectan gravemente la sociedad á que van dirigidas las leyes […] entre los que adopta la comisión en que no he podido convenir se hallan […] Que se admita la pena de muerte para los delitos políticos […] en la sesión de 24 de octubre de 1843, en que se presentó este punto para discutirse, diferente la opinión mia de la de los respetables miembros de la comisión hube de salvar en ella mi voto, porque según mis convicciones la conveniencia pública, los preceptos de la humanidad, el interés de los partidos todo se agolpaba apoyándome en contra de aquel principio, que tantas veces ha sido destructor de hombres eminentes. De mucho valor son las razones con que la filosofía ha intentado desterrar enteramente de los códigos la pena de muerte, plumas esclarecidas las han cien veces reproducido […] No es á ellas á las que acudió mi razón […] cuando en la opinión ya formada no hallé inclinacion á dispensar este beneficio, ni á los delitos políticos siquiera. Propuse sin embargo, que esta escepcion se estableciese, y en mi propuesta fui vencido: Oiganse algunas de las razones que me ocurrieron […] Ninguna de las cualidades, que caracterizan la bondad de las penas favorece la de muerte por los delitos políticos, fáltale hasta la de la ser ejemplar, única que de algún modo pudiera justificarla, privada como se halla del beneficio de la indemnización del daño que el delito causare, y de la esperanza de la corrección*

133 El catedrático barcelonés, Domingo María Vila y Feliú (1786-1862), fue un político de filiación progresista, que siendo vocal de la Comisión General de Codificación planteó un fundado voto particular contra el nuevo proyecto de Código penal, impugnando la tipificación dada a los delitos contra la religión católica y la inclusión de la pena de muerte por delitos políticos, "que da cuenta de la profundidad de su convicción política y genio jurídico". Asimismo, tras su experiencia parlamentaria en las legislaturas de 1836-1837, 1839 y 1841, fue nombrado rector de la Universidad de Barcelona; *vid*., GARCÍA-BALAÑÁ, A., en Mikel Urquijo Goitia (Dir.), *Diccionario Biográfico de parlamentarios españoles: 1820-1854*, Cortes Generales. Congreso de los Diputados (Edición Digital), Madrid, 2013. Disponible en *https://www.academia.edu/4624423/Domingo_Mar%C3%ADa_Vila_y_Feliu_1786_1862_2013_*

134 *Cfr.*, SERRANO MAILLO, A., «Voto particular de Domingo Mª Vila al proyecto de código penal de 1845», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 4, 1994, pp. 895-940.

del penado […] se ha querido suponer, que la pena se aplicaba en venganza de la sociedad ofendida, y de esta idea atrevida se ha deducido el derecho de disponer de la vida del ofensor. Esta interpretación es terrible, destruye los principios de justicia y perjudica los intereses de la sociedad […] Buscar esta razón de la pena en los delitos políticos es dar suelta á las pasiones bastantes agitadas en esas contiendas […] ¿Se dará bastante protección suprimiendo esta pena? ¿Podrán reprimirse estos delitos con otra pena que la sustituya? […] Dejando á los políticos razonar sobre estos estremos búsquese la proporción, la analogía y los efectos que debe causar la pena que propongo en reemplazo de la de muerte […] Felizmente la nación española tiene islas lejanas, posesiones ultramarinas distantes y de embarazosa y difícil comunicacion con los puntos en donde los delitos políticos suelen tener morada. Con el solo hecho de remitirles á aquellas remotas tierras cortaran los culpables las relaciones que con la península les unieran; oblígueseles además á la permanencia en ellas por algún tiempo, que la ausencia es un auxilio poderoso para impedir la acción del reo político […] La pena de muerte es por sí misma mucho mas dispendiosa, que los mezquinos gastos requeridos á disponer la que propongo […]»[135].

3.1.2. Las mociones planteadas en las Cortes

a) En el Senado

Desde la llegada del proyecto de Código penal al Gobierno hasta su presentación en el Senado, el 13 de febrero de 1847, trascurrió más de un año[136]; y con ello, el comienzo de un dilatado y controvertido trámite parlamentario, en el que no faltó la reproducción de nuevos y sugestivos debates sobre la conveniencia de mantener la pena máxima[137].

---

135 El manuscrito completo del voto discrepante del vocal Domingo Mª Vila, sobre delitos contra la religión católica, y pena de muerte por delitos políticos, se halla en el *Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación*, legajo 4º de Código Penal, carpeta 15ª, documento único. Véase, Apéndice documental 1º.

136 LASSO, *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, p. 303, comenta que esta larga demora fue debida a la crisis de Gobierno surgida a raíz de las intrigas palaciegas relacionadas con el enlace matrimonial de la joven Reina, a lo que se sumó los problemas derivados de la escisión del partido moderado.

137 La forma empleada para tramitar el proyecto de Código penal fue reiteradamente criticada, fundamentalmente porque el sistema elegido "impedía a las Cámaras el entrar a debatir el articulado"; lo cual dio lugar, a que los senadores y diputados discrepantes intentaran introducir sus modificacio-

Con ocasión de discutirse en el Senado el proyecto de ley autorizando al Gobierno para publicar el Código penal, en la sesión del día 14 de febrero de 1848 tomo la palabra el senador del reino y brigadier del ejército Mariano Miquel[138], quien, entre otras observaciones al texto, y previa solicitud de no ser tachado de *"sanguinario ó demasiado severo"*, interesó que se dispusiera con más precisión que todo homicidio calificado de alevoso fuese castigado *"con la pena de muerte"*, añadiendo que pedía dicha aclaración, porque, a su juicio, del tenor del proyecto se colige que la pena a imponer por ese delito solo sería la de cadena perpetua. En su contestación, y con el ánimo de disipar dicha inquietud, el presidente de la Comisión encargada de elaborar el dictamen del Senado, el magistrado del Tribunal Supremo y senador Francisco Claudio de Olavarrieta[139], le explica que cuando la ley señala una pena compuesta de dos indivisibles, la sanción a aplicar será siempre la mayor. De ahí que *"si sucediere el caso que S. S, supone, el tribunal impondrá la pena de muerte al reo"*. Si bien esta discusión parlamentaria pone de manifiesto el alto crédito que, en ese momento, gozaba la pena capital, si proseguimos indagando en el debate, observaremos que dicha voluntad de mantener la pena máxima en la ley penal estaba matizada con el abierto propósito de limitar su aplicación. A esta conclusión llegamos al comprobar los comentarios que, en respuesta a los temas propuestos por el senador Miquel, también le espeta otro de los vocales que integraba la Comisión del Senado, nos referimos al exministro de Gracia y Justicia, y a la par senador vitalicio, Manuel Barrio[140], quien, sin ambages, refiere que *"de todos modos, es preciso no perder de vista que uno de los objetos de este Código es sin duda economizar todo lo posible la pena de muerte […] Yo, señores, no quero, ni creo que conviene, que tal pena se elimine ó destierre de nuestro Códigos; no está ni estará en mucho tiempo nuestra sociedad para*

---

nes recurriendo a distintas argucias legales; véase, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La codificación penal…*, cit., pp. 57-98 y, en especial, pp. 136-142, donde la autora resume los aspectos más destacados que aportó la discusión parlamentaria sobre los delitos políticos y la pena de muerte.

138 Mariano Miquel y Polo (1787-1857) compatibilizó su brillante carrera militar, dentro de Cuerpo de Ingenieros, con la política, llegando a ser nombrado senador vitalicio del Reino en 1845; *vid*.**,** CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO, J., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/77174/mariano-miquel-y-polo*

139 El senador alavés, Francisco Claudio de Olavarrieta y Urquijo (1784 -?, 1858 post.), desempeño las funciones de alcalde, oidor, magistrado, regente de Audiencia, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y vicepresidente del Senado en 1853, 1854 y 1858; *vid*., BURKHOLDER, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/35160/francisco-claudio-de-olavarrieta-y-urquijo*

140 El magistrado del Tribunal Supremo y político moderado, Manuel Barrio Ayuso (1786-1850), fue ministro de Justicia durante apenas tres meses. No obstante, tuvo una dilatada carrera parlamentaria, pues llegó a ser elegido procurador representante de Soria en 1836 y en otras siete legislaturas más. También fue presidente del Congreso y desde 1845, senador electo y después vitalicio; *vid*., LASSO, *El Ministerio de Justicia…*, cit., pp. 69-70.

que tal empresa se acometa; pero estoy (porque no es mi corazón tan fiero como por mi semblante puede aparecer) en que se evite y economice todo lo posible"[141].

Transcurridos tan solo dos días, el debate sobre la pena de muerte se reanuda de inmediato en la Cámara Alta en la sesión del día 16 del mismo mes y año, con la diferencia de que ahora la voz de los partidarios de su abolición comienza a oírse con firmeza[142]. Este sería el caso del senador liberal progresista, Juan Francisco Cabello[143], cuando en dicha jornada, alertado por la aplicación de la pena capital también para los delitos políticos, afirma que, si bien *"el Código que se presenta es muchísimo mejor que todo lo que había"*, en algunos puntos *"se resiente de actualidad"*. Señalando a tal efecto, entre otros extremos, el tema relativo a la sanción letal, *"Se dice […] que el Código se halla escrito con arreglo a la ciencia, con arreglo á las máximas que hoy cunden más en Europa; y yo digo, señores, ¿es cierto esto? Cuando veo que en un Estado, la Toscana me parece, se ha abolido hasta en los delitos comunes la pena de muerte, cuando se ve que en algunos Estados de Alemania, hasta en la Prusia, se ha discutido la abolición ¿es posible que en España, después de veinte años de gobierno representativo […] no hemos de abolir esa pena de muerte? […]"*. En primer lugar, la réplica fue dada por el presidente del Senado, Manuel Pando, marqués de Miraflores, político por entonces muy ligado al general Narváez[144], refutando la esgrimida crueldad y dureza que, según Cabello, tenía el proyecto del Código penal en lo tocante a *"las faltas políticas"*; pues lejos de ello, comparándolo con la ley vigente en España, el proyecto destacaba por su gran benevolencia, compeliéndole a que examinara *"todos nuestros Códigos, y vea si en alguno de ellos semejante delito se castiga con tanta lenidad. Poquísimos casos, señores, se ven castigados con la terrible pena de muerte en el proyecto de ley que nos ocupa"*. A continuación, también expresó su oposición a la apuntada abolición, el exministro de Justicia de talante

141 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado*, núm. 30, de 14 de febrero de 1848, pp. 473 y 476.

142 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado*, núm. 32, de 16 de febrero de 1848, pp. 502, 503 y 510-514.

143 El jurista aragonés, Juan Francisco Cabello Rubio (1802-1851), desarrolló funciones de abogado, fiscal y juez y, a partir de 1838, también labores políticas dentro de las filas progresistas, logrando en 1840 el acta de diputado y, más tarde, la titularidad de la cartera de la Gobernación. Reintegrado a la carrera judicial fue nombrado magistrado de la Audiencia de Madrid; y, al final de su vida política, es designado senador vitalicio; *vid*., PÉREZ NÚÑEZ, J., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/25040/juan-francisco-cabello-rubio*

144 Manuel Pando y Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores y conde de Villapaterna (1790-1872), era un polifacético político conservador que, en su tiempo, fue publicista, historiador, diplomático y ministro de Estado y Ultramar; y que, en cualquiera de sus ocupaciones, siempre destacó por ser un firme defensor de la causa isabelina. En 1844 juró el cargo de senador, siendo nombrado al año siguiente senador vitalicio, puesto que ocuparía hasta la revolución de 1868; *vid*., VALLE DE JUAN, Mª A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/7937/manuel-pando-y-fernandez-de-pinedo*

progresista y, a la sazón, vocal de la Comisión responsable del dictamen del Senado, el senador vitalicio Antón de Luzuriaga[145], alegando, de forma poco convincente, que en realidad el proyecto de Código Criminal no castigaba con pena de muerte los delitos políticos, *"sino cuando á ella acompañen otros delitos"*. Agregando que, en comparación con otros *"Códigos extranjeros […] nuestro Código es en su parte penal infinitamente mas suave y leve que los demás"*. Concluyendo que, a la vista del estado de nuestra vigente legislación penal, *"era imposible desentenderse de la utilidad y urgencia de esta ley"*. Ante lo cual, el senador Cabello termino su intervención admitiendo que *"el Código era mucho mejor que lo que teníamos"*, por lo que se comprometía *"á votarle"*. Esto, no obstante, reiteraba su pretensión *"ya que tanto se había mejorado debía haberse abolido la pena de muerte; porque por delitos políticos recuerdo con dolor la muerte de esclarecidos españoles que estarían sentados hoy aquí"*. El debate en el Senado sobre el proyecto de Código penal, incluida la cuestión de la pena capital, fue cerrado por el ministro de Justicia, el destacado político moderado Lorenzo Arrazola, reconociendo que el tema de la abolición de la máxima pena era "*un problema no resuelto todavía*"; con el cual, se podía teorizar o filosofar, pero jamás realizar ensayos peligrosos y, menos aún, en tiempos de persistente inestabilidad política[146]. De ahí que *"el Gobierno, hoy por hoy, no puede hacerlo […] como Gobierno, que debe mirar al porvenir, y como encargado de la suerte del país, no es tan miope que vaya á abolir la pena de muerte ni aun para los delitos llamados políticos"*. Finalmente, esta sesión parlamentaria acabó sometiendo a votación del Senado el proyecto de ley autorizando al Gobierno para publicar el Código penal, resultando aprobado por una amplia mayoría[147].

145 El magistrado y destacado miembro de la Comisión de Códigos, Claudio Antón de Luzuriaga (1792-1874), inicia su carrera política tras la aprobación del Estatuto Real, integrándose en el ala derecha del partido progresista, y resultando elegido diputado suplente en 1836. En 1843 es elevado a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, siendo nombrado en el mismo año, por muy corto tiempo, ministro de Gracia y Justicia. Posteriormente, en 1845 la reina le nombra senador vitalicio. Su vocación política también le llevará a ocupar la cartera de Estado durante el Bienio Progresista, recuperando nuevamente la titularidad de Justicia en 1856, si bien por motivos de salud renunció de inmediato, aunque mantuvo el cargo de senador llegando a ser vicepresidente de la Cámara Alta; *vid*., MUNAR BERNAT, P. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/16038/claudio-anton-de-luzuriaga*

146 En la fecha en la que se desarrolla la comentada sesión parlamentaria, ya se habían producido diversas sublevaciones contra los gobiernos moderados, que habían sido duramente reprimidas. En este sentido, TUÑÓN DE LARA, *La España* , cit., p. 171, relata que "En 1845, fueron fusilados el general Zurbano y sus dos hijos; en 1846, un movimiento de la mayoría de las guarniciones de Galicia fue reprimido por el gobierno entonces presidido por Istúriz. En Alicante, se aplastó un movimiento de la Milicia Nacional y en Valencia fueron fusilados 160 carlistas que iniciaban una guerra de partidas".

147 En la votación definitiva hubo 84 votos, con el resultado de 77 a favor de la aprobación del proyecto y 7 en contra; *cfr*., *Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado*, núm. 32, de 16 de febrero de 1848, p. 515.

b) En el Congreso

Tras su convalidación por la Cámara Alta, dicho proyecto de ley de autorización se lee en el Congreso de los Diputados el 18 febrero de 1848[148], siendo su texto íntegramente confirmado por la Comisión dictaminadora nombrada al efecto[149], en fecha 3 de marzo del mismo año[150]. No obstante, sometido a la consideración del Congreso, es objeto de diversas impugnaciones, que dan lugar a que el asunto de la conveniencia de mantener la pena de muerte en el nuevo Código penal vuelva a ser centro de un enjundioso debate parlamentario[151].

En concreto, la discusión del proyecto en cuestión da comienzo en el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 1848, y ya en esta sesión inicial el tema de la pena capital es de nuevo materia de atención. La primera intervención que dio lugar a ello, fue protagonizada por el diputado moderado Muñoz Maldonado, conde de Fabraquer[152]; quien, al tiempo de exponer sus observaciones al proyecto en discusión, entre otras críticas, expresó sus reservas respecto a la forma elegida para presentar el Código criminal, pues, a su entender, el sistema arbitrado impedía a la Cámara entrar a deliberar sobre el fondo de su articulado; lo cual, imposibilitaba discutir asuntos de tanta transcendencia como era el de la conservación de la pena de muerte, *"Esta es una cuestión que por su gravedad é importancia bien merecía ser debatida y con detención […] porque Estados hay en Europa en que está abolida semejante pena"*, citando como ejemplos la Toscana, Prusia o la misma Francia, que recientemente había decretado la abolición de la máxima pena *"para los delitos políticos, comprometiéndose á presentarla para los demás en la primeras sesiones de la Asamblea nacional que ha de convocarse. Por lo tanto, siendo una cosa que la civilización moderna ha hecho mirar como conveniente en algunas Naciones europeas, creo que era un punto digno de ocupar á los legisladores españoles y muy propio del siglo XIX, y no hubiera estado de más que se debatiese, lo que no puede hacerse en la forma que ha presentado este Código el Gobierno"*. La réplica al conde de Fabraquer, en

148 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La codificación penal…*, cit., p. 69.

149 LASSO, *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, p. 312.

150 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 76, de 3 de marzo de 1848, Apéndice 2º, p. 264.

151 ANTÓN, «El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco», p. 486.

152 El diputado conservador José Muñoz Maldonado, conde de Fabraquer y vizconde de San Javier (1807-1875), siempre estuvo adscrito al partido moderado; y, personalmente, muy vinculado con la reina María Cristina de Borbón y con la defensa de la causa de su hija Isabel II. Asimismo, profesionalmente destacó por su intensa labor periodística, histórica y literaria; *vid*., CALERO DELSO, J. P., *Diccionario Biográfico de la Guadalajara Contemporánea*, 2017. Disponible en *https://bioguada.blogspot.com/2017/11/jose-munoz-maldonado.html*

nombre de la Comisión dictaminadora, fue asumida por Manuel de Seijas[153], argumentando que la inclusión de la pena de muerte en el proyectado Código penal estaba suficientemente fundada, al ser fruto del acuerdo entre todos los miembros de la Comisión de Codificación; y ello, a pesar de sus evidentes diferencias ideológicas, *"sabe el Congreso que en ella había hombres de todas opiniones, de todas doctrinas […] y yo me complazco en reconocer […] que á pesar de estar ahí representadas todas las opiniones políticas del país, todas nuestras resoluciones, en los puntos capitales, en la imposición de la pena de muerte […] fueron unánimes"*; y sin olvidar el voto discrepante del vocal Vila, concluyó señalando que *"en todas estas cuestiones hubo una sola persona que tuvo oposición aparte de todos los demás, que repito pensamos de un modo acorde"*. Seguidamente, Seijas continuó su alegato contra la impugnación del conde de Fabraquer, indicando que cuando recibió el encargo de redactar el proyecto de Código Criminal, lo primero que hizo fue estudiar la legislación penal extranjera, así como nuestra propia jurisprudencia, con el propósito de presentar un texto punitivo *"puramente español"*, llegando a la conclusión de que la pena capital estaba *"consignada en todos los Códigos del mundo"*. Pero, a pesar de ello, la Comisión de Códigos desde el principio trató la cuestión de mantener la pena máxima en los delitos políticos, habiéndose resuelto en este Código, *"que S. S. dice que prodiga la pena de muerte, […] que por delitos políticos no se impondrá la pena de muerte"*; arguyendo, en sintonía con la cuestionable explicación dada anteriormente por el senador De Luzuriaga, "*que cuando el delito político va acompañado de otro delito común, […] en ese caso único se impone esa cruel pena; pero por delito político aislado, nunca*". Añadiendo que *"El Código que presentamos si en algo puede pecar es de suave, de severidad nunca"*. Finalmente, esta discusión concluyó con una nueva intervención del conde de Fabraquer, precisando *"que en la legislación de España se veía en todas sus páginas la pena de muerte, y en este Código se conserva bastante; no dije que se prodigaba, sino que se conservaba bastante esta pena"*; insistiendo en que al ser la pena máxima *"un punto demasiado capital"*, la Comisión de Códigos debería haberla *"discutido como se merece"*; cerrando su turno de palabra, afirmando que, respecto a la legitimidad de la pena letal, *"Yo no he anunciado ni he dejado entrever mi opinión sobre esto"*[154].

Si bien era cierta esa última reflexión, a nuestro entender, el haber promovido este debate, presupone la existencia de una implícita inclinación contra el casti-

153 El insigne jurisconsulto, Manuel de Seijas Lozano (1800-1868), a lo largo de su vida política militó en las filas del partido moderado, siendo titular de las carteras de Gobernación; Comercio, Instrucción y Obras Públicas; Hacienda; Gracia y Justicia y Ultramar, en diversos gobiernos conservadores; véase, LASSO, *El Ministerio*…, cit., pp. 107-109.

154 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 79, de 10 de marzo de 1848, pp. 1711-1719.

go supremo, cuando menos en lo relativo a los delitos políticos, como así quedó posteriormente confirmado al comprobar el voto favorable que el propio conde de Fabraquer emitió para lograr que en los delitos de rebelión la pena de muerte fuese sustituida por la de extrañamiento[155], de conformidad con una enmienda formulada por Gómez de la Serna y otros diputados progresistas[156].

Además del debate descrito, en la sesión del Congreso celebrada el 10 de marzo de 1848, se verificó otra iniciativa legislativa frente a la pena de muerte. No referimos a la lectura de la enmienda al artículo 3º del proyecto de ley de autorización[157], que había sido presentada por un grupo de seis diputados[158], entre los que se hallaban destacadas figuras del partido progresista, como eran los diputados Luis Sagasti[159], Ramón Orozco[160], o José Mª Orense[161]. La enmienda en cuestión fue elevada a la Comisión del Congreso responsable de su dictamen, conteniendo el texto que sigue:

---

155 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 81, de 13 de marzo de 1848, p. 1750.

156 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 80, de 11 de marzo de 1848, p. 1726.

157 El dictamen de la Comisión sobre autorización al Gobierno para plantear el Código penal había aprobado dicho precepto en los términos siguientes: *"[…] Art. 3º El Gobierno hará por sí cualquier reforma, si fuere urgente, dando cuenta á las Cortes tan pronto como sea posible […]"*; *cfr*., *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 76, de 3 de marzo de 1848, Apéndice 2º, p. 264.

158 Esta enmienda fue suscrita por Félix Martín, diputado por el distrito de Illescas (Toledo); Juan Pedro Muchada, diputado por el distrito de Cádiz (Cádiz); Ramón Orozco y Jerez, diputado por el distrito de Vélez Rubio (Almería); José Mª Orense, marqués de Albaida, diputado por el distrito de Santander (Santander); Luis Sagastí, diputado por el distrito de Rioseco (Valladolid) y Julián Huelves, diputado por el distrito de Lillo (Toledo); *cfr*., *Estadística del personal y vicisitudes de las Córtes y de los Ministerios de España: Desde el 29 de setiembre de 1833, en que falleció el rey don Fernando VII, hasta el 11 de septiembre de 1858, en que se disolvió el Congreso de los Diputados*, Imprenta Nacional, Madrid, 1858, pp. 250-253 y 255.

159 El magistrado y político navarro, Luis Sagasti García Herreros (1808-1855), se abscribió tempranametne al liberalismo, y durante la década moderada fue uno de los hombres fundamentales del progresismo; *vid*., VV. AA., *Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876)*, Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria, 1993, pp. 819-823.

160 El empresario del sector minero y diputado Ramón Orozco Gerez (1806-1881), pronto abrazó la causa liberal, llegando a ser el líder indiscutible del partido progresista en Almería; *vid*., SÁNCHEZ PICÓN, A., *Diccionario Biográfico de Almería (DBA-e)*, Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería, 2024. Disponible en *https://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=376*

161 El político de linaje noble, José María Orense y Mila de Aragón, marqués de Albaida (1803-1880), fue uno de los principales ideólogos del partido progresista español que, por su mayor radicalidad, acabó integrandose en las filas del partido demócrata; *vid*., GIL NOVALES, A., *Diccionario biográfico de España (1808-1833)*, t. II, G/O, Fundación Mafre, Madrid, 2010, pp. 2242-2243.

«*Al final del dicho artículo, se añadirá:*

Pero en ningún caso podrá hacerse extensiva la pena capital á otros delitos que los señalados en este Código.

Madrid 10 de Marzo de 1848»[162].

La discusión de esta enmienda se llevó a cabo en la sesión del día 16 de marzo de 1848, siendo defendida por el diputado Julián Huelves[163], en sustitución de su compañero Félix Martín, que se hallaba ausente al estar indispuesto. Parece evidente que el grupo de diputados que promovió esta enmienda estaba resignado a mantener la pena capital en el nuevo Código criminal, aspirando tan solo a garantizar que en el futuro su aplicación no se ampliara a otras conductas punibles. Así se deduce de la exposición de Huelves, al reconocer que se había querido *"poner esta restricción ó cortapisa para que los Ministros que puedan venir después […] no puedan nunca abusar de esta autorización […] es tan amplia, tan general la autorización que en el art. 3º se concede, que pudiera muy bien abusarse de ella hasta el extremo de hacer que se impusiera la pena de muerte á delitos que hoy no lo merecen*". Seguidamente, esta enmienda fue opugnada, en primer lugar, por Arrazola, en su condición de ministro de Justicia, interesando su retirada, pues *"jamás había entrado en el pensamiento del Gobierno la idea de que se le autorizara para eso*", añadiendo que, como el artículo 3º solo era de aplicación para casos urgentes, no procedía la modificación planteada, ya que nunca podía *"ser urgente matar á un hombre"*; y, en segundo término, por el diputado Calderón Collantes[164], en nombre de la Comisión que dictaminó el proyecto, insistiendo en que el mentado artículo 3º no autorizaba al Gobierno a *"extender la pena de muerte á otros casos que los que expresa el Código*", por lo que apoyaba la petición de retirada de la enmienda *"por innecesaria*". Ante lo cual, Huelves decide sin más explicaciones retirarla *"por no estar aquí el autor verdadero"*[165]. De todas formas, a la vista de las posteriores reformas que

162 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 79, de 10 de marzo de 1848, p. 1705.

163 El abogado toledano, Julián Melitón Huelves Sol Díaz Nofre (1804 -?, 1865), se vinculó al partido progresista cuando Álvarez Mendizábal se hallaba al frente del Gobierno, llegando a ser ministro de la Gobernación durante el Bienio Progresista; y, más tarde, senador vitalicio; *vid*., PÉREZ NÚÑEZ, J., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/25032/julian-meliton-huelves-sol-diaz-nofre*

164 Fernando Calderón Collantes, marqués de Reinosa (1811-1890), fue un magistrado y político conservador que acumuló una gran experiencia en el ámbito parlamentario y gubernativo, pues fue diputado en numerosas legislaturas desde 1840 al 62, senador vitalicio de 1845 al 68 y electivo desde 1871 al 79, y ministro en tres ocasiones de Gracia y Justicia y en otra de Estado; véase, LASSO, *El Ministerio*…, cit., pp. 116-118.

165 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 84, de 16 de marzo de 1848, pp. 1818-1819.

se sucedieron, no cabe duda de que los recelos que justificaban la adición solicitada en modo alguno eran infundados[166].

La última proposición parlamentaria valorable que, sobre la cuestión de la pena máxima, se registró en el proceso de formación del nuevo Código criminal, fue formulada por un grupo de diputados[167] encabezado por el eminente jurista y político liberal progresista, Gómez de la Serna[168], que se leyó en la sesión del día 11 de marzo de 1848. Dicho grupo planteó su impugnación presentando una enmienda al artículo 1º del proyecto de ley de autorización que, trasladada a la Comisión del Congreso encargada del dictamen[169], llevaba el tenor que se expresa:

> «*Las penas de muerte y de cadena perpetua de que hablan los párrafos primero y segundo del art. 168 del Código penal, se sustituirán con el extrañamiento perpetuo y extrañamiento temporal.*
>
> *Palacio del Congreso 11 de Marzo de 1848*»[170].

La defensa de esta enmienda es sostenida en la sesión del 13 de marzo de 1848 por el diputado Gómez de la Serna, para, entre otros cambios, lograr que los inductores y caudillos principales en los delitos de rebelión, que contemplaba el artículo

166 Con sagaz criterio, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La codificación penal…*, cit., p. 142, comenta este extremo, señalando que "Por desgracia sus sospechas no iban descaminadas como puede verse por la regulación que se hizo en 1850 de los delitos políticos".

167 Esta enmienda fue apoyada por Pedro Gómez de la Serna, diputado por el distrito de Orense (Orense); José Gálvez Cañero, diputado por el distrito de Torox (Málaga); Gabino Gasco, diputado por el distrito de Torrecilla de Cameros (Logroño); Tomás Pérez, diputado por el distrito de Huesca (Huesca); Tomás Jaén, diputado por el distrito de Estella (Navarra) y José Mª Orense, marqués de Albaida, diputado por el distrito de Santander (Santander); *cfr*., *Estadística del personal…*, cit., pp. 249-250 y 253.

168 El jurisconsulto balear Pedro Gómez de la Serna y Tully (1806-1871) inició su carrera política en 1836, logrando acta de diputado en varias legislaturas. Su filiación al partido progresista le llevará a ocupar la cartera de Gobernación en 1843 y la de Gracia y Justicia en 1854. Pero, sin lugar a duda, sus mayores éxitos los cosechó en el ámbito del Derecho, al punto de ser considerado en su tiempo uno de los mejores juristas españoles; *vid*., LASSO GAITE, J. F., «Centenario de Gómez de la Serna. Miscelánea de la codificación», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. LXIV (232 de la Colección), 1972, pp. 149-163.

169 El dictamen de la Comisión sobre autorización al Gobierno para plantear el Código penal, había aprobado dicho precepto en los términos siguientes: *"[…] Art. 1º El proyecto de código penal presentado por el Gobierno y la ley provisional que para su aplicación le acompaña, se publicarán desde luego y se observarán como ley en la Península é islas adyacentes, desde el día que señale el Gobierno, dentro de los cuatro meses siguientes á la fecha de la sanción Real[…]"*; *cfr*., *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 76, de 3 de marzo de 1848, Apéndice 2º, p. 264.

170 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 80, de 11 de marzo de 1848, p. 1726.

168 del proyectado Código criminal[171], fuesen castigados con la pena de extrañamiento en lugar de la prevista sanción capital. El debate a que dio lugar esta propuesta fue muy prolijo, por lo que vamos a destacar solo los extremos que son de interés para el tema que nos ocupa. Así, primeramente, tomo la palabra Gómez de la Serna para hacer constar una consideración previa, esto es, que el asunto objeto de debate no era una cuestión de partido, *"porque ninguno de ellos se ha pronunciado hasta ahora acerca de ella, y acaso las opiniones de los individuos de un mismo partido estén discordes en este punto"*. Y ello era así, porque la abolición de la pena de muerte solicitada para los delitos políticos no era un asunto de política, ni un ataque al Gobierno, sino una *"cuestión […] mucho mas alta […] de humanidad"*. Seguidamente, procedió a delimitar la pretensión defendida, reconociendo que *"Hay acciones que toda legislación no puede menos de castigar; todas aquellas que atacan al orden social, todas aquellas que destruyen los derechos civiles, aquellas que pueden decirse que son la base de toda sociedad, son castigadas por la legislación de todos los países […]"*, como, a su juicio, eran el asesinato o el robo. *"Por el contrario, hay otras que solo son delitos en ciertas circunstancias dadas, y esto sucede con los delitos políticos […] Y cuando todos los partidos cuentan víctimas políticas, ¿por qué no ha de llegar el momento en que digamos: «no más sangre?»"*. Sin embargo, esto no presuponía que abogara por la impunidad de los delitos políticos; pues lejos de ello, admitía para estos casos la imposición de una sanción penal, pero de contenido menos severo que el previsto; comentado a tal efecto, *"Defiéndase á la sociedad, pero con armas que no sean peligrosas; sálvense las instituciones, impídase que las personas que pueden hacer el daño tengan la influencia y los medios para hacerlo. Exclúyase de su seno al que no quiere acomodarse á las leyes del país en que habita; extráñesele del Reino, pero no se le quite la vida"*. A mayor abundamiento, Gómez de la Serna prosiguió su alegato negando la eficacia de la sanción mortal para esta clase de delitos y, de paso, poniendo de relieve que la desaparición plena de la pena capital no era más que un ideal que por ahora no era realizable, **"***Aunque yo quiera ver desterrada del todo la pena de muerte, conozco que en algunos delitos, tales como el asesinato y el incendio, puede ser buena. No la impugno en esta clase de delitos, pero deseo que la sociedad se perfeccione para que llegue un día […] en que esa pena desaparezca de nuestros Códigos. Entre tanto […] no pudiendo sostenerse la utilidad de la pena de muerte más que por la ejemplaridad, no siendo eficaz ni causando efecto en los delitos políticos no puede ni debe sostenerse"*. Asimismo, Gómez de la Serna también

171 *"Art. 168. Los que induciendo y determinando á los rebeldes hubieren promovido ó sostuvieren la rebelión, y los caudillos principales de esta, serán castigados: 1.º Con la pena de muerte si fuesen personas constituidas actualmente en autoridad civil ó eclesiástica, ó si hubiere habido combate entre los rebeldes con la fuerza pública fiel al Gobierno, ó entre unos ciudadanos contra otros, ó si hubieren causado estragos que hayan puesto en peligro la vida de las personas […]"*.

aprovechó su intervención para rebatir la justificación expresada anteriormente en la Cámara Alta, por el senador De Luzuriaga, y en el Congreso, por el diputado Seijas, en el sentido de que el Código a aprobar no imponía la pena de muerte por delitos políticos, salvo que confluyeran con delitos comunes, afirmando que esa argumentación *"es insostenible"*, porque los delitos se constituyen por *"la intención que hay en cometerlos"*. De ahí que, en este caso, para que la rebelión fuese punible sería preciso que concurriera el requisito volitivo de *"la inmoralidad en el que la comete"*; preguntándose, para cerrar su exposición, *"¿Podremos nosotros decir, por ejemplo, que Padilla ó cualquiera de los otros cuyos nombres se hallan en esas lápidas, fueron asesinos y cometieron un delito común por haberse batido con las tropas del Rey? No, señores; no cometieron delitos comunes, fueron delitos políticos"*.

El peso de la oposición a esta enmienda fue asumido personalmente por Seijas, quien inicia su réplica sentando que nunca hay que confundir *"la moralidad con el derecho"*, ya que *"la medida de la penalidad de los actos"* se determina a través del hecho y no *"por la moralidad que envuelve"*. A continuación, tras reconocer la complejidad de la abolición interesada en los delitos políticos, por tratarse de una cuestión que *"no está resuelta ni en la teoría ni en la práctica"*, primero puso de manifiesto su negativa a aceptar la modificación planteada porque *"no afecta á un articulo solo del Código, sino á todo un capítulo"*, y después centró su alegato en la reiterada defensa de la inexistencia en el Código criminal del castigo capital para los delitos políticos salvo que hubiera *"precedido derramamiento de sangre"*, en cuyo caso sí procedía la aplicación de la pena de muerte, pero *"no por ser delito político, sino porque en él concurren circunstancias que lo sacan de esa esfera"*. A tal fin, para reforzar su más que discutible argumentación, no dudó en exponer que era posible el logro de revoluciones sin consecuencias cruentas, alegando que *"puede hacerse un cambio en un país por […] medios pacíficos; yo creo que puede haber esa especie de rebelión pasiva, no armada ni agresiva; yo creo que cuanto más pacífica tanto más seguros serían los medios de su triunfo"*. Al amparo de estas forzadas consideraciones y de otras de menor interés, Seijas termino su discurso solicitando al Congreso la desestimación de la enmienda.

En trámite de contrarréplica, Gómez de la Serna, por una parte, procedió a negar que él hubiese *"defendido el sistema de moralidad absoluta como base única del sistema penal"*, pues su criterio pasaba por respetar dicho sistema *"pero unido con el sistema utilitario"*, de tal forma que *"La moralidad puede considerarse como la parte del hecho, y la utilidad […] la base del derecho"*; y por otra, a poner de relieve que, a la vista de la redacción dada al artículo 168, en la práctica los jueces podían hacer extensiva la pena de muerte al mero *"soldado ó paisano que sale á la calle ó al campo, dispara el fusil contra el enemigo y le mata"*, porque el precepto en cuestión, además de los caudillos de la rebelión, también hablaba de los inductores, *"y yo me pregunto […] ¿que persona se rebela que no induzca á los demás á que le sigan?"*.

En su contestación, de nuevo hizo uso de la palabra Seijas, señalando que dicha posibilidad era inviable, al ser contraria a lo realmente querido por el legislador, esto es, que el castigo capital previsto *"en el art. 168 […] no comprende á otros más que á los caudillos"*, recomendado *"que no se le dé otra interpretacion distinta de la que fué el espíritu que guió á la comisión y al Gobierno"*.

Por último, en apoyo de Seijas, intervino en términos pragmáticos el ministro de Gracia y Justicia, Arrazola, indicando que la enmienda defendida por el diputado Gómez de la Serna era de carácter doctrinal y, por ende, impropia de un *"hombre de gobierno"* que también tenía que valorar *"las circunstancias del país al cual se trata de aplicar"*. Añadiendo que una cuestión tan importante, como era la de la abolición de la pena de muerte para los delitos políticos, no se podía abordar de *"refilón"* a través de una reforma que solo recurría a argumentos teóricos, como eran los relativos a *"la humanidad"* o a la *"moralidad"*; apuntando que lo correcto hubiera sido descender al plano práctico, donde *"esos nobles sentimientos, tomen en cuenta las circunstancias del país, que no olviden la tendencia del siglo ni lo pasado y lo futuro, y en este solo terreno se podrá resolver la cuestion"*; alertando además que, de no hacerlo así, se *"comprometería la suerte de un Código de que tanta necesidad tiene el país"*. Por ello, emplazaba a Gómez de la Serna a que intentara dicha abolición por otros medios distintos a los de esta enmienda, por *"ser un ensayo peligroso"*, al tiempo que interesaba de los miembros del Congreso *"que de ninguna manera presten su asentimiento á que la enmienda sea tomada en consideración"*.

Lo más valorable de este intenso debate lo hallamos en el resultado de la votación nominal que a continuación se practicó, pues gracias a esta información podemos comprobar que ni tan siquiera la abolición puntual y parcial de la pena capital obtuvo el suficiente respaldo en el Congreso de los diputados, al ser desestimada la tramitación de la predicha enmienda por 72 votos en contra y 59 a favor[172].

Si bien el asunto de la supresión del castigo capital fue tratado en algún otro debate sobre el proyecto de Código criminal, a la postre, en ninguno de ellos se introdujo más argumentos valorables que los ya citados[173]; con lo cual, ninguna pro-

172 *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 81, de 13 de marzo de 1848, pp. 1742-1751.

173 Por ejemplo, este sería el caso de otra enmienda que el diputado Gómez de la Serna había formulado, contra el artículo 1º del dictamen de la Comisión sobre autorización al Gobierno para plantear el Código penal, que fue discutida en la sesión del día 14 de marzo de 1848, en donde el tema de la pena capital en los delitos políticos se volvió a tratar, pero sin introducir en el debate parlamentario que se suscitó ninguna cuestión especialmente novedosa, salvo algún punto de cierto interés como fue la crítica de Gómez de la Serna, relativa a lo conveniente que hubiera resultado discutir en las Cortes las bases esenciales del nuevo Código; y entre ellas, una que hubiera dicho *"no se impondrá la pena de muerte más que en los delitos comunes, ó no se impondrá para los delitos políticos"*. En la misma línea, también cabria reseñar alguno de los pasajes contenidos en la contestación que, en nombre de la Comisión que dictaminó el proyecto de autorización, le ofrecieron los diputados Pedro José Pidal y

puesta de carácter abolicionista llegó realmente a ser tenida en consideración. De ahí que, tras su paso por unas Cortes de mayoría moderada[174] y bajo el refrendo del ministro Arrazola, el nuevo Código penal fuese promulgado el 19 de marzo de 1848 junto a la Ley provisional que dictaba las reglas para su aplicación como Ley en la Península e Islas adyacentes desde el día 1 de julio[175], confirmando, dentro de su escala penológica, la plena vigencia de la máxima pena[176].

3.2. LA PENA DE MUERTE DURANTE LA VIGENCIA DE LOS CÓDIGOS PENALES DE 1848 Y 1850

Las fuentes legales a las que recurrió el legislador para abordar la elaboración del nuevo texto punitivo de 1848, esencialmente, las encontramos en el Código español de 1822, así como en distintos códigos penales extranjeros, entre los que destacan el Código francés de 1810 y, sobre todo, el brasileño de 1830[177], que sirvió de modelo para fijar un estricto régimen de aplicación de penas, que dejaba poco margen al

---

Claudio Nocedal. Así, Pidal se opuso a la pretensión de Gómez de la Serna explicando que, como los delitos de rebelión se consideran *"grandes delitos contra la sociedad […] En la práctica […] todas las Naciones hasta ahora han castigado con la última pena esta clase de delitos"*. Por ello, en su opinión *"se debe economizar la pena de muerte siempre que se pueda, y esto lo ha hecho el Código; pero quitarla […] sería hacer un experimento muy aventurado, que podría traer grandes perjuicios"*. Por su parte, el diputado Nocedal, también abogó por desestimar la enmienda, pero no por la cuestión de fondo planteada sino por razones de orden formal, al entender que la vía elegida no era la más adecuada, comprometiéndose con Gómez de la Serna a *"que si presenta un proyecto de ley aboliendo la pena de muerte siempre, en toda ocasión, en los delitos políticos, cuente con mi voto"*; *cfr*., *Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 82, de 14 de marzo de 1848, pp. 1763, 1768, 1772, 1775-1776 y 1778.

174 Estas Cortes, de amplia mayoría conservadora, se habían conformado tras las elecciones de diciembre de 1846; *vid.,* MONSELL CISNEROS, M.ª F. y PÉREZ DÍAZ, R. L., «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», *Revista de las Cortes Generales*, 16, 1989, p. 88.

175 *Cfr. Código Penal de España*, Imprenta Nacional, Madrid, 1848.

176 C.P. 1848: «*Art. 24. Las penas que pueden imponerse con arreglo á este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la siguiente ESCALA GENERAL. Penas aflictivas. Muerte […]*».

177 PACHECO, J. F., *El Código Penal concordado y comentado*, Imprenta de D. Santiago Saunaque, t. I, Madrid, 1848, pp. LXII-LXIII, en concreto menciona "el código de 1822, que fue temporalmente nuestra ley; el francés, modelo de todos los del día; el austriaco y el napolitano, reglas de pueblos que se parecen á nosotros; y el de Brasil, cuyo método ha servido de norma para el que acaba de publicarse". Para una aproximación a los influjos extranjeros, que se aprecian en el articulado del Código criminal de 1848, puede consultarse, ALVARADO PLANAS, J., «Influencias brasileñas, francesas, italianas y austriacas en el Código Penal español de 1848», Masferrer, A. (ed.), *La codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (parte general)*, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 109-163.

arbitrio judicial[178]. Asimismo, en el plano doctrinal, es destacable la influencia de las concepciones morales y retributivas de la pena defendidas por el penalista italiano Rossi[179], que en España fueron ampliamente divulgadas por Pacheco[180]; aunque también se aprecia una clara permanencia de los principios intimidatorios y ejemplarizantes de las penas corporales, que recuerdan a las tesis de Bentham[181].

Dentro de los precitados parámetros generales, el segundo Código penal español regula la pena de muerte depurando lo preceptuado sobre esta materia en el texto penal de 1822, y reconfirmando la presencia en su articulado de las tesis benthamianas[182]. En su consecuencia, por una parte, para los delitos comunes consolida la pena de garrote, sin distinción de clases[183], como único método letal susceptible de ser aplicado a un total de treinta y dos conductas punibles[184]; y, por otra, suprime anteriores rituales anacrónicos, como eran la decalvación y el uso de sogas o cadenas[185]; y, además, la sanción capital, en algunos casos, deja de ser considerada pena única indivisible[186]. Pero, al mismo tiempo, con notoria finalidad intimidante

178 RAMOS VAZQUEZ, I., «La individualización judicial de la pena en la primera codificación francesa y española», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 84, 2014, p. 363.

179 Una síntesis de la influyente aportación doctrinal del jurista y político italiano Pellegrino Rossi, en ZAFFARONI, E. R., *Tratado de Derecho Penal. Parte general*, Ediar, t. II, Buenos Aires, 1987, pp. 122-128.

180 IÑESTA PASTOR, E., *El Código Penal español de 1848*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 266-273.

181 ANTÓN ONECA, *Derecho…*, cit., p. 75, refiere que "si bien predomina el principio de la retribución, no está ausente el de la intimidación general. Hay varios preceptos sobre ejecución de penas que recuerdan la *mise en scène* prescrita por Bentham para que el ejemplo llegase a todos (penas de muerte, argolla y degradación). La dura penalidad aplicada a delitos políticos, los casos en que se aplica la pena de muerte como única […] son difícilmente de conciliar con la retribución proporcionada a la culpabilidad del agente, y parece mirar principalmente al ejemplo".

182 BÁDENAS, «Referentes para la regulación de la pena capital en la Codificación española del siglo XIX», pp. 583-585.

183 C.P. 1848: «*Art. 89. La pena de muerte se ejecutará en garrote sobre un tablado […]*». En relación con este precepto, LANDROVE, «La abolición de la pena de muerte en España», p. 21, señala que con este Código "desaparece toda distinción ante trance tan igualitario como es el de la privación de la vida. A partir de este momento histórico se reserva el garrote para la ejecución de los delincuentes de Derecho común y el fusilamiento para los del militar".

184 Según PUYOL MONTERO, J. M., «Dignidad humana y pena de muerte. El proceso de humanización de la pena capital en la legislación española del siglo XIX», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, nº 60, 2022, p. 21, este número de casos supuso una reducción respecto al previsto "en el Código de 1822, e incluso la regulación del Código resultaba más benévola que el Código criminal francés de 1810, donde se contemplaban treinta y seis supuestos de posible pena capital".

185 SÁINZ GUERRA, J., *La evolución del Derecho Penal en España*, Universidad de Jaén, Jaén 2004, p. 287.

186 Esta nueva ley penal mantenía en varios delitos la imposición del castigo capital como pena única indivisible (delito de traición, arts. 139 y 140; contra el derecho de gentes, art. 154; de lesa majes-

y ejemplarizante, conserva una denigrante parafernalia en la ceremonia de la ejecución[187], como era la conducción pregonada del reo al patíbulo en caballería o en carro; el uso de una hopa negra, salvo para los parricidas o regicidas que debían llevarla conjuntamente con un birrete, ambos de color amarillo con manchas encarnadas[188]; la macabra publicidad en los ajusticiamientos[189] y la horripilante exposición de los cadáveres de los ejecutados[190].

Esta cruel e irreversible solución punitiva que recoge el nuevo Código criminal de 1848, pone de relieve el profundo arraigo de la pena de muerte en la mentalidad del legislador español. Siendo prueba de ello, el repetido fracaso de las distintas proposiciones abolicionistas que se registraron durante su proceso de elaboración y aprobación. Todo lo cual, no es de extrañar porque, en el ideario político de los partidos que conformaban las Cortes españolas en aquel momento[191], no estaba contemplada ni la abolición total ni parcial de la máxima pena[192].

---

tad, arts. 160 y 165; de rebelión, art. 168.1; de parricidio, art. 323.1; y el de duelo, art. 346, párrafo 1º). Si bien, en otros casos, los delitos eran sancionados con penas compuestas de dos grados (de cadena perpetua a muerte) o de tres (de cadena temporal a cadena perpetua y a muerte), procediendo la pena letal cuando en la comisión de delito concurría alguna circunstancia agravante; véase**,** RUÍZ FUNES, «Progresión histórica de la pena de muerte en España», pp. 79-82 y 109.

187 GARCÍA VALDÉS, «La Codificación penal y las primeras recopilaciones legislativas complementarias», p. 52.

188 C.P. 1848: «*Art. 90. El sentenciado á la pena de muerte será conducido al patíbulo con hopa negra, en caballería o carro. El pregonero publicará en alta voz la sentencia en los parajes de tránsito que el Juez señale. Art. 91. El regicida y el parricida serán conducidos al patíbulo con hopa amarilla y un birrete del mismo color; una y otro con manchas encarnadas*».

189 C.P. 1848: «*Art. 89. […] La ejecucion se verificará de dia y con publicidad en el lugar generalmente destinado para este efecto, ó en el que el Tribunal determine cuando haya causas especiales para ello […]*».

190 C.P. 1848: «*Art. 92. El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el patíbulo hasta una hora antes de oscurecer […]*».

191 las Cortes que autorizaron la aprobaron el Código penal de 1848 tenía la composición política que a continuación se reseña: 225 representantes moderados; 43 de la fracción moderada o puritana de Pacheco; 60 del partido progresista y 21 de otros, respecto a un total de 349; *vid.*, LINZ, J. J., MONTERO, J. R. y RUIZ, A. M.ª, «Elecciones y política», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (Coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, t. I., Fundación BBVA, Bilbao, 2005, p. 1091.

192 Las dos formaciones políticas más importantes en esta etapa eran, por una parte, el Partido Progresista, en el que se agrupaban los herederos de los liberales gaditanos y de los exaltados del Trienio liberal, y en el que convivían tres facciones, a saber, los llamados resellados, que ideológicamente ocupaban el sector más derechista; los puros, que representaban la tendencia central del progresismo; y el grupo de los progresistas más próximos al ala izquierdista del partido; y por otra parte, el Partido Moderado, en cuyo seno se hallaban los sectores conservadores provenientes del estrato superior y de las clases medias de las sociedad isabelina, y en el que también se distinguían tres tendencias, esto es, la conservadora autoritaria, en la que se adscribían los sectores más derechistas del partido; el grupo moderado más centrado y potente, el de los doctrinarios; y la facción puritana, más cercana a los progresistas; *cfr*., FERNÁNDEZ SARASOLA, I., *Los partidos políticos en el pensamiento español. De*

Sin embargo, dicha situación parece que empieza a cambiar a partir del año siguiente de su promulgación. En efecto, las discusiones para la elaboración del programa progresista, que se llevaron a cabo con ocasión de la nueva legislatura iniciada en diciembre de 1848, traen como resultado una escisión a la izquierda del partido liberal progresista, fruto de la cual nacerá una nueva formación política denominada Partido Demócrata, que el 6 de abril de 1849 hará público un manifiesto programático[193], en el que por primera vez un partido político incluirá oficialmente, dentro de su exposición de principios, la eliminación de la pena de muerte para los delitos políticos; y ello, en los términos que siguen:

> «*MANIFIESTO DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO. A nuestros conciudadanos: Los diputados que suscriben, al constituirse en el Congreso órganos del partido progresista democrático, deben a sus conciudadanos la manifestación de sus principios y doctrinas […] He aquí, pues justificada la publicación que hacemos de nuestras opiniones y creencias […] nosotros admitimos tan solamente principios de aplicación posible y no remota a nuestro país […] Principios políticos […] El jurado conoce de todos los delitos sin distinción. No se aplica la pena de muerte a los políticos […] Programa de gobierno de la extrema izquierda del Congreso. Madrid 1849*»[194].

A pesar de los intentos que se sucedieron para evitar la definitiva división entre progresistas y demócratas, la ruptura se agudizó en los siguientes comicios que se celebraron el 9 de abril de 1851, dando lugar a que los demócratas fijaran los doce puntos fundamentales de su propio programa; en donde, abandonando el carácter parcial de su ideario abolicionista, ahora elevan su pretensión a la cota máxima al solicitar, sin ambages, la supresión de la pena capital:

> «*1.º El sufragio universal, ejercicio y consagración práctica de la soberanía nacional […] 7.º La unidad de jurisdicción y de fuero, institución del jurado para toda clase de delitos, administración de justicia en lo criminal, gratuita, sistema penal penitenciario y abolición de la pena de muerte […]*»[195].

---

la Ilustración a nuestros días, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 69-109; CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., «Los partidos políticos», en José Mª Jover Zamora, *La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, t. XXXIV de la *Historia de España*, Espasa Calpe, Madrid, 1981, pp. 373-445; ARTOLA, M., *Partidos y programas políticos (1808-1936)*, t. I, «Los partidos políticos», Aguilar, Madrid, 1977, pp. 246-254; VILCHES GARCÍA, J., *Progreso y Libertad. El partido progresista en la revolución liberal española*, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 39-55; y SECO, *Historia del conservadurismo…*, cit., pp. 89-138.

193 El nacimiento del nuevo Partido Demócrata se vio favorecido por los efectos del movimiento revolucionario europeo de 1848, y en su creación intervinieron tres activos grupos políticos, el republicano, el socialista y la izquierda progresista; véase, CÁNOVAS, «Los partidos políticos», pp. 487-496.

194 ARTOLA, *Partidos…*, cit., t. II, «Manifiestos y programas políticos», pp. 37-45.

195 ARTOLA, op. cit., t. I, «Los partidos políticos», pp. 253-254.

No obstante, los efectos derivados de la ola revolucionaria que se extendió por el mapa europeo en 1848 no llegaron a ser determinantes en España[196]; entre otras razones, por la exitosa política represiva que desplegó el general Narváez; todo lo cual, contribuyó a impedir que los defensores del referido plan abolicionista pudieran maniobrar para intentar alterar la regulación de la pena capital que contemplaba el Código penal de 1848[197]. A mayor abundamiento, transcurrido apenas dos años desde su publicación, el ministro de Gracia y Justicia Arrazola, a la vista de los distintos decretos que se habían dictado en aclaración y reforma parcial de dicho Código[198], por Real Decreto de 30 de junio de 1850 manda promulgar una edición refundida del Texto criminal[199], declarándola *"única oficial y legal para todos los efectos de justicia"*[200], que vino a reconfirmar la plena aceptación de la pena máxima, al reproducir literalmente los preceptos del texto de 1848 que regulaban la ejecución de las sentencias mortales[201]; y, además, a agravar la penalidad de ciertos delitos

196 GARCÍA DE PASO GARCÍA, I., «El 1848 español. ¿Una excepción europea?», *Ayer*, nº 106, 2017, p. 205, aventura "que en 1848 la auténtica excepcionalidad de España respecto al resto del continente fue el adelantamiento de tres meses de la fase de contrarrevolución, que en el caso español consiguió mantener a raya las insurrecciones progresistas y republicanas mucho antes de que lo lograran los otros gobiernos europeos".

197 Si bien las sacudidas revolucionarias vividas en Europa en 1848 apenas se notaron en España, en la práctica sí que fueron la causa y/o la excusa para que el general Narváez reforzara su política autoritaria y emprendiera una dura represión contra los liberales progresistas y republicanos que habían participado en las distintas tentativas revolucionarias que se registraron; véase, FONTANA, «La época del liberalismo», pp. 245-250.

198 DU BOYS, A., *Historia del Derecho Penal en España*, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1872, p. 556, tras comentar las carencias más significativas que pesaban sobre el Código penal de 1848, resume su proceso de reforma explicando que "conociéndose sin duda alguna por las Córtes estos defectos é inconvenientes de que adolecía el nuevo Código, se previno en la ley de 19 de Marzo de 1848, en que se mandó su publicacion, que el gobierno propusiera á las Córtes dentro de tres años ó antes, si lo estimaba conveniente, las mejoras ó reformas que debían hacerse en él, acompañando las observaciones que anualmente por lo menos deberian dirigirle los tribunales, y se facultó asimismo al gobierno para hacer por sí cualquiera reforma, si fuera urgente, dando cuenta á las Córtes tan pronto como fuese posible. En virtud de estas disposiciones, el gobierno dictó varias aclaraciones, adiciones y reformas sobre el Código y sobre la ley provisional para su aplicacion por decretos de 1º de Julio, de 21 y 22 de Setiembre y 30 de Octubre de 1848; de 30 de Mayo, 2 y 5 de Julio y 28 de Noviembre de 1849, y de 7 y 8 de Junio de 1850, y por último, por decreto de 30 de Junio del mismo año publicó una nueva edicion del Código en que quedaron intercaladas y refundidas todas las alteraciones efectuadas por los decretos anteriores".

199 LASSO, *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, p. 318, sugiere que esta reforma penal de 1850 "Debió ser obra muy personal del Ministro".

200 *Cfr. Código Penal de España*, *edición oficial reformada*, Imprenta Nacional, Madrid, 1850.

201 PUYOL «Dignidad humana y pena de muerte. El proceso de humanización de la pena capital en la legislación española del siglo XIX», p. 22, señala que la reforma del Código penal de 1850 "introdujo algunos pequeños cambios en las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (artículos 8 al 19). Pero no varió el articulado correspondiente a la forma de ejecución (artículos 89 a 93)".

contra la seguridad del Estado y el orden público[202], que en teoría posibilitaba el incremento de las penas de muerte[203].

Para concluir este extremo, procede recordar que la edición reformada de 1850 estuvo en vigor hasta la aprobación del Código penal de 1870[204]; por lo que, por una parte, constituyó la cobertura legal que durante casi dos décadas reguló el conjunto de delitos comunes castigados con la pena capital; y, por otra que, según los datos estadísticos disponibles, dicho texto legal, siguiendo la estela dejada por la ley penal de 1848, en la práctica continuó contribuyendo a rebajar el número total de las condenas de muerte ejecutadas en España[205].

3.3. LA OPINIÓN DE LA DOCTRINA CIENTÍFICA

Una vez analizadas las tentativas abolicionistas que se registraron durante el proceso de elaboración de nuestro segundo Código criminal, como complemento vamos a aproximarnos a la opinión doctrinal que, sobre la procedencia de las eje-

202 ANTÓN, *Derecho…*, cit., p. 76, por su parte, opina que con esta modificación "se declararon siempre punibles la proposición y la conspiración, se reprimieron más severamente algunos delitos, principalmente los de atentado, desacato y desórdenes públicos. Responde a una variación de matiz dentro de una misma política (tanto el Código de 1848 como la reforma de 1850 se dieron siendo jefe de Gobierno Narváez) para apretar los resortes del poder después de las agitaciones revolucionarias de 1848".

203 RUÍZ FUNES, «Progresión histórica de la pena de muerte en España», p. 82, refiere que esta edición reformada "contiene iguales preceptos que el Código de 1848, del que sólo es una modificación parcial, con la transformación, en el sentido de hacerlas más duras, de las disposiciones del artículo 168, relativo a la rebelión. En él se castiga con la pena de muerte a los que, induciendo o determinando a los rebeldes, hubieran promovido o sostuvieren la rebelión, y a los caudillos principales de ella. Los párrafos primero y segundo del artículo 168 del Código de 1848 han pasado a ser los párrafos primero y segundo del artículo 169 del Código de 1850, y en ellos se agravan las penas establecidas por el Código anterior, castigando con cadena perpetua a muerte a los que tuvieren en la rebelión un mando subalterno. Según el artículo 170, pueden imponerse a los meros ejecutores las penas de cadena temporal a muerte".

204 "Cerca de veinte años habian trascurrido desde la publicacion por vez primera del Código penal […] para presentar la nueva reforma de la obra, cuando estalló la revolucion de Setiembre de 1868, que habiendo proclamado la libertad de cultos y el derecho de reunion, estendido los derechos individuales, declarado sujeta la imprenta al derecho comun, y verificado otras innovaciones trascendentales […] hizo necesaria la reforma del Código penal para acomodarlo á tan profundas innovaciones. En su consecuencia, presentó el gobierno á las Córtes una nueva reforma del Código anterior, con las alteraciones requeridas por las circunstancias, y los Cuerpos Colegisladores le autorizaron por ley promulgada en 18 de Junio de 1870 para plantearla como ley provisional"; véase, DU BOYS, *Historia…*, cit., p. 557.

205 ORTEGO GIL, P., «Las cifras de la pena de muerte en España durante el siglo XIX: una aproximación estadística», en Miguel Pino Abad (coord.), *Burocracia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José a María García Marín*, Dykinson, Madrid, 2015, p. 576, a la vista de las distintas series estadísticas que se conservan, concluye que "puede afirmarse que sí existió una reducción significativa a partir de 1848", añadiendo que "A partir de ese año y con alguna excepción, los datos anotan, para el conjunto de España, una reducción, situándose las decretadas por los tribunales por debajo de las cincuenta".

cuciones capitales, formaron los tratadistas más autorizados que se ocuparon en su momento de comentar el Código penal de 1848 y su edición reformada de 1850.

Comenzando con los comentaristas de la ley penal de 1848 y, por su relevancia, con Pacheco por ser uno de los penalistas más comprometidos con este texto legal[206], hemos de señalar que, para este influyente autor, la pena de muerte era una sanción *"en sí lejítima, y en ciertos casos indispensable"* para combatir los crímenes más graves; pero que, al tratarse de un fallo de carácter *"irreparable"*, era *"necesario limitarla al menor número de casos posible"*[207]. Por su parte, Castro y Orozco y Ortiz de Zúñiga, tras sentenciar que teorizar sobre la licitud de la máxima pena era una *"cuestion agotada"*, remarcan que, en comparación con otros códigos europeos, el de 1848 se distinguía por su *"filosofía práctica"*[208]. Asimismo, Aurioles Montero, comenta en su obra que para castigar determinados delitos crueles *"la muerte es la única pena que ofrece una expiación suficiente"* y la única que puede *"asegurar el orden público"*; añadiendo que las corrientes humanitarias lo más que han logrado es que esta imprescindible pena *"no se prodigue"*[209]. En un tono similar, Gómez de la Serna y Montalbán, admiten estar *"convencidos de la necesidad de la pena de muerte"*, y aunque aprueban que el Código la ha *"limitado á pocos delitos"*, expresamente critican *"que aun se haya conservado en*

206 ANTÓN, «El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco», p. 473, subraya que el Código penal de 1848 va unido a Pacheco "por haber preparado el ambiente doctrinal y, sobre todo, por haber comentado con éxito el Código, contribuyendo también a la redacción".

207 "Déjense á un lado las exajeraciones, enfréntese, como es forzoso hacerlo en estas materias á la imajinacion, considérense los instintos de la humanidad, pésese la enormidad de ciertos crímenes; y la conciencia del jénero humano coincidirá en esta consecuencia dolorosa: que la pena de muerte es en sí lejítima, y en ciertos casos indispensable. Ninguna otra es expiacion suficiente: ninguna otra satisface las vivísimas alarmas, los nefandos horrores, con que conturba algun crimen la sociedad entera. El gran peligro que esta pena tiene, y que somos los primeros á confesar, consiste en lo irreparable de su fallo, cuando ha llegado á ponerse por obra. Por eso mismo es tan necesario limitarla al menor número de casos posible"; *vid*., PACHECO, *El Código Penal…*, cit., t. I, p. 330.

208 "¿A qué hablar de moralidad ó inmoralidad de la conveniencia ó de la inconveniencia de la pena de muerte, cuestion agotada y discutida hasta la saciedad por casi todos lo modernos criminalistas? En lugar de teorías y generalizaciones científicas, véase aquí para poder comprender de bulto y de una sola ojeada la filosofía práctica del presente código, comparado con los restantes de Europa, el cuadro aproximado de las especies y subespecies principales de delitos en que determina genérica ó nominalmente la imposición de la pena capital"; *vid*., CASTRO Y OROZCO, J. DE, y ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Código penal explicado, para la común inteligencia y fácil aplicación de sus disposiciones*, Imprenta y librería de don Manuel Sanz, Granada, 1848, pp. 144-145.

209 "[…] para ciertos crímenes atroces, la muerte es la única pena que ofrece una expiación suficiente, la única que puede calmar la alarma y disipar los justos temores de la sociedad, la única, en fin, que alcanza á asegurar el órden público. La conciencia humana la exige en ciertos casos como un remedio triste, pero necesario, y por eso todos los esfuerzos de la filosofía humanitaria se han estrellado contra esa necesidad imprescindible; por eso solo han podido conseguir que se modifique la pena en su aplicación práctica, que no se prodigue ya como antes se prodigaba"; *vid*., AURIOLES, *Instituciones…*, cit., pp. 83-84.

los políticos"; y, finalmente, entre sus ventajas la destacan por *"ser la mas ejemplar de todas"*, así como proporcional en relación con el *"delito que se castiga"*, si bien reconocen que se trata de una pena *"irreparable y desigual"*[210].

Igualmente, los tratadistas que comentaron la reforma penal de 1850 expresaron su opinión en los mismos términos generales de aprobación expuestos. Así, para Aramburu, la pena capital *"es necesaria en casos estremos, para el mantenimiento y sosiego de la sociedad"*, pero *"limitándola á pocos y señalados casos"*[211]. Parecido criterio también es compartido por, Vizmanos y Álvarez Martínez, cuando afirman que dicha pena *"es indispensable para contener las acciones atroces"*; aunque, a su entender, *"debe aplicarse muy raras veces"*[212]. Cerramos esta selección doctrinal con el parecer formulado por Vicente y Caravantes, quien, sin apartarse de la anterior línea argumental, abiertamente reitera *"la necesidad de que se aplique"*; pero, al ser la pena de muerte *"un medio de justicia extremo"*, insiste en que solo debe recurriese a ella *"en casos de verdadera necesidad"*; y, por último, después de hacer un breve repaso doctrinal sobre los pros y contras de su mantenimiento, acaba su exposición manifestando que el Código había tratado *"de reducir su aplicación a solo delitos*

210 "Escritores muy célebres han querido proscribir la pena de muerte […] adoptaríamos esta opinión si pudiéramos abandonarnos al impulso de nuestros corazones; pero una conviccion profunda nos la hace creer indispensable aun, en el estado actual de la civilización no bien desarrollada de los pueblos […] Pero si bien estamos convencidos de la necesidad de la pena de muerte, no podemos menos de alabar que en el código se haya limitado á pocos delitos lamentamos de que aun se haya conservado en los políticos […] Ademas de la humanidad y de los sanos principios del derecho penal que nos hacen desear la economia de la pena de muerte, nos fortalece en esta opinion su cualidad mas ventajosa, que es la de ser la mas ejemplar de todas, esto es, la que produce mas impresión, porque tanto mas viva es esta, cuanto menos frecuente la repeticion de su espectáculo. A la ejemplaridad reúne la pena de muerte las ventajosas circunstancias de destruir el poder de dañar, y la de ser en muchas ocasiones análoga al delito que se castiga; mas por otra parte es irreparable y desigual"; *vid*., GÓMEZ DE LA SERNA, P. y MONTALBAN, J. M., *Elementos del derecho penal de España*, *arreglados al nuevo Código*, Librería de Sánchez, Madrid, 1849, p. 97-98.

211 "Hubo sin embargo que conservar la de muerte, cuyo nombre ciertamente horroriza, pero que una triste experiencia ha hecho ver es necesaria en casos estremos, para el mantenimiento y sosiego de la sociedad, mientras no la reemplace otra tan eficaz y tranquilizadora, lo que hasta el dia, á pesar de laudables esfuerzos y ligeros ensayos, no ha sido posible conseguirse. Lo único que pudo hacer el Código fue emplearla con parsimonia, sin tormentos, sin crueldad, limitándola á pocos y señalados casos"; *vid.*, ARAMBURU ARREGUI, J. D., *Instituciones de Derecho penal español arregladas al código reformado de 30 de junio de 1850*, Imp. y lit. de D. Benito González, Oviedo, 1860, p. 68.

212 "[…] negar á la sociedad el derecho de imponer esta pena fuera desconocer el derecho de castigar, o limitarlo sin fundamento. Pero despues de admitido el derecho, nosotros no podemos menos de abogar por su muy parco uso; no podemos menos de reconocer que aun también ese derecho, lejos de ser absoluto é incondicional, solo puede existir como el último recurso de salvacion social […] si bien la pena de muerte es indispensable para contener las acciones atroces, creemos tambien que debe aplicarse muy raras veces"; *vid*., VIZMANOS, T. M. DE y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, C., *Comentarios al Código Penal*, Imprenta de D. José María Alonso, t. I, 2ª ed., Madrid, 1853, pp. 223-225.

muy graves, siendo no obstante lamentable que la haya conservado en algunos delitos políticos"[213].

Como hemos podido comprobar, la opinión doctrinal mayoritariamente se decantó a favor de conservar en el Código la pena capital, al considerarla la única solución penológica válida para combatir con eficacia la criminalidad, si bien reservando su aplicación a los delitos más graves. Tan solo una minoría, en concordancia con las tentativas habidas en el ámbito parlamentario, defendió la necesidad de su supresión parcial para los llamados delitos políticos. De todo lo cual, se puede colegir que en líneas generales la voluntad del legislador español en esta etapa pasó por mantener la vigencia de la máxima pena, pero moderando su aplicación; lo que, en última instancia, representó un ligero avance en el proceso de humanización de la pena de muerte[214].

213 "Por nuestra parte, reconociendo la necesidad de que se aplique, aun en el estado actual de civilizacion nuestra […] No hay duda […] que […] es un medio de justicia extremo, peligroso, de que no debe usarse sino con la mayor reserva y solamente en casos de verdadera necesidad […] En nuestro Código penal se ha tratado de reducir su aplicación a solo delitos muy graves, siendo no obstante lamentable que la haya conservado en algunos delitos políticos"; *vid.*, VICENTE Y CARAVANTES, J. DE, *Codigo Penal reformado; comentado novísimamente, precedido de una brevísima reseña histórica del Derecho Penal de España*, Librerías de Ángel Calleja, Madrid y Santiago, 1851, pp. 142-45.

214 *Cfr.*, PUYOL «Dignidad humana y pena de muerte. El proceso de humanización de la pena capital en la legislación española del siglo XIX», pp. 17-22.

4.
Etapa final entre dos revoluciones (1854-1868)

En el verano de 1854 un movimiento revolucionario, conocido con el nombre de la *Vicalvarada*, pone término a los últimos diez años de gobierno conservador[215]. Este proceso insurrecto, iniciado con el pronunciamiento liberal del general moderado, Leopoldo O'Donnell, desemboca en una generalizada agitación popular que, finalmente, es sofocada mediante la formación de una coalición gubernativa presidida por el general Espartero[216], que seguidamente daría paso a dos años de mandato progresista[217]. A pesar de la inestabilidad que caracterizó a este

215 La revolución de 1854 ha pasado a la historia bajo el nombre de la *Vicalvarada*, por librarse el enfrentamiento de las tropas sublevadas y las leales al Gobierno en los campos de la localidad madrileña de Vicálvaro; *vid*., COMELLAS, *Historia*…, cit., pp. 193-194.

216 Para PAREDES ALONSO, J., «Los bienios progresista y moderado (1854-1858)», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, p. 210, la revolución de 1854 "puede explicarse como un movimiento en dos tiempos: la Vicalvarada de O'Donnell (28 de junio de 1854), que concluye con la publicación del Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854), y las jornadas callejeras de Madrid, que comienzan el 17 de julio y culminan con el triunfo de Espartero".

217 BAHAMONDE y MARTÍNEZ, *Historia*…, cit., p. 315, comentan que "La historia del Bienio es la del difícil equilibrio entre las presiones de moderados vicalvaristas, progresistas más atemperados y Corona, asociados al discurso del unionismo para apuntalar el régimen sólo reformándolo, y la oposición de los diferentes discursos demócratas en un marco de crisis económica y conflictividad social".

Bienio, los progresistas retoman la tarea de profundización liberal[218], que reflejan en una nueva Constitución, que no pasó de proyecto[219], y en una profusa actividad legislativa[220].

No obstante, pasados dos años desde su alzamiento, O'Donnell, tras los motines que se sucedieron en algunas localidades en julio de 1856, por encargo de la Reina forma un nuevo Gobierno, sustituyendo a Espartero, que pone término a la experiencia progresista y dará lugar a la restauración el régimen moderado de 1845[221]. Con este propósito, repone la Constitución de 1845, añadiéndole un Acta Adicional que recogía alguno de los avances de la gestión progresista[222]. Pero en otoño de 1856, ante la oposición de los moderados y el apoyo de la Corona, O'Donnell deja el gobierno y es relevado por el general Narváez, quién inaugura un bienio de claro color conservador en donde, con la derogación del Acta Adicional y supresión de la obra política del Bienio progresista, queda por completo recuperada la legalidad constitucional de 1845[223].

Agotada esta última experiencia moderada, entre 1858 y 1863 se abre una larga fase de estabilidad política, favorecida por una buena coyuntura económica, en la que el gobierno es asumido por O'Donnell y su grupo de la Unión Liberal[224]. Sin embargo, la vocación de partido único de los unionistas imposibilitará la alternancia en el poder, fomentando con ello la radicalización de

218 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, *La España…*, cit., pp. 407-408, destaca que "el régimen del Bienio trató de restaurar de forma interina el régimen progresista instaurado en la segunda mitad de los treinta, en los años del ministro Calatrava, sin posibilidad momentánea al menos, de hacer permanente el cambio proyectado, a consecuencia básicamente de la conservación y aumento de poderes de la Corona, que mostró y practicó sus simpatías y valoraciones moderadas".

219 SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo…*, cit., p. 306, explica que la Constitución no promulgada de 1856, fue el documento que mejor reprodujo el ideario progresista, al reunir en él todos sus dogmas: "la soberanía nacional, la prensa sujeta al juicio de jurados, la milicia, los alcaldes electivos, el Senado de elección popular, las limitaciones de la Corona, la autonomía y sustantividad de las Cortes y la tolerancia religiosa hallaron su fórmula en esta Constitución".

220 RUEDA, «El reinado de Isabel II. La España Liberal», p. 116, afirma que "el avance del liberalismo se verá reflejado en las casi doscientas leyes del bienio".

221 Según BAHAMONDE y MARTÍNEZ, op. cit., pp. 333-334, esta maniobra "Significaba el cambio de rumbo por parte de la Corona y de un sector de las elites políticas para reconducir los pasos de un liberalismo de corte progresista que empezaba a verse superado por nuevas demandas sociales y políticas […] Así, O'Donnell, que en 1854 terminó con el régimen moderado, en 1856 también daba fin a un bienio de dominio progresista".

222 ARTOLA, *La burguesía…*, cit., p. 213.

223 FONTANA, «La época del liberalismo», pp. 287-289.

224 A principios de la década de 1850, el moderantismo sufrió una profunda crisis que derivó en la creación de una nueva formación política centrista, la Unión Liberal, en la que acabaron integrándose el grupo de los moderados "puritanos" y la facción de los progresistas "resellados", agrupándose todos ellos en torno a la figura del general O'Donnell; véase, CÁNOVAS, «Los partidos políticos», pp. 447-485.

la derecha moderada y la izquierda progresista, y el subsiguiente fracaso de su fórmula centrista[225].

Desde 1863 a 1868, moderados y unionistas se suceden en el gobierno, al tiempo que progresistas y demócratas se retraen de la vida pública y optan por la senda revolucionaria, de conformidad con los pactos que en 1866 habían sellado en la ciudad belga de Ostende[226]. El agravamiento de la crisis económica, especialmente sufrida por las capas más populares del país[227], junto al fallecimiento primero de O'Donnell y después de Narváez; y todo ello, unido a la dura represión desplegada por el gobierno, acelerarían la revolución de septiembre de 1868, también llamada *septembrina o Gloriosa*, que daría lugar al fin de la monarquía isabelina[228].

Así, pues, la última etapa del reinado de Isabel II se desenvuelve entre las revoluciones de 1854 y 1868, y en su agitado transcurso, como veremos, el movimiento abolicionista avanzó con firmeza mediante la formulación de distintas proposiciones tendentes a abolir o, en su caso, restringir la aplicación de la pena de muerte, como fueron las presentadas en las Cortes del Bienio Progresista (1854-1856) y en las legislaturas de 1858-1860 y de 1867. Si bien dichas iniciativas legislativas ya han sido citadas en anteriores publicaciones, en ninguna de ellas se ha profundizado lo suficiente en su contenido[229]; por ello, seguidamente vamos a abordar en detalle su estudio, a fin de conocer su significación y alcance dentro del proceso abolicionista español.

---

225 SECO, *Historia del conservadurismo…*, cit., pp. 174-176.

226 En agosto de 1866, progresistas y demócratas suscriben el llamado Pacto de Ostende, al que posteriormente se adhieren los unionistas, con el decidido propósito de aunar fuerzas para lograr el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. A mayor abundamiento, COMELLAS, *Historia…*, cit., p. 224, agrega que este pacto constituyó "una alianza formidable: los progresistas aportaban el apoyo masivo, los demócratas las ideas y los unionistas la fuerza militar".

227 TUÑÓN DE LARA, *La España* , cit., pp. 257-260, destaca que los efectos de la crisis económica de 1866 "aumentaron el número de descontentos políticos entre las clases acomodadas y radicalizaron probablemente núcleos populares urbanos, aumentando la tensión ya tradicional de los trabajadores agrícolas en el sur del país".

228 MONTERO DÍAZ, J., «La crisis del moderantismo y la experiencia del sexenio revolucionario», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 242-245.

229 *Cfr.,* CANALEJAS «Sobre la pena de muerte», pp. 17-18**;** CUELLO CALÓN, E., «Contribución al estudio de la historia de la pena de muerte en España», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 10, (fasc./mes I, 1957), p. 38; MARTÍ SORO, J., «La pena de muerte en los códigos penales españoles», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, nº 921, (25 de julio de 1972), p. 3; y PUYOL MONTERO, J. M., *La publicidad en la ejecución de la pena de muerte. Las ejecuciones públicas en España en el siglo XIX*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2021, pp. 136-139.

4.1. LAS TENTATIVAS ABOLICIONISTAS REGISTRADAS EN LAS CORTES DEL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

Ninguna de las formaciones políticas que apoyaron la Revolución de 1854 incluyó en su ideario programático la cuestión de la pena de muerte[230]; y ello, a excepción del partido democrático que, acorde con anteriores pronunciamientos, a través del llamado Circulo de la Unión Patriótica de Madrid, antes de la convocatoria de Cortes dio a conocer un esbozo de su programa, conteniendo entre sus principios políticos la eliminación sin matices de la pena capital[231], en los términos que se reseñan:

> *«El Círculo proclama y pide: las libertades […] La convocación de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal […] la administración de justicia, basada en el Jurado, una para todos y gratuita […] y […] la abolición de la pena de muerte […] El Círculo cree que proclamando estos principios y reclamando estas disposiciones gubernativas es el órgano fiel de todos los pueblos de España, cuyo asentimiento espera»*[232].

Sin embargo, las elecciones a Cortes constituyentes, que fueron convocadas por el Gobierno que surgió tras el triunfo de la revolución[233], dieron la mayoría de la Cámara a unionistas y progresistas[234]. De ahí el signo que marcó los cambios legislativos que a continuación se sucedieron en el decurso del Bienio Progresista.

---

230 ARTOLA, op. cit., t. I, «Los partidos políticos», pp. 256-259.

231 URQUIJO Y GOITIA, J. R., de, *La revolución de 1854 en Madrid*, CESIC, Madrid, 1984, p. 191, comenta que "se trataba del más completo programa democrático-burgués […] Se buscaba la eliminación de todo sistema coercitivo. El respeto a la persona era, con todo, el punto más importante de sus programas: respeto que se manifestaba como libertad total del individuo para pensar, asociarse…; como participación en el sufragio universal; o como respeto a la vida en la supresión de la pena de muerte".

232 GARRIDO, F., *Espartero y la revolución*, Imprenta de Tomás Núñez Amor, 3ª ed., Madrid, 1854, pp. 30-31.

233 "Las elecciones fueron dispuestas para que comenzaran el 4 de octubre y finalizaran el 7 del mismo mes y a través de una Real orden se dispuso este calendario, así como todas las cuestiones técnicas previas y posteriores a la votación en relación con los electores"; véase, DÍAZ SANPEDRO, B., «Derecho e ideología en el Bienio Progresista», *Anuario de la Facultad de Derecho*, vol. 24, 2006, p. 165.

234 FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones…*, cit., p. 246**,** nos recuerda que, después del proceso electoral, las nuevas Cortes constituyentes estaban integradas "por una mayoría de la Unión Liberal, partido conformado por moderados y progresistas. Junto a ellos, había unos 50 progresistas puros o espartistas, un corto número de moderados puros y una pequeña fracción democrática republicana".

4.1.1. El proyecto de ley del diputado Seoane

La Asamblea constituyente, nacida al amparo de los sucesos revolucionarios de 1854, da comienzo a sus sesiones el día 8 de noviembre del mismo año, iniciándose con un breve discurso de apertura leído por la propia reina Isabel II[235]. Y en prueba de la persistencia de las demandas abolicionistas, antes de que finalizase el citado mes de noviembre el tema de la vigencia de la pena capital se vuelve a plantear en el seno del Parlamento español. Ello vino de la mano del diputado progresista José Antonio Seoane[236], quien en fecha 30 de noviembre de 1854 suscribe, a título individual, una proposición legislativa para abolir la pena de muerte en los delitos políticos, con el tenor siguiente:

> «*A LAS CORTES. Las Córtes Constituyentes están llamadas, no solo á sentar sobre bases indestructibles la organización política y social de España, sino á aplicar los principios filosóficos y filantrópicos que tienden á dulcificar las costumbres y hacer una gran familia de todos los españoles. Entre éstos no hay ninguno más importante que el de la abolicion de la pena de muerte para los delitos políticos, pues con la apliacacion de aquella medida generosa desaparecerá para siempre el abismo de sangre que ha solido separar á nuestros partidos políticos, y entrarán todos á sostener sus ideas en el campo de la discusión y de la lucha racional, usando solo de las armas permitidas en los gobiernos constitucionales y representativos. Con esta mira tengo el honor de proponer el siguiente*
>
> *PROYECTO DE LEY.*
>
> *Artículo 1.º Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos.*
>
> *Art. 2.º En los casos en que el Código penal ó la ordenanza militar señale dicha pena, se aplicará la deportación, la relegación ó la reclusión.*
>
> *Art. 3.º No están comprendidos en el art. 1.º los homicidios alevosos, aun cuando hayan sido perpetrados por motivos políticos.*
>
> *Palacio del Congreso 30 de Noviembre de 1854*»[237].

---

235 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 1, de 8 de noviembre de 1854, pp. 1-2.

236 El magistrado y escritor, Juan Antonio Seoane Bayón, marqués de Seoane (1815-1887), fue un destacado miembro de la masonería española que pronto obtuvo acta de diputado dentro de las filas del partido progresista. Durante el Sexenio Revolucionario, en varias ocasiones, fue elegido senador y, más tarde, designado senador vitalicio; llegando a ser nombrado en 1872, I marqués de Seoane, por concesión real de Amadeo I; *vid*., CANO GARCÍA, J. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/60502/juan-antonio-seoane-bayon*

237 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, de 7 de diciembre de 1854, Apéndice 1º al núm. 29, p. 485.

El debate parlamentario de este proyecto de ley tuvo lugar el 13 de diciembre de 1854. En su defensa, hizo uso de la palabra su promotor, el diputado Seoane, alegando previamente que, *"Día feliz será para las Córtes Constituyentes aquel en que puedan hacer á la Nacion y á la humanidad el beneficio de abolir la pena de muerte por delitos políticos"*. A continuación, seguramente influenciado por el grave clima de violencia fratricida que se había vivido, admitió que con su propuesta buscaba crear lazos de concordia[238], pues *"nuestros partidos en sus luchas habían colocado entre sí un abismo de sangre, y es preciso cegarle si queremos que se levante un edificio que haga la prosperidad y ventura de la Patria"*. Seguidamente, tras señalar que el acogimiento de esta propuesta sería de *"Gran dicha […] para el partido progresista […] al ser él quien haya tomado la iniciativa […] de esta gran idea"*, indica que el mantenimiento del castigo último en esta clase de delitos, lejos de ser beneficioso, era *"enteramente inútil, a nadie conviene, á nadie aprovecha […] porque los llamados delitos políticos no son verdaderamente delitos; son unos hechos que se castigan con severidad y con ignominia cuando se sofocan, pero cuyos autores, después que triunfa su partido, se ven orlados con la palma de la heroicidad ó del martirio"*. Haciendo constar, para finalizar, los reiterados ejemplos de *"ilustres víctimas"* que, a pesar de haber sido penadas en su momento con severidad e ignominia, *"en el dia son para nosotros objeto de veneración y respeto"*.

Al no formularse réplica alguna, el proyecto de ley de Seoane fue sometido de inmediato a valoración de la Asamblea constituyente; la cual, dando evidentes muestras de aceptación, acordó *"Por unanimidad"* tomar en consideración la proposición, disponiendo que pasara *"á las secciones para el nombramiento de Comision"*[239].

Aparentemente esta propuesta solo contenía la ya conocida solicitud de supresión de la pena de muerte limitada a los delitos políticos, y su consiguiente sustitución por otras de carácter no letal como, en este caso, eran la deportación, la relegación o la reclusión. Pero en realidad, tal y como venía redactada, esta iniciativa legislativa envolvía un propósito mucho más ambicioso, al pretender expresamente la eliminación de la pena capital, por delitos políticos, tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la militar; y ello, salvo que se tratara de homicidios alevosos, aunque se hubieran cometido por una motivación política. Lo cual, sí entrañaba una novedad valorable y muy entendible, en tanto la justicia penal castrense por entonces aún se regía, esencialmente, por lo previsto en las anacrónicas Reales

238 CANO, op. cit., también reconoce esa misma intencionalidad en Seoane, cuando refiere que, en dicha etapa como diputado, su intervención más destacada en el Congreso "consistió en reclamar la abolición de la pena de muerte para delitos políticos como fórmula de reconciliación entre españoles tras los sucesivos conflictos políticos producidos desde comienzo de siglo".

239 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 33, de 13 de diciembre de 1854, pp. 592-593.

Ordenanzas Militares de Carlos III de 1768; que, por su falta de actualización, podían ser fuente generadora de un importante número de sentencias de muerte[240].

No obstante, esta propuesta claramente abolicionista ni tan siquiera llegó a recibir el dictamen de la Comisión responsable de su examen, ya que quedó desactivada al coincidir su tramitación con la discusión de la base 6ª de la nueva Constitución que contenía un tenor parecido al del proyecto de ley de Seoane[241].

4.1.2. Las presentadas durante la formación del proyecto de Constitución

Entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de coalición presidido por Espartero estaba la de aprobar un Código político, en sustitución de la derogada Constitución de 1845, que se acomodara a las reformas demandadas por los triunfadores de la Revolución de 1854, pero sin obviar el reparto de poder resultante del proceso electoral[242]. Sin embargo, esa labor no iba a resultar sencilla, ya que la composición de las nuevas Cortes constituyentes reunía a distintas y, en algunos temas, muy distantes sensibilidades políticas[243]. Todo lo cual, como comprobaremos,

240 Procede recordar que, las Reales Ordenanzas de 1768, compendiaban toda la legislación penal castrense, aplicable al Ejército, que había sido promulgada desde el siglo XVI. De ahí la dureza de sus preceptos que, por lo demás, estuvieron vigentes hasta la aprobación del Código penal militar de 1884. No obstante, como refiere MUGA, «Antecedentes del Código penal militar de 1884. (Notas para la Historia de la Codificación del Derecho Penal Militar», 1, p. 39, a través de la ley de 15 de septiembre de 1873 y del real decreto de 5 de abril de 1875, se intentó suavizar la penalidad militar "defiriéndola, en varios casos a la legislación general, sustituyendo en otros, la pena de muerte por condena perpetua y entendiéndose, en todos los que la ley penal señalaba la pena de muerte, pena de muerte o cadena perpetua, con arbitrio judicial amplio para aplicarlas conforme a las circunstancias".

241 Noticia fundada de este hecho nos la ofrece SEGOVIA, A. M., *Figuras y figurones. Biografías de los hombres que mas figuran actualmente en España […]*, Imprenta de Fernando Cao, t. II, Madrid, 1878, p. 309, cuando reseña un pasaje de un debate parlamentario acaecido el 3 de marzo de 1870, donde el diputado Eulogio Eraso, en apoyo de su proposición abolicionista, manifiesta que debía "llamar la atención de la Cámara sobre lo que ocurrió en las Constituyentes de 1854. Apénas reunidas estas, el Sr. Seoane presentó una proposición para abolir la pena de muerte en los delitos políticos; y tal era la opinión favorable que había en este punto, que se tomó en consideracion por unanimidad, no habiendo dado dictamen sobre ella la comisión encargada de examinarla por haberse presentado entonces la base 6.ª de la Constitucion, en que se decía no podía imponerse la pena de muerte por los delitos meramente políticos".

242 MERINO MERCHAN, J. F. y MATEOS DE CABO, O. I., «La "Vicalvarada": 140 años después. Aproximación al significado jurídico-constitucional del Bienio Progresista (1854-1856)», *Revista de las Cortes Generales*, nº 32, 1994, p. 155.

243 Al tiempo que se trabaja en la elaboración del proyecto constitucional, "El nuevo régimen experimenta cada vez más dificultades por la oposición creciente, en el gobierno y las Cortes, entre los progresistas de Espartero y los conservadores de O'Donnell, que se enfrentan en el tratamiento del problema de la Iglesia, la extensión de las libertades políticas y la actitud respecto al movimiento

proyectó sus efectos en el tema que tratamos, pues los encargados de la formación del nuevo texto constitucional incluyeron la cuestión de la pena de muerte; lo que, a la postre, dio lugar a que en las Cortes del Bienio se volvieran a confrontar abiertamente los argumentos a favor y en contra de su vigencia.

a) Por la Comisión constitucional

En cumplimiento de la expresada finalidad, el 11 de diciembre de 1854 se procede a elegir una Comisión, compuesta por siete diputados, cinco procedentes del partido progresista y los otros dos del unionista, a la que se encomendó la tarea de redactar las bases fundamentales del proyecto constitucional[244].

Fruto de ese mandato, la Comisión por mayoría aprueba la formación de veintisiete bases, divididas en trece títulos más un último artículo adicional, que son elevadas a consideración de las Cortes el 13 de enero de 1855. En concreto, entre dichas bases, ubicada dentro del título I se hallaba la base sexta, que disponía lo que sigue:

> «*BASES DE LA CONSTITUCIÓN. TITULO I. […] 6.ª No se podrá imponer la pena capital por delitos meramente políticos. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, prévia la correspondiente indemnizacion […]*».

En sintonía con lo dispuesto en 1848 en las Constituciones de Francia y Suiza, esta base incluía en su primera parte el innovador propósito de dotar de protección constitucional al mandato que decretaba la eliminación de la pena de muerte en los crímenes políticos; lo cual, era justificado por la Comisión en su dictamen de la forma siguiente:

> «*[…] Entre estos graves principios ha creido la Comision hallaba su lugar correspondiente el de la abolicon de la pena de muerte por delitos meramente polí-*

---

popular y al partido demócrata, partidario de reformas políticas más radicales"; véase, SOLÉ y AJA, *Constituciones*…, cit., p. 49.

244 "La fracción progresista obtiene cinco de los siete puestos dos viejas guardias del Partido –Vicente Sancho y Martín de los Heros– y tres militantes de la fracción de los «puros»: Cristóbal y Valera, Manuel Lasala y Salustiano de Olózaga. A la fracción unionista pertenecen los otros dos miembros: Modesto Lafuente y Antonio de los Ríos Rosas; ellos pugnarían por la consagración en las bases de las soluciones más conciliadoras y armónicas"; véase, CASANOVA AGUILAR, I., *Aproximación a la Constitución Nonnta de 1856*, Facultad de Derecho Universidad de Murcia, Murcia, 1985, p., 36, n. 45.

ticos, que las Córtes tomaron ya en consideracion, y que está conforme á lo que enseña la experiencia de las revueltas políticas y á los principios de humanidad, que propenden á abolir para toda clase de delitos la pena capital»[245].

Todo ello, explica por qué la tramitación en las Cortes constituyentes del proyecto de ley del diputado Seoane en principio ya carecía de razón de ser. Y esto, a pesar de no ser dos reformas legislativas exactamente iguales; pues, por un lado, si atendemos a su jerarquía normativa, la proposición de Seoane tenía valor de ley y la de la Comisión, por el contrario, rango constitucional; y por otro, si comparamos su contenido, el proyecto de Seoane expresamente pretendía ser de aplicación tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la castrense, a diferencia de la propuesta por la Comisión constitucional que no especificaba su ámbito de vigencia.

Por otra parte, lejos de ser acogida de forma pacífica dicha base abolicionista, una vez leídas en el Congreso las veintisiete bases del proyecto de Constitución, como veremos, fue objeto de diversas enmiendas y opugnaciones que dieron paso a un intenso y enjundioso debate parlamentario.

b) Por la minoría demócrata, instando la plena abolición de la pena de muerte

Un grupo de siete diputados perteneciente a la minoría demócrata del Congreso[246], encabezado por el futuro primer presidente de la I República española, Estanislao Figueras[247], de conformidad con su ideario político, aprovechó el trámite de enmiendas al dictamen de la Comisión para presentar, en fecha 31 de enero de 1855, la ambiciosa propuesta abolicionista que a continuación reproducimos[248]:

---

245 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, de 13 de enero de 1855, Apéndice 2º al núm. 57, pp. 1341-1346.

246 MONSELL y PÉREZ, «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», p. 174, identifican a treinta representantes demócratas de un número total de 349 diputados que obtuvieron escaño en las elecciones a Cortes constituyentes de 1854.

247 El diputado y abogado barcelonés, Estanislao Figueras y Moraga (1819-1882), pronto da comienzo a su carrera política afiliándose en 1840 al partido progresista, su evolución ideológica le llevará a ser uno de los responsables de la posterior creación del partido demócrata; y, más tarde, un significado republicano, lo que le auparía en 1873 a la presidencia de la primera República española; *vid*., PÉREZ SAMPER, M. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/9628/estanislao-figueras-y-moragas*

248 Los firmantes de esta moción fueron Estanislao Figueras, diputado por Tarragona; Eduardo Ruíz Pons, diputado por Coruña; José María Orense, marqués de Albaida, diputado por Palencia; Miguel Ferrer y Garcés, diputado por Lérida; Eugenio García Ruiz, diputado por Palencia; Álvaro Gil Sanz, diputado por Salamanca y Benito Alejo Gaminde, diputado por Segovia; *cfr*., *Estadística del personal…*, cit., pp. 336-337 y 339-340.

> *«Pedimos á las Córtes se sirvan admitir la siguiente enmienda á la base 6.ª, título 1.º del proyecto de bases de la ley fundamental que se discute:*
>
> *Queda abolida la pena de muerte, á la cual se sustituirá la de deportación perpétua á nuestras colonias de Asia»*[249].

La defensa de esta singular enmienda formulada a la base 6.ª de la Constitución es ejercida en el Congreso por el diputado Figueras, en la sesión del día 14 de mayo de 1855. Tras unas primeras palabras de halago hacía la Asamblea, reconociendo que con anterioridad ya había puesto de manifiesto *"los sentimientos generosos que la animan"*, expresa su confianza en que la moción sea estimada porque *"no perjudica á nadie"* y *"es altamente civilizadora y humanitaria"*. Seguidamente, anuncia que su alegato se iba a centrar en las razones más importantes que justifican esta cuestión que califica de *"capitalísima"*. A tal fin, en primer lugar, expone sus recelos sobre el derecho que tiene la sociedad a castigar *"si antes no ha proporcionado á todos los asociados una educación igual bastante á conocer y distinguir el bien del mal; si antes no les ha proporcionado á todos los medios de ganarse la subsistencia, de subvenir á las necesidades de la vida"*. Añadiendo que, si estas carencias básicas no son resueltas, teniendo en cuenta *"que no hay inclinaciones innatas al mal"*, la sociedad cometería una grave injusticia si *"condena á un delincuente á la última pena"*. A pesar de ello, admite la pertinencia del derecho a sancionar porque *"altamente justo es que se castigue al que llevado de sus pasiones perjudica á un tercero"*. No obstante, al no tener esa prerrogativa un valor absoluto, a su entender, su ejercicio debe estar sometido a dos limitaciones esenciales. Por una parte, no deben imponerse sanciones irreparables *"para en caso de que se hubiese equivocado la justicia humana […] fuese necesario enmendar su fallo"*; y, por otra, el castigo debe ser *"reformador, es decir, que pueda corregir al criminal"*. Y dado que ambos límites, en sí mismos, eran incompatibles con la aplicación de la máxima pena, salvo que se pretenda mantener la injusta vigencia de la *"llamada vindicta pública"*, se cuestiona si *"¿habrá nadie que se atreva á sostener la pena de muerte para toda clase de delitos?"*. Asimismo, para reforzar su razonamiento también refuta el carácter de ejemplar que, para combatir la criminalidad, generalmente se venía atribuyendo a la pena capital, alegando que nadie había *"vuelto a la vida honrada por presenciar una ejecución"*; ya que, contrario a lo buscado, *"Esos espectáculos, tan frecuentes por desgracia, endurecen el corazón, le acostumbran á presenciar indiferente esas escenas sangrientas, y extinguen todo sentimiento de compasión y fraternidad"*. Declarándose satisfecho con sólo lograr la erradicación de la publicidad de *"esas bárbaras escenas"*; pues, a su juicio, si con esta

249 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, de 3 de febrero de 1855, Apéndice 5º al núm. 75, p. 1885.

enmienda se consiguiera *"que nadie presenciase esas escenas […] esa pena caería por su propio peso"*.

Dando un giro a su exposición, seguidamente centra su atención en la crítica del mandato previsto en la base 6.ª del proyecto constitucional, ya que *"la abolicion de la pena de muerte solo para los delitos políticos es un privilegio odioso que recae sobre las clases acomodadas"*; y ello porque, en su opinión, al ser evidente que las clases pudientes eran las que con más frecuencia cometían los crímenes llamados políticos, y que los pobres, por el contrario, incurrían habitualmente en los delitos comunes, *"al abolir la pena de muerte para solo los delitos políticos, la deducción lógica que debe hacerse es que la dejamos permanente ó establecida casi exclusivamente para los pobres"*. Volviendo a la cuestión de las limitaciones del derecho a castigar, su disertación prosigue intentando profundizar en el imprescindible carácter reformador de las penas, que, por su propia esencia, niega que tenga la inhumana pena de muerte. De ahí que se debería sustituir por *"la de reclusion perpétua […] porque el criminal, solo, entregado al trabajo y á la reflexión, bajo un sistema penitenciario distinto del que tenemos hoy, que no sirve más que para fomentar el crimen, pudiera adquirir un verdadero arrepentimiento, y su ejemplo servir de enmienda á los demás"*. Continua su alocución apelando a la sensibilidad de la Asamblea, diciendo *"vosotros, Diputados, á quienes conozco y sé lo tolerantes y pensadores que sois, no consentiréis que continúe en vuestros Códigos esta prescripción atroz. Abolidla, y esta Nacion á quien los extranjeros llaman bárbara é incivilizada, se pone de un salto á la cabeza de la civilización"*; recordando en su apoyo, entre otros, los ejemplos exitosos de la Toscana, cuando decidió abolirla, o los obtenidos en los Estados de Alemania.

Figueras, a fuer de ser exhaustivo, tampoco olvido recurrir a argumentos religiosos en defensa del acogimiento de su enmienda; y, a tal efecto, evocando el concluyente *"no matarás"*, contenido en el quinto mandamiento de la ley divina, explica que este precepto *"es explícito y terminante; no excluye á nadie; habla lo mismo al ente colectivo llamado sociedad, que al individual. Así, pues, magistrados, jueces, encargados de administrar justicia, rasgad vuestras togas, romped vuestras plumas antes de poner la firma en una sentencia de muerte"*. Por último, y tras interesar la estimación de la enmienda, concluye su exposición anunciando que, aunque su moción sea rechazada, votará a favor de la base 6.ª del proyecto constitucional, *"porque no quisiera que algún dia pesase sobre mi conciencia la sangre de algun mártir de sus opiniones políticas"*[250].

En nombre de la Comisión dictaminadora, dio la réplica a esta enmienda el experimentado diputado progresista, Martín de los Heros[251], comenzando su inter-

250 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4747-4749. Véase, Apéndice documental 2º.

251 El diputado vasco, Martín de los Heros de las Bárcenas (1784-1859), fue un notable político progresista de formación militar, que llegó a ser titular de la cartera de Gobernación, destacando

vención expresando su malestar por tener que tratar en este trámite parlamentario una cuestión *"de la mas alta trascendencia"* que *"todavía la opinión general no ha resuelto"*. Tras declarar que conocía todos los argumentos esgrimidos a favor de la abolición total de la pena de muerte, incluyendo algún otro no citado, reitera que esta *"novedad tan extraordinaria"* no puede ser resuelta de forma ligera con ocasión de la discusión de *"las bases de una Constitucion"*. Al mismo tiempo, rechaza en tono crítico que se haya intentado introducir en el debate el tema de la sustitución de la pena de muerte por la prisión perpetua, sin tener en consideración que había autores que *"han dicho que valía más la pena de muerte que la condenación á la incomunicación absoluta y separación del resto de los hombres"*, sin olvidar además que *"ha habido reos que se han vuelto locos, que no han querido tomar alimento, y hasta que se han suicidado por no poder soportar la idea de vivir perpetuamente encerrados"*. Si bien manifiesta compartir el mismo ideal abolicionista, matiza su pretensión señalando que, aunque su deseo como *"hombre que quiere la perfeccion de la sociedad es ese, como legislador […] me miraría y me detendría mucho para dar un paso tan extraordinario"*.

A continuación, De los Heros, concentra su discurso en la defensa del tenor dado a la base sexta, afirmando que la Comisión, ante todos los abusos que se habían cometido a la sombra de las creencias políticas, *"ha creído que cumplía con el encargo que como progresista tiene, de dar un gran paso en la formación de las bases constitucionales, estableciendo que la pena de muerte quedase abolida por los delitos meramente políticos"*. Prosiguiendo su réplica, hace un recordatorio de distintos personajes memorables que habían sido cruelmente castigados por sus opiniones políticas, y se opone expresamente a admitir que la base examinada constituya *"un privilegio"*, porque, al tener como aspiración la abolición de la pena capital en todos los delitos, "*nosotros, al abolirla en algunos, hemos comenzado á subir la escalera por donde se debe llegar al término que S. S. desea"*. De los Heros cierra su disertación, primero, explicando que la Comisión había circunscrito la abolición de la pena de muerte solo en los delitos *"absolutamente y exclusivamente políticos"*, porque no se podía negar que, con la mera expresión de delitos políticos, *"se pueden encubrir atrocidades y crímenes espantosos"*; y, por último, solicitando del Congreso la desestimación de la enmienda en cuestión.

En turno de contrarréplica, de nuevo hace uso de la palabra el diputado ponente, Figueras, manifestando que la oposición a la enmienda se fundada, en buena parte,

---

también por fomentar el desarrollo de la ciencia y de la educación. Durante el Bienio Progresista, su acreditada experiencia política, justificó su nombramiento como "miembro de la comisión de Bases de la Constitución". Finalizó su vida política ocupando escaño en la Cámara Alta, como senador vitalicio; *vid*., GARCÍA MUÑOZ, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/11844/martin-de-los-heros-de-las-barcenas*

en una supuesta falta de arraigo de las ideas abolicionistas en la opinión general, argumento que, a su juicio, era insostenible porque *"si en todas las reformas se había de esperar á que estuvieran universalmente aceptadas para plantearse, aun estaríamos como en el siglo de Adan"*, agregando que no se podía vacilar *"en abolir una pena que interesa a la humanidad en general"*, al tratarse de una reforma que representaba *"el más grande paso que podemos dar en la senda de la civilización"*. Asimismo, reprocha que no se le haya dado respuesta a la alegada vulneración de la ley divina, que se reiteraba cada vez que se ejecutaba la máxima pena, silencio que se produce, a su entender, *"porque […] no tiene contestación, pues el precepto es bien explícito"*. Igualmente, entra a rebatir las críticas recibidas respecto a los graves perjuicios que se podían derivar de la aplicación de la reclusión perpetua en sustitución de la pena de muerte, explicando que era factible eliminar la pena capital y acometer, al tiempo, la pertinente reforma penitenciaria *"porque es uno de los adelantos que también exige la época"*. También aprovecha la contrarréplica para censurar que el diputado De los Heros, en su alocución, recuerde a los defensores de la libertad que habían sido víctimas de la vigencia de la pena de muerte, y no hubiera tenido ninguna palabra de pesar para *"los que van al patíbulo por cualquier otro delito"*, a causa de no haber *"recibido de la sociedad educacion y recursos"*. Figueras termina su turno relatando varios ejemplos de conflictos políticos recientes, con resultado cruento, que le conducen a ratificar que *"en toda clase de delitos, los pobres, los desgraciados tienen ménos medios é influencia para templar el rigorismo de los Gobiernos, de los partidos, que los demás"*[252].

Seguidamente, se sucedieron varias intervenciones, entre De los Heros y Figueras, que se pueden tildar de menores, pues se trataba de breves puntualizaciones sobre cuestiones ya discutidas; y ello hasta que, en nombre del Gobierno, toma la palabra, para apoyar la impugnación de la enmienda, el ministro de Gracia y Justicia, el también progresista Joaquín Aguirre[253], quien da inicio a su discurso señalando que desde un plano sentimental compartía la propuesta abolicionista formulada, pero *"como no es solo el sentimiento del corazón, sino la ciencia, la filosofía y la razón, las que han de decidir esta cuestion, hé aquí por qué el Gobierno no puede admitir la enmienda"*. Entrando en el fondo del tema a debate, manifiesta

252 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4750-4751.

253 El político y jurista soriano, Joaquín Aguirre de la Peña (1805-1869), ostentó la cartera de Gracia y Justicia entre el 29 de noviembre de 1854 y el 6 de junio de 1855; calificado de personaje destacado del progresismo hispano, en 1861 ocupó la presidencia de la Real Academia Matritense de Jurisprudencia; y desde aquella tribuna pronunció dos laudables discursos sobre las reformas que demandaba la Justicia: la unificación de Fueros y la defensa por pobre. Asimismo, durante el último año de su vida, también desempeñó el cargo de presidente del Tribunal Supremo; *vid*., LASSO, *El Ministerio de Justicia…*, cit., pp. 102-103.

que, contrario a lo esgrimido por el proponente, a la sociedad sí le asiste el *"derecho a penar"* y no solo en base a la *"venganza ó vindicta pública"*, agregando que la abolición interesada era una cuestión debatida por las *"escuelas de jurisprudencia"* desde antiguo, pero que en la actualidad *"apenas hay escuela que lo proclame en general, y sí únicamente en los delitos meramente políticos"*. Por eso le llama la atención la argumentación empleada por Figueras, porque no solo ha defendido la plena supresión de la pena de muerte, *"sino que ha sostenido también que la sociedad no podía imponer la pena capital sino en el caso de que pudiera proporcionar á todos los medios de subsistencia y educación"*. De ahí que, con cierta ironía, la califique de ser la *"teoría nueva y más avanzada […] que ha habido en el mundo hasta ahora"*, para a continuación desautorizarla, afirmando que dichos argumentos *"no tienen inmediata relación con el derecho de penar, ni pueden considerarse como tal"*. También afea a Figueras que haya utilizado a los pobres para *"excitar los nobles sentimientos de la Asamblea"*, negando la aseveración de que sean los únicos destinatarios de las penas de muerte, pues esa aserción no se puede mantener *"en una sociedad en donde todos somos iguales ante la ley, en donde el pobre y el rico están sujetos á la misma pena cuando cometen un delito común"*. Igualmente, le recrimina que haya recurrido *"también á la religión como medio de sostener su opinión"*, y centrándose en el invocado precepto de *"no matarás"*, refuta la tesis del proponente respecto a este particular, indicando que ese mandato divino va dirigido *"á los individuos, no á la sociedad"*; pues, de no ser así, habría que convenir que la Iglesia había faltado *"en todos los tiempos á su alta misión si no hubiera predicado en todas las sociedades en que ha estado constituida la abolicion de la pena capital, y el Sr. Figueras sabe muy bien que esto no es así"*.

El ministro Aguirre concluye su intervención exponiendo dos objeciones más. La primera relacionada con la afirmación de Figueras, relativa a que la eliminación de la pena de muerte era un paso que habría que dar "*para llegar al último grado de civilización*". Indicando que él y todos sus correligionarios *"de la democracia"* podían preparar dicho paso logrando que *"todas las personas sobre quienes ejerzan influencia no vayan nunca á presenciar el espectáculo de la pena capital"*; pues solo cuando se consiga *"que todos los hombres aborrezcan los delitos que dan lugar á ese espectáculo, sin duda alguna vendrá bien la abolicion de la pena de muerte"*, pero mientras que sigan existiendo *"delitos atroces"* y *"mónstruos extraordinarios […] que no deben vivir en la sociedad […] no puede ni debe abolirse la pena capital"*. Y la segunda, y última objeción de orden técnico, la plantea porque, en su opinión, la interesada abolición no debía tramitarse con ocasión de la aprobación de la Constitución del Estado, habiendo sido más adecuado proponerla como reforma del Código penal, ya que *"allí ha de venir la escala de penas; allí ha de poderse hablar con extensión sobre la abolicion de*

la pena capital para los delitos comunes; allí podrán los Sres. Diputados discutir cuanto les parezca". Por todo los cual, solicitaba a las Cortes que no se tomara en consideración esta enmienda.

Nuevamente hace uso de la réplica el diputado Figueras, negando que hubiera afirmado que el origen del derecho a castigar se hallara en la vindicta pública, pues lejos de ello, dicho derecho nace de *"la obligación que tiene la sociedad de defender los intereses y la vida de todos"*; ya que, si la sociedad solo actuara por venganza, *"su duración sería muy corta, una disolución terrible sería el efecto inmediato de ese mal"*. Tampoco admite que sea nueva la teoría que vincula el derecho de la sociedad a castigar con el deber de enseñar previamente a todos sus miembros a *"discernir el bien del mal"* y a procurar *"que no estén expuestos á la miseria"*, pues esa doctrina es la que vienen compartiendo *"la escuela democrática y la escuela socialista"*. Asimismo, rechaza que hubiera sostenido que solo son *"los pobres los que suben al cadalso por delitos comunes"*, aclarando que lo que él ha defendido es que, sentado que no existen *"disposiciones innatas al mal"*, los crímenes comunes solo pueden nacer *"de la miseria, ó de falta de educación"*, y siendo precisamente los de esa clase los que reciben menos educación y sufren más la miseria; por lógica, son ellos *"los que con más frecuencia delinquen comúnmente"*.

Figueras finaliza la defensa de su moción, recordando que la ley divina *"no establece excepción alguna"*, por lo que la obligación de no matar también es de aplicación a las sociedades; y, por último, incitando a acometer esta reforma, aunque no tuviera un gran asentimiento social, porque si el reconocimiento del conjunto de la sociedad hubiera sido imprescindible *"aun subsistiría el tormento"*.

Tras una rectificación menor planteada por el ministro de Justicia Aguirre, la toma en consideración de esta enmienda seguidamente es sometida a votación nominal de los miembros del Congreso, resultado *"desechada por 128 votos contra 52"*[254]. Con lo cual, aunque esta innovadora iniciativa legislativa contó con más partidarios de los previstos[255], su número resultó insuficiente para llevar a la Constitución la abolición plena de la pena de muerte[256].

254 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4752-4755.

255 Si esta ambiciosa enmienda abolicionista obtuvo 52 votos a favor, y el número de diputados demócratas ascendía a 30, parece evidente que fue apoyada por bastantes diputados afines a otras formaciones políticas.

256 No hemos encontrado voces cualificadas que entraran a valorar esta importante enmienda y su resultado, tan solo LLANTA, S., *Los diputados pintados por sus hechos […]*, R. Labajos y compañía, editores, t. I, Madrid, 1869, p. 180, nos informa que "La sostuvo el Sr. Figueras y no obstante su elocuente razonamiento, fue desechada por razones de conveniencia".

c) Por un grupo de diputados liderado por el progresista Moncasi

La otra enmienda oficial que recibió la base sexta del proyecto constitucional fue presentada el 24 de enero de 1855 por un grupo compuesto por siete diputados de filiación demócrata y progresista[257], que tenía un objetivo mucho menos exigente, pues, como podemos comprobar, solo aspiraba a eliminar del texto de dicha base el adverbio *"meramente"*:

> «*Pedimos á las Córtes se sirvan adoptar la siguiente enmienda á la base 6.ª del dictamen presentado por la mayoría de la Comisión, reducida á suprimir la palabra "meramente", con lo cual quedará redactada en estos términos:*
>
> *6.ª No se podrá imponer la pena capital por delitos políticos.*
>
> *Palacio de las Córtes 24 de Enero de 1855*»[258].

La defensa de esta enmienda se llevó a cabo el 14 de mayo de 1855, y fue encargada al diputado aragonés Manuel León Moncasi[259], que tenía tras de sí una larga y estrecha vinculación con el partido progresista[260]. Moncasi da comienzo a su disertación poniendo de relieve la importancia de la modificación legislativa propuesta, a pesar de que a primera vista solo se tratara de suprimir un mero adverbio; y ello, porque la experiencia venía demostrando que un uso inadecuado de los adverbios en la construcción de las frases podía *"debilitar los principios que se sientan en las bases"*; añadiendo que esto es lo que, a su juicio, sucede con el vocablo *"meramente"* intercalado en la base 6.ª del proyecto constitucional. De ahí que su mantenimiento *"puede dar lugar á interpretaciones que con más ó ménos fariseísmo tiendan á inutilizar é inutilicen este principio constitucional"*. El indicado peligro interpretativo, pro-

257 Suscribieron esta moción, Manuel León Moncasi, diputado por Huesca; Miguel Ortiz Amor, diputado por Córdoba; Juan Romeo y Torón, diputado por Zaragoza; Fernando Madoz, diputado por Huesca; Carlos M. de la Torre, diputado por Cuenca; José Cristóbal Sorni, diputado por Valencia y José María Orense, marqués de Albaida, diputado por Palencia; *cfr*., *Estadística del personal…*, cit., pp. 346-350.

258 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, de 26 de enero de 1855, Apéndice 9º al núm. 68, p. 1667.

259 El diputado oscense Manuel León Moncasi y Castel (1827-1882) fue un jurista y político que estuvo muy ligado al partido progresista hasta 1868, año en el que fue designado gobernador civil de Barcelona; siendo nombrado, posteriormente, ministro togado del Consejo Supremo de Guerra. Asimismo, tras la restauración borbónica, desempeñó el cargo de Subsecretario de Gracia y Justicia, así como el de senador y diputado en distintas legislaturas hasta que acaeció su fallecimiento en 1882; *vid*., *Portal de Archivos Españoles (PARES)*. Disponible en *https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/234267*

260 "Por muchas amarguras, persecuciones y castigos ha pasado el partido progresista desde el año 1820 hasta 1868 y puede decirse que por casi todas […] ha pasado también el Sr. León y Moncasi"; véase, SEGOVIA, A. M., *Figuras y figurones. Biografías de los hombres que mas figuran actualmente […]*, Imprenta de Domingo Molina, 2ª ed., t. V, Madrid, 1881, p. 29.

sigue, en este caso se agrava aún más por las dificultades que ya existen para definir jurídicamente lo que son los llamados delitos políticos.

Seguidamente manifiesta que supone que lo querido por la Comisión, con el empleo de dicho adverbio, era excluir de los beneficios de la abolición constitucional a los delitos comunes. Sin embargo, a su entender, con ese propósito *"los señores que la componen […] han adelantado bastante poco"*; porque, aunque el texto de la base tuviera la redacción ahora propuesta, *"esos delitos comunes hubieran tenido siempre la misma naturaleza, sin que jamás alcanzara é ellos el dulce efecto, el humanitario principio de nuestra base constitucional"*. A mayor abundamiento, tacha el empleo del adverbio cuestionado de *"redundancia gramatical"*; porque, en su opinión, no existe ninguna diferencia de naturaleza científico-jurídica *"entre los delitos políticos y los que lo sean meramente"*. Por ello, insiste que, para evitar *"interpretaciones lastimosas"*, debería prescindirse de dicha locución, *"porque no siempre, por desgracia, tendremos en el país unas personas al frente del Gobierno tan de buena fé como las que hoy dignamente le representan"*. Por último, tras recordar alguno de los ejemplos que han dado lugar al riesgo que con la enmienda se pretende evitar, concluye su intervención reiterando que, con la supresión del mentado adverbio, se busca *"que quede sentado de una manera terminante que no podrá aplicarse la pena de muerte por delitos políticos"*.

De nuevo, en nombre de la Comisión constitucional, toma la palabra para impugnar también esta segunda enmienda el diputado, Martín de los Heros, señalando que a la Comisión no se le había ocurrido otra fórmula más eficaz para reforzar el carácter político de los delitos exentos de la pena de muerte, que la de intercalar en el texto de la base el adverbio *"meramente"*, para evitar con ello que se pueda matar o robar impunemente *"invocando ese principio de que es una opinión política"*. A continuación, termina su breve alocución, indicando que el uso de los adverbios por parte de la Comisión, que tanto critica el preopinante, lo único que prueba *"es el deseo de acertar y no comprometer aquello que tal vez no está á su alcance"*.

El debate se cierra con una última intervención del diputado Moncasi, que emplea su turno para negar que pueda *"quedar impune un delito común, como un robo ó un asesinato cometido en medio y á favor de un alzamiento político"*, recalcando que ese hecho jamás podría calificarse de delito político, *"porque hay una gran distancia entre estos delitos y los comunes cometidos con ocasión política"*; agregando que, de actuar así, inclusive sería de aplicación una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal *"porque el autor se aprovecha en él del rio revuelto como decimos vulgarmente"*.

Finalizadas las anteriores intervenciones, la toma en consideración de la enmienda del diputado Moncasi y su grupo fue objeto de votación nominal en las Cortes constituyentes, siendo denegada por un apretado resultado de 96 votos en contra frente a 72 a favor[261].

261 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4755-4757.

4.1.3. La discusión parlamentaria de la base 6.ª del proyecto constitucional

a) Durante la sesión del 14 de mayo de 1855

Una vez desestimadas las dos enmiendas planteadas a la base sexta del proyecto de Constitución, la Asamblea, en la misma sesión del día 14 de mayo de 1855, abre el turno de palabra para que los diputados debatiesen y, en su caso, aprobaran dicha base, tal y como había sido redactada por la Comisión dictaminadora. Con tal fin, en primer lugar, intervino el diputado José Mª Orense[262], quien, dando muestras de su gran implicación con el tema, al haber respaldado con su firma ambas enmiendas, comienza su disertación congratulándose por el avance que las ideas abolicionistas estaban teniendo recientemente en comparación con los resultados de anteriores votaciones, como lo probaban los inesperados 52 votos que había obtenido la moción defendida por el diputado Figueras; por eso reiteraba su felicidad por el progreso habido en esta materia, esperando que pronto llegara *"el momento en que la abolición de la pena de muerte sea votada por unanimidad, como lo ha sido en materias políticas"*, con la proposición de ley del diputado Seoane. A continuación, expresa su pesar por no haberse aceptado la propuesta del diputado Moncasi, *"pues la palabra meramente en materias políticas es cosa que quita mucha fuerza á la concesión"*; y, además, también sus quejas por cierta maniobra irregular de la Mesa, realizada a la hora de fijar las reglas de la votación; que, a su juicio, había malogrado su acogimiento. Asimismo, manifiesta su deseo de aprovechar su turno para refutar alguno de los argumentos esgrimidos por el representante de la Comisión constitucional, el diputado Martín de los Heros, contra la reforma abolicionista instada por Figueras. A este respecto, le critica que haya empleado la excusa *"de que eso se hará con el tiempo"*, porque *"Cuando una cosa es buena siempre es tiempo de hacerla"*. Igualmente, censura la tesis de De los Heros, compartida por el ministro de Justicia, relativa a *"que todas las sociedades han venido haciendo lo mismo"*, ya que eso en sí mismo *"no prueba nada"*, pues tan solo es el pretexto *"que ha usado siempre la tiranía para excusar sus excesos […] la máscara con que quieren encubrirse los Gobiernos para oponerse á las reformas"*; por ello, continúa diciendo, es *"necesario separar completamente de la dicusion actual el argumento de que la sociedad peligra ó de que el*

262 "La Revolución de junio de 1854 […] le sorprendió en Palencia. Se trasladó a Madrid y aceptó la presidencia del Círculo de la Unión, al que se vincularon los elementos más radicales de los progresistas […] En la legislatura de 1854-1856 tuvo una participación muy activa como diputado y no solo en el debate constitucional […] En 1858 publicó el folleto «Lo que hará en el poder el Partido Democrático y…el Partido Progresista», significándose como uno de los líderes de la nueva formación política, el Partido Democrático, de signo ya claramente republicano"; *vid*., MACIÁ, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/7322/jose-maria-orense-mila-de-aragon-y-herrero*

tiempo hará esta reforma"; y en su lugar, abordar sin temor la eliminación de la pena de muerte, como ya se había hecho en la Toscana y en varios Estados de la América del Norte.

Asimismo, Orense, tras recomendar la lectura de Víctor Hugo para comprender que "*la sociedad no ha tenido, ni tiene, ni tendrá derecho nunca á quitar lo que no da, lo que no puede dar*", y recordar que el Gobierno es un mero representante de la sociedad, que no puede ni debe hacer aquello que no harían sus miembros, prosigue su discurso recurriendo al argumento religioso apuntado por Figueras para negar la licitud de la pena de muerte, señalando que si el precepto de *"no matarás"* era de origen divino *"estamos todos obligados, no hay excepción, porque si hubiera querido hacerse alguna excepción, se hubiera puesto*". A renglón seguido, apoyándose en las experiencias políticas vividas con la revolución francesa y la española de 1820, así como en los postulados abolicionistas sostenidos por pensadores ilustres, como el político católico irlandés O'Connell, afirma que *"para abolir la pena de muerte, no hay más obstáculo que la pereza que se nota generalmente para adoptar las reformas"*.

A continuación, siguiendo un orden expositivo un tanto errático, primeramente, niega que la universalidad de la pena de muerte sea *"una prueba a su favor"*, pues jamás ha habido costumbre bárbara y atroz *"que no haya tenido sanción universal*", para de inmediato volver a comentar los riesgos interpretativos que, en la práctica, puede generar el adverbio *"meramente*", que ha pretendido suprimir, sin éxito, la enmienda de Moncasi, porque intercalar en los textos de las reformas *"esas limitaciones más o menos vagas, introducen tal confusión, que á merced de ellas el Gobierno puede hacer lo que tenga por conveniente*"; y, por último, se lamenta de haber dejado escapar la ocasión para, emulando a otras naciones, lograr que *"se hubiera dicho también de España: las Cortes españolas han abolido las pena de muerte*". Sugiriendo que, teniendo en cuenta, *"que ningún hombre en su sano juicio comete un delito*", en su lugar, hubiera sido una solución punitiva adecuada la aplicación de la deportación, porque *"buen castigo sufre aquel que es separado de su familia, de sus amigos, y va á suspirar por esos lazos a tierras lejanas*".

Orense continua su alegato en un tono un poco más realista reconociendo que, aunque no aspiraba a que sus palabras fuesen acogidas, cuando menos deseaba que quedara *"consignado que este lado de la Cámara opina por la abolición completa, total, de la pena de muerte*", pero no como una manifestación de un interés personal, *"sino por los grandes intereses de la humanidad"*. Añadiendo que esta importante cuestión, actualmente está siendo defendida por los grandes pensadores *"que están llamados á gobernar la Europa*". Por último, concluye su intervención indicando que solo se había levantado para apoyar las razones dadas por el diputado Figueras, *"porque no se puede dar ninguna nueva*", haciendo constar que, "*si felicitamos á la*

Comision por la abolicion de la pena de muerte por delitos políticos, de la misma manera queremos que esa abolicion sea completa"[263].

El debate prosiguió con un intenso intercambio de palabras entre el diputado ponente, José Mª Orense, y el diputado, Antonio Aguilar, marqués de la Vega de Armijo, en su condición de secretario de las Cortes, sobre las supuestas irregularidades denunciadas por el primero en relación con la votación de la enmienda del diputado Moncasi. Discusión en la que también participo, en apoyo del secretario, el entonces ministro de la Guerra, el general O'Donnell, el diputado Joaquín Garrido, por alusiones, y el diputado Figueras. Fundamentalmente, esta discusión versó sobre las distintas interpretaciones que, cada parte, daba al Reglamento de la Cámara respecto al sistema de votaciones, que derivó en un crispado cruce de opiniones que felizmente puso término el presidente de la Asamblea, el diputado Facundo Infante, al disponer la suspensión de la discusión *"por ser pasadas las horas del Reglamento"*, y su continuación para la mañana del día siguiente[264].

b) Durante la sesión del 15 de mayo de 1855

De conformidad con lo acordado, la discusión de la base 6.ª del proyecto de Constitución se reanuda en la sesión del día 15 de mayo de 1855. En defensa del tenor propuesto por la Comisión constitucional, inicia el debate el diputado progresista de la facción de los resellados, Antonio del Rivero[265], indicando que el párrafo primero incluido en la base a debatir, relativo a la abolición de la pena de muerte en los delitos meramente políticos, era una de las cuestiones *"más importantes que pueden presentarse en la Constitución de un Estado"*, y advirtiendo que su disertación solo iba a versar sobre este extremo, al no haberse planteado ninguna controversia respecto al segundo

263 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4757-4760.

264 Sirva de testimonio de la realidad de dicho tono acalorado los pasajes del debate que siguen. Por parte del ministro de la Guerra, dirigiéndose al presidente de la Cámara *"estoy en el uso de la palabra y nadie puede interrumpirme […] Me he referido á los bancos en que se sientan los republicanos ó demócratas, porque yo no he comprendido bien todavía cuál es su bandera"*. Por parte de diputado Figueras, "*Debemos valer mucho, cuando un hombre de tanta valia como el Sr. O'Donnell, siempre que encuentra un resquicio por donde entrar, nos da una carga terrible [ ] Todo lo queremos por medio de la discusión, nada por la imposición*"; *cfr*., *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4761-4762.

265 El abogado alicantino, Antonio del Rivero y Cidraque (1818-1878), fue diputado en diecisiete legislaturas, militando primeramente en el partido progresista, pero posteriormente, su evolución ideológica, le llevó a integrarse en las listas de la Unión Liberal y, más tarde, en el partido conservador de Cánovas del Castillo; *vid*., PANIAGUA FUENTES, J. y PIQUERAS, J. A., *Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2005*, Instituto Alonso el Magnánimo, Valencia, 2005, p. 468.

mandato comprendido en la base 6.ª, referente a la supresión de la confiscación de bienes y a la prohibición de la privación de propiedades sin causa legítima. Centrado, pues, en dicho particular manifiesta su satisfacción porque, por fin, se haya dispuesto acometer *"una reforma tan grande, tan importante, tan problemática en sus resultados, como lo es la de la base 6.ª"*. Apuntando como causa de esta novedad, respecto a la inacción de épocas pasadas, *"los martirios cruentos que todos hemos presenciado […] de buenos patricios que creyeron defender la causa santa de la libertad de su Nacion […] y que, vencidos en desigual lucha, vinieron á perecer en los cadalsos"*. Seguidamente, tras narrar distintos ejemplos de estos sanguinarios actos que contemplaba nuestra historia, insiste en que ahí estaba la razón que había *"venido á decidir la opinión de progresistas, conservadores y demócratas y á presentar á los ojos de todos esta reforma como humana, conveniente, civilizadora y altamente política"*.

A continuación, el diputado Del Rivero anuncia que procede a refutar las objeciones formuladas por Figueras, Moncasi y Orense, a los que denomina "*ilustrados Sres. Diputados de la extrema izquierda*". Comenzando con Figueras, y con su afirmación de que la abolición propuesta por la Comisión era *"una especie de privilegio"*, admite que en realidad lo sea, pero en el sentido que él lo entendía no era un concepto reprobable, porque quien comete un delito político está guiado por ciertos principios y valores, que mañana pueden hacer de su actual conducta punible una *"virtud heroica"*. De ahí que esta clase de delitos merezca un tratamiento distinto al que ejecuta *"un delito comun, un delito que por su atrocidad merece la pena de muerte"*. Igualmente, censura la tesis de Figueras que sostiene la inaplicación de la pena de muerte también para los delitos comunes, porque el pueblo no estaba *"bastante ilustrado, ni bastante moralizado para poder tener conciencia de sus propios actos"*; y ello, porque, a su entender, el autor de un delito atroz no necesita ser sabio *"para saber que es mala la acción que se comete"*, agregando que incurriría en una "*ligereza*" quien *"declarase abolida la pena de muerte para estos delitos atrocísimos"*, por lo que creía que Figueras no había meditado suficientemente *"las consecuencias desastrosas"* de su propuesta. También expresa sus críticas a los argumentos, de contenido religioso, expuestos por Figueras y Orense en apoyo de su pretensión abolicionista, negando que la prohibición divina de matar fuera dirigida *"á las sociedades, á las Naciones, á los Gobiernos, que tienen la responsabilidad ante Dios y los hombres de mirar por la hacienda y la vida de los gobernados"*; ya que el precepto en cuestión se refiere sólo a las personas, al ser las únicas que pueden obrar guiadas por malas pasiones o malos instintos; por eso las Naciones cuando imponen la pena capital al delincuente tan solo *"obran para contener esos malos instintos, esas malas pasiones que se desarrollan en los hombres"*. Añadiendo que, incluso, el mismo Moisés se vio en la necesidad de aplicar la pena de muerte al pueblo hebreo, tal y como refiere la propia historia sagrada.

Con idéntico tono discrepante, difiere de Orense en lo referente a que la reforma que él demanda pronto será una realidad; pues, en su opinión, *"nunca llegará el caso de abolirse por completo la pena de muerte, á lo menos respecto de las acciones deliberadas y atrocísimas de los hombres"*. Admitiendo que, en todo caso, lo que podría ocurrir *"con el transcurso de los tiempos, es que adelantando la humanidad en el camino de la civilización y de la virtud, esos delitos sean ménos frecuentes"*; y, por tanto, el número de penas de muerte también sea inferior. Por otra parte, dice comprender que el partido de Figueras y Orense no se contente con la reforma legislativa que se pretende aprobar, pues ambos diputados *"pertenecen á un partido que mira al porvenir, y nosotros constituimos un partido que mira á la actualidad, y que hacemos […] una Consttucion para la edad presente, de consiguiente, nuestra misión es muy diferente de la suya, que es para el porvenir y muy remoto porvenir"*.

Volviendo a la disertación que hizo Orense, y en concreto a los antecedentes históricos que citó como ejemplos a seguir, Del Rivero niega que esas experiencias ajenas nos puedan servir, ni que tampoco sea asumible la afirmación de que los crímenes atroces los cometen los delincuentes comunes que no están en su sano juicio, porque él había visto *"criminales muy terribles que estaban en su sano juicio, que daban razón de sus actos"*. No obstante, reconoce que la locura puede eximir la responsabilidad criminal, pero solo la probada, *"esa que no puede ocultarse á los ojos de nadie, y ménos á los ojos de la ciencia"*, pues hacerla extensiva a otros casos *"es llevar las ideas humanitarias hasta un punto que no cabe en la razón humana, y mucho ménos cabe en la razón de los que están llamados á hacer leyes"*.

Del Rivero, seguidamente, procede a impugnar la propuesta planteada por el diputado Moncasi, señalando que, aunque reconoce que *"los adverbios no tienen otro fin […] que el de limitar los principios que se sientan en las bases ó conceptos que se interponen"*, en el presente caso sería especialmente inapropiado suprimir la locución *"meramente"*, porque, si así se hiciera, a la sombra de los llamados crímenes políticos se perpetrarían *"los delitos más atroces que la imaginación pudiera concebir"* y a sus autores no se les podría aplicar la pena de muerte, porque alegarían la motivación política para, a su amparo, quedar exentos de responsabilidad penal. Todo lo cual, nos conduciría indirectamente a abolir por completo la pena capital, con los efectos perniciosos que ello causaría a nuestros *"ejércitos y armadas estando sobre las armas"*, pues con esta medida *"se destruiría la ordenanza"*.

Finalmente, Antonio del Rivero concluye su intervención rechazando que la reforma que se discute, como dicen los *"señores de la extrema izquierda"*, carezca de la suficiente significación; pues, lejos de ello, *"consignar en la ley fundamental el importante principio de la abolicion de la pena de muerte para los delitos políticos […] evitará que veamos repetidos los excesos, los desastres que hemos visto en las personas más queridas, en nuestros hermanos, en nuestros amigos políticos y hasta en*

nuestros propios enemigos". Por ello, hacía un llamamiento a todos los miembros de la Cámara constituyente para que aprobaran *"esta base importantísima y altamente civilizadora*".

De inmediato toma la palabra el activo diputado Orense, para informar a la Asamblea que tanto él como su formación política, en todo caso, votarán a favor de la base 6.ª, tal y como había sido redactada por la Comisión constitucional; pero no sin antes poner de manifiesto, por un lado, que lo que ellos pretendían *"es que se hiciera más; pero si no podemos esperar que se haga más, nos contentaremos con lo ménos*", y, por otro, dejar constancia de su satisfacción por el inesperado apoyo que había alcanzado su proposición abolicionista, como lo demuestran los 52 votos favorables obtenidos en la votación del día anterior, entre los que se encontraban *"muy dignos abogados que han votado por la abolicion de la pena de muerte*". Tras esto, se produce un cruce de intervenciones, entre los diputados Orense y Del Rivero, reiterando datos históricos, de derecho comparado o doctrinales que en esencia ya habían sido expuestos anteriormente para reforzar sus respectivos planteamientos[266].

Concluido el mencionado intercambio de pareceres, a continuación, instando la desaprobación de la base 6.ª del proyecto de Constitución, interviene en el debate parlamentario el diputado de filiación demócrata, Ruiz Pons[267], aclarando previamente que, aunque pueda resultar extraño que un demócrata impugne una disposición que pretende la abolición de la pena de muerte por delitos meramente políticos, en realidad no lo era, porque él como firmante de la enmienda de Figueras a lo que aspiraba era a que aquella reforma *"se amplíe*". Ruíz Pons, continua su alegato indicando que la cuestión capital a debatir radicaba en determinar *"si la sociedad tiene ó no derecho para imponer la pena de muerte*"; adelantando, como era de esperar, que él se inclinaba por la inexistencia de tal derecho; y ello, porque no siempre las leyes eran suficientemente justas ni respetaban *"la voluntad divina*". De ahí que existieran *"leyes malas"*, como son las que regulaban el supuesto *"derecho de quitar la vida á otro*", que, a su juicio, carecían de fundamento, al no haber ninguna *"ley divina ni humana que á ello autorice*", por eso cuando la sociedad *"mata al que delinque, la sociedad asesina*". Igualmente, niega que la sociedad tuviera derecho a privar de la vida al *"que la ataca*", como se infería de las palabras del diputado Del

266 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4773-4778.

267 El catedrático de historia natural y abogado, Eduardo Ruiz Pons (1819-1865), organizó y dirigió el partido democrático en Aragón; y, tras la revolución de 1854, logró acta de diputado por su Coruña natal en las Cortes del Bienio Progresista. "Ardiente demócrata, sus arriesgadas opiniones […] y sus artículos en el diario político *La Discusión* le ocasionaron una persecución continuada", que explican sus reiteradas salidas forzosas al extranjero; véase, *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana*, voz: *Ruiz Pons (Eduardo)*, Espasa-Calpe, Bilbao/Madrid/Barcelona, 1926, t. LII, pp. 783-784.

Rivero, porque, tal y como sostenían los teóricos moralistas, el derecho de defensa no tenía un carácter ilimitado, *"de suerte que cuando podemos inutilizar al contrario para librarnos del puñal que asesta contra nuestro pecho, no tenemos derecho á matarle"*. Además, a su entender, había otros remedios menos drásticos que la sociedad podía aplicar como es *"encerrarle de modo que no pueda hacerle daño imponiéndole una expiación"*.

A continuación, recurre a los manidos argumentos religiosos para fundamentar su postura, alegando que cuando en la antigüedad se imponía la pena de muerte en nombre de la Divinidad, se hacía por *"la voluntad de Dios, y ahora no tenemos ya revelación directa"*, pero lo que parecía evidente era que, desde que subió al cadalso *"el Ungido de Dios por salvar á los hombres, desde esa época debería haberse abolido el cadalso"*. A mayor abundamiento, también pone en tela de juicio el valor universal del concepto crimen, sosteniendo que *"crimen es la trasgresión de una ley; pero cuando la ley es mala, no hay crimen. Prueba de ello que lo que en un pueblo es crimen en otro se mira como virtud"*, citando seguidamente distintos ejemplos de dicha variabilidad, que le sirven de justificación para preguntar a los diputados que *"se sientan en los bancos de la derecha, cuáles eran los crímenes políticos, y cuales los comunes"*.

Ruíz Pons prosigue su disertación aportando más datos históricos para reforzar los razonamientos expuestos por sus correligionarios, los diputados Figueras y Orense, para rebatir la validez de la máxima pena, en base a que había sido de aplicación general en todos los tiempos. Hecho esto, continúa desarrollando su impugnación negando que la sanción capital tenga *"las cualidades que deben tener las verdaderas penas"*, porque ni es *"moral"*, ni es *"conmensurable"*, ni es *"justa"*; además de poseer otros graves inconvenientes, como la de no ser suficientemente útil para combatir con eficacia la criminalidad, porque *"el hombre que comete un crimen, comete dos ó tres por los comun; pues sabiendo que por el primero han de quitarle la vida […] no le detiene la idea de mayor castigo"*. Por ello, si en lugar de recurrir a esta fatal solución punitiva, el criminal supiera que por cada homicidio que cometiera iba a sufrir "*diez años de encierro […] le arredraría el crimen, y tiraría el puñal asesino apenas consumado el primero*". Al anterior demérito, se suma el más horrible de todos, esto es, el de ser un castigo *"irreparable"*, porque, según explica, en caso de error, *"no hay remuneración posible"*; y de ello, había muchos ejemplos en la historia. También le dedica atención a otra de sus carencias, la de su supuesta ejemplaridad, y como prueba de dicha realidad emplaza a la Cámara a que pregunte a cualquier magistrado *"cuántas causas ha tenido que incoar al dia siguiente de una ejecución capital, sobre delitos parecidos á los que acababan de castigar en el patíbulo"*. Por contra, este errado fin, se torna *"en el hombre probo, pensador, en el hombre que tiene buen corazón"* en *"odio y disgusto al ver el patíbulo"*.

Dando un giro a su narración, tras criticar a los contrarrevolucionarios franceses, Bonald y De Maistre, así como a la figura del *"verdugo"*, a quien denomina *"asesino pagado"*, Ruíz Pons, retoma su análisis sobre la pena de muerte, para ahondar en su ausencia de valor moralizante, señalando, a tal efecto, que dicha pena no moraliza a nadie, ni al ajusticiado *"porque después de muerto no es capaz de moralización"*; ni al verdugo, porque, de tener *"sentimientos de equidad y justicia"*, cuando ejerce su oficio lo hace "*por necesidad*"; ni tampoco a quienes acuden al acto de la ejecución, porque estos solo experimentan *"un sentimiento de horror hacía el patíbulo"*.

Vistas las graves deficiencias penológicas que, a su juicio, invalidaban la persistencia de la pena capital, Ruiz Pons, seguidamente se ocupa de desmontar alguno de los argumentos que en su favor se le reconocían, citando, primeramente, al penalista Pacheco, cuando sostiene *"que el Redentor del mundo admitió esta pena al sufrirla"*. Aserción que rebate con rotundidad, afirmando que *"Jesucristo no admitió la pena de muerte; se sometió á ella"*. Igualmente, critica al grupo de los no abolicionistas, muchos de ellos, según dice, jurisconsultos, que, sin más razonamientos, defienden que la supresión de la máxima pena en los delitos comunes *"no conviene todavía"*, y a aquellos otros que inmotivadamente se oponen, porque en caso de aprobarse la abolición *"tendrían que rebajarse las penas en un grado"*. Asimismo, y hablando de la concurrencia *"de la libertad"* en la acción criminal, como requisito imprescindible de su punibilidad, niega de plano que los criminales actúen en plenitud de sus facultades, como mantiene Del Rivero; ya que, en la mayoría de los casos, el autor de un crimen, que aparentemente *"puede estar en su razón"*, en realidad no es libre de sus actos, porque *"tiene sus órganos enfermos"*; y ello, porque, a su entender, "*es imposible conceder que pueda haber un hombre tan depravado que cometa un crimen, si puede calcular en aquella ocasión las consecuencias"*. Todo lo cual, tras relatar algunos ejemplos de criminales especialmente sanguinarios, le conducen a alertar de la necesidad de asistirse *"de la frenología y de la fisiología"* para conocer con mayor criterio la mente criminal, porque *"si conociésemos individualmente á todos los hombres, podríamos aplicarles las penas con toda justicia"*. Por último, concluye esta parte de su intervención impugnando el argumento religioso que asentaba la legitimidad de la pena capital en el versículo bíblico que dispone *"el que á hierro mata, á hierro muere"*, explicando para ello que esta clase de mandatos divinos siempre usa *"un lenguaje figurado"*, y añadiendo que, tal y como advierten *"hombres eminentes"*, Dios no amparaba *"la pena del Talión"*, por ser *"bárbara y atroz"*.

Ruiz Pons continua su alegato rechazando la supuesta disminución de la criminalidad que se lograba con la imposición de la pena de muerte, fundando su oposición *"en datos estadísticos"*, que afirmaba disponer y que le conducían a sostener que en España "*hemos visto este año más de veintitantas ejecuciones*", mientras que en el resto de los países que cita el número era inferior, señalando que, incluso, en

Toscana, donde la pena capital estaba abolida, *"no por eso se aumentan los crímenes"*. Dicho esto, prosigue su discurso rebatiendo las razones expuestas por Del Rivero para defender que la abolición de la pena de muerte por delitos políticos no era un privilegio; insistiendo en que sí tenía ese carácter, porque la reforma propuesta no era una *"ley general"*, sino que se trataba de *"una ley privada aplicada á ciertas y determinadas clases, sea de hombres, de crímenes ó de lo que se quiera"*, o lo que, en su opinión era igual, de un verdadero privilegio. Razón por la que, además, esa reforma abolicionista, tal y como estaba planteada, era inasumible, ya que la experiencia venía demostrando que los "*Gobiernos opresores"*, con mucha facilidad, convertían a su antojo *"los delitos políticos en delitos comunes"*.

Finalmente, tras recordar distintos episodios que acreditaban la realidad de dichos abusos, por las dificultades que en la práctica presentaba delimitar los delitos comunes de los políticos, Ruiz Pons pone término a su extensa disertación, haciendo un elogio de la Asamblea de Fráncfort por haber procedido a legalizar en Alemania *"la abolición de la pena de muerte"*[268].

Seguidamente, en su condición de miembro de la Comisión constitucional, se levantó el veterano diputado progresista, Vicente Sancho[269], para, tras tachar el discurso de Ruiz Pons de largo y contradictorio, reprobar su insistente propuesta abolicionista, *"porque justamente las Córtes habían ya desechado ayer ese tema"*. De ahí que careciese de sentido ocupar *"dos horas de discusión para decir lo mismo"* que ya habían dicho antes los diputados Figueras y Orense, y, a la postre, la Asamblea había desestimado. Tras estos reproches, se sucedieron varios intentos de intervención por parte de Ruiz Pons, que sistemáticamente fueron impedidos por el presidente de la Cámara, por carecer del carácter de rectificación. No obstante, ante su persistencia el presidente accedió a concederle un breve turno de palabra, que fue aprovechado por Ruiz Pons para, entre otras consideraciones de menor interés, anunciar que iba a votar la base, *"pero no por eso significará que estoy conforme con esa distinción en los delitos políticos, porque no existe […] es completamente imaginaria"*.

A continuación, intervino el ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Aguirre, igualmente con el propósito de replicar al diputado Ruiz Pons; recordándole, en primer lugar, el derecho que asiste al Gobierno a participar en los debates parlamentarios, para en seguida calificar su disertación de poco fundada, pues, en última instancia, lo

268 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4778-4784.

269 El político y antiguo militar valenciano, Vicente Sancho Cobertores (1784-1860), tuvo una dilatada vida política como diputado, en distintas legislaturas, dentro de las filas del partido progresista. Además de embajador en Londres y senador vitalicio, fue titular de las carteras de la Gobernación y de Estado, y Presidente del Consejo de Ministros. "Tras la caída de Espartero, continuó en la brecha política desde su cargo de Senador vitalicio, en representación del progresismo, aunque en posiciones más tibias que antaño"; *vid*., PANIAGUA y PIQUERAS, *Diccionario biográfico*…, cit., p. 510.

que pretendía era suprimir por completo la pena capital, porque, a su entender, *"los criminales al cometer su delito no están en su libre albedrio"*, al obrar impulsados *"por la demencia"*. Pretensión ésta que, según razona, debe ser desestimada de plano al estar solo fundamentada en algunos casos aislados. Aguirre también hace extensiva su crítica al escaso rigor que había tenido Ruiz Pons a la hora de exponer los argumentos doctrinales y teológicos que justificaban su demanda, como eran los basados en los temas de la universalidad, de las sagradas escrituras o de la frenología; pues de ellos no puede *"deducirse nada para probar que no debe existir la pena capital"*; y, mucho menos aún derivarse *"que somos los más bárbaros de todos los pueblos modernos, porque se prodiga la pena capital entre nosotros"*; máxime que, como bien es sabido, *"hay otros países donde está establecida para mayor número de delitos que entre nosotros"*, como sería el caso *"de la Inglaterra […] en cuya legislación está establecida la pena de muerte para muchos más casos que en la nuestra"*. Por todo lo cual, interesaba de las Cortes la aprobación de "*la base tal como la propone la Comision*".

Haciendo uso del turno de rectificación, toma la palabra Ruiz Pons, para puntualizar que no negaba el derecho de los ministros del Gobierno a hablar, pero sí el que se utilizara esa prerrogativa para ejercer presión a las Cortes; y ello, a fin de evitar que se dijera que lo que se ha aprobado *"es una Constitucion ministerial"*. Seguidamente, tras declararse más demócrata que republicano, afirma que su formación tenía mejores principios que el resto de los partidos, como lo demostraba tener *"el programa que no tiene ningún partido político en España"*. Asimismo, niega haber dicho "*que el criminal es siempre loco*", sino que, a la hora de enjuiciarle por el hecho punible, se debería tener en consideración *"las costumbres, el clima y otra multitud de circunstancias"*. Igualmente, reitera su oposición a que la *"universalidad"* sea un argumento convincente para legitimar la pena de muerte, como tampoco lo ha sido para admitir la esclavitud. Y respecto a la cuestión de la frenología, insiste en defenderla, *"porque es indudable el influjo que tiene en nuestras pasiones el desarrollo del encéfalo"*. Por último, para cerrar su intervención señala que, según los *"datos estadísticos […], en Inglaterra […] con una población doble que la nuestra, en todo el año 53 solo se impuso la pena de muerte ocho veces, y en España se impuso lo ménos veinte ó treinta veces"*; por lo que se ratifica en que, en nuestro país, la aplicación de la máxima pena *"se prodiga muchísimo más"*; añadiendo que si no fuera por la actuación de nuestros jueces el número sería mayor, *"porque los fiscales […] casi siempre piden la pena capital, y los jueces tienen que enmendarlo frecuentemente"*. Ante esta aseveración final, el ministro de Justicia, Aguirre, nuevamente vuelve a participar en el debate para precisar que, el diputado Ruiz Pons, parecía ignorar *"que ha habido Audiencia en esta Semana Santa que no ha podido enviar á S. M. causa de pena capital porque no había ninguna pendiente"*[270].

270 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4784-4787.

La discusión de la base sexta de la Constitución continuó con la intervención del diputado y, al tiempo, militar, Ramírez Arcas[271], que lo hizo para solicitar a la Comisión constitucional que aclarara si la eliminación de la pena de muerte "*para los delitos meramente políticos*" era extensiva a los militares; porque, según explica, cuando un militar se rebelaba, al amparo de lo previsto en las vigentes Ordenanzas, podía ser juzgado *"por cometer un delito político"* y también *"por falta de subordinación"*; por eso, necesitaba *"saber terminantemente si los militares que se hallan en ese caso quedaban ó no exceptuados por esta base"*.

De conformidad con lo requerido, en nombre de la Comisión dictaminadora, le da contestación el diputado unionista Modesto Lafuente[272], pero ofreciendo una respuesta bastante ambigua y confusa; porque, por un lado, reconocía, que como la base en cuestión no especificaba si el autor del delito político, pudiera ser de *"la clase militar, la eclesiástica ó cualquier otra"*, podía suceder que un militar cometiera un delito político, actuando no como tal, sino como *"un individuo particular de la sociedad"*; y, en ese caso, su comportamiento si estaría *"comprendido en la base"*; y, por otro lado, admitía que los militares tenían sus propias Ordenanzas, *"y la base no se opone á estas leyes especiales por las cuales se rigen"*.

Sin duda, la patente imprecisión que encerraba la contestación de la Comisión motivó que para disipar cualquier duda al respecto mediara para zanjar la cuestión, el propio ministro de la Guerra, el general O'Donnell, quien, sin rodeos, en nombre del Gobierno de la Corona manifiesta que cualquier militar que se subleve, con independencia de su graduación, *"aunque se valga de una bandera política, será juzgado por la ordenanza y se le aplicará la pena de muerte"*.

Una vez formulada esta rotunda aclaración, que dejaba a los militares fuera de la disposición abolicionista sometida a debate, el diputado Ramírez Arcas cierra el trámite de intervenciones de esta intensa discusión parlamentaria, declarándose plenamente satisfecho con las explicaciones recibidas.

---

271 El brigadier y político malagueño, Antonio Ramírez Arcas (1809-1865), fue un destacado y laureado militar que compatibilizó su vocación castrense con el ejercicio de la acción política, integrándose como diputado independiente dentro del partido progresista. En 1863 fue nombrado gobernador militar de Lérida y en 1864 de Ciudad Rodrigo, localidad en la que murió al año siguiente; *vid.*, CARO CANCELA, D., (Dir.), *Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía 1810-1869*, voz: *Ramírez Arcas, Antonio*, t. II H/Z, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, pp. 377-379.

272 El historiador y escritor costumbrista, Modesto Lafuente y Zamalloa (1806-1866), de joven se inició en la carrera eclesiástica, abandonándola más tarde por la vida laica, primero mediante el desarrollo de una exitosa actividad literaria y después como afamado historiador. A partir de la revolución de 1854, también se involucra activamente en la escena política, obteniendo acta de diputado en las elecciones constituyentes dentro de las filas de la Unión Liberal. La experiencia como diputado unionista la repitió en sucesivas legislaturas hasta su fallecimiento, llegando a ocupar el puesto de vicepresidente del Congreso; *vid.*, PÉREZ GARZÓN, J. S., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/11534/modesto-lafuente-y-zamalloa*

Finalmente, se procedió a leer nuevamente la base 6.ª y, tras rechazarse la petición de algunos diputados para que fuese votada por partes, *"se declaró haber lugar á votar, y al preguntar si se aprobaba […] quedó aprobada dicha base"*[273].

4.1.4. La última iniciativa defendida por el diputado Orense en el marco de la reforma constitucional

Cuando todo parecía indicar que el debate sobre la supresión parcial de la pena de muerte, que amparaba la recién sancionada base 6.ª del proyecto de Constitución, ya había quedado definitivamente concluso, un grupo de siete diputados progresistas y demócratas, liderado por el combativo José Mª Orense[274], hace un nuevo intento para reforzar la vigencia de la disposición abolicionista que se acababa de aprobar. Para ello, en la misma sesión del día 15 de mayo de 1855, con ocasión de debatir la base 7.ª del proyecto constitucional, reguladora de la suspensión de las garantías individuales[275], promueven la discusión de una enmienda presentada el día anterior que rezaba así:

> «*Pedimos á las Córtes que la base 7.ª se redacte en los términos siguientes:*
>
> *En ningún caso, ni respecto de ninguna porción del territorio, se suspenderán las garantías constitucionales que rijan en el mismo, singularmente las contenidas en las bases 4.ª 5.ª y 6.ª de la futura Constitucion.*
>
> *Palacio de las Córtes 14 de Mayo de 1855*»[276].

---

273 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4787-4788.

274 Firman esta enmienda, Joaquín Alonso, diputado por Valencia; Pedro Forgás y Puig, diputado por Gerona; Juan Manuel Pereira, diputado por Pontevedra; José María Orense, marqués de Albaida, diputado por Palencia; Carlos María de la Torre, diputado por Cuenca; José C. Sorní, diputado por Valencia y Eduardo Ruíz Pons, diputado por Coruña; *cfr*., *Estadística del personal…*, cit., pp. 342, 344 y 348-350.

275 *"BASES DE LA CONSTITUCIÓN. TITULO I. […] 7.ª Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión temporal en toda la Monarquía, ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo… (el que declara que ningún español puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio), se determinará por una ley. Promulgada ésta, el territorio á ella sujeto se regirá, durante la suspensión, por la ley de órden publico establecida de antemano. Pero ni en una ni en otra ley se podrá en ningún caso autorizar al Gobierno para extrañar del Reino, ni deportar, ni desterrar fuera de la Península á los españoles […]"*; véase, *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, de 13 de enero de 1855, Apéndice 2º al núm. 57, p. 1344.

276 CASANOVA, *Aproximación…*, cit., p., 39, n. 50, relaciona las distintas instituciones consagradas en las veintisiete bases del proyecto de Constitución. Entre estas, se encuentran las tres garantías constitucionales que son objeto de especial protección en esta enmienda, a saber: "[…] Base 4.ª: Garantías individuales. Base 5.ª: Fuero único. Base 6.ª: Abolición de la pena capital por delitos políticos […]".

La defensa de esta nueva proposición corrió a cargo del diputado Orense, quien inicia su disertación vinculando la futura eficacia de la abolición parcial de la pena de muerte, contenida en la base sexta, con el acogimiento de la enmienda ahora planteada, afirmando que su no estimación suponía *"anular la base 6.ª, ya votada"*. Seguidamente, aclara que lo que se buscaba con esta propuesta era asegurar que las referidas *"garantías que se conceden a los españoles no se puedan suspender en ninguna parte del territorio"*, citando en su apoyo el ejemplo de Inglaterra, donde se rechazan *"los casos excepcionales en que la seguridad de los ingleses se ve en suspenso"*.

Asimismo, admite que la razón de la base 7.ª es comprensible, porque con ella se pretende proteger al Estado de los efectos perniciosos que su pudieran derivar de cualquier acto insurreccional. Pero, al mismo tiempo manifiesta que el Gobierno tenía muchos medios para defenderse de dichos actos sin tener que recurrir a la suspensión de las garantías constituciones de los habitantes de un determinado territorio, ya que la mayor parte de las personas eran pacíficas y *"los verdaderamente criminales, los que toman las armas, esos siempre tienen medios de eludir la ley"*. Además, alerta de los fácil que resultaba abusar de dicha prerrogativa gubernamental, señalando distintos ejemplos que así lo demostraban. Por lo que, en definitiva, rogaba a la Comisión que admitiera la enmienda, *"porque está reducida á decir que la Constitucion regirá en todo el territorio de España sin excepción y que nunca se alterarán las garantías que ésta concede"*; y si, en algún momento, se producía agresión por la fuerza, el Gobierno debía reprimirla *"con la fuerza"*; pero sin suspender los derechos constitucionales de los ciudadanos pacíficos; y, entre ellos, el recién instituido para que no fuese aplicada la pena capital por delitos políticos.

En nombre de la Comisión, le replica el diputado Lafuente a fin de disipar los recelos que albergaba el proponente, al entender que la base, en cuestión, era una de las *"mas liberales que se encuentran en el proyecto"*, agregando que *"en ninguna Constitucion de Europa […] se ha dado una ley tan suave como ésta, y que deje tan poca arbitrariedad al Poder"*. Prueba de ello, prosigue Lafuente, se halla en que su aplicación siempre estaba condicionada a lo que *"se decidiera por una ley"*; por lo que, en todo caso, antes de ser aplicada el Gobierno estaba obligado a *"apelar á las Cortes para que decidan si las circunstancias del país en todo ó en parte de él exigen la suspensión de las garantías constitucionales"*. A mayor abundamiento, señala que para evitar cualquier atisbo de "*arbitrariedad*", la base 7.ª presuponía *"que ha de haber una ley de órden público, y á ella se ha de ajustar el Gobierno para obrar con arreglo á lo que marque la misma"*. Por lo que la ciudadanía pacifica debía de estar tranquila, al no haber margen en la ley ni para el abuso ni para la arbitrariedad del Gobierno. Por eso, la Comisión no podía admitir el acogimiento de la enmienda propuesta.

A continuación, vuelve a hacer uso de la palabra, el diputado Orense, para cuestionar la eficacia de las expresadas medidas para evitar la temida arbitrariedad del

Gobierno; porque, a su juicio, siempre que éste solicite una ley de esa naturaleza *"las Córtes se la darán"*, ya que, en la práctica, *"las Córtes […] fallan las cuestiones como cuestiones de Gobierno y de oposición"*. Por eso, las garantías señaladas por Lafuente, en realidad no eran nada, porque no aseguraban que los ciudadanos pacíficos fuesen a quedar *"libres de toda tropelía en el caso de la autorización"*. En contestación, Lafuente, cierra el debate insistiendo en que la futura ley de orden público deberá regular todo lo conveniente "*para que no se ataque la seguridad de los ciudadanos y se les den todas las garantías compatibles con la seguridad del Estado*". Por último, sometida a votación la enmienda, *"no fué tomada en consideración"*[277].

4.1.5. El mandato abolicionista prevenido en la Constitución no promulgada de 1856

A principios de julio de 1855 terminó el examen y aprobación de las bases constitucionales[278]; y, en el mes de octubre del mismo año, el pleno de las Cortes entró a debatir el proyecto articulado de la ley fundamental sobre las bases sancionadas[279]. Fruto de dicha tarea, en la sesión celebrada el día 8 de noviembre de 1855, es sometida a consideración de la Cámara la prescripción constitucional siguiente:

> *«Art. 11. No se podrá imponer la pena capital por delitos meramente políticos»*[280].

Dicho precepto, que se hallaba inserto dentro de la declaración de derechos contenida en el título I del referido proyecto articulado, tras su lectura, fue aprobado por la Asamblea constituyente sin discusión alguna, al tratarse de una disposición que reproducía literalmente el párrafo primero de la base sexta debatida y sancionada con anterioridad[281].

Asimismo, al alternarse la discusión del proyecto con la tramitación de otras leyes y asuntos, el texto articulado de la Constitución no quedó definitivamente con-

277 *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4788-4791.

278 MERINO y MATEOS, «La "Vicalvarada": 140 años después. Aproximación al significado jurídico-constitucional del Bienio Progresista (1854-1856)», p. 156.

279 FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones…*, cit., p. 247.

280 El texto íntegro de la Constitución de la Monarquía española de 1856, en *Las Constituciones españolas en el siglo XIX*, publicadas por la Redacción de El Boletín Diplomático (Biblioteca de El Boletín Diplomático), Imprenta de F. López Vizcaíno, Madrid, 1869, pp. 68-75: y en especial el art. 11, p. 69.

281 *"Los 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13 y 14 solo se leyeron por estar aprobados ya como bases"*; *cfr.*, *Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes*, núm. 239, de 8 de noviembre de 1855, p. 8022.

cluso hasta el mes de enero de 1856[282]. No obstante, en realidad las labores constituyentes de las Cortes del Bienio no finalizaron hasta el 18 de junio de 1856, pues es en dicha fecha, cuando son sancionadas por la Cámara las bases de siete leyes orgánicas de desarrollo, que formalmente constituían parte integrante de la nueva Constitución[283].

Según refiere la historiografía moderna, esta extensa Carta Magna básicamente reunía todos los dogmas defendidos por el partido progresista, junto al conjunto de derechos y garantías individuales contemplados en la Constitución de 1837, y otros más novedosos como era el de la supresión de la pena de muerte por delitos meramente políticos[284]. Lo cual, otorga a la Constitución de 1856 el privilegio de ser el primer texto constitucional español que proclamó la abrogación, siquiera parcial, de la máxima pena[285].

---

282 TOMÁS VILLARROYA, J., «El proceso constitucional (1843-1868)», en José Mª Jover Zamora, *La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, t. XXXIV de la *Historia de España*, Espasa Calpe, Madrid, 1981, p. 264.

283 CASANOVA, *Aproximación…*, cit., pp., 33-34; y, en especial, la n. 41, resume el *iter* legislativo que trazó la sanción parlamentaria de "las bases de las siete leyes orgánicas dotadas de carácter fundamental".

284 "La Constitución trataba de afianzar los derechos individuales que ya habían sido proclamados por las leyes fundamentales anteriores, con adiciones y garantías que asegurasen su pleno ejercicio y evitasen su violación […] de ahí que […] dispensaba un *tratamiento especial a los delitos políticos*: el artículo 11 introducía en relación a ellos una novedad de sumo interés «No se podrá imponer la pena capital –decía– por delitos meramente políticos»"; *vid*., VILLARROYA, «El proceso constitucional (1843-1868)», pp. 265-266; "[…] en general, el texto sigue las líneas maestras de la Constitución de 1837, ampliando un poco la declaración de derechos […] Entre ellos destaca […] la supresión de la pena de muerte para los delitos políticos (art. 11)"; *vid*., SOLÉ y AJA, *Constituciones…*, cit., pp. 50-51; "La Constitución nonata contiene una declaración de derechos en su título I más amplia que la de los textos de 1837 y de 1845 […] Es de reseñar asimismo la supresión de la pena capital por delitos políticos"; *vid*., FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones…*, cit., pp. 249-250; "[…] la Constitución mantiene, reforzados, los derechos y garantías individuales sustentados en el Texto del 37, sumando a éstas la abolición de la pena capital por delitos políticos […]"; *vid*., MERINO y MATEOS, «La "Vicalvarada": 140 años después. Aproximación al significado jurídico-constitucional del Bienio Progresista (1854-1856)», p. 161; "El texto *nonnato* parte de –y sigue– las líneas básicas de la Constitución de 1837; amplia la declaración de derechos de la misma […] destacando […] la supresión de la pena de muerte por delitos políticos"; *vid*., SÁNCHEZ JIMÉNEZ, *La España…*, cit., pp. 419-420.

285 "En España, la primera mención de la pena de muerte en una ley fundamental acaece en la Constitución, no promulgada, de 1856"; *vid*., BARBERO SANTOS, M., «La pena de muerte en la Constitución», en Gargallo Rodríguez, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, p. 338; "[…] el proyecto constitucional de 1856 no nos ofrece una regulación esencialmente innovadora […] Exceptuada la abolición de la pena de muerte para los delitos meramente políticos –primer triunfo abolicionista en nuestro derecho constitucional"; *vid*., CASANOVA, *Aproximación…*, cit., pp., 97-98; "La primera mención de la pena de muerte en una norma constitucional española la encontramos en las Constitución "non nata" de 1856"; *vid*., PUYOL, *La publicidad…*, cit., p. 136.

Si bien no podemos restar importancia a dicho indudable mérito, tampoco por ello debemos pasar por alto que en las Cortes del Bienio también se planteó una demanda abolicionista que tenía un contenido mucho más ambicioso e innovador; al ser la primera iniciativa legislativa que se presentó en España para lograr que la abolición total de la pena de muerte, para toda clase de delitos, se recogiera en un texto constitucional. Sin duda, la composición política de la Cámara constituyente no ayudó a alcanzar dicho propósito; por lo que, al final la proyectada eliminación de la pena capital se circunscribió exclusivamente a los llamados crímenes políticos, previstos en el Código Penal para los delincuentes civiles; pues, como vimos, el *animus legislatoris*, puesto de manifiesto por el general O'Donnell, pasaba por excluir de este beneficio constitucional a todos los militares, que, en su caso, serían juzgados y castigados conforme a las Ordenanzas castrenses[286].

Pero con independencia del valor que queramos dar a la acordada disposición abolicionista, lo cierto es que ésta jamás llegó a aplicarse; ya que, la falta de entendimiento entre los progresistas de Espartero y los conservadores de O'Donnell agudizó las diferencias entre ambos líderes y el, consiguiente, agravamiento de la crisis política; lo que, sumado a los problemas económicos existentes, desencadenó un aumento de la conflictividad social en diferentes puntos de España, que fue duramente reprimida, al dejar tras de sí, como prueba irrefutable de la vigencia de la pena capital, un fatal saldo de casi doscientos ajusticiados por procedimientos sumarísimos[287]. En su consecuencia, en julio de 1856 cae el Gobierno de Espartero y, en su sustitución, la reina nombra a O'Donnell presidente del Consejo de Ministros; quien de inmediato, entre otras disposiciones, decreta el cierre definitivo de las Cortes constituyentes, impidiendo con ello la sanción real de la Constitución de 1856 y, por ende, su entrada en vigor[288]; ya que, en su lugar, O'Donnell optará por restituir la Constitución de 1845, añadiéndole un Acta Adicional que incorporaba algunos de los artículos de la impromulgada ley fundamental de 1856, provocando

286 SEGOVIA, *Figuras…*, cit., t. II, 1878, pp. 309-310, nos confirma dicha voluntad excluyente, cuando comenta que "el Sr. Ramírez Arcas […] preguntó si se entendían comprendidos en esa base, que después vino á formar el artículo 11 de aquella Constitucion, los militares; y el Sr. O'Donnell, ministro entonces de la Guerra, le contestó que la palabra *meramente* excluía a los militares, pues estos estaban sujetos á la Ordenanza".

287 RUEDA HERNAZ, G., *Isabel II*, Arlanza ediciones, Madrid, 2001, p. 208, nos facilita este escalofriante dato, añadiendo que "Además de los muertos que costó el propio conflicto, los fusilamientos que le siguieron hicieron estremecer a la opinión pública española".

288 Respecto a esta cuestión, FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones…*, cit., p. 247, precisa que "dudas jurídicas y sucesos políticos motivaron que la Constitución no fuese publicada; con ello, un texto trabajosamente elaborado no llegó a entrar en vigor. No obstante, su estudio resulta de extraordinario interés […] por exteriorizar, en algunos planteamientos radicales, un cambio de mentalidad política, y por anticipar ideas que madurarían en la Revolución de 1868".

con tales medidas el fin del Bienio Progresista[289] y el inicio de un nuevo período en el que se alternarán en el Gobierno los moderados de Narváez y los unionistas de O'Donnell, con el paulatino alejamiento de los progresistas de las contiendas electorales y el paso de los demócratas a la clandestinidad[290].

4.2. LAS PROPOSICIONES FORMULADAS EN LAS LEGISLATURAS DE 1858-1860 Y 1866-1867

4.2.1. Legislatura de 1858-1860

a) Contexto político

Transcurridos apenas tres meses desde la consumación de la operación contrarrevolucionaria de 1856, la reina prescinde de O'Donnell, colocando de nuevo en la Jefatura del Gobierno al general Narváez, que de inmediato deroga el Acta Adicional y recupera la plena vigencia del texto constitucional original de 1845[291]. Tras dos años de gobiernos moderados[292], en los que no se registraron iniciativas abolicionistas de interés, a pesar que las revueltas sociales se siguieron reprimiendo duramente mediante fusilamientos masivos[293], en junio de 1858 regresa a la presidencia del Consejo de Ministros, O'Donnell, quien apoyado por la ya consolidada agrupación de la Unión Liberal, integrada por los sectores más tibios de los partidos moderado y progresista, liderará durante casi cinco años el Gabinete más duradero de todo el reinado de Isabel II[294].

En septiembre de 1858 el nuevo Gobierno convoca elecciones para diputados a Cortes, que se celebran el mes siguiente del mismo año. Gracias a las acreditadas habilidades del ministro de la Gobernación, Posada Herrera[295], el resultado de los

289 FONTANA, «La época del liberalismo», pp. 282-289.

290 ARTOLA, *La burguesía…*, cit., pp. 213-219.

291 FONTANA, «La época del liberalismo», p. 287.

292 PAREDES, «Los bienios progresista y moderado (1854-1558)», pp. 214-215.

293 "En el verano de 1857 aumentaron los levantamientos campesinos […] En Utrera hubo una marcha de campesinos […] que intentaron tomar por asalto la casa-cuartel de la Guardia Civil, tanto allí como en Arahal; rechazados, se retiraron a la serranía de Ronda, donde fueron aniquilados. Se calcula en un centenar los campesinos que fueron fusilados por allí, por orden del gobierno de Narváez"; *vid.*, TUÑÓN DE LARA, *La España* , cit., pp. 225.

294 RUEDA, *Isabel…*, cit., p. 211, comenta que dicho Gabinete duró exactamente "cuatro años y ocho meses"; por lo que pasó a ser conocido bajo "la denominación de Gobierno largo".

295 BAHAMONDE y MARTÍNEZ, op. cit., p. 341.

comicios otorga a la Unión Liberal una amplísima mayoría y una representación minoritaria para moderados y progresistas, en tanto que los demócratas y la corriente neocatólica lograron, respectivamente, un único escaño[296].

En concreto, esta legislatura dio principió a sus sesiones el día 1 de diciembre de 1858[297] y, mediante Real Decreto de 27 de enero de 1860, fue declarada formalmente conclusa[298]; y para nuestra investigación merece atención porque en su curso se registró una propuesta legislativa de contenido abolicionista, promovida por la minoría progresista, interesando de nuevo la supresión de la pena de muerte para los crímenes políticos[299].

b) La proposición abolicionista del diputado De la Torre

La propuesta en cuestión fue suscrita el 3 de marzo de 1859 por una representación de la minoría progresista[300], encabezada por el diputado y militar, Carlos María de la Torre[301], siendo leída en la sesión de Cortes del día siguiente. Su tenor era el que sigue:

---

296 MONSELL y PÉREZ, «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», p. 174, señalan que en estas elecciones obtuvieron escaño 349 diputados, e identifican la filiación política del 94% en la forma que sigue: 280 diputados de la Unión Liberal, 25 diputados del partido moderado, 23 diputados del partido progresista, 1 diputado del partido demócrata y 1 diputado de la formación neocatólica.

297 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 1, de 1 de diciembre de 1858, pp. 1-3.

298 El Real Decreto de 27 de enero de 1860, declarando terminada la legislatura de 1859, en *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, t. V, Imprenta Nacional, Madrid, 1860, pp. 2797 y ss.

299 "En Marzo de 1859 proponía también la minoría progresista la abolición de la pena capital para los delitos políticos"; véase, CANALEJAS «Sobre la pena de muerte», p. 17.

300 Esta proposición de ley fue firmada por Pedro Calvo Asensio, diputado por el distrito de Maravillas (Madrid); Mariano Ballesteros, diputado por el distrito de Calatayud (Zaragoza); José Peris y Valero, diputado por el distrito del Cuartel de S. Vicente (Valencia); Vicente Rodríguez, diputado por el distrito de Vistillas (Madrid); Cipriano Segundo Montesino, diputado por el distrito de Brozas (Cáceres); José María Vera, diputado por el distrito de Cartagena (Murcia) y Carlos María de la Torre, diputado por el distrito de Tarancón (Cuenca); *cfr*., *Estadística del personal…*, cit., pp. 397-398, 402 y 404-407.

301 El diputado sevillano, Carlos María de la Torre y Navacerrada (1809-1879), siguiendo la tradición familiar pronto se inicia en la carrera de las armas, participando en múltiples campañas militares que irán engrosando su brillante hoja de servicios. Asimismo, su inclinación política le llevará a militar en las filas del partido progresista, obteniendo por vez primera acta de diputado por dicha formación en las Cortes constituyentes del Bienio Progresista. "Con la llegada de O'Donnell al poder, en el Congreso de 1858-63 fue diputado por Tarancón, formando parte de la minoría progresista, de oposición al Gobierno de la Unión Liberal, encontrándose en esta situación cuando fue nombrado jefe de la División Vascongada". Durante el último tramo del reinado de Isabel II, al haber participado

> «*A LAS CORTES. […] PROPOSICION DE LEY.*
>
> *Artículo 1.º Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos.*
>
> *Art. 2.º En los casos en que el código penal ó la Ordenanza militar señale dicha pena, se aplicará la deportación, la relegación, ó la reclusión.*
>
> *Art. 3.º No están comprendidos en el art. 1.º los homicidios alevosos, aun cuando hayan sido perpetrados por motivos políticos […]*»[302].

En realidad, esta proposición no era nueva en el panorama legislativo español, pues reproducía a la letra el anterior proyecto de ley que presentó, el 30 de noviembre de 1854, el también diputado progresista Seoane, cuya tramitación fue aceptada por unanimidad por las Cortes del Bienio Progresista, si bien no llegó a discutirse al estar incluido en el proyecto constitucional, pendiente de aprobación, un precepto similar. Seguramente, estos alentadores antecedentes motivaron la reactivación de esta iniciativa parlamentaria que, como recordemos, tenía un contenido más ambicioso que el previsto en la Constitución impromulgada de 1856, pues, aunque ambas disposiciones legales perseguían la eliminación de la pena de muerte para los delitos políticos, la prescripción abolicionista inserta en la ley fundamental solo aspiraba a ser de aplicación en el ámbito de la justicia ordinaria; sin embargo, la reforma propuesta por Seoane, que ahora se reiteraba, pretendía extender sus efectos, por igual, tanto a la jurisdicción penal ordinaria como a la militar.

El debate sobre esta proposición de ley se llevó a cabo en la sesión del Congreso del día 9 de mayo de 1859. Tras su lectura, en nombre de los proponentes, la defensa de esta iniciativa legislativa es asumida por el diputado De la Torre, quien primeramente reconoce que la reforma sometida a consideración no era *"ninguna cosa nueva"*, pues se trataba de un tema muy debatido *"por grandes publicistas"*, que estaba en la conciencia de todos los que deseaban *"la abolicion de esa horrible pena aplicada siempre sin fruto"*. No obstante, señala que el propósito del *"partido del progreso"* era mantear siempre viva *"esta cuestión en los Parlamentos"*, hasta conseguir que quedara "*abolida […] como imperiosamente reclama la humanidad*".

Seguidamente precisa que, aun siendo personalmente *"partidario de la abolicion de la pena de muerte para toda clase de delitos"*, la presente propuesta solo aspiraba a lograrla *"por delitos políticos"*; y, tras hacer un breve recordatorio de todos los di-

---

en distintas conspiraciones progresistas, fue perseguido y dado de baja en el ejército, llegando, incluso, a ser condenado a muerte. Posteriormente, tras su activa implicación en la victoriosa revolución Septembrina, será nombrado teniente general y designado gobernador civil y capitán general de las Filipinas; *vid*., CAJAL VALERO, A., «La participación de los Tercios Vascongados en la Guerra de África (1859-1860)», *Revista de Historia Militar*, nº 112, 2012, pp. 125-195: cita en p. 159.

302 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 68, de 4 de marzo de 1859, p. 1190.

putados que en las pasadas Cortes constituyentes habían defendido la pertinencia de su abolición en estos casos, explica las razones que alientan la estimación de su proposición de ley. Señalando, en primer lugar, con ayuda de distintos ejemplos, que *"la muerte de un enemigo político"* no impide las revoluciones; pues, lejos de ello, verificada la sentencia de muerte *"el partido á que pertenece la persona que sufre la condena, se irrita; jura la venganza […] y esto hace que sea imposible la templanza y que se llegue nunca al terreno del derecho y de la legalidad"*. No sirviendo, pues, la pena capital para evitar futuras conspiraciones y revoluciones debería eliminarse *"por delitos políticos"* A continuación, y como broche final a su disertación, procede a dar lectura de distintos pasajes de la obra que en 1822 publicó el célebre político e historiador francés Guizot, en donde defendía la conveniencia de suprimir la pena de muerte en las causas seguidas por crímenes políticos. Por último, concluye declarándose confiado en que, dichos argumentos, fuesen suficientes para que la proposición de ley mereciera *"la honra de tomarse en consideración"*[303].

La réplica a la solicitada reforma legislativa la ofreció el ministro de Gracia y Justicia, Fernández Negrete[304], quien comienza su argumentación relacionando sutilmente las doctrinas abolicionistas con los ideales propios de la inexperta juventud, y añadiendo que esta proposición de ley hubiera sido entendible si *"se hubiera presentado en España antes de promulgarse el Código penal"*, pero hacerlo ahora carecía de sentido, pues dicho texto punitivo reducía *"en el órden civil"* la aplicación de la pena capital por delitos políticos a solo *"dos o tres casos que se refieren á atentados que tocan á los cimientos de la sociedad"*, que, a su juicio, eran imprescindibles para protegerla.

Dicho esto, prosigue su alocución señalando que Guizot, en la parte inicial de su obra, afirma estar *"seguro de que los Gobiernos no han de aceptar sus ideas"*. Además, hace notar que *"en ninguna época hubo tantas ejecuciones por delitos políticos"* como durante el tiempo en que, el citado autor, *"fue Ministro en la Monarquía constitucional"*. Todo lo cual, a su entender, nos hace ver el verdadero *"imperio de las teorías cuando vienen á ponerse en roce con la práctica"*.

Tras narrar algún otro ejemplo de discordancia entre teoría y práctica, Fernández Negrete, continua su discurso manifestando su alarma por la pretensión de intentar

303 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 113, de 9 de mayo de 1859, pp. 3098-3099. Véase, Apéndice documental 3º.

304 El ex-ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas de Bravo Murillo y senador vitalicio, Santiago Fernández Negrete-Gómez (1799-1875), regentó la cartera de Gracia y Justicia de 1858 a 1863 en el Gobierno de la Unión Liberal que presidía el general O'Donnell. De su prolongado Ministerio cabe reseñar, entre otras reformas, la regulación de las atribuciones del Ministerio Fiscal, la creación de la Sección de Estadística criminal y civil, así como el registro y conservación de sentencias del Tribunal Supremo y Audiencias, y la extensión del servicio médico forense a todos los Juzgados de Instrucción de España; véase, LASSO, *El Ministerio*…, cit., pp. 111-112.

llevar la eliminación de la pena capital "*hasta el santuario del órden público, á las ordenanzas del ejército*"; ya que, en su opinión, si semejante medida se adoptara se abriría *"una anchísima puerta al criminal para que á sus mayores atentados, á sus más horribles crímenes contra el órden público, se les quiera disculpar con un nombre político"*.

Finalmente, el ministro de Justicia termina su exposición, declarando que estaba convencido *"como lo están todos los hombres pensadores, de que, por desgracia, la humanidad no ha llegado (ni llegará acaso sino en generaciones muy lejanas de nosotros) á un estado en que pueda suprimirse la pena de muerte por delitos políticos"*; por lo que, interesaba del Congreso que no tomará en consideración esta proposición.

En turno de rectificación, nuevamente hace uso de la palabra el diputado ponente, general De la Torre, recordando que en las pasadas Cortes Constituyentes hubo treinta y seis militares de la más alta graduación que *"no se asustaron porque se tomara en consideración una proposición de ley de esta índole"*. Además, en dicha Asamblea también participaron otros diputados *"de grande capacidad […] y ninguno de ellos se asustó porque se tomará en consideracion esta proposición, así como tampoco se asustaron cuando se discutió la base sexta de la Constitucion"*. De ahí que creyera no haber incurrido en ningún inconveniente planteando esta proposición de ley, pues en su apoyo tenía *"nada menos que la apreciación de personas de todas las carreras que tuvieron el honor de pertenecer á las Córtes Constituyentes"*.

En contestación, de nuevo interviene el ministro de Gracia y Justicia para reiterar que no conocía ningún país en el mundo que hubiera suprimido la pena de muerte para los delitos políticos. Tan sólo había existido ensayos que no llegaron a cristalizar en ningún Código penal. Agregando, para finalizar, que España no estaba más adelantada que el resto de las naciones *"que han hecho esfuerzos para llegar á este fin suspirado, y que no están en disposición de alcanzarlo tan pronto como almas sensibles lo desean"*.

Después de una última intervención por parte del diputado, De la Torre, puntualizando que su proposición tan sólo pedía la abolición de la pena de muerte para los crímenes políticos, con exclusión de cualquier otro delito ya fuera militar o civil, las Cortes procedieron a someter a votación nominal si se tomaba en consideración la meritada proposición de ley. Verificado el recuento, el resultado obtenido fue francamente desconcertante en comparación con la anterior votación que, sobre la misma cuestión, se llevó a cabo en las Cortes Constituyentes, pues en aquella Asamblea la propuesta fue tomada en consideración por unanimidad, mientras que, en la de ahora, era mayoritariamente desestimada *"por 94 votos contra 18"*[305].

Malograda esta nueva iniciativa absolutista, la vigencia de la pena de muerte queda otra vez reconfirmada; y, por ende, pendiente para desplegar sin límites sus crueles efectos letales. Prueba de ello, la hallamos en la llamada revolución de Loja

305 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 113, de 9 de mayo de 1859, pp. 3099-3101.

de 1861, donde la justicia militar, al amparo de la ley de 17 de abril de 1821, sofocó y castigó una sublevación jornalera dirigida por elementos republicanos, que quedó neutralizada tras imponer la condena a muerte a varios de los cabecillas del alzamiento y el encarcelamiento de casi cuatro centenares de campesinos[306].

4.2.2. Legislatura de 1866-1867

a) Contexto político

Concluso el llamado "Gobierno largo" de O'Donnell, en el reinado de Isabel II se abre un último período comprendido entre 1863 y 1868, en el que en las labores de gobierno se alternarán unionistas y moderados[307], dejando sistemáticamente al margen del poder a progresistas[308] y demócratas[309].

Por lo que respecta al planteamiento político frente a la controvertida cuestión de la pena de muerte, ninguna de dichas formaciones puso de manifiesto, en sus respectivas formulaciones programáticas, su postura al respecto; y ello, salvo el partido demócrata que, acorde con sus anteriores pronunciamientos, dentro del denominado Manifiesto del Comité central democrático, publicado el 15 de marzo de 1865, reitera su plena vocación abolicionista al incluir entre los principios básicos de su ideario la supresión de la máxima pena, en los términos que a continuación se reseñan:

> *«En los momentos supremos en que todas las antiguas instituciones se quebrantan y todos los antiguos partidos se desorganizan […] justo es que la democracia […] aclare por medio de este comité sus creencias […] y diga sus propósitos para infundir en el país la seguridad de que es no solamente un partido de enseñanza y de propaganda, sino también un partido de gobierno […] Todo nues-*

306 SUÁREZ VERDAGUER, F., «Los sucesos de Loja (1861) en la *Memoria* de Antonio Guerola», *Revista de historia contemporánea*, nº 4, 1985, pp. 73-108: en particular pp. 96-103.

307 COMELLAS, *Historia…*, cit., pp. 209-210.

308 "Los mecanismos electorales fraudulentos, la restricción de la libertad de reunión, por las sucesivas leyes de 1863, 1864, 1865 y 1866, y una libertad de imprenta controlada, empujaron, o al menos fue la coartada, a los progresistas al *retraimiento*"; *vid*., BAHAMONDE y MARTÍNEZ, *Historia…*, cit., p. 354.

309 A diferencia del partido progresista que, en un principio, procuró conciliar las reformas que demandaba con el mantenimiento del orden público, el partido demócrata optó por lograr cambios inmediatos y completos; por lo que, esta formación política fue más duramente perseguida por las autoridades, bajo la permanente amenaza de ser ilegalizada y la privación del derecho a celebrar reuniones electorales; véase, ARTOLA, *Partidos…*, cit., t. I, «Los partidos políticos», pp. 274-276.

tro credo político se halla elocuentemente resumido en las siguientes sencillas fórmulas: Sufragio universal […] Abolición de la pena de muerte y de todas las penas perpetuas o irreparables […]»[310].

Sin embargo, dicho programa no llegará a ser objeto de examen electoral, ya que la ulterior alianza táctica que unirá a progresistas y demócratas confirmará la consolidación de la convenida política de retraimiento que, al tiempo que les alejaba de cualquier proceso electivo[311], a partir de 1866 les reorientará definitivamente hacía la acción revolucionaria, con el decidido propósito de poner fin al régimen isabelino[312]. No obstante, el valor del referido ideario abolicionista no resultó en modo alguno baldío; porque, en última instancia, el conjunto de planteamientos humanistas formulados por el partido demócrata, unidos a otros similares que habían surgido en el seno de distintos movimientos intelectuales, entre los que destacan los provenientes de la filosofía krausista[313], a la postre influyeron en el triunfo de la revolución de septiembre de 1868[314].

Asimismo, a consecuencia de la indicada estrategia subversiva, a comienzos de 1866 se produce en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés un levantamiento insurreccional, contra el Gobierno unionista, promovido por los progresistas que no llegaría a triunfar[315]. Igualmente, en junio del mismo año, un nuevo alzamiento, en esta ocasión por iniciativa del partido demócrata, dará lugar a la sublevación

310 ARTOLA, op. cit., t. II, «Manifiestos y programas políticos», pp. 74-78.

311 VILCHES, *Progreso y libertad…*, cit., pp. 63-69.

312 ROMERO MATEO, M. C., «Un fenómeno no previsto: los partidos políticos», en *Ciudadanos. El nacimiento de la política en España (1808-1869)*, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2009, pp. 99-115: en especial p. 115.

313 "Los krausistas, a lo largo de los años sesenta, formaron simbiosis con los demócratas, sobre la base de la dignidad del hombre como ser soberano, y por tanto «ingobernable». El pensamiento demócrata se fundamenta en tres puntos: 1º, la República […] 2º, el sufragio universal […] Y 3º, los derechos humanos […] Entre ellos están el derecho radical a la vida –y de ahí la supresión de la pena de muerte–"; véase, COMELLAS, *Historia…*, cit., pp. 223-224.

314 JOVER ZAMORA, J. M., *La civilización española a mediados del s. XIX*, Espasa Calpe, Madrid, 1991, pp. 24, 204-205, refiere que, entre 1854 y 1868, la formación demócrata junto a una activa corriente intelectual de ámbito europeo, dieron contenido a sus postulados en torno a principios humanitarios, liberales, democráticos y de fraternidad universal, que tenían como centro de atención a la "persona humana"; y cuya aportación teórica será uno de los factores que explique el posterior estallido de la revolución septembrina. Por su parte, para LÓPEZ-ARANGUREN, J. L., *Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del siglo XIX*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, p. 157, esos novedosos aires filantrópicos estaban estrechamente ligados al movimiento krausista, al federalismo pimargalliano, al catolicismo liberal y a los ideales internacionalistas, y se plasmaron en actitudes éticas sobre ciertos asuntos sociales de interés, como fue el debate sobre la pena de muerte y las discusiones sobre la reforma penitenciaria.

315 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, *La España…*, cit., pp. 453.

de los suboficiales del cuartel de San Gil[316]. Una vez fracasada esta asonada se celebraron los correspondientes consejos de guerra; tras lo cual, sesenta y seis personas fueron condenadas a muerte y, a continuación, pasadas por las armas[317]. Pocos días después de llevarse a cabo las ejecuciones, O'Donnell se vio compelido a dimitir, sustituyéndole nuevamente en la presidencia del Gobierno, el general Narváez, quien emprende una política represora y dictatorial que provocará la definitiva ruptura con los unionistas. Con lo cual, la reina Isabel II, a partir de entonces solo contará con el apoyo de los moderados[318].

En diciembre de 1866, Narváez, disuelve las Cortes y ordena la convocatoria de unas nuevas elecciones, que se celebrarán el 10 de marzo del año siguiente[319]; y en las que, sumándose a la política de retraimiento de progresistas y demócratas, ahora tampoco participarán los unionistas. De ahí que no sea extraño que el resultado de los comicios otorgara al partido moderado una victoria arrolladora[320].

Al amparo de las precitadas elecciones, la legislatura de 1866 a 1867 comienza sus sesiones, en el Congreso de los Diputados, el 30 marzo de 1867[321]; y, por Real Decreto de 3 de diciembre del mismo año, queda definitivamente conclusa[322]. En dicha Cámara, y dentro de la indicada legislatura, se presentó una proposición de ley interesando la suspensión de la ejecución de las penas capitales, impuestas por la justicia militar, hasta que no constase la autorización del Gobierno[323].

b) La proposición de ley del diputado Nougués

Probablemente el crecido número de penas de muerte dictadas, sin las suficientes garantías, por los tribunales castrenses, fue la causa que motivó al diputado con-

316 PAREDES ALONSO, J., «El reinado de Isabel II y el Sexenio revolucionario», en Javier Paredes (coord.), *España Siglo XIX*, Editorial Actas, Madrid, 1991, p. 211.

317 "La represión fue brutal: 66 fusilados en pocos días, en especial sargentos de artillería, pero también algunos soldados, un paisano y un pobre carlista chiflado"; *vid*., FONTANA, «La época del liberalismo», p. 327.

318 ARTOLA, *La burguesía*…, cit., p. 336.

319 RUEDA, *Isabel*…, cit., pp. 216-217.

320 MONSELL y PÉREZ, «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», pp. 172, 174 y 176, comentan que en las elecciones de 1867 logaron escaño 349 diputados, entre los cuales identifican a 300 diputados del partido moderado y 3 unionistas.

321 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 1, de 30 de marzo de 1867, p. 1.

322 El Real Decreto de 3 de diciembre de 1867, declarando terminada la legislatura de 1866 a 1867, en *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, t. II, Imprenta de J. Antonio García, Madrid, 1867, p. 1079.

323 PUYOL, *La publicidad*…, cit., p. 137, nos ofrece noticia de la última iniciativa legislativa de interés que, sobre el tema de la pena de muerte, se promueve al término del régimen isabelino.

servador, Mariano Nougués[324], para promover esta reforma legislativa; que, aunque no buscaba la supresión de la máxima pena, cuando menos pretendía fortalecer los controles para limitar su aplicación. A tal fin, el mentado diputado, en fecha 11 de abril de 1867 eleva al Congreso, a título personal, una proposición de ley *"para que no se ejecute la pena de muerte impuesta por los consejos de guerra, sin previa consulta al Gobierno"*; que rezaba así:

> «*AL CONGRESO. Si bien sería una empresa temeraria, ó, á lo menos poco meditada, pensar actualmente en la abolicion precipitada de la pena capital, no estando todavía resuelta de una manera satisfactoria esta cuestion gravísima, no puede disputarse la conveniencia de sujetar la aplicación de la pena de muerte á condiciones especiales, y sobre todo tomar precauciones de que no se imponga sino con una indisputable necesidad, y con garantías de que los jueces no sufrieron una alucinación irreparable al imponerla. Las garantías deben ser mayores cuando el fallo no se dicta por un tribunal colegiado en última instancia, y después de ámplias defensas y recursos, sino cuando causa ejecutoria el voto de una sola persona responsable, como acontece en los fallos militares. Seguramente, en causas que se sustancian militarmente, la sentencia que pronuncia el consejo de guerra pasa á la vista y exámen del capitan general, que remite el proceso al auditor de guerra, para que, examinándolo, ó aconseje la conformidad con la opinión del consejo, ó lo combata en su dictamen. Como los capitanes generales no adquieren responsabilidad alguna conformándose con el dictámen de sus auditores, el voto de estos es de todo punto decisivo en lo general, viniendo á resultar que la pena de muerte se imponga casi siempre, ó lo que es lo mismo, que sea ejecutiva precisamente por el sufragio de un solo hombre, de un funcionario que en la revisión del proceso quizás pueda preocuparse por haber dirigido la sustanciación y ver en cuanto se ha practicado una obra levantada sobre la base de sus dictámenes. Si á esto se agrega que los fiscales y miembros de los consejos de guerra sufren á veces demostraciones y apercibimientos por su lenidad, siguiéndose de aquí que hay riesgo de que en algunas ocasiones puedan decidirse por la pena mas dura, se conocerá la necesidad de adoptar la medida que vamos á proponer cuando se imponga la pena de muerte, y que se reduce*

324 El diputado, Mariano Nougués Secall (1801 o 1808-1872), fue un jurista e historiador aragonés que desplegó una densa actividad profesional como catedrático de jurisprudencia, auditor de guerra, magistrado suplente y abogado; y que, por su reconocido prestigio, llegó a ser nombrado decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y activo miembro de diversas corporaciones científicas nacionales y extrajeras. Asimismo, también reservó tiempo para participar en la vida política española, obteniendo acta de diputado, por la capital aragonesa, en las Cortes de mayoría moderada de 1867; *vid*., NOVALES ALQUÉZAR, M. A. y NAVARRETE MARTÍNEZ, E., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/118739/mariano-nougues-secall*

simplemente á que se dé noticia al Gobierno antes de ejecutarla en circunstancias normales y en los casos ordinarios […] Fundados en tan poderosas razones, presento al Congreso la siguiente

PROPOSICION DE LEY.

Artículo 1.º No se ejecutará la pena de muerte impuesta por los consejos de guerra á individuos, tanto del fuero militar como del común, sin dar préviamente cuenta al Gobierno, por el Ministerio de Guerra, con testimonio del proceso, é informe de los Capitanes Generales, y hasta que se comunique espreso mandato de que el fallo se lleve á efecto.

Art. 2.º Únicamente podrá prescindirse de este requisito en plazas que se hallen realmente sitiadas por un enemigo extranjero.

Art. 3.º El Ministro resolverá, prévia consulta del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, ó del cuerpo que sustituya á este Tribunal.

Palacio del Congreso 11 de Abril de 1867»[325].

El debate parlamentario sobre esta proposición de ley se desarrolla en la sesión del Congreso del día 22 de mayo de 1867. A tal efecto, tras su lectura, en su apoyo toma la palabra el diputado y ex auditor de guerra, Nougués, agradeciendo a la Asamblea su atención y adelantando que su enmienda *"defiende la causa de la humanidad y de la justicia"*, en tanto *"tiende á evitar la innecesaria efusión de sangre"*.

Seguidamente, tras manifestar que su iniciativa no tenía carácter político, ni pretendía *"contrariar al Gobierno"*, anuncia que su disertación se apoya en consideraciones basadas en la justicia, la filosofía y la conveniencia. Respecto a la justicia, que entiende es el aspecto más poderoso, recuerda que las Ordenanzas militares determinan que las sentencias de muerte dictadas por los consejos de guerra ordinarios son ejecutivas de inmediato, si cuentan con la conformidad del auditor y del capitán general. Sin embargo, las mismas Ordenanzas, cuando el condenado a muerte es un oficial, para su ejecución, además, exigen *"la consulta á S. M. por medio del Ministerio de la Guerra"*, previo informe del *"Tribunal Supremo de Guerra y Marina"*. Ante semejante diferencia de trato, entre la vida de un soldado y la de un oficial, con fundamento en *"los preceptos fundamentales de la justicia"*, sostiene la procedencia de su proposición porque *"la ley debe observarse con igualdad respecto a todos los individuos que componen el ejército"*. Igualdad de garantías, que también hace extensivas al *"paisano que por atracción ó desafuero es conducido á los consejos de guerra"*. A mayor abundamiento, también critica las diferencias existentes en la composición de los consejos de guerra, ya que los ordinarios quedan conforma-

325 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 14, de 15 de abril de 1867, Apéndice 3º pp. 1-2.

dos con *"capitanes"* y *"oficiales de inferior graduación"*, que, todo lo más, cuentan con *"seis ó cuatro"* años de antigüedad en el servicio; mientras que *"los consejos de oficiales generales"* se componen *"de los primeros jefes del ejército […] que han de llevar treinta años de servicio"*. Además, precisa, que su enmienda solo pretendía que los consejos de guerra ordinarios, en los que se imponían condenas a muerte, "*se observe el mismo método que se observa respecto de las sentencias que pronuncian los consejos de guerra de oficiales generales"*. Añadiendo, para fundamentar más y mejor este extremo, que como preceptúan la propias Ordenanzas, en el ámbito militar *"la culpa es tanto mas grave cuanto mayor sea la graduación del militar que la cometa"*. De ahí que los soldados condenados a muerte no podían gozar de menos beneficios y garantías que los oficiales sentenciados con la misma pena letal. Por todo ello, entendía que "*bajo el aspecto de la justicia*", su proposición *"no puede menos de aceptarse"*.

A continuación, Nougués, centra su defensa en argumentos, que dice son de orden filosófico, recurriendo para ello a ejemplos que halla en la antigua Grecia y en la Francia actual, en donde *"la legislación militar […] ha sufrido alteraciones que son dignas de tomarse en consideración"*, pues, con muy buen criterio, ha establecido *"que las sentencias de muerte no se han de ejecutar sin que tenga conocimiento de su justicia el primer jefe del Estado"*. Asimismo, en apoyo de este punto cita como antecedente patrio a tener en cuenta, un reciente decreto por el que, en relación con la aplicación de la pena de muerte en los juicios penales ordinarios, se establecía *"por el Ministerio de Gracia y Justicia un género de consulta"*, como requisito a cumplimentar con la corona antes de proceder a la ejecución de las penas capitales[326]. Indicando que, si esto era preceptivo en la justicia penal ordinaria, donde además había más medios de defensa, *"es claro que no es conforme á la filosofía del derecho el permitir ejecutar desde luego la pena capital sin previa consulta cuando se trata de soldados ó de paisanos, que son juzgados por consejos ordinarios de guerra"*. Con lo cual, a su juicio, también quedaba demostrado *"que bajo el aspecto de la filosofía esta proposición no puede desecharse"*.

Nougués, prosigue su alocución, abordando las consideraciones basadas en *"la conveniencia de esta proposicion"*, explicando al respecto que este extremo queda cumplido cuando a los ojos del público se consigna que la pena impuesta ha sido justa; y, por tanto, *"reúne las condiciones de ejemplaridad"*. Y a ello, sin duda, contribuye el interesado trámite de *"la consulta á S. M."*, pues una vez que se ha verificado el pueblo queda *"convencido de que la pena es necesaria […] que no puede menos de ejecutarse"*.

326 La disposición a la que hace referencia, el diputado Nougués, era el Real Decreto de 7 de diciembre de 1866, *estableciendo varias reglas y formalidades en la ritualidad y tramitación del ejercicio de la prerrogativa de gracia*; *cfr.*, Colección Legislativa de España, t. XCVI, pp. 960-968.

A fin de completar su exposición, Nougués, también recurre a refutar alguna de las objeciones que espera va a recibir su proposición, y que se resumen en que, de estimarse, *"la disciplina perderá su fuerza, ó se enervaría, y que retardándose las ejecuciones, se daría margen á la impunidad"*. Respecto a la posible indisciplina militar, esgrime como argumento en contra el ejemplo que ofrece la experiencia francesa, donde se aplica una solución jurídica similar a la prevista en su enmienda, sin que, hasta la fecha, conste que el ejército francés se hubiera sublevado "*contra el Gobierno para derrocarle*". Agregando que, en todo caso, las vigentes Ordenanzas contemplan suficientes disposiciones *"para sostener la disciplina del ejército, y para evitar trastornos, evitando al mismo tiempo injusticias hijas de la equivocación*". En cuanto a la supuesta impunidad que generaría la dilación de las ejecuciones, si se aceptara su proposición, comenta que, si en ningún caso es deseable precipitar el cumplimiento de esta clase de penas, menos aún lo es en las causas militares, *"porque tenemos ejemplos dolorosos que nos están recordando la conveniencia de usar de cierto género de pausa en llevar á efecto estos fallos*". Por eso, para equiparar la justicia ordinaria con la militar, era necesario someter las condenas a muerte impuestas por los consejos de guerra *"al criterio de un tribunal supremo que pueda en vista del proceso, y depues de consultados todos los antecedentes, pronunciar un fallo que ofrezca todas las garantías apetecibles"*.

El diputado Nougués cierra su turno aclarando que lo importante de su proposición de ley no está en el articulado, pues éste puede ser mejorado por la comisión, sino en los beneficios que encierra el principio que se pretende salvaguardar con ella; por lo que, si en esta ocasión no se acepta, "*tendré el honor de volverla á proponer en cuantas ocasiones tenga la honra de ocupar estos escaños hasta que acabe por triunfar, como triunfará, porque los principios de humanidad no pueden borrarse del corazon del hombre*"[327].

En ausencia del ministro de la Guerra, la réplica en nombre del Gobierno, en esta ocasión, la ejerce el titular de la cartera de Fomento, Manuel Orovio[328], quien

327 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 30, de 22 de mayo de 1867, pp. 330-335.

328 El abogado riojano, Manuel Orovio y Echagüe, marqués de Orovio (1817-1883), fue un influyente político conservador, adscrito al partido moderado, que se inicia en la vida pública como alcalde constitucional, hasta que en 1850 da el salto al ámbito nacional, al lograr acta de diputado en el Congreso, repitiendo como parlamentario en sucesivas legislaturas. A partir de 1865 también asume tareas gubernativas, como responsable de los ministerios de Fomento y Hacienda. Con el triunfo de la revolución Gloriosa se aleja de la vida política; regresando, más tarde, una vez instaurada la restauración borbónica, para encargarse nuevamente de la cartera de Fomento, desde donde dirigirá un duro enfrentamiento contra profesores universitarios, afines a la izquierda liberal, y, posteriormente, del ministerio de Hacienda, concluyendo su carrera política como Senador vitalicio; *vid*., CUENCA TORIBIO, J. M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/7348/manuel-orovio-y-echague*

después de elogiar al diputado proponente por su discurso, expresa sus dudas de que semejante proposición de ley pueda ser el cauce adecuado para reformar *"por vía indirecta"* las Ordenanzas del ejército. Ante tal circunstancia, adelanta que iba a solicitar que no se tomara en consideración la proposición, sin que antes *"se forme el debido expediente y corra este en todos sus trámites"*.

Seguidamente, al tiempo que manifiesta compartir *"los sentimientos nobles y humanitarios"* que motivan la proposición debatida, señala que el diputado Nougués estaba equivocado en su planteamiento, pues en la actualidad "*no se impone la pena de muerte á los militares sin haber sido consultada primero S. M.*". Además, la pretensión de que sean supervisados los juicios militares por tribunales superiores, como si se tratara de *"una nueva instancia"*, no era admisible, máxime que la revisión de las condenas a muerte siempre era posible efectuarla a través del *"derecho de gracia ó de indulto"*. Por ello, aceptar esta proposición conculcaría *"por completo las ordenanzas militares"*.

El ministro Orovio continúa su disertación afirmando que la justicia militar protegía más a los reos que la penal ordinaria, ya que para imponer la pena de muerte en la jurisdicción común bastaba con la intervención de *"un juez de primera instancia y la sala de una audiencia"*; sin embargo, en la jurisdicción castrense se necesitaban *"seis capitanes, el coronel, ó teniente de rey que preside, el auditor de guerra y el capitán general, debiendo estar todos conformes"*. Por último, termina su impugnación recordando que actualmente existía una junta nombrada para estudiar las reformas que debían hacerse en las ordenanzas del ejército; y, además, también había otras altas corporaciones del Estado que estaban estudiando el mismo asunto; por lo que, al estar pendientes aún dichos dictámenes, rogaba al Congreso que no tomara en consideración esta proposición de ley, ya que las reformas de esta naturaleza solo podían ser promovidas desde el Gobierno.

Cumplidas varias intervenciones de menor interés, al amparo del trámite de rectificación, nuevamente hace uso de la palabra el diputado Nougués, para precisar que lo comentado por el ministro de Fomento, respecto a la pendiente reforma de las ordenanzas militares, en modo alguno suponía obstáculo para acometer modificaciones parciales, si éstas se consideraban necesarias. Igualmente, niega que en la justicia militar actualmente se practique la interesada consulta; dado que, en su opinión, lo que en realidad se hace *"es poner tan solamente en conocimiento de S. M. que se va á ejecutar una pena capital"*. Asimismo, señala que tampoco comparte que los tribunales penales ordinarios fuesen menos garantistas que los consejos de guerra; ya que, en general, los integrantes de los tribunales militares *"no eran personas tan peritas como los magistrados, y que sepan tan bien como estos el valor de las pruebas y el concepto que debe formarse de los hechos, en lo cual consiste precisamente la fuerza intrínseca de las sentencias"*.

Contrario a lo esperado, Nougués, concluye su exposición reconociendo que era evidente que el Gobierno desaprobaba su proposición de ley, a pesar de sólo pretender *"evitar ejecuciones sangrientas y resultados dolorosos"*. Por ello, "*para evitar todo género de conflictos y de compromisos"*, comunicaba al Congreso su decisión de retirarla. Con lo cual, tras unas breves palabras de agradecimiento por parte del ministro Orovio, la propuesta parlamentaria objeto de debate quedó definitivamente retirada[329].

4.3. EL ARRAIGO DE LA ÚLTIMA PENA EN LA ETAPA FINAL DEL RÉGIMEN ISABELINO

La falta de consideración que las Cortes españolas dispensaron a una iniciativa legislativa que, como hemos visto, tan solo aspiraba a racionalizar la aplicación de la pena de muerte ante los tribunales militares, constituye una clara demostración del amplio crédito que seguía gozando la máxima pena en la sociedad isabelina. Todo lo cual, además, queda corroborado al comprobar la escasez de ensayistas nacionales que, en esta época, alzaron sus voces en defensa de su supresión parcial o total[330]. Entre los cuales, por su singularidad y difusión, cabe citar al letrado Joaquín Escario, que en 1841 presentó una fundada disertación, ante la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, cuyo contenido era abiertamente abolicionista[331]; y al literato y diplomático Ramón de Valladares, quien, en plena expansión del fenóme-

329 *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, núm. 30, de 22 de mayo de 1867, pp. 335-336.

330 CUELLO CALÓN, «Vicisitudes y panorama legislativo de la pena de muerte», p. 501, comenta que, hacía la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de la doctrina española se declaraba partidaria de la última pena, por ser necesaria y justa. Asimismo, prueba de que la mentalidad abolicionista era una excepción entre la intelectualidad de la época, nos la suministra la ilustre escritora y experta penitenciarista, Concepción Arenal, quien, en el último año del reinado de Isabel II, difunde un opúsculo titulado, *El reo, el pueblo y el verdugo ó la ejecución pública de la pena de muerte*, Establecimiento tipográfico de Estrada, Díaz y López, Madrid, 1867, en donde asume la vigencia de la pena de muerte, por considerarla incuestionable, al estar admitida por casi todos los pueblos, al tiempo que limita sus pedimentos, sobre este particular, a combatir la publicidad en las ejecuciones capitales; y ello, según razona, por sus efectos perniciosos sobre los condenados, los verdugos, los espectadores y la sociedad en general.

331 *Cfr.*, *Memorias premiadas por la Junta de Gobierno de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislacion, y leídas por los Sres. D. Pedro López Clarós y D. Joaquín Escario, académicos profesores de la misma, en las sesiones de 7 y 14 de diciembre de 1841, sobre el siguiente tema: La pena capital ¿es legítima, justa y conveniente? En caso de admitirse, ¿á qué delitos deberá aplicarse?*, Imprenta de Don Eusebio Aguado, Madrid, 1842, pp. 119-160.

no revolucionario europeo de 1848, publicó un libro contra la aplicación de la pena capital en los delitos políticos[332]. Igualmente, en la década siguiente también son reseñables, por abogar en sus respectivas obras por la abolición plena de la pena de muerte, los juristas Manuel Pérez de Molina[333] y Tomás Bernal[334].

Al mismo tiempo que el panorama que presentaba el movimiento abolicionista español cada vez era menos esperanzador[335], las sentencias condenando a pena de muerte iban creciendo; y ello, no solo en el ámbito de la jurisdicción castrense[336]; pues, a la vista de los datos disponibles, podemos colegir que los tribunales penales ordinarios también contribuyeron activamente a mantener la pujanza de las condenas capitales[337]. A mayor abundamiento, también contamos con dos series estadísticas completas, una comprensiva de cuatro años sucesivos y otra de dos, que nos son útiles para, a título ilustrativo, confirmar la vigencia de dicha trágica realidad durante el último período del reinado de Isabel II. En efecto, de conformidad con la referida información, que hallamos en la imprescindible obra de Torres Campos, sabemos que entre 1859 y 1862, las Audiencias españolas dictaron 140 condenas a pena capital, de las cuales se llegaron a ejecutar 99 y se indultaron 41. Y, asimismo, que entre 1867 y 1868 se pronunciaron 51 sentencias de muerte, resultando ejecutadas 24, y anuladas, por concesión de indulto, 27[338].

La manifiesta debilidad que, desde la óptica doctrinal y política, caracteriza a los defensores de la erradicación de la sanción capital, en el trascurso de la España

---

332 VALLADARES Y SAAVEDRA, R., DE, *Sobre la necesidad de proscribir la pena de muerte por los llamados delitos políticos,* Imprenta de D. Manuel Álvarez, Madrid, 1848.

333 PÉREZ Y DE MOLINA, M., *La sociedad y el patíbulo ó la pena de muerte histórica y filosóficamente considerada*, Imprenta de la Esperanza, Madrid, 1854.

334 BERNAL Y LOZANO, T., *Estudios sociales y legislativos sobre la abolición de la pena de muerte*, Imprenta de la Unión, Albacete, 1855.

335 El apuntado declive de las propuestas de contenido abolicionista alcanzó su punto más álgido en el último tramo del reinado de Isabel II, pues, a la notoria falta de publicaciones vindicando la anulación de la pena capital, se sumó la total ausencia de iniciativas legislativas de este signo.

336 "Cualquier tumulto, protesta social o laboral […] llevó a abusar de la declaración del estado de sitio y a la intervención del ejército de manera bastante autónoma del gobierno civil para reprimir las revueltas y dictar castigos ejemplares o ejecuciones sumarísimas sobre las personas"; *vid*., BASCUÑÁN, «Historia del delito político en la España contemporánea», p. 303.

337 Para más detalle sobre este particular, entre otros, pueden consultarse, MARTÍNEZ RUIZ, E., *La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina*, Universidad de Granada, Granada, 1982; TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., *La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX)*, Alianza Editorial, Madrid, 1991; GÓMEZ BRAVO, G., *Crimen y castigo. Cárceles, justicia y violencia en la España del siglo XIX*. Catarata, Madrid, 2005; ESPINO JIMÉNEZ, F. M., «La criminalidad en pleno liberalismo isabelino: perspectivas desde el sur de España», en Tiago da Silva Cesar, *et alii* (Coords.) *Crime, Justiça e Sistemas Punitivos,* Editora Fi, Porto Alegre, 2021, pp. 135-172.

338 TORRES, *La pena de muerte…*, cit., pp. 21 y 35.

isabelina, alcanza su máxima expresión cuando, al acercarnos a la opinión popular formada en torno a esta tradicional y cruel respuesta punitiva, comprobamos que los ajusticiamientos públicos contaban con un generalizado apoyo social, al ser considerados parte integrante de la realidad cultural española[339].

Así, noticia del innegable enraizamiento que tenía dicho macabro divertimento, nos la ofrecen dos significados autores que, como testigos directos de estas tétricas ceremonias, nos dejan su cualificado testimonio. En primer lugar, prueba del evidente arraigo de esos espantosos usos en la sociedad española de la época, nos la brinda el célebre jurisconsulto progresista, Gómez de la Serna, cuando describe, en tono de crítica y preocupación, la gran concurrencia popular que generaba el espectáculo de las ejecuciones públicas en la España de 1864:

> «*Lo que desde luego llama mas la atención y dá lugar á las mas tristes reflexiones es el afán con que la multitud acude ó á presenciar la ejecución, ó á ver al reo en la carrera que le separa la cárcel del suplicio. Creeríase que se trataba de un espectáculo agradable al ver tanta concurrencia, y el empeño con que se busca un puesto desde el cual puedan verse los mas pequeños movimientos del reo y oírse sus últimas palabras; el que mas cerca está de él se tiene por mas afortunado […] La carrera, aunque larga, está apiñada de espectadores; desde el centro de Madrid se están ofreciendo asientos de carruajes para ir con mas descanso y con mas celeridad á lo que mas que un acto severo de justicia, atendida la afluencia de gentes, parece desde lejos una fiesta popular. Para que nada falte de lo que en las romerías suele echar de menos la concurrencia […] también se colocan oportunamente puestos de comestibles y bebidas que ayudan á pasar el tiempo y á reparar las fuerzas de los que con mas anticipación y en son de fiesta, acuden á tales espectáculos […] Y lo que sucede en Madrid, se reproduce en todas partes, y cuando se señala por el Tribunal Supremo una población corta, como sitio de la ejecución, los habitantes de los pueblos inmediatos acuden ansiosos, como si se tratara de una corrida de toros, que es el espectáculo que suele atraer mayor concurrencia […] Saque, pues, el legislador la consecuencia: comprenda que no deben fomentarse esa concurrencia que tan poco favorece*

339 "Un día de ejecución es un día de fiesta. Los artesanos y comerciantes cierran las puertas de sus negocios, las abren de par en par los taberneros y los explotadores de prostíbulos […] En ciudades en que el cadalso se alza un poco lejos del centro urbano, cocheros profesionales o de ocasión pregonan sus servicios en busca de viajeros: «¡Al patíbulo! ¡Al patíbulo!» En Madrid, Larra, Galdós, Verhaeren, Regoyos, Baroja y muchos otros oyeron esos gritos las tardes en que se iba a darse garrote a alguien, y ellos fueron acaso los únicos ciudadanos un poco sensibles que se extrañaban de que el tono de los cocheros fuera el mismo la tarde de toros para decir «¡A dos reales a la plaza!», que la tarde de ejecución para gritar «¡A dos reales al patíbulo!»", véase, SUEIRO, D., *La pena de muerte: ceremonial, historia, procedimientos*, Alianza Alfaguara, Madrid, 1974, pp. 325-326.

á la opinión que, formara de nosotros el extranjero, atribuyendo á dureza del carácter nacional lo que solo de curiosidad debe graduarse […]»[340].

El segundo testimonio nos lo proporciona el letrado abolicionista, y al tiempo diputado moderado, Manuel Pérez de Molina[341], al narrar las sensaciones que le produjo presenciar, el 31 de enero de 1867, la ejecución mediante garrote de Vicenta Sobrino, que previamente había sido condenada a la pena capital, por el delito de homicidio, el día 15 del mismo mes y año:

«A las doce de ese dia el pueblo de Madrid ha de presenciar un soberbio espectáculo: la ejecucion de un reo […] Unos conversan alegremente, cuentan otros con impaciencia los minutos; algunos vagan como preocupados ó distraídos y no pocos se entretienen saboreando golosinas como en días de romería […] Hombres y mujeres, niños y ancianos se codean, se estrechan se mueven en distintas direcciones como las olas de un mar intranquilo; se disputan la preferencia de lugar para ver más distintamente la comitiva […] Llega, por último, el cortejo de la muerte. Varios hermanos de la Paz y Caridad, precedidos de fuerza armada, rompen la marcha; siguen el verdugo y su ayudante entre soldados, y la reo sobre un pollino, vestida de negra túnica, cubierta la cabeza con una toca blanca […] y en derredor suyo varios clérigos seguidos de soldados que cierran la comitiva. Detiénese ésta junto al tablao, cuyas gradas suben los verdugos, y en pós de ellos la delincuente, sostenida de los brazos por dos sacerdotes […] Los verdugos la amarran de piés y manos; la sientan en el banquillo; la ajustan la argolla al cuello, y mientras uno da vueltas al tornillo, haciendo crujir los huesos de aquel cerebro con un ruido sordo y estridente, el otro verdugo cubre con un lienzo el rostro de la infeliz, privando al público de observar su

340 GÓMEZ DE LA SERNA, P., «Sobre la ejecución de la pena de muerte», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 12, nº 24, 1864, pp. 5-18: cita en pp. 10 y 11.

341 El abogado y escritor, Manuel Pérez y de Molina, en 1857 y 1864 se postuló como candidato al Congreso de los Diputados, pero no lo logró hasta las elecciones de 1865 en las que, dentro de las filas del partido moderado, obtuvo acta de diputado por el distrito de Jerez de la Frontera (Cádiz); destacando, en esta legislatura, por su intensa labor contra la política gubernativa de la Unión Liberal. En las elecciones de 1867 volvió a presentarse como candidato moderado, consiguiendo nuevamente escaño de diputado por la provincia gaditana. A pesar de su afinidad con el Gobierno del general Narváez, mostró una actitud muy crítica con la política dictatorial del ministro de la Gobernación, González Bravo. Tras el triunfo de la revolución de 1868, se aparta de la vida política, dedicándose a la dirección del periódico conservador "*El Estardante*". Asimismo, publicó diversos libros, entre los que sobresale la obra, "*La sociedad y el patíbulo ó la pena de muerte histórica y filosóficamente considerada*, donde después de hacer un amplio recorrido histórico sobre este castigo, mostraba su rechazo al mismo porque –en su opinión–, se hallaba «en oposición con las leyes y máximas del Evangelio, que es la única fuente de la verdadera civilización»"; *vid.*, CARO, *Diccionario biográfico…*, cit., t II, pp. 346-349.

último gesto y la rápida transición de su color blanco en cárdeno oscuro ¿En qué consiste la ejemplaridad de esta pena? […] ¿En qué consiste su moralidad? […] ¿En qué consiste su justicia? […] ¿En qué consiste su necesidad? […] ¡Una débil mujer amarrada, conducida entre soldados y agarrotada públicamente! ¡Que espectáculo tan edificante!»[342].

Transcurrido apenas un año desde que el garrote segara la vida de Vicenta Sobrino, la descomposición interna del régimen se acelera irreversiblemente por obra de la política autoritaria y represiva de González Bravo. Todo lo cual, constituirá el preludio del fin del reinado de Isabel II, que concluirá tras el pronunciamiento del mes de septiembre de 1868[343].

342 PÉREZ Y DE MOLINA, M., *La sociedad y el patíbulo, impugnación de la pena de muerte*, Imprenta y Fundación de Manuel Tello, 2ª edición reformada, Madrid, 1878, pp. 4-7.

343 FONTANA, «La época del liberalismo», pp. 342-354.

5.
Valoración general

Los treinta y cinco años que comprende la España de Isabel II se desenvolvieron en una sociedad muy acostumbrada a convivir con la violencia, tanto si esta se originaba a consecuencia de la constante inestabilidad política que caracterizó a este período, como si surgía a causa de los efectos perniciosos de la delincuencia común. Por eso, no es de extrañar que la presencia de la tradicional pena capital sea un elemento habitual que en modo alguno desentonaba en dicho convulso paisaje social. Empero, esto no quiere decir que, durante este dilatado tramo de nuestra historia contemporánea, el movimiento abolicionista se mantuviera inactivo ante la persistencia de esta controvertida sanción punitiva; pues, lejos de ello, ha quedado acreditado que la labor de sus seguidores estuvo muy presente en este época mediante la formulación de sucesivas iniciativas legislativas, interesando con firmeza su abrogación total o parcial.

Como hemos podido ver, el comienzo de dicha combativa actividad legislativa no coincide exactamente con el del marco temporal que envuelve las tres partes en las que hemos dividido la España isabelina; ya que, durante la etapa inicial de dicho período, no hubo ninguna reacción digna de mención contra la aplicación de la pena capital. Ello parece que fue así, porque, la mayor parte de los esquemas de corte absolutista que configuraron la Justicia criminal, en la última fase del reinado de Fernando VII, prorrogaron su vigencia durante los diez años que componen la

España de las Regencias. De ahí que sea muy probable que, este continuismo legislativo, contribuyera a crear un estado general de conformismo y aceptación que explique la convergencia de aquella inacción con el evidente auge de las inclementes penas de muerte.

No obstante, la imperiosa necesidad de homologar el desfasado Derecho punitivo español con el del resto de los países de nuestro entorno justificó que, en la que hemos llamado etapa intermedia, al poco tiempo de ser coronada como reina Isabel II, dieran comienzo los trabajos para formar un nuevo Código penal. Siendo, precisamente, el estudio de dicho proceso de renovación jurídica el que nos ha permitido comprobar que el tema de la pena de muerte fue una cuestión que ocupó y preocupó a los encargados de su elaboración. Al punto que en el seno de las Cortes de mayoría moderada que propiciaron su aprobaron en 1848 se llegó a plantear y discutir la conveniencia de suprimir parcialmente la pena de muerte. Esta pretensión, que solo alcanzaba a los denominados delitos políticos, por una parte, puso de relieve que el ideario abolicionista estaba presente en España, si bien era bastante limitado y minoritario; y por otra que, aunque dichas propuestas principalmente las defendieron parlamentarios progresistas, entre los que destacan el senador Cabello y el diputado Gómez de la Serna, también fueron apoyadas por otros de talante conservador, como fue el caso del moderado conde de Fabraquer. Pero, dado que también hubo alegatos oponiéndose a la eliminación de la pena capital formulados por progresistas, como el suscrito por el senador vitalicio De Luzuriaga, todo hace suponer que las iniciativas abolicionistas que se promovieron respondían a planteamientos individuales y no a consignas dirigidas desde las respectivas formaciones políticas de los proponentes. Esta situación, unida a la reiterada desestimación de todas las proposiciones de contenido abolicionista que se plantearon, explica por qué este período, de claro predominio moderado, se cerrara sin que la vigencia de la pena de muerte corriera el más mínimo peligro. Tal es así que, inclusive, la opinión doctrinal en su conjunto se manifestó favorable a mantenerla en el catálogo penológico del Código penal, en tanto en cuanto, su aplicación se "economizara".

La última etapa del reinado de Isabel II se desarrolló entre la revolución de la *Vicalvarada* y la de la *Gloriosa*; y, en medio de ambos procesos revolucionarios, completada con frecuentes episodios cruentos que, en no pocos casos, fueron el pretexto para hacer uso y abuso de la pena capital. Por ello, es probable que este persistente clima de violencia fuese determinante para que las iniciativas contra la máxima pena se intensificaran. En efecto, el testigo de las tesis abolicionistas, que tan escaso éxito habían cosechado en la etapa precedente, ahora es recogido con ánimos renovados en las Cortes constituyentes de 1854, de mayoría progresista y unionista. En prueba de ello, al poco tiempo de iniciar sus sesiones, dicha Asamblea votó de forma unánime tomar en consideración el proyecto de ley, presentado por el diputado pro-

gresista Seoane, para eliminar la pena de muerte en los delitos políticos, tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la militar. Si bien, esta iniciativa no llegó a tramitarse, al quedar eclipsada por otra de tenor similar que se había introducido en el proyecto constitucional elaborado por una Comisión de siete diputados, compuesta por los progresistas Sancho, De los Heros, Valera, Lasala y Olózaga, y los unionistas Lafuente y De los Ríos Rosas.

Sin embargo, contrario a lo esperado, dicha propuesta abolicionista, que aspiraba por vez primera a dotar de protección constitucional a la supresión de la pena de muerte en los crímenes políticos, en vez de ser acogida sin oposición, fue materia de dos enjundiosas enmiendas. Destacando, entre ellas, por su contenido innovador la que promovió la minoría demócrata, defendida en su nombre por el diputado Figueras, que, fiel a su anunciado ideario político, proponía a la Cortes que el nuevo texto constitucional incluyera, sin ambages, la abolición total de la pena de muerte. Como era previsible, esta ambiciosa propuesta fue desestimada al no contar en la Cámara con el suficiente respaldo de votos. No obstante, procede significar que esta singular proposición fue apoyada por otros diputados que no pertenecían al partido demócrata. A continuación, el debate parlamentario prosiguió con otra enmienda de menor calado, suscrita por el diputado Moncasi, en representación de un grupo de diputados progresistas y demócratas, que pretendía eliminar el adverbio *meramente* de la base sexta del proyecto constitucional; porque, a su juicio, mantenerlo podía desvirtuar el alcance de la anulación de la pena de muerte prevista para los delitos políticos. Esta enmienda, corrió igual suerte que la anterior; y, en consecuencia, ni tan siquiera fue tomada en consideración por la Asamblea.

Seguidamente, la Cortes constituyentes entraron de lleno a discutir la base sexta del proyecto de Constitución, respetando la pretendida derogación parcial de la pena de muerte, tal y como había sido redactada por la Comisión dictaminadora; lo cual, dio pie a que los diputados Orense y Ruiz Pons, dando de nuevo voz a la formación demócrata, aprovecharan este trámite para, valiéndose de toda suerte de argumentos (jurídicos, históricos, filosóficos, religiosos, etc.), impugnar el texto original de la citada base y, en su lugar, proponer su sustitución por otro que dispusiera la abolición de la pena capital para toda clase de delitos; pero anunciando expresamente que, de no ser estimada su propuesta, votarían a favor de la supresión parcial de la pena de muerte, conforme estaba proyectada en la base en cuestión. Así, las cosas, esta novedosa base de contenido abolicionista, siguiendo los razonamientos esgrimidos por la Comisión constitucional, finalmente fue aprobada por las Cortes; y ello, a pesar de que el general O'Donnell, antes de la votación tuvo ocasión de precisar, en nombre del Gobierno, que la anulación de la última pena por delitos políticos no era aplicable a la clase militar.

Tras ser desestimada una última iniciativa, formulada por otro grupo de parlamentarios progresistas y demócratas, encabezado por el activo diputado Orense, que tenía como meta imposibilitar la suspensión de una serie de garantías constitucionales y, entre ellas, la recién aprobada base abolicionista, por considerarse la propuesta innecesaria al estar pendiente una futura reforma sobre el tema, el pleno de las Cortes constituyentes, una vez cumplimentadas todas las formalidades de rigor, procedió a aprobar el texto articulado de la nueva ley fundamental de 1856, en cuyo artículo 11 se contemplaba, por fin, la supresión de la pena de muerte por delitos meramente políticos. Sin embargo, como es sabido, una nueva e insuperable crisis política impidió que dicha Constitución obtuviera la correspondiente sanción real, por lo que la acordada disposición abolicionista jamás llegó a regir; y, en consecuencia, las ejecuciones capitales, fundamentalmente derivadas de los generalizados conflictos sociales, continuaron en aumento.

A partir este momento, los cambios registrados en la cúpula del poder en la última fase del reinado de Isabel II no favorecieron la aparición de nuevas tentativas legislativas. Sin embargo, como el pensamiento abolicionista seguía vivo, pero con las limitaciones propias que en aquellos años marcaban la situación política, aún se formalizaron dos propuestas más de interés. La primera, de mayor enjundia sin duda, fue presentada en las Cortes de 1859, por la minoría progresista y, en su nombre, sostenida por el diputado y militar, De la Torre, con la fundada esperanza de ser acogida, pues se trataba de la reproducción del mismo proyecto de ley que en 1854 había presentado el también diputado progresista Seoane, en demanda de la supresión de la pena capital en los crímenes políticos, tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la castrense, cuya tramitación entonces fue aceptada unánimemente por las Cortes del Bienio. Pero ahora las circunstancias políticas no eran iguales, y la actual composición de las Cortes, bajo el control de los unionistas del general O'Donnell, acuerdan, por abrumadora mayoría, no tomarla ni tan siquiera en consideración. La segunda iniciativa valorable la hallamos en la legislatura de 1867, donde ya sin la participación de progresistas, demócratas y unionistas, el último baluarte de la reina Isabel II, representado por el partido moderado, copaba la práctica totalidad de los escaños de las Cortes. En este contexto, poco propicio para propuestas abolicionistas, el diputado conservador, Nougués, promoverá a título individual la última reforma de interés para nuestra investigación. Aunque no se trataba de una proposición tendente a eliminar la máxima pena, merece nuestra atención por su claro contenido humanitario, pues, todo apunta a que el postulante, probablemente, sensibilizado por los frecuentes excesos que la violencia política generaba, con su propuesta buscaba reforzar los controles legales para limitar en la jurisdicción castrense la aplicación de las sentencias de muerte, tanto a paisanos como a militares. Huelga decir que semejante

medida no contó con el favor de esa Cámara, al punto que fue el propio Nougués quien decidió retirarla.

Si bien, como hemos comprobado, las iniciativas legislativas que se promovieron en la España isabelina, para anular de forma parcial o total la pena de muerte, esencialmente fueron articuladas por diputados de filiación progresista o demócrata, no por ello hay que presuponer que las concepciones de contenido abolicionista no habían prendido en la conciencia de otros diputados de ideología distinta. Buena muestra de esta realidad nos la ofrece el diputado moderado, Pérez de Molina, quien extramuros de la dinámica parlamentaria colaboró eficazmente, con su difundido ensayo contra la pena capital, a enriquecer el movimiento abolicionista español.

Finalmente, comentar que a la vista de la falta de resultados positivos que acompañó a todas las propuestas que hemos analizado, se podría sostener que la contribución del movimiento abolicionista durante el reinado de Isabel II en realidad constituyó la historia de un gran fracaso. Sin embargo, no podemos compartir este planteamiento por dos razonables motivos. El primero, porque tacharlas, sin más, de poco efectivas obedece a un juicio simple y apresurado; pues, no cabe duda, de que aquellas iniciativas abolicionistas, ahora desestimadas, a largo plazo sumaron para lograr el noble fin buscado; y, el segundo, porque defender dicho criterio sería un acto de notoria injusticia frente a todos aquellos que en circunstancias poco favorables enarbolaron valerosamente la bandera del humanismo para erradicar de nuestro ordenamiento jurídico la inútil, irreparable y cruel pena capital.

Apéndice documental

1º
VOTO PARTICULAR [FRAGMENTO] DEL VOCAL DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, DOMINGO MARÍA VILA Y FELIÚ, AL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 1845

Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación, legajo 4º de Código Penal, carpeta 15ª, documento único.

«Durante la discusión del Código penal, que la comisión encargada de formarlo tiene el honor de elevar al Gobierno de S. M., no siempre han sido unánimes las opiniones legales de los individuos que la componen […] en medio de esos puntos de discordancia […] se ha atravesado alguno de aquellos […] que afectan gravemente la sociedad á que van dirigidas las leyes […] entre los que adopta la comisión en que no he podido convenir se hallan […] Que se admita la

pena de muerte para los delitos políticos […] Los acuerdos que ha tomado la comisión así al adoptar aquella base […] me ponen en el compromiso de dar, aunque sea en pocas palabras, las razones que á mi opinion sirvieron de apoyo […] en la sesión de 24 de octubre de 1843, en que se presentó este punto para discutirse, diferente la opinión mia de la de los respetables miembros de la comisión hube de salvar en ella mi voto, porque según mis convicciones la conveniencia pública, los preceptos de la humanidad, el interés de los partidos todo se agolpaba apoyándome en contra de aquel principio, que tantas veces ha sido destructor de hombres eminentes.

De mucho valor son las razones con que la filosofía ha intentado desterrar enteramente de los códigos la pena de muerte, plumas esclarecidas las han cien veces reproducido, han hecho una revolucion notable en los principios generales de legislar, y una impresion marcada en el ánimo de los legisladores. No es á ellas á las que acudió mi razon, ni de repetirlas había de prometerse favorable resultado, cuando en la opinión ya formada no hallé inclinación á dispensar este beneficio, ni á los delitos políticos siquiera. Propuse sin embargo, que esta escepcion se estableciese, y en mi propuesta fui vencido: Oiganse algunas de las razones que me ocurrieron, sacadas principalmente de lo que ante nuestros ojos ha pasado.

La experiencia que desgraciadamente me acompaña, y que debo á la serie de vicisitudes que he corrido, me ha enseñado los fatales efectos de esta pena señalada en las leyes. Tiene ademas en su contra el recuerdo de la historia así antigua como moderna, nacional y estranjera, cuyas páginas se hallan salpicadas con sangre derramada en estos actos de venganza y de ira, en que los partidos han disfrazado con el nombre de fallos judiciales el desahogo, que han dado á sus pasiones, cebándose en su malhadado contradictor vencido.

Los que vemos afectados la larga lista de hombres distinguidos, que han muerto en este siglo por delitos políticos en los patíbulos de España, hombres que vivieran con nosotros y hubieran á su vez aumentado las glorias de nuestra patria; los que leemos la lista aun mas larga de los temerosos de esta pena han ido á dejar sus huesos en tierras estrañas, despues de haber enriquecido con su nombre la patria que les adoptára, ó de haber abochornado con su nombradía la que desagradecida les rechazaba, no podemos menos que empeñarnos en contener, en cuanto en nosotros quepa, esos chorros de sangre ilustre que enrojece nuestros cadalsos, y si nuestros esfuerzos no fueren felices, si no alcanzáren á destruir ese frenesí que descarría la buena razon, habráse á lo menos desbrozado el camino por donde los buenos principios se abren paso, haciendo por negar absolutamente la entrada en el código penal á una base de que con facilidad se abusa, por mas que el buen juicio se haya esforzado en desplegarla con buena fé, con madurez, con economía, con tino. ¡Ojalá que otros en su empeño sean mas que yo afortunados!

Ninguna de las cualidades, que caracterizan la bondad de las penas favorece la de muerte por los delitos políticos, fáltale hasta la de la ser ejemplar, única que de algún modo pudiera justificarla, privada como se halla del beneficio de la indemnización del daño que el delito causáre, y de la esperanza de la corrección del penado.

La sangre que han vertido nuestras víctimas políticas no ha servido á otra cosa que á fomentar ese espíritu de reacción y de venganza entre los correligionarios de la opinion del malogrado que la vertiera. No distingo partidos ni los nombro, en todos se han esperimentado los mismos efectos producidos por la misma causa, todos cuentan sus héroes desgraciados, y recorriendo nuestra península fácil es de hallar el monumento levantado en honor de la víctima del uno al lado de otro monumento levantado en honor de la víctima opuesto, empeñados

ambos en remitir á la posteridad con gloria sus nombres esclarecidos, y á presentar sus hechos como heróicos y dignos de imitar; en lugar de encontrarse con recuerdos de reprobación, que condenasen el delito político que causó el castigo. Aun los mismos, que en la fiebre de su pasión se ensañaron contra la persona de alguno de los que en el monumento yacen, le miran con indiferencia como no sea con respeto enfriada su cólera, y no se atreven sin rubor á reconocer, que contribuyeron á que desapareciera de entre los vivientes el que despojado del error político, que cometiera, habría sido de grande utilidad al servicio de su patria.

El cadalso donde muere el reo de delitos comunes es un lugar de degradacion, y tal vez de ignominia contra el que tuviese que sufrir tan grave pena, é inspira esa degradacion é ignominia no la idea de la muerte sufrida, sino la impresion moral que el crimen causa: el cadalso no aterra, no afrenta, no degrada al reo político, que sube á él impasible al considerarse inmolado á las pasiones, á la ira de sus contrarios, y desde aquel lugar cuenta el crecido número de amigos que le compadecen, que le aplauden, que le animan á resignarse al sacrificio inevitable á que su mala suerte le condujera, le prometen venganza y se preparan á obtenerla cumplida del agravio, que en su persona se le hace.

Hemos visto en nuestros días levantar hoy monumentos en honor de uno, y derribarlos mañana para hacer lugar al honor que á su mismo antagonista se preparaba. ¿Dónde está pues lo ejemplar? ¿Dónde la eficacia de esta pena? ¿Cómo contiene los delitos que se propone castigar, si promete el alto honor del apoteosis á los que suspiren arrostrarla con firmeza?

Torciendo los argumentos de la buena razon se ha querido suponer, que la pena se aplicaba en venganza de la sociedad ofendida, y de esta idea atrevida se ha deducido el derecho de disponer de la vida del ofensor. Esta interpretación es terrible, destruye los principios de justicia y perjudica los intereses de la sociedad. Exigen aquellos la reparación del daño causado por el delito, exigen estos que ponga la pena una barrera á los crímenes, que se propone contener. No satisface á lo primero porque no indemniza, no resarce los daños causados, halaga solamente al amor propio del ofendido, no satisface á lo segundo, que la pena que impone el odio no es barrera contra el delito de que la sociedad tanto se resiente. Esto con respecto á los delitos comunes. Buscar esta razon de la pena en los delitos políticos es dar suelta á las pasiones bastantes agitadas en esas contiendas. El ofendido en política nunca se cree vengado lo bastante si no hace desaparecer á su enemigo de la escena, por no ocuparse mas de su persona, de su importancia, de su influencia, y al medir la grandiosidad de la ofensa, solo halla la última pena justa, porque los límites de la venganza son muy difíciles de hallar.

Pudo ser en otros tiempos que la destrucción del jefe de un partido diese fin á los disturbios civiles, que se debatían entonces los intereses de una persona ó de una familia; mas ahora no son de entregar al verdugo los principios mismos que fermentan en la cabeza de la multitud, y la disponen á cometer esta clase de delitos. El efecto de la muerte de uno de los jefes se desvirtúa fácilmente en nuestros días con reunirse en torno de otro que le reemplaza, y al aplicársele este severo castigo se ha logrado el hacer desaparecer de entre los vivientes un hombre, y nada mas.

Es mas sencillo, es mas cómodo, poco talento ha menester el gobernar destruyendo los gobernados que le embarazan, ningún genio requiere, ninguna virtud el dar suelta á las pasiones tanto mas fáciles de satisfacer en cuanto el que se halla en el poder, sino tuviere á un tiempo la vara de la justicia en la mano, la tienen sus subordinados y parciales.

El miedo, que los enemigos inspiran al que no tiene arte para contenerlos, les hace desear la aplicación de la última pena, engañado con la ilusión de haber conjurado el peligro que les

amenazaba, sin convencerse que lo mas ha logrado el alejarlo, y que la misma crueldad de la pena lo aumenta al inclinarse la justicia intrínseca, quizás á favor del mismo que la sufriere; que la moralidad de las acciones penadas no siempre se juzga por la ejecución que de las leyes se hace. Esta ansiedad que nace de la idea de venganza de la sociedad, tan fácilmente admitida sin pensar su valor, encuentra tardía la administracion de justicia, sus trámites le parecen lentos, y se cree que no cumplen su deber los jueces si no aplican la pena mientras dura la impresion que se siente contra el acusado, como si la justicia tuviese que administrarse en la ira.

Mirado el castigo friamente y visto en toda su desnudez el sufrimiento del penado, es, cuando compadecido por el daño que la pena le causare se conoce todo el valor que ella tiene; sin embargo el castigo se aprueba al recuerdo de la gravedad del delito que con ella se compara, que hay una justicia interna inseparable de nuestra conviccion privada, que no inquiere lo que está escrito sino lo que es justo. Entonces la aplicación de la pena da los efectos que se buscan al imponerla, sin dejar remordimientos al juez ni recuerdos amargos á los que en ella intervinieron, solo entonces se reconoce su justicia y se acata el fallo. Tales efectos no son de esperar del principio de la venganza de la sociedad en el castigo de los delitos políticos, porque en ese miserable espíritu se presenta el dominio de la fuerza, no el imperio de la razon, los intereses del egoísmo, no la severidad de la justicia.

Acostumbrado el hombre al incierto resultado de sus acciones tiene en poco el temor de la muerte, la arrostra con serenidad lleno de confianza que podrá eludirla, y no respeta la ley que impone esta pena si no halla á la vez la inmoralidad del delito, que castiga. La pena supone un crimen, y si no puede convencerse que el hecho lo sea el valor de la pena será escaso, aunque vaya incluida en ella la muerte misma. De fatal ejemplo y de consecuencias aun peores es el dar libre desahogo á las pasiones políticas enfurecidas, que la sangre que vierte hoy el que se halla en el poder es sangre que se verterá mañana en represalia de la primera, y será todavía mas abundante, que la oscilación que causan las pasiones está en razon inversa de las oscilaciones naturales del péndulo y la nación mas civilizada al dejarse llevar por ese principio se convierte por grados en una sociedad de fieras.

Llegan los partidos hasta convertir en fiesta nacional el día en que sube al patíbulo alguno de los enemigos de su causa; gózanse en estos lúgubres espectáculos, y no pocas veces si no insultan al que ha caido en manos mientras camina al sacrificio, prorrumpen ante sus restos en imprudentes y descompensadas demostraciones de júbilo.

Qué responderíamos á un africano, de esos que danzan alrededor de las víctimas que inmolan á su venganza, viajero en Europa al preguntarnos ¿qué significan esos vivas espresivos, esa algazara que se levanta en torno de un delito políticos y de un cadáver?

La vista frecuente de sangrientas escenas políticas educa al pueblo en esos hábitos, crea la inclinacion á ejercerlos y sus costumbres se forman por lo que aprende el hombre en su niñez. Muy fuerte será la impresión que sienta al inculcársele la idea, que se halla con derecho á disponer de la vida del enemigo político que contra él se alzase. En el curso de los siglos la atrocidad de los delitos ha guardado comúnmente relacion con la atrocidad de las penas que las leyes han señalado: enséñesele al pueblo el derecho que motiva estas observaciones, que si desgraciadamente se encontrase con fuerzas para usar de él, miles de víctimas que lamentarse tuvieran, y quizás tendrían que llorarlo los que mas empeño llevaron en sostener aquella pena. La historia y los recuerdos que no he de traer aquí, justifican esta verdad. Despues que se admita en el códi-

go la pena de muerte aplicable á los delitos políticos; despues que se haya dado lugar á esa pena inconmensurable por delitos, cuya gravedad estima el mismo ofendido ó los que de él dependen, entre el interés del partido y el resentimiento del agravio, difícil es que en su aplicación se administre justicia con desprendimiento, despojándose de la influencia de las circunstancias, que casi nunca favorecen al culpado, y que embarazan al juez que halle en las leyes una pena que no puede medir sin reemplazarla por otra.

Y es además irremisible, carácter que por sí solo basta á rechazarla de los delitos políticos. Será alguna vez que á los delitos comunes se aplique esta gravísima pena, y será despues de haber corrido todos los trámites el proceso, oído al acusado con detencion, dado tiempo á sus descargos, y resuelto con la frialdad que nace de no haber mas interés, que el deseo de administrar recta justicia. Cometerán algunos errores los jueces, que hombres son y hombres los cometen; y si bien la reparacion de haber aplicado injustamente esta pena no será posible el encontrarla, las precauciones tomadas á impedir que esto ocurra, tal vez se considerarán de algún valor en compensacion del daño que ocasiona. Por desgracia, al juzgar los delitos políticos ocurre este error todos los días; recuerdos tenemos de personas que han sufrido el rigor de este castigo, y sin embargo eran inocentes, y los jueces los creyeron culpables vendados sus ojos con la impresion del momento, ó con la precipitacion del fallo, ó con el respeto que el poder les infundiera, ó con la fuerza de la opinion, ó con el temor de ser considerados menos severos que las circunstancias del momento exigieran. Todo, todo afecta en tales ocasiones la imaginacion del juez mas recto, aun contra su voluntad, que no es el hombre siempre dueño de precaverse contra la atmósfera de circunstancias que á su alrededor se forma, y obra á menudo sin advertir que se halla por las mismas arrastrado. Hemos visto preocupada á veces la imaginacion del juez con la idea fija de la importancia del delito político y con la ansiedad de hallar un delincuente, olvidarse que debía para su atención en la relacion concreta que hubiere entre el acusado y el hecho, y pasar ligeramente sobre la minuciosidad de las pruebas, que condugesen á encontrar la certeza de la criminalidad personal del que estuviese envuelto en el proceso; y es todavía mas fácil de ocurrir en cualquier juicio instruido en virtud de los privilegios, que las leyes concedían á las pruebas de estos delitos.

Repugna á los sentimientos de humanidad el que desgracias de esta clase sean á menudo repetidas; y repugna también á los sentimientos de justicia, que no haya compensacion por el daño que de las sentencias resultare.

Siempre que en la designacion de las penas se escediese un grado de la severidad necesaria á reprimir la inclinacion al delito ó á impedir la accion del culpable se ejerce un acto, que rebaja el legislador del elevado puesto en que se halla, que si es justo salvar á la sociedad y darle toda la proteccion, justo es también respetar los derechos que al hombre son debidos.

¿Se dará bastante proteccion suprimiendo esta pena? ¿Podrán reprimirse estos delitos con otra pena que la sustituya? Al que tiene á su cargo la formacion del código penal le es solo permitido ocuparse de la proporcion y analogía que debe haber entre la pena y el delito, y de los efectos que debe causar en la sociedad la ejecucion de la que propone. Por ello creo, que no debe entrarse en los medios mas principales de contener los delitos políticos, que descansan en el comportamiento del gobierno interesado en la felicidad de los pueblos, y en el decidido empeño de estorbar el que esos delitos lleguen á formalizarse seriamente; medios mas eficaces para la proteccion de la sociedad y la represion del delito, que la pena mas severa. Dejando á los

políticos razonar sobre estos estremos búsquese la proporción, la analogía y los efectos que debe causar la pena que propongo en reemplazo de la de muerte. Dos cosas importantes se promete la sociedad la pena que á tales delitos aplicarse debiera: es la una ligar con la fuerza la acción del penado, é impedir de hecho que pueda reincidir en su delito; es la otra que sea análoga, que afecte precisamente á esta clase de criminales, haciendo que el temor del sufrimiento les retraiga de lanzarse á cometerlos. Felizmente la nación española tiene islas lejanas, posesiones ultramarinas distantes y de embarazosa y difícil comunicacion con los puntos en donde los delitos políticos suelen tener morada. Con el solo hecho de remitirles á aquellas remotas tierras cortaran los culpables las relaciones que con la península les unieran; oblígueseles además á la permanencia en ellas por algún tiempo, que la ausencia es un auxilio poderoso para impedir la acción del reo político, y la costumbre de hallarse fuera de los negocios públicos crea nuevos hábitos, y no pocas veces nuevos intereses, que llagan hasta clamar el calor y á modificar los deseos, que les animarán al aplicárseles la condena.

De otra parte influye no poco en la ejecucion de los delitos políticos el deseo del mando, la ambicion de las personas que suelen cometerlos; déseles pues un remedio análogo que les corrija, y la humillacion, la privacion de medios, la destruccion del prestigio del que los cometiera será poderosa para contenerlos, que una pena que arrostrándola satisface en parte su ambicion con el renombre que les diera. Grave pena sufre el hombre acostumbrado á vivir en el seno de su familia rodeado de amigos, considerado de lo mas distinguido de la sociedad, lleno de comodidades y de respetos al trasladársele á las sociedades de una isla, y obligársele á pasar allí los años sujeto á mil privaciones y necesidades, que no puede satisfacer, alejado de todo aquello que le era grato, y que hacia lo mas deleitoso de su vida. Esto con referencia á un hombre de influencia y de poder, mas si fuese uno de esos desgraciados, que se arrojan como ejecutores sin saber á dónde su acción les lleva, con mandársele á esas islas queda nula enteramente su accion, pues que es el instrumento que se arrebata de la mano, que hábilmente lo manejara, Sin el apoyo de los primeros, los delitos políticos no se cometen.

Débil fuera la razon, que se opusiera en contra de esta idea, fundada en lo costoso que seria preparar esos establecimientos. La pena de muerte es por sí misma mucho más dispendiosa, que los mezquinos gastos requeridos á disponer la que propongo. La pérdida de un solo hombre es importante, si es la pérdida de un hombre eminente es mayor todavía, y sobre no guardar proporcion con el delito, los servicios que de uno solo la patria se privára son de mas valer que los pocos millones que en preparar estos locales se invertieran; y en una nación, que cuesta 1,200 millones de reales de presupuesto con 40 millones de sobrantes en él, es miserable la cantidad que necesitarse puede al lado del valor de sus rentas, de la grandiosidad del objeto, y del bien que de invertirla se hiciere.

Finalmente si al resolver cuestion de tanto peso, en lo que la razon ocupa su lugar al lado de los intereses positivos de la sociedad, entrasen por algo los latidos del corazon y los sentimientos nacidos de la religion y de la humanidad no se eche al olvido, que el fanatismo mas que la depravacion suele influir á que estos delitos se cometan, que hay un deber en corregir no en destruir al que estuviese fascinado, y que con aplicar la última pena por delitos políticos se hace imposible el único galardon digno de obtenerse en las discordias civiles, que es el placer que se siente en labrar la felicidad de los vencidos […] El gobierno de S. M. en su sabiduría, hará de estas mis observaciones el uso que estime conveniente.= Madrid 23 de diciembre de 1845.»

2°
DEBATE [FRAGMENTO] CELEBRADO EN LAS CORTES DEL BIENIO PROGRESISTA, RELATIVO A LA ENMIENDA, PRESENTADA A LA BASE 6.ª DEL PROYECTO CONSTITUCIONAL POR LA MINORÍA DEMÓCRATA, PROPONIENDO LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE, QUE FUE DEFENDIDA POR EL DIPUTADO SR. FIGUERAS

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes,
de 3 de febrero de 1855, Apéndice 5° al núm. 75, p. 1885.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 153,
de 14 de mayo de 1855, pp. 4747-4749.

«El Sr. PRESIDENTE: Se procede a la discusión de la base 6.ª de la Constitución […] Se leyó dicha base y una enmienda del Sr. Figueras y otros […]

> *Pedimos á las Córtes se sirvan admitir la siguiente enmienda á la base 6.ª, título 1.º del proyecto de bases de la ley fundamental que se discute:*
>
> *Queda abolida la pena de muerte, á la cual se sustituirá la de deportación perpetúa á nuestras colonias de Asia.*
>
> *Palacio de las Córtes 31 de enero de 1855. =Estanislao Figueras. =Eduardo Ruiz Pons. =José María Orense. =Miguel Ferrer Garcés. =Eugenio Garcia Ruiz. =Alvaro Gil Sanz. =Benito Alejo Gaminde […]*

Dijo en su apoyo

El Sr. FIGUERAS: Sumamente confiado me levanto á defender la enmienda que he tenido el honor de proponer á la base 6.ª del proyecto constitucional que se discute. Esta Asamblea, expresión genuina de la voluntad del país, desea las reformas, y ha planteado algunas; y si no hemos ido tan adelante como seria de desear en el camino del progreso, nadie puede dudar que ha sido porque en las circunstancias de la época, en la disolución social que amenaza á toda Europa vacilan los ánimos más fuertes y sobrecoge el temor á los hombres valientes. Todos conocen, todos ven que el presente es malo; pero todos temen penetrar en el terreno desconocido de reformas aun no ensayadas. A esto atribuyo la marcha incierta y recelosa de esta Asamblea, de ninguna manera á falta de patriotismo en los individuos que la componen. La mayoría de esta Cámara se compone de hombres que han sabido padecer once años por la libertad, y

estos hombres no pueden ménos de vivir y morir rindiendo culto á la noble idea del progreso indefinido.

Culpa es, pues, de las circunstancias, no de los hombres, si en este periodo, en mi concepto de transición que atravesamos, no ha tenido este Cuerpo soberano el valor y la energía que á mi juicio se necesitaban.

Esta Asamblea, señores, ha manifestado ya en más de una ocasion los sentimientos generosos que la animan. La proposición que trataba la abolición de la pena de muerte por delitos políticos fue tomada en consideración casi por unanimidad: la que abolia los derechos de puertas y consumos tuvo igual suerte, y otras muchas de tendencia análoga ó parecida, que no recuerdo y por lo mismo no las enumero, arrastraron tras de sí una mayoría respetable. Confiado, pues, debo estar en que no me será rechazada esta enmienda, que no perjudica á nadie y que es altamente civilizadora y humanitaria.

No crean los Sres. Diputados que vaya á exponer ahora todas las razones que militan en favor de la abolición de la pena de muerte; tampoco esperen que diga nada nuevo sobre un asunto tan interesante. No creo que haya uno solo de los que nos sentamos en estos bancos que no haya meditado con detenimiento sobre esta cuestión, que para mí es capital, capitalísima. No espere tampoco la Asamblea que vaya á decirle nada nuevo, repito, después de lo que han dicho tantas y tan sabias voces, tantas y tan sabias plumas; sería una jactancia, y una jactancia imperdonable, más en mí que en cualquier otro, el que me atreviera á suponer que era posible traer á este debate algo de mi propia cosecha. Me limitaré, pues, á repetir las razones más capitales, ó las que considero más capitales, porque me han hecho más fuerza, con el temor, sin embargo, de que no sean las más valederas.

Las primeras cuestiones que se presentan al examen con detenimiento la pena de muerte son las de si la sociedad tiene ó no derecho á castigar; en qué se funda este derecho, y cuál es su origen, su razon inductiva, su razon de ser. Yo, en tesis general, niego á la sociedad el derecho á castigar, si antes no ha proporcionado á todos los asociados una educación igual bastante á conocer y distinguir el bien del mal; si antes no les ha proporcionado á todos los medios de ganarse la subsistencia, de subvertir á las necesidades de la vida. Si esto no se hiciera, si esto se negara, y se concediera al propio tiempo el derecho de castigar, vendríamos á caer en el absurdo de que hay disposiciones innatas é inevitables para el mal, y mi corazón rechaza por impía esta creencia. Sentado esto, que yo no creo que nadie pueda negar; sentado que no hay inclinaciones innatas al mal, es preciso convenir en que no concediéndoles como no les concede la sociedad á todos los asociados los medios de atender á sus necesidades; que no poniéndoles como no les pone á cubierto de la miseria; que no facilitándoles como no les facilita educación bastante á lo ménos á distinguir el bien del mal, comete una injusticia que está clamando á Dios y á los hombre cuando condena á un delincuente á la última pena.

Sin embargo, es indudable que estando como está la sociedad encargada de poner á cubierto los intereses y la vida de todos los asociados, tiene el derecho de castigar, y este derecho se funda en la obligación que he dicho antes de velar por los intereses y la seguridad de todos. Y entonces es lógico que castigue al delincuente que daña deliberadamente á un tercero. Al cumplir con este deber ejerce un acto de justicia, pues justo, altamente justo es que se castigue al que llevado de sus pasiones perjudica á un tercero.

Pero este derecho de castigar está limitado. Entre muchas limitaciones, tiene dos esenciales, dos sobre las cuales nadie puede cuestionar. Es preciso que el castigo que se imponga sea á los ménos reparable, para en caso de que se hubiese equivocado la justicia humana y fuese necesario enmendar su fallo; es indispensable que sea también reformador, es decir, que pueda corregir al criminal. Estas son las limitaciones que ha puesto á la sociedad el dedo de Dios, y que ésta no puede salvar de ninguna manera, por lo mismo que no puede salvar el mar los límites que le fueron señalados. Y yo pregunto de buena fé á los Sres. Diputados; ¿concurren estas circunstancias en la pena de muerte? De seguro no habrá uno solo que diga que sí. Y esto es claro; analicemos el carácter y las circunstancias que esencialmente, repito, necesita la pena de muerte para ser justa, y veremos que no concurren ninguna de ellas. ¿Puede repararse el castigo que se impone cuando se aplica la pena de muerte? De ninguna manera; quitada la vida á un hombre, no puede el cuerpo social devolvérsela. A nadie le es dado hacer milagros: Jesús, con ser persona divina, no lo hizo más que una vez, y la sociedad no lo podrá hacer ni una vez siquiera. ¡Y cuántos milagros no tendría que hacer la sociedad si hubiese de volver á la vida á todos los que han sido ejecutados injustamente! Los fastos judiciales están cuajados de ejemplos horribles que prueban la falibilidad de los juicios humanos. Ahora mismo, uno de mis más queridos amigos, que se sienta aquí, me dice por lo bajo que en Francia, en ese país donde son tantas las pruebas que se exigen para imponer esa pena, donde son tan parcos en imponerla, ha ocurrido un hecho de esta clase.

No hay ningún Diputado, ni puede haberle, que no sepa que ha habido, que hay hoy aún, como lo prueba el ejemplo que se me acaba de citar, víctimas innumerables sacrificadas en aras de esa diosa cruel, ese Saturno de la época, llamada vindicta pública. Y, señores, despues de esto, ¿habrá nadie que se atreva á sostener la pena de muerte para toda clase de delitos?

Pero me dirán los partidarios de esa odiosa y odiada pena: si no corrige al criminal, corrige á los que intenten seguir sus pasos; detiene, espanta á los que presencian su desastroso fin. Yo niego esta aserción; digo que es falsa, completamente falsa; digo más; que produce efectos enteramente opuestos. Que me citen los apologistas de la pena de muerte un solo criminal que haya dejado la carrera de los crímenes solo por el temor de esa pena; uno que haya vuelto á la vida honrada por presenciar una ejecucion. Pues qué, ¿no vemos el sentimiento que anima á los que van á presenciar esas bárbaras escenas? ¿No sabemos que van por mera curiosidad, como se á los toros, al teatro ó á otro cualquier espectáculo? ¿No sabemos que á la faz del patíbulo, cuando está exhalando quizá el último aliento el criminal, se está robando allí y cometiendo toda clase de delitos? Señores, no hay que dudarlo, la pena de muerte no ha corregido nunca á nadie; y si no, examinad la estadística criminal, y veréis los delitos que ha habido siempre, que han ido en progresión creciente á pesar de esa pena. Ocurre otro fenómeno también.

Observad, examinad cuidadosamente el sentimiento impreso en los rostros de la muchedumbre al aparecer el reo en el patíbulo. Por atroces que sean los crímenes que se le imputen, por hostil que le haya sido antes la opinion, en aquel momento crítico todo sentimiento de odio desaparece súbitamente, dando lugar á una viva y profunda compasion.

¿Po qué? Porque el pueblo, con ese instinto maravilloso que no yerra nunca, comprende que lo que va á hacerse en nombre de la justicia humana es, no vacilo en decirlo, inicuamente injusto.

Esos espectáculos, tan frecuente por desgracia, endurecen el corazon, le acostumbran á presenciar indiferente esas escenas sangrientas, y exigen todo sentimiento de compasion y fraternidad hasta el punto, que uno de los más grandes deberes de todo demócrata es el predicar de continuo, si fuese desechada esta enmienda, con el mismo fervor que Cobden predicó su célebre liga, para que ninguno de los que apetecen el honroso dictado de demócrata, asista, ni permita á los que estén á sus órdenes que asistan á presenciar esas bárbaras ejecuciones. Aunque fuese desechada esta enmienda, podremos lograr que se realice si se pudiese conseguir que nadie presenciase esas escenas, que se cerrasen las ventanas y balcones del tránsito, en una palabra, que no hubiese más espectadores que el verdugo y demás que la ley envía allí; es bien seguro que esa pena caería por su propio peso, sin que hubiese Gobierno alguno, aunque fuese el de la Inquisicion, capaz de sostenerla.

Es para mí, señores, tan importante este adelanto que, lo confieso con franqueza, si lograse que las Córtes aprobasen esta enmienda, me daría por muy contento y bendeciría la revolución de Julio, aunque en política no adelantásemos más que lo que la Comision propone, que es bien poco por cierto.

Voy á prevenir un argumento que tal vez me haga la Comision.

Se dirá acaso que es bastante adelanto en nuestra época la abolición de la pena de muerte para delitos políticos; pero á eso contestaré yo que la abolición de la pena de muerte solo para los delitos políticos es un privilegio odioso que recae sobre las clases acomodadas. Esta idea no es mía: Cormenin, publicista célebre de nuestra época, ha probado esto hasta el punto de que quede fuera de toda duda.

Uno de nuestros compañeros, ó que lo ha sido hasta hace poco por lo ménos, el Sr. Ribot, publicó un luminoso trabajo en que probaba tambien hasta la evidencia que el derribar el cadalso para delitos políticos era dejarse levantado solo para las clases pobres; y esto es tan cierto, que no puede ponerse en duda, porque convenid, como no puede ménos de convenirse, en que no existen disposiciones innatas al mal, fuerza es convenir tambien en que la mayor parte de los crímenes nacen de falta de educación ó de escasez y miseria. ¿Es al rico, por ventura, al que le faltan medios de proporcionarse educacion? ¿Es al rico á quien faltan medios para cubrir las necesidades de la vida? Indudablemente no. Las clases acomodadas, pues, no están tan expuestas á delinquir comúnmente; al paso que esas mismas clases media y elevada de la sociedad son las que más se ocupan de la política, ya por el deseo de hacer prevalecer una idea, ya por proporcionar á la sociedad la mayor suma de bienes posibles, ó por amor propio, vanidad ú otra porción de pasiones que difícilmente cabrian en el corazon del pobre. Es evidente, pues, que las clases acomodadas delinquen con más frecuencia en política que las pobres; que éstas, por el contrario, incurren más en delitos comunes; luego al abolir la pena de muerte para solo los delitos políticos, la deduccion lógica que debe hacerse es que la dejamos permanente ó establecida casi exclusivamente para los pobres; esta es la consecuencia legítima, ó no hay lógica en el mundo.

He dicho antes que el derecho de castigar está limitado, y aun he indicado algunas de sus limitaciones. Otra de ellas es que la pena sea reformadora. Yo pregunto: ¿la pena de muerte puede reformar? Ya he dicho al principio que no, y lo repito ahora. ¿No seria, pues, más justo, más lógico, más humanitario, el que se sustituyese á esa pena la de reclusión perpétua, que puede repararse en el caso, demasiado frecuente por desgracia, en que la justicia humana se hubiese

equivocado? ¿No se lograría con esto que el castigo fuese reformador? Yo creo que sí; porque el criminal, solo, entregado al trabajo y á la reflexion, bajo un sistema penitenciario distinto del que tenemos hoy, que no sirve más que para fomentar el crimen, pudiera adquirir un verdadero arrepentimiento, y su ejemplo servir de enmienda á los demás. Así se pondrían tambien á cubierto los intereses y las vidas de los asociados, pues que se segregaba al criminal de la sociedad, imposibilitándole para toda acción dañina. Y esta reflexion que yo me hago, ¿no se la habrán hecho todos y cada uno de los Sres. Diputados?

Deben habérsela hecho todos los Diputados y hombres públicos de aquí y fuera de aquí; y así, no alcanzo por qué subsiste en nuestros Códigos esta pena; no sé por qué no se ha arrancado de ellos con ignominia. La única explicacion que me doy es que esos hombres que representan muchos intereses, esos hombres que tienen un influjo pernicioso á todo adelanto, ciegos en su cruel egoísmo, encomiendan regularmente al verdugo la custodia de su tranquilidad. Pero vosotros, Diputados, á quienes conozco y sé lo tolerantes y pensadores que sois, no consentireis que continúe en vuestros Códigos esta prescripción atroz. Abolidla, y esta Nación á quien los extranjeros llaman bárbara é incivilizada, se pone de un salto á la cabeza de la civilización; proscribidla, y no temais; los bienes no pueden producir más que felicidades. Pero cuando se trata de introducir una reforma en un Estado, el gran trabajo que hay que hacer es tranquilizar á los hombres naturalmente miedosos; al contrario, los que combaten las reformas crean fantasmas para que los cobardes se amedrenten y bajo el imperio del miedo continúen y se perpetúen los abusos. Y la prueba de esto es, que nadie hasta ahora con razones, con razones que no hayan sido victoriosamente contestadas, ha defendido la pena de muerte. Para alentar, pues, á los tímidos, no hay más que citar dos ejemplos. El Duque de Toscana abolió en sus Estados, no hace mucho tiempo, la pena de muerte; fue á últimos del siglo pasado; y todos los enemigos de las reformas en aquel país pronosticaban grandes males; nadie ménos que una disolucion social. ¿Y qué sucedió? Los crímenes, en vez de ir en una progresión ascendente, fueron decreciendo; y es seguro que si hubiera continuado aquella ley, Toscana seria hoy el pueblo donde fuera menor la estadística criminal.

La escuela democrática es hoy la que puede decir que ha sido la primera en haber pedido constantemente la abolicion de la pena de muerte. Presentes están en la memoria de los Sres. Diputados las elocuentes palabras dichas por Víctor Hugo, tanto en sus composiciones filosóficas como con una meeting á que dió lugar una ejecución en la isla de Jersy. Unas y otras producciones han corrido por todo el mundo sin que se haya levantado una voz á combatirlas, y eso que todas las tiranías quieren y defienden la pena de muerte. Y esto, ¿qué prueba? Que las utilidades, que la conveniencia y la razon de la abolicion de la pena de muerte son incontestables.

También se ha ensayado en otros países, en la época moderna, la abolicion de la pena de muerte para todos los delitos. La Asamblea de Francfort, en los Estados de Alemania; esa reunión de todos los sabios de Alemania, que es el pensamiento y el cerebro de la Europa, no vaciló ni un momento en abolir la pena de muerte.

La Asamblea romana, en la cual nadie me puede negar que tenía una influencia omnímoda ese á quien se llama demagogo por los partidarios del absolutismo, Mazzini, y á quien nosotros levantamos un altar en nuestro corazón, porque hace cuarenta años que lucha por la

libertad de su Patria y el bien de humanidad, abolió la pena de muerte. ¿Y sereis vosotros ménos humanitarios, Sres. Diputados? No lo creo ni lo espero.

Últimamente, señores, hay un argumento que ninguna sociedad cristiana puede rechazar, que ninguna Asamblea católica puede ménos de escuchar. El Decálogo, que no es más que la ley natural, ley que había olvidado el ingrato pueblo de Israel, y que el dedo de Dios escribió en tablas de piedra en la cumbre del monte Sinaí, de truenos y rayos coronada, contine un precepto que dice no matarás. Este precepto es explícito y terminante; no excluye á nadie; habla lo mismo al ente colectivo llamado sociedad, que al individuo. Así, pues, magistrados, jueces, encargados de administrar justicia, rasgad vuestras togas, romped vuestras plumas antes de poner la firma en una sentencia de muerte. No desoigais la voz de Dios, teniendo presente que el que la desoye es siete veces réprobo.

En todos los países más civilizados, los hombres precursores, todos están por la abolicion de la pena de muerte, y esto es para mí una prueba evidente de que la pena de muerte se abolirá, aunque en el día no consigamos que se nos atienda. No puede venir el Redentor sin que antes haya un Bautista que sea su precursor.

O'Connell que era, como saben muy bien los señores Diputados, el jefe del partido irlandés, instituyó una sociedad, que aun existe hoy, para la abolicion de la pena de muerte; los afiliados en esa sociedad crecen cada día, y como el mecanismo del sistema inglés obedece á la opinion pública, indudablemente triunfará, y veremos desterrada de su Código esa pena ignominiosa.

Por último, señores, esta enmienda que propone la abolicion de la pena de muerte para todos los delitos, merece, cuando ménos, ser tomada en consideración. La vida de los hombres no vale tan poco, para que impremeditadamente se diga: no há lugar á deliberar. El voto negativo de la Asamblea diría que no quería discutir sobre un asunto de tanta importancia; el voto negativo de la Asamblea diría que huia de la discusión; el voto negativo de la Asamblea diría: los que sostienen con buena fé, como yo lo reconozco, pero con error, la pena de muerte, no se creen con bastantes fuerzas, con bastantes razones para arrastrar tras de sí la mayoría de la Cámara.

Tómese, pues, en consideración la enmienda, y despues de haber meditado sobre ella con pulso y detenimiento, decida lo que quiera la Representación del país, que yo espero tranquilo su fallo.

Concluyo con decir á la Asamblea una cosa que le importará muy poco, pero que á mi me importa mucho. He dicho que la abolicion de la pena de muerte, limitada á los delitos meramente políticos, constituía un privilegio; sin embargo de esto, la votaré, aunque mi enmienda sea rechazada, que no lo espero; pero la votaré, porque no quisiera que algún día pesase sobre mi conciencia la sangre de algun mártir de sus opiniones políticas.»

3º
DEBATE [FRAGMENTO] CELEBRADO EN LAS CORTES DE LA LEGISLATURA DE 1859, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE POR DELITOS POLÍTICOS, PRESENTADA POR LA MINORÍA PROGRESISTA, QUE FUE DEFENDIDA POR EL DIPUTADO SR. DE LA TORRE

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 68, de 4 de marzo de 1859, p. 1190.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 113, de 9 de mayo de 1859, pp. 3098-3099.

«El Sr. LATORRE (D. Cárlos María de): Pido la palabra, Sr. Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Para qué, Sr. Diputado?

El Sr. LATORRE (D. Cárlos María de): Para apoyar la proposicion de ley que tengo presentada sobre abolicion de la pena de muerte por delitos políticos.

El Sr. PRESIDENTE: Se procederá á la lectura de dicha proposición.

Se leyó la proposición de ley del Sr. Latorre (Don Cárlos María de), relativa á la abolicion de la pena de muerte por delitos políticos […]

A LAS CORTES. Nada hay mas digno para el legislador que poner en armonía las leyes con el espíritu de la época en que estas se han de aplicar, y además de la parte que debe tomar en la iniciativa de ellas, misión sagrada que recibe de los pueblos, debe aspirar á llenarla dedicando todo su interés á promover su reforma, en cuanto sea beneficioso á la humanidad y tienda á que desaparezcan de nuestro país para siempre las costumbres bárbaras que por desgracia tienen divididos con una valla de sangre á sus partidos políticos. Por estas consideraciones, el Diputado que suscribe tiene la honra de someter á la deliberacion del Congreso la siguiente

PROPOSICION DE LEY.

Artículo 1.º Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos.

Art. 2.º En los casos en que el código penal ó la Ordenanza militar señale dicha pena, se aplicará la deportación, la relegación, ó la reclusión.

Art. 3.º No están comprendidos en el art. 1.º los homicidios alevosos, aun cuando hayan sido perpetrados por motivos políticos.

Palacio del Congreso 3 de Marzo de 1859. =Cárlos María de la Torre. =P. Calvo Asensio. =Mariano Ballestero. =J. Peris y Valero. =Vicente Rodríguez. =Cipriano Segundo Montesino. =José María Vera […]

En su apoyo, dijo

El Sr. LATORRE (D. Cárlos María de): Señores, al tener el honor de someter á la consideración del Congreso la proposicion de ley que se acaba de leer y que voy á apoyar en breves palabras, no me ha guiado absolutamente el espíritu de singularizarme, ni la idea de presentaros ninguna cosa nueva. ¿Cómo podía yo figurarme que esta lo fuese, cuando es cuestión tratada por grandes publicistas, debatida en los Parlamentos, que está en la conciencia de todos vosotros, que como yo deseáis la abolicion de esa horrible pena, aplicada siempre sin fruto, y cuando estoy seguro de que vuestra conciencia os dice, como me dice la mía, que el cristianismo no puede decir, que es el defensor de los preceptos divinos mientras falte á lo escrito por el mismo Dios cuando dijo "no matarás", é ínterin no la suprimamos para siempre? Repito, señores, que no aspiro á decir nada nuevo; me lleva solo el deseo de que conste que, puesto que el partido del progreso es el que ha iniciado siempre esta cuestión en los Parlamentos y el que la ha sostenido con más empeño, creo es un deber de los que nos sentamos en estos bancos tenerla siempre viva y traerla al debate, para que ocupándose de ella voces más autorizadas que la mía, pueda llegar el día, que llegará, no lo dudéis, de que consigamos el triunfo de nuestra constancia, viendo entre nosotros abolida esa horrible pena como imperiosamente reclama la humanidad.

Señores, soy partidario de la abolicion de la pena de muerte para toda clase de delitos; más no debéis esperar que yo os haga presentes en este momento las razones que tengo para alimentar este convencimiento, porque en la proposicion que os presento en el día de hoy me concreto solo á pediros la abolicion de la pena de muerte por delitos políticos; y sin que mi voz sea suficiente para convenceros de la utilidad, de la equidad y de la conveniencia de la adopcion de esta medida, creo que me haréis la justicia de concederme rectas intenciones, y el deseo tambien de que se trate en estos momentos esta cuestion, en que si los partidos políticos se disputan la bondad de sus principios lo hacen todos en el terreno legal, hay tranquilidad completa en el país, y con calma y no en momentos de efervescencia política se deben tratar estas cuestiones.

Las Córtes Constituyentes, á las que tuvimos el honor de pertenecer 73 Diputados, que tenemos hoy el de sentarnos en estos bancos, á las que pertenecieron también 31 dignísimas personas que hoy ocupan un asiento en el Senado, más otras dos personas que han desaparecido de entre nosotros, como son los señores Heros y Oliver, trataron en dos ocasiones de esta cuestion. La primera fue por consecuencia de una proposición de ley presentada por el Sr. Seoane, y que fué tomada en consideración por unanimidad por todo el Congreso reunido en aquel dia; y la segunda, al discutirse la base sexta del proyecto de Constitucion presentado por la Comision nombrada al efecto; Comision compuesta del Sr. Heros, nuestro dignísimo compañero el Sr. Olózaga, los Sres. Sancho, Rios Rosas y Lafuente, y además de dos dignos Diputados que hoy no pertenecen á ninguno de los Cuerpos Colegisladores, y son los Sres. Valero y Lasala. Detenerme yo á haceros conocer aquí, ó á examinar, aunque fuese ligeramente los luminosos discursos que se pronunciaron entonces, es decir, al discutirse la base sexta, tanto por los Sres. Diputados que tuvieron por conveniente presentar enmiendas, como por los que atacaron la base y por los que la defendieron, seria demasiado prolijo, y por tanto no voy á referiros cuanto se dijo en aquella

solemne sesion; solemne, señores, como lo fueron todas las de las Córtes Constituyentes, pues aun cuando el espíritu de partido quiera zaherirlas, la razon fría las hace hoy justicia, y la historia se la hará mañana. En el Diario de las Sesiones encontrarán los Sres. Diputados, como lo ha visto el país y lo ha reconocido, que ninguna de aquellas personas se opusieron á la adopción de esta medida, y que los impugnadores de ella lo hicieron solo en el concepto de la oportunidad. Yo quisiera saber ahora, señores, cuándo llegará en España la oportunidad para lo que sea beneficioso. Creo, señores, que hoy es la oportunidad de tratar este negocio; y lo creo por las razones que brevemente expondré al Congreso.

La muerte de un enemigo político, señores, ¿se cree que es suficiente para evitar las revoluciones? En el estado á que ha llegado la sociedad, ¿es más que la muerte de un hombre? Verificada la sentencia que se impone á uno que toma parte en cualquiera cuestion política, el partido á que pertenece la persona que sufre la condena, se irrita; jura la venganza; y si desaparece uno, se presentan mil á ocupar su puesto, con el deseo siempre, si no de perecer, porque el espíritu de conservacion está suficientemente arraigado en el corazon del hombre, de aspirar á la gloria de ocupar el puesto que aquel ha dejado, y con la idea de dar á conocer su lealtad y su consecuencia, y de sufrir si necesario fuese en la defensa de sus principios la misma suerte que su compañero.

Lo sensible es, señores, que cada vez se van irritando más los ánimos; naturalmente va separando á uno y otro partido un lago de sangre; y esto hace que sea imposible la templanza y que se llegue nunca al terreno del derecho y de la legalidad; y por el contrario, esto es causa de que vengan las vías de hecho, y que desgraciadamente, sucumbiendo las personas de más valía, despues de haber prestado grandes servicios al país, que se desconocen en aquellos momentos, sean sacrificados al espíritu ciego de partido. Ahí teneis, Sres. Diputados, los nombres ilustres inscritos en esas lápidas. Ahí teneis á Lanuza, á Lacy, á Riego, Manzanares, Torrijos, el Empecinado, á Mariana Pineda. Esto os dice mucho, señores, y creo que no podemos absolutamente con razon, poniendo la mano en nuestro pecho, sancionar que subsista todavía entre nosotros la pena de muerte por delitos políticos. Porque Leon en un dia; Zurbano y su desgraciada familia en otro hayan descendido al sepulcro, ¿se creerá que no ha de haber más revoluciones, que no ha de haber más conspiraciones? ¿Pues no las hemos tenido despues? El mismo general O'Donnell, si en 1841 no hubiera encontrado un asilo en Francia, y en 1854 no lo hubiera encontrado en el programa de Manzanares ¿estaria hoy de Presidente del Consejo de Ministros, procurando hacer la felicidad del país? ¿Es justo que lo que hoy se condena imponiendo la pena de muerte, mañana se considere un mérito, se premie y se santifique? Muchísimos ejemplares podria seguir citando si no fuera porque los teneis muy presentes, y os considero animados de los mismos sentimientos que yo tengo.

No quiero citar más nombres, ni entrar en comparaciones; no vengo á excitar los ánimos; vengo á apelar á vuestra conciencia, con la confianza de que siendo legisladores sereis justos. ¿Y hay justicia en que entre dos hombres que cometen un mismo hecho, el uno sea decapitado, y el otro, porque pueda eludir las consecuencias de la persecucion, disfrute mañana un premio por aquel mismo hecho? ¿Es justo que desaparezcan hombres á quienes despues se les inculpa con poca generosidad, cuando ménos, valiéndose sus detractores de que no pueden venir al mundo á defenderse de lo que les imputan los mismos que los han sacrificado? ¿Se podrá sostener tampoco que la pena de muerte por delitos políticos se impone con ventaja de la sociedad? No por

cierto. Los Gobiernos únicamente son los que se apoyan en ella con el objeto de sostenerse en el Poder, cuando en lo que deben apoyarse es en la opinion pública, haciendo beneficios al país y no empleando el rigor ni el terrorismo, que, como he dicho, es insuficiente.

Antes de concluir mi breve discurso, me voy á permitir leer algunos pequeños párrafos que he encontrado en uno de los tratados que he examinado, referentes á la cuestión, escrito por persona no sospechosa seguramente para vosotros; Mr. Guizot dice en su tratado publicado en Junio de 1822:

"No espero, lo confieso, que los Gobiernos lleguen á convencerse de la inutilidad política de la pena de muerte, y mucho ménos que se abstengan de emplearla. La verdad se va deslizando muy poco á poco en las regiones del Poder, y cuando penetra en ellas, no es para reinar inmediatamente. El Poder se obstina en no creerla, y cuando no puede ya pasar por otro punto, rehusa todavía por mucho tiempo el someterse á sus mandatos. No necesito explicar los motivos."

Más adelante sigue:

"Si la pena de muerte es en política inútil, ineficaz y hasta peligrosa, ¿por qué no se dice desde luego? ¿Por qué callar la verdad hasta el día en que hechos terribles vengan á proclamarla?"

Y discurriendo despues, dice:

"A pesar de todo, en mi opinion se pide aquella con sobrada frecuencia, y con sobrada frecuencia se aplica. No hay en el uso que de ella se hace ni prudencia, ni equidad, ni necesidad; no consigue su objetivo; agrava nuestra posición; arrastra al Poder por caminos sumamente peligrosos para la sociedad y para él mismo; produce sin utilidad alguna desgracias, que no por ser ménos frecuentes, dejan de ser ménos irreparables ni ménos leves, y se asocia en mi sentir á una política falsa, funesta y condenada más y más cada día á valerse con mayor frecuencia del uso de medios los más tristes é infelices. Juzguen otros enhorabuena que no hay motivos suficientes todavía, y esperen para oponerse á que sobrevengan mayores males ó se aumenten los rigores: por mi parte me bastan los que he visto."

Me parece que las breves indicaciones que he dirigido al Congreso y las que os he citado de un texto tan respetable para vosotros, serán bastantes para que mi proposición merezca la honra de tomarse en consideración; así resuelto, pasará á la Comision, á la que pertenecerán personas entendidas que podrán presentar á la deliberacion de la Cámara este pensamiento en los términos que crean más convenientes. La discusión despues dará su resultado, y yo quedaré saisfecho si os merezco esta consideracion.»

Fuentes

A. *Prelegislativas*

Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura extraordinaria, núm. 84, de 17 de diciembre de 1821, pp. 1331-1335.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado, núm. 30, de 14 de febrero de 1848, pp. 473 y 476.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado, núm. 32, de 16 de febrero de 1848, pp. 502, 503 y 510-515.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 76, de 3 de marzo de 1848, Apéndice 2º, p. 264.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 79, de 10 de marzo de 1848, pp. 1705, 1711-1719.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 80, de 11 de marzo de 1848, p. 1726.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 81, de 13 de marzo de 1848, pp. 1742-1751.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 82, de 14 de marzo de 1848, pp. 1763, 1768, 1772, 1775-1776 y 1778.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 84, de 16 de marzo de 1848, pp. 1818-1819.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 1, de 8 de noviembre de 1854, pp. 1-2.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 7 de diciembre de 1854, Apéndice 1º al núm. 29, p. 485.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 33, de 13 de diciembre de 1854, pp. 592-593.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 13 de enero de 1855, Apéndice 2º al núm. 57, pp. 1341-1346.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 26 de enero de 1855, Apéndice 9º al núm. 68, p. 1667.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 3 de febrero de 1855, Apéndice 5º al núm. 75, p. 1885.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 153, de 14 de mayo de 1855, pp. 4747-4762.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 154, de 15 de mayo de 1855, pp. 4773-4791.

Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 239, de 8 de noviembre de 1855, p. 8022.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 1, de 1 de diciembre de 1858, pp. 1-3.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 68, de 4 de marzo de 1859, p. 1190.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 113, de 9 de mayo de 1859, pp. 3098-3101.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 1, de 30 de marzo de 1867, p. 1.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 14, de 15 de abril de 1867, Apéndice 3º pp. 1-2.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 30, de 22 de mayo de 1867, pp. 330-336.

Pliego completo incluyendo las cuestiones propuestas por la Sección de Código penal a la Comisión General (Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 1º, pp. 3-6).

Cuestiones 3ª y 5ª, relativas a la pena de muerte (Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 1º, pp. 3-4).

Bases para la formación del proyecto de Código Penal (Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 2º, pp. 2-4).

Bases 2ª y 7ª aprobadas por la Comisión General (Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación, legajo 3º de Código Penal, carpeta 1ª, documento 2º, pp. 2-3).

Manuscrito del voto discrepante del vocal Domingo Mª Vila, sobre delitos contra la religión católica, y pena de muerte por delitos políticos (Archivo de la Comisión General de la Comisión General de Codificación, legajo 4º de Código Penal, carpeta 15ª, documento único).

B. Normativas

Ordenanzas de S. M. para el regimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exercitos de 1768, Subdividida en dos Tratados de Orden de S. M., Oficina de Antonio Marín, Impresor de la Secretaria de Despacho Universal de la Guerra, Madrid, 1768.

Novísima Recopilación de las Leyes de España, dividida en XII libros, en que se reforma la Recopilación publicada por el Rey Felipe II en 1567, reimpreso en 1575, y se incorporan las Pragmáticas, Cédulas, Decretos, Ordenes y resoluciones reales y otras providencias, 5 vol., Madrid 1805. Actualizada en 1808 a través de un "Suplemento de la Novísima Recopilación […]".

Decreto de 24 de septiembre de 1810, Declaración de la legítima constitución de las Córtes y de su soberanía; nuevo reconocimiento del Rey Don Fernando VII, y la anulación de su renuncia a la corona: división de Poderes, reservándose las Córtes el legislativo: responsabilidad del ejecutivo, y habilitacion de la Regencia actual, con la obligación de prestar juramento á las Córtes: fórmula de este: confirmación interina de los tribunales y demás autoridades: inviolabilidad de los diputados; en *Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811*, pp. 1-3.

Decreto de 6 de agosto de 1811, Incorporacion de los señoríos jurisdiccionales á la Nacion: los territoriales quedarán como propiedades particulares: abolicion de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos: modo de reintegrar á los que obtengan estas prerrogativas por título oneroso, ó por recompensa de grandes servicios: nadie puede llamarse Señor de vasallos, ni ejercer jurisdicción; en *Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811*, pp. 193-196.

Decreto VI, de 17 de abril de 1821, Se establecen las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la Constitución é infractores de ella, y *Decreto VII, de 17 de abril de 1821*, Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración; en *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año*, *impresa de orden de las mismas*, tomo VII, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, pp. 37-52.

Real Cédula de 28 de abril de 1832, por el que el Rey nuestro Señor se sirve abolir para siempre el suplicio de horca, mandando que en adelante se ejecute en el de garrote la pena de muerte que se imponga; en *Decretos del Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su augusta Esposa*, t. 17, Imprenta Real, Madrid, 1833, pp. 57-58.

Real Decreto de 26 de enero de 1834, uniformando los Tribunales Superiores y mandando observar la nueva distribución del territorio de los mismos con la creación de las Audiencias de Burgos y Albacete; en *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XIX, pp. 32-35.

Real Decreto de 21 de abril de 1834, subdividiendo las provincias en partidos judiciales; en *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XIX, pp. 207-209.

Real Decreto de 26 de septiembre de 1835, que contiene el Reglamento para la administracion de justicia en lo respectivo á la jurisdicción ordinaria; en *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XX, pp. 396-437.

Real Decreto de 30 de agosto de 1836, restableciendo los que se citan acerca del modo de proceder en las causas de conspiración; en *Decretos de la Reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, t. XXI, pp. 362-363.

Código Penal de España, Imprenta Nacional, Madrid, 1848.

Código Penal de España, *edición oficial reformada*, Imprenta Nacional, Madrid, 1850.

Constitución de la Monarquía española de 1856, en *Las Constituciones españolas en el siglo XIX*, publicadas por la Redacción de El Boletín Diplomático (Biblioteca de El Boletín Diplomático), Imprenta de F. López Vizcaíno, Madrid, 1869, pp. 68-75.

Real Decreto de 27 de enero de 1860, declarando terminada la legislatura de 1859, en *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, t. V, Imprenta Nacional, Madrid, 1860, pp. 2797 y ss.

Real Decreto de 7 de diciembre de 1866, estableciendo varias reglas y formalidades en la ritualidad y tramitación del ejercicio de la prerrogativa de gracia; en *Colección Legislativa de España*, t. XCVI, pp. 960-968.

Real Decreto de 3 de diciembre de 1867, declarando terminada la legislatura de 1866 a 1867, en *Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, t. II, Imprenta de J. Antonio García, Madrid, 1867, p. 1079.

C. Doctrinales

ARAMBURU ARREGUI, J. D., *Instituciones de Derecho penal español arregladas al código reformado de 30 de junio de 1850*, Imp. y lit. de D. Benito González, Oviedo, 1860.

ARENAL, C., *El reo, el pueblo y el verdugo ó la ejecución pública de la pena de muerte*, Establecimiento tipográfico de Estrada, Díaz y López, Madrid, 1867.

AURIOLES MONTERO, I., *Instituciones del Derecho penal de España, escritas con arreglo al nuevo Código*, Establecimiento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, Madrid, 1849.

BECCARIA, C., *De los delitos y de las penas*, (Introducción, notas y traducción de TOMÁS Y VALIENTE, F.), Aguilar, Madrid, 1974.

BERNAL Y LOZANO, T., *Estudios sociales y legislativos sobre la abolición de la pena de muerte*, Imprenta de la Unión, Albacete, 1855.

CANALEJAS MÉNDEZ, J., «Sobre la pena de muerte», en GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (Edit.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, pp. 15-26.

CASTRO Y OROZCO, J. de, y ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Código penal explicado, para la común inteligencia y fácil aplicación de sus disposiciones*, Imprenta y librería de don Manuel Sanz, Granada, 1848.

COSSÍO Y GÓMEZ-ACEBO, M. DE, *Sustitutivo legal de la pena de muerte y régimen penitenciario*, Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", Madrid, 1914.

DU BOYS, A., *Historia del Derecho Penal en España*, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1872.

DUCPETIAUX, E., *De la peine de mort*, Bruselas, 1827.

ESMEIN, A., *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle juasqu'à nous tours*, L. Larose et Forcel, Paris, 1882.

ESPINO JIMÉNEZ, F. M., «La criminalidad en pleno liberalismo isabelino: perspectivas desde el sur de España», en Tiago da Silva Cesar, *et alii* (Coords.) *Crime, Justiça e Sistemas Punitivos,* Editora Fi, Porto Alegre, 2021, pp. 135-172.

Estadística del personal y vicisitudes de las Córtes y de los Ministerios de España: Desde el 29 de setiembre de 1833, en que falleció el rey don Fernando VII, hasta el 11 de septiembre de 1858, en que se disolvió el Congreso de los Diputados, Imprenta Nacional, Madrid, 1858.

GABBA, C. F., *El pro y el contra en la cuestión de la pena de muerte*, (traducido por Federico Melchor y Emilio Cano), Imprenta de E. de la Riva, Madrid, 1870.

GARCÍA GOYENA, Florencio y AGUIRRE, Joaquín, *Febrero ó librería de jueces, abogados y escribanos*, Imprenta y librería de Gaspar y Roig, editores, 4.ª ed., t. III, Madrid, 1852.

GARRIDO, F., *Espartero y la revolución*, Imprenta de Tomás Núñez Amor, 3ª ed., Madrid, 1854.

GÓMEZ DE LA SERNA, P., «Sobre la ejecución de la pena de muerte», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 12, nº 24, 1864, pp. 5-18.

— con MONTALBAN, J. M., *Elementos del Derecho Civil y Penal de España*, Imprenta de Vicente de Lalama, t. III, Madrid, 1842.

— con MONTALBAN, J. M., *Elementos del Derecho Penal de España*, *arreglados al nuevo Código*, Librería de Sánchez, Madrid, 1849.

GÓMEZ Y NEGRO, L., *Elementos de práctica forense,* Imprenta de Don Julián Pastor, 4ª ed., Valladolid, 1838.

GUIZOT, F., *De la peine de mort en matière politique*, París, 1822.

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B., *Examen Histórico del Derecho Penal*, librería de Sánchez, Madrid, 1866.

GUTIÉRREZ, J. M., *Práctica criminal de España*, 5ª ed., Imprenta de Fermín Villalpando, t. III, Madrid, 1828.

LISZT, F. VON, *Tratado de derecho penal*, (traducido de la 18ª edición alemana y adicionado con la Historia del derecho penal español por SALDAÑA, Q.), Ed. Reus, t. I, Madrid, 1926.

LUCAS, CH., *Du système pénal et du système répressif en génèral, de la peine de mort en particulier*, Paris, 1827.

LLANTA, S., *Los diputados pintados por sus hechos […]*, R. Labajos y compañía, editores, t. I, Madrid, 1869.

Memorias premiadas por la Junta de Gobierno de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislacion, y leídas por los Sres. D. Pedro López Clarós y D. Joaquín Escario, académicos profesores de la misma, en las sesiones de 7 y 14 de diciembre de 1841, sobre el siguiente tema: *La pena capital ¿es legítima, justa y conveniente? En caso de admitirse, ¿á qué delitos deberá aplicarse?*, Imprenta de Eusebio Aguado, Madrid, 1842.

MITTERMAIER, C. J., *Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung, und der Erfahrungen,* J.C.B. Mohr, Heidelberg, 1862.

MORALES SÁNCHEZ, F. M., *Páginas de sangre. Historia del Saladero*, Imprenta de Tomás Rey, t. I, Madrid, 1870.

ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Elementos de práctica forense*, 2ª ed., Imprenta de la viuda de Jordán e hijos, t. I, Madrid, 1843.

— *Práctica general forense. Tratado que comprende la constitucion y atribuciones de todos los Tribunales y Juzgados y los procedimientos judiciales,* Imprenta de José Rodríguez, t. I, Madrid, 1856.

PACHECO, J. F., *Estudios de Derecho Penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid*, Boix, editor, t. I, Madrid, 1842.

— *El Código Penal concordado y comentado*, Imprenta de Santiago Saunaque, t. I, Madrid, 1848.

PÉREZ Y DE MOLINA, M., *La sociedad y el patíbulo ó la pena de muerte histórica y filosóficamente considerada*, Imprenta de la Esperanza, Madrid, 1854.

— *La sociedad y el patíbulo, impugnación de la pena de muerte*, Imprenta y Fundación de Manuel Tello, 2ª edición reformada, Madrid, 1878.

PULIDO FERNÁNDEZ, A., *La pena capital en España*, Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro, Madrid, 1897.

SEGOVIA, A. M., *Figuras y figurones. Biografías de los hombres que mas figuran actualmente en España […]*, Imprenta de Fernando Cao, t. II, Madrid, 1878.

— *Figuras y figurones. Biografías de los hombres que mas figuran actualmente […]*, Imprenta de Domingo Molina, 2ª ed., t. V, Madrid, 1881.

SILVELA, F. A., *Consideraciones sobre la necesidad de conservar en los códigos y de aplicar en su caso la pena capita*l, Imprenta de Tomas Jordán, Madrid, 1835.

TAPIA, E. DE, *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos. Refundida, ordenada bajo nuevo método, y adicionada un Tratado del juicio criminal, y algunos otros*, Imprenta de Ildefonso Mompié de Monteagudo, t. VII, 3ª ed., Valencia, 1837.

THONISSEN, J. J., *Études sur l´histoire du droit criminel des peuples anciens*, Bruylant-Christophe & Cie, Bruxelles-A. Durand & Pedone Laurel, Paris, 1869.

THOT, L., *Historia de las antiguas instituciones de derecho penal: arqueología criminal*, Editorial América Unida, Buenos Aires, 1927.

TORRES CAMPOS, M., *La pena de muerte y su abolición en España*, Góngora y Cía. Editores, Madrid, 1879.

VALLADARES Y SAAVEDRA, R., DE, *Sobre la necesidad de proscribir la pena de muerte por los llamados delitos políticos,* Imprenta de D. Manuel Álvarez, Madrid, 1848.

VICENTE Y CARAVANTES, J. DE, *Codigo Penal reformado; comentado novísimamente, precedido de una brevísima reseña histórica del Derecho Penal de España*, Librerías de Ángel Calleja, Madrid y Santiago, 1851.

VIZMANOS, T. M. DE y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, C., *Comentarios al Código Penal*, Imprenta de D. José María Alonso, t. I, 2ª ed., Madrid, 1853.

VOLTAIRE, *Diccionario Filosófico*, (traducción de Lanuza, C.), t. VII, Imprenta de C. S. Van Winkle, Nueva York, 1828.

Bibliografía

ALVARADO PLANAS, J., «La codificación del derecho militar en el siglo XIX», en Javier Alvarado Planas y Regina Mª Pérez Marcos (Coords.), *Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX)*, Ediciones Polifemo, Madrid 1996, pp. 277-300.

— «Influencias brasileñas, francesas, italianas y austriacas en el Código Penal español de 1848», Masferrer, A. (ed.), *La codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (parte general)*, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 109-163.

ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., «La pena de muerte en el primer tercio del siglo XIX español», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 84, nº 1, 1982, pp. 55-92.

ANCEL, M., «Le problème de la peine de mort», *Revue de droit pénal et de criminologie*, (1963-1964), pp. 373-393.

ANTÓN ONECA, J., «Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración», *Revista de Estudios Penitenciarios*, año XX (julio-septiembre 1964), 166, p. 415-427.

— «El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 18, (fasc./mes 3, 1965), pp. 473-496.

— «El Derecho penal de la Ilustración y don Manuel de Lardizábal», *Revista de Estudios Penitenciarios*, 174, 1966, pp. 587-626.

— *Derecho Penal*, Akal, 2ª ed., (anotada y puesta al día por Hernández Guijarro, J. L. y Beneytez Merino, L.), Madrid, 1986.

APARICIO, M. A., *El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995.

ARÓSTEGUI, J., «De la transición a la revolución», en "La regencia de Mª Cristina", *Cuadernos historia 16*, nº 64, 1985, pp. 4-13.

ARTOLA GALLEGO, M., *Partidos y programas políticos (1808-1936)*, t. I, «Los partidos políticos» y t. II, «Manifiestos y programas políticos», Aguilar, Madrid, 1977.

— *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Alianza editorial, Madrid, 1990.

BÁDENAS ZAMORA, A., «Referentes para la regulación de la pena capital en la Codificación española del siglo XIX», Masferrer, A. (coord.), *La Codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (Parte General)*, ARANZADI Thomson Reuters, Pamplona, 2017, pp. 543-606.

BAHAMONDE, Á. y MARTÍNEZ, J. A., *Historia de España siglo XIX*, Cátedra, Madrid, 1994.

BARBERO SANTOS, M., *Pena de muerte (el ocaso de un mito*), Depalma, Buenos Aires, 1985.

— «La pena de muerte en la Constitución», en Gargallo Rodríguez, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, pp. 305-350.

BARÓ PAZOS, J., «El derecho penal español en el vacío entre dos códigos (1822-1848)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 83, 2013, pp. 105-138.

BASCUÑÁN AÑOVER, O., «Historia del delito político en la España contemporánea», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 297-321.

BERMEJO CABRERO, J. L., «Tormentos, apremios, cárceles y patíbulos a finales del Antiguo Régimen», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 56, 1986, pp. 683-728.

BURKHOLDER, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/35160/francisco-claudio-de-olavarrieta-y-urquijo*

CAJAL VALERO, A., «La participación de los Tercios Vascongados en la Guerra de África (1859-1860)», *Revista de Historia Militar*, nº 112, 2012, pp. 125-195.

CALERO DELSO, J. P., *Diccionario Biográfico de la Guadalajara Contemporánea*, 2017. Disponible en *https://bioguada.blogspot.com/2017/11/jose-munoz-maldonado.html*

CAMUS, A. y KOESTLER, A., *Reflexiones sobre la pena de muerte*, (traducción de Peyrou, M.), Capitán Swing Libros, Madrid, 2011.

CANO GARCÍA, J. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/60502/juan-antonio-seoane-bayon*

CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., «Los partidos políticos», en José Mª Jover Zamora, *La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, t. XXXIV de la *Historia de España*, Espasa Calpe, Madrid, 1981, pp. 373-445.

CARO CANCELA, D., (Dir.), *Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía 1810-1869*, voz: *Ramírez Arcas, Antonio*, t. II H/Z, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, pp. 377-379.

— *Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía 1810*-1869, voz: *Pérez y de Molina, Manuel*, t. II H/Z, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, pp. 346-349.

CARRETERO PÉREZ, A., «La administración de justicia desde 1833 a 1868», *Revista de Derecho Judicial*, nº 22, 1965, pp. 117-128.

CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO, J., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/77174/mariano-miquel-y-polo*

CASANOVA AGUILAR, I., *Aproximación a la Constitución Nonnata de 1856*, Facultad de Derecho Universidad de Murcia, Murcia, 1985.

CEPEDA GÓMEZ, J., «La caída de Espartero», *Los 9 entierros de la democracia. España (1814-1975)*, en *Historia 16*, extra III, Madrid, 1977, pp. 31-46.

CLAVERO SALVADOR, B., «La Monarquía, el Derecho y la Justicia», en Enrique Martínez Ruíz y Magdalena de Pazzis Pi (coords.), *Instituciones de la España Moderna*, t. I, *Las Jurisdicciones*, Actas Editorial, Madrid, 1996.

COMELLAS, J. L., *Historia de España Contemporánea*, Rialp, 5ª ed., Madrid, 1996.

CORRAL, J. L., *Historia de la pena de muerte*, Aguilar, Madrid, 2005.

CRUZ VILLALON, P., *El Estado de sitio y la Constitución. La constitucionalización de la protección extraordinaria del Estado (1789-1878)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pp. 319-365.

CUELLO CALÓN, E., *Derecho Penal*, t. I, Bosch, 7ª ed., Barcelona, 1945.

— «Vicisitudes y panorama legislativo de la pena de muerte», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 6, (fasc./mes 3, 1953), pp. 493-512.

— «Contribución al estudio de la historia de la pena de muerte en España», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 10, (fasc./mes I, 1957), pp. 9-39.

DÍAZ SANPEDRO, B., «Derecho e ideología en el Bienio Progresista», *Anuario de la Facultad de Derecho*, vol. 24, 2006, pp. 159-175.

DÍEZ TORRES, A. R., «Las Regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843)», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 150-189.

DOMÍNGUEZ NAFRIA, J. C., «La jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (Coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 207-232.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, voz: *RUIZ PONS (EDUARDO)*, Espasa-Calpe, Bilbao/Madrid/Barcelona, 1926, t. LII, pp. 783-784.

ESCUDERO, J. A., *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas*, 4.ª ed., Madrid, 1988.

ESPADAS BURGOS, M. y URQUIJO GOITIA, J. R. de, *Guerra de la Independencia y época constitucional (1808-1898)*, en Historia de España, t. 11, Gredos, Madrid, 1990.

FERNÁNDEZ SARASOLA, I., *Los partidos políticos en el pensamiento español. De la Ilustración a nuestros días*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

FERNÁNDEZ SEGADO, F., *Las Constituciones Históricas españolas (Un análisis histórico-jurídico)*, Civitas, 4ª. ed., Madrid, 1986.

— «La jurisdicción militar en la perspectiva histórica», *Revista española de derecho militar,* 56-57, 1990-1991, pp. 13-62.

FEUCHT, D., *Grube und Pfahl*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1967.

FONTANA, J., «La época del liberalismo», en Fontana J. y Villares, R. (dtores.), *Historia de España*, v. 6, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007.

GACTO FERNÁNDEZ, E., *Temas de Historia del Derecho: El Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación. II*, Sevilla, 1979.

GALLEGO, J. A., «De la gloria a la impopularidad. Los problemas políticos de la regencia de Espartero (1840-1843)», en "La España de Espartero", *Cuadernos historia 16*, nº 118,1985, pp. 6-14.

GARCÍA-BALAÑÁ, A., en Mikel Urquijo Goitia (Dir.), *Diccionario Biográfico de parlamentarios españoles: 1820-1854*, Cortes Generales. Congreso de los Diputados (Edición Digital), Madrid, 2013. Disponible en *https://www.academia.edu/4624423/Domingo_Mar%C3%ADa_Vila_y_Feliu_1786_1862_2013_*

GARCÍA DE PASO GARCÍA, I., «El 1848 español. ¿Una excepción europea?», *Ayer*, nº 106, 2017, pp. 186-206.

GARCÍA MUÑOZ, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/11844/martin-de-los-heros-de-las-barcenas*

GARCÍA RIVAS, N., «El largo camino hacia la abolición total de la pena de muerte en España», en GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, Ciudad Real, 2013, pp. 391-399.

GARCÍA VALDÉS, C., «La Codificación penal y las primeras recopilaciones legislativas complementarias», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 82, 2012, pp. 44-66.

GIL NOVALES, A., *Diccionario biográfico de España (1808-1833)*, t. II, G/O, Fundación Mafre, Madrid, 2010.

GÓMEZ BRAVO, G., *Crimen y castigo. Cárceles, justicia y violencia en la España del siglo XIX*. Catarata, Madrid, 2005.

GONZÁLEZ ALONSO, B., «La Justicia», en Miguel Artola (Dir.) *Enciclopedia de Historia de España*, t. II, Instituciones Políticas. Imperio, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 343-417.

GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ, N., «La evolución histórica de la jurisdicción penal militar en España», *Revista española de derecho militar*, 38, 1979, pp. 9-66.

IMBERT, J., «La peine de mort et l'opinion au XVIII siècle», *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1964, pp. 509-525.

— *La pena de muerte*, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. en español, México, D. F., 1993.

IÑESTA PASTOR, E., *El Código Penal español de 1848*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

JIMÉNEZ DE ASÚA, L., *Tratado de Derecho Penal*, t. I, 2ª ed., Buenos Aires, 1950.

JOVER ZAMORA, J. M., *La civilización española a mediados del s. XIX*, Espasa Calpe, Madrid, 1991.

LANDROVE DÍAZ, G., «La abolición de la pena de muerte en España», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, t. 34, (fasc. I/mes enero-abril, 1981), pp. 17-32.

LASSO GAITE, J. F., *Crónica de la Codificación española*, "5. Codificación Penal", vol. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1970.

— *Crónica de la Codificación española*, "3. Procedimiento Penal", Ministerio de Justicia, Madrid, 1970.

— «Centenario de Gómez de la Serna. Miscelánea de la codificación», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. LXIV (232 de la Colección), 1972, pp. 149-163.

— *El Ministerio de Justicia su imagen histórica (1714-1981)*, Imprenta Sáez, Madrid, 1984.

LINZ, J. J., MONTERO, J. R. y RUIZ, A. M.ª, «Elecciones y política», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (Coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, t. I., Fundación BBVA, Bilbao, 2005, pp. 1027-1154.

LÓPEZ-ARANGUREN, J. L., *Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del siglo XIX*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974.

LORENTE SARIÑERA, M. M., «Reglamento provisional y administración de justicia (1833-1838). Reflexiones para una historia de la justicia decimonónica», en Johannes-Michel Scholz, (Coord.), *El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*. Klostermann, V., Frankfurt am Main, 1992, pp. 215-295.

MACIÁ, M., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/7322/jose-maria-orense-mila-de-aragon-y-herrero*

MARTÍ, C., «Afianzamiento y despliegue del sistema liberal», en Manuel Tuñón de Lara (Dir.), *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, en t. VIII de *Historia de España*, Labor, Barcelona, 1981, pp. 170-268.

MARTÍ SORO, J., «La pena de muerte en los códigos penales españoles», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, nº 921, (25 de julio de 1972), pp. 3-13.

MARTÍNEZ PÉREZ, F., «Administración de Justicia», en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (Dirs.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Alianza Editorial, Madrid, 2002.

MARTÍNEZ RUIZ, E., *La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina*, Universidad de Granada, Granada, 1982.

MASFERRER DOMINGO, A., *Tradición y reformismo en la codificación penal española. Hacia el ocaso de un mito: materiales, apuntes y reflexiones para un nuevo enfoque metodológico e historiográfico del movimiento codificador penal europeo*, Universidad de Jaén, 2003.

MERINO MERCHAN, J. F. y MATEOS DE CABO, O. I., «La "Vicalvarada": 140 años después. Aproximación al significado jurídico-constitucional del Bienio Progresista (1854-1856)», *Revista de las Cortes Generales*, nº 32, 1994, pp. 121-176.

MONSELL CISNEROS, M.ª F. y PÉREZ DÍAZ, R. L., «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», *Revista de las Cortes Generales*, 16, 1989, pp. 143-177.

MONTERO DÍAZ, J., «La crisis del moderantismo y la experiencia del sexenio revolucionario», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 242-258.

MUGA LÓPEZ, F., «Antecedentes del Código penal militar de 1884. (Notas para la Historia de la Codificación del Derecho Penal Militar», *Revista española de derecho militar*, nº 1 (enero-junio) 1956, pp. 27-56, y nº 2 (julio-diciembre) 1956, pp. 21-58.

MUNAR BERNAT, P. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/16038/claudio-anton-de-luzuriaga*

NEUMAN, E., *Pena de Muerte. La crueldad legislada*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004.

NIETO GARCÍA, A., *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Ariel, Barcelona, 1996.

NOVALES ALQUÉZAR, M. A. y NAVARRETE MARTÍNEZ, E., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/118739/mariano-nougues-secall*

OLIVER OLMO, P., *La pena de muerte en España*, Ed. Síntesis, Madrid, 2008.

— «La pena de muerte en España; cambios y pervivencias desde el Antiguo Régimen», en Javier Alvarado y Miguel Martorell (Coords.), *Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 273-295.

ORTEGO GIL, P., «Las cifras de la pena de muerte en España durante el siglo XIX: una aproximación estadística», en Miguel Pino Abad (coord.), *Burocracia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José a María García Marín*, Dykinson, Madrid, 2015, pp. 545-576.

— «Apuntes sobre la repercusión en España de la abolición de la pena de muerte en Portugal», *Boletim da Faculdade de Direito. Universidad de Coimbra*, v. 95 (1), 2019, pp. 615-667.

PANIAGUA FUENTES, J. y PIQUERAS, J. A., *Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2005*, Instituto Alonso el Magnánimo, Valencia, 2005.

PAREDES ALONSO, J., «El reinado de Isabel II y el Sexenio revolucionario», en Javier Paredes (coord.), *España Siglo XIX*, Editorial Actas, Madrid, 1991, pp. 183-217.

— «Los bienios progresista y moderado (1854-1858)», en Javier Paredes (coord.), *Historia contemporánea de España (siglo XIX)*, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 208-217.

PÉREZ GARZÓN, J. S., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/11534/modesto-lafuente-y-zamalloa*

PÉREZ NÚÑEZ, J., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/25040/juan-francisco-cabello-rubio*

— *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/25032/julian-meliton-huelves-sol-diaz-nofre*

PÉREZ SAMPER, M. A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/9628/estanislao-figueras-y-moragas*

Portal de Archivos Españoles (PARES). Disponible en *https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/234267*

PUYOL MONTERO, J. M., «La abolición de la pena de horca en España», *Cuadernos de Historia del Derecho*, 4, 1997, pp. 91-140.

— *La publicidad en la ejecución de la pena de muerte. Las ejecuciones públicas en España en el siglo XIX*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2021.

— «Dignidad humana y pena de muerte. El proceso de humanización de la pena capital en la legislación española del siglo XIX», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, nº 60, 2022, pp. 1-38.

RAMOS VAZQUEZ, I., «Usos y costumbres en el castigo del delincuente en la Europa del Antiguo Régimen (Inglaterra, Francia, España)», en Miguel Ángel Chamorro Cantudo (Dir.), *Droit et moeurs: implicaction et influence des moeurs dans la configuration du droit.* Société d´Histoire de Droit, actes des Journées internationales, Jaén, 2011, pp. 367-386.

— «La individualización judicial de la pena en la primera codificación francesa y española», *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 84, 2014, pp. 328-363.

ROMERO MATEO, M. C., «Un fenómeno no previsto: los partidos políticos», en *Ciudadanos. El nacimiento de la política en España (1808-1869)*, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2009, pp. 99-115.

ROSSA, K., *La pena de muerte*, Editorial Nova Terra, Barcelona, 1970.

RUEDA HERNANZ, G., «El reinado de Isabel II. La España liberal», *Historia de España*, nº, 22, Temas de Hoy, Madrid, 1996.

— *Isabel II*, Arlanza ediciones, Madrid, 2001.

RUÍZ FUNES, M., «Progresión histórica de la pena de muerte en España», GARGALLO RODRÍGUEZ, C. (coord.), *Clásicos españoles sobre la pena de muerte*, RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (Edit.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2013, pp. 41-110.

SÁINZ GUERRA, J., *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Eudema, Madrid, 1992.

— *La evolución del Derecho Penal en España*, Universidad de Jaén, Jaén 2004.

SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del constitucionalismo español*, Centro de Estudios Constitucionales, 3.ª ed., 1.ª reimpresión, Madrid, 1978.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D. M., *La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004.

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., *La España Contemporánea. De 1808 a 1874*, Ed. Istmo, t. I, Madrid, 1991.

SÁNCHEZ-MARÍN, A., *Constitucionalismo español (1808-1978)*, Ed. Zaquizami, Madrid, 1994.

SÁNCHEZ PICÓN, A., *Diccionario Biográfico de Almería (DBA-e)*, Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería, 2024. Disponible en *https://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=376*

SECO SERRANO, C., *Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX*, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

SELÇUK, S., «La peine de mort chez les anciens turcs», *Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal,* 1981, pp. 97 y ss.

SERRANO MAILLO, A., «Voto particular de Domingo Mª Vila al proyecto de código penal de 1845», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 4 (1994), pp. 895-940.

SOLÉ TURA, J. y AJA, E., *Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936)*, Siglo veintiuno editores, 15.ª ed., Madrid, 1990.

SUÁREZ VERDAGUER, F., «Los sucesos de Loja (1861) en la *Memoria* de Antonio Guerola», *Revista de historia contemporánea*, nº 4, 1985, pp. 73-108.

SUEIRO, D., *La pena de muerte: ceremonial, historia, procedimientos*, Alianza Alfaguara, Madrid, 1974.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *El Derecho penal en la Monarquía absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII)*, Ed. Tecnos, Madrid, 1969.

— *Manual de Historia del Derecho español*, Tecnos, 4.ª ed., 3ª reimpresión, Madrid, 1988.

— *Códigos y Constituciones (1808-1978)*, Alianza, Madrid, 1989.

TOMÁS VILLARROYA, J., «El proceso constitucional (1843-1868)», en José Mª Jover Zamora, *La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, t. XXXIV de la *Historia de España*, Espasa Calpe, Madrid, 1981, pp. 198-370.

— «El Gobierno durante el reinado de Isabel II», en *1812-1992. El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno*, Tecnos, edición preparada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Madrid, 1992.

TORIO LÓPEZ, A., «La pena de muerte. Problemática histórica y contemporánea», en Adela Asúa Batarrita (Coord.), *El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1990.

TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., *La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX)*, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

TUÑÓN DE LARA, M., *La España del siglo XIX*, vol. I, Akal, Madrid, 2000.

URQUIJO Y GOITIA, J. R., de, *La revolución de 1854 en Madrid*, CESIC, Madrid, 1984.

VALIENTE CASTELLANOS, L., «La pena de muerte: situación actual desde una perspectiva internacional», *Inciso*, v. 21, nº 1, 2019, pp. 84-102.

— «la pena de muerte en España», *Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha*, 23, 2020, pp. 180-228.

VALLE DE JUAN, Mª A., *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DB-e)*. Disponible en *https://dbe.rah.es/biografias/7937/manuel-pando-y-fernandez-de-pinedo*

VÉLEZ MARICONDE, A., *Derecho procesal penal*, t. I, Marcos Lerner ed., Córdoba, 1986.

VILCHES GARCÍA, J., *Progreso y Libertad. El partido progresista en la revolución liberal española*, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

VV. AA., *Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876)*, Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria, 1993.

ZAFFARONI, E. R., *Tratado de Derecho Penal. Parte general*, Ediar, t. II, Buenos Aires, 1987.



MANTÉNGASE INFORMADO DE LAS NUEVAS PUBLICACIONES

Suscríbase gratis al boletín informativo www.dykinson.com

Y benefíciese de nuestras ofertas semanales

En el año 1995 España se incorporó a la lista de países que habían desterrado de su sistema jurídico la pena de muerte, por considerarla una solución punitiva ineficaz e inhumana. Con ello, culminaba un dilatado y difícil recorrido legislativo cimentado en las sólidas tesis abolicionistas formuladas por los defensores de su supresión. Este proceso reformista cuenta a lo largo de nuestra historia contemporánea con un amplio número de tentativas fallidas que hasta ahora no han sido suficientemente estudiadas. Para contribuir a enmendar esa carencia, el profesor Antonio Bádenas Zamora, del área de Historia del Derecho y las Instituciones de la URJC, presenta esta monografía a fin de dar contenido histórico a las distintas iniciativas legales que se promovieron en la España isabelina (1833-1868) para abolir, de forma total o parcial, la pena capital.

El autor de esta obra es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

9 791370 061197

Universidad Rey Juan Carlos
Servicio de Publicaciones

Dykinson, S.L.
www.dykinson.com